



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DIRECTIVAS PRESIDENCIALES

DIRECTIVA PRESIDENCIAL NÚMERO 06 DE 2016

(septiembre 15)

Para: Ministro del Interior, Consejero Presidencial para el Posconflicto, Derechos Humanos y Seguridad, Gobernadores, Alcaldes, Diputados y Concejales.
De: Presidente de la República de Colombia.
Asunto: Apoyo al Consejo Nacional de Paz y a la Creación e Impulso a los Consejos Territoriales de Paz.
Fecha: Septiembre 15 de 2016.

De conformidad con la Ley 434 de 1998, la política de paz es una política de Estado, permanente y participativa. En su estructuración “deben colaborar en forma coordinada y armónica todos los órganos del Estado, y las formas de organización, acción y expresión de la sociedad civil, de tal manera que trascienda los periodos gubernamentales y que exprese la complejidad nacional” (artículo 1°).

De acuerdo con la misma ley, la política de paz del Estado, que desarrollarán las autoridades de la República, el Consejo Nacional de Paz y los Consejos Territoriales de Paz, se orientará por los siguientes principios rectores (artículo 2°):

- a) Integralidad. Para la consecución y mantenimiento de la verdadera paz no es suficiente la sola eliminación de la guerra; se requiere simultáneamente de un conjunto de medidas integrales de carácter socioeconómico, cultural y político que combatan eficazmente las causas de la violencia;
- b) Solidaridad. La paz no es solo el producto del entendimiento y comprensión de los seres humanos sino también el resultado de su solidaridad y reciprocidad;
- c) Responsabilidad. Como la consecución de la paz es una finalidad del Estado y a la cabeza de este está el Presidente de la República, será él quien responda por los resultados; en los términos de la presente ley, responderán igualmente las Comisiones y los Comités que aquí se crean, y los gobernadores y los alcaldes en lo departamental y municipal respectivamente;
- d) Participación. Alcanzar y mantener la paz exige la participación democrática de los ciudadanos, el compromiso solidario de la sociedad y la concertación de las políticas y estrategias para su consecución;
- e) Negociación. La consecución de la paz implica la utilización prioritaria del recurso del diálogo y la negociación como procedimientos expeditos para la desmilitarización de los conflictos sociales y políticos nacionales y territoriales;
- f) Gradualidad. Una paz sólida solo se construye en un proceso continuo y gradual de soluciones integrales, solidarias, responsables, participativas y negociadas.

La Ley 434 de 1998 dispuso crear el Consejo Nacional de Paz con participación de la sociedad civil, como órgano asesor y consultivo del Gobierno nacional. Su misión será propender al logro y mantenimiento de la paz, y facilitar la colaboración armónica de las entidades y órganos del Estado, otorgando prioridad a las alternativas políticas de negociación del conflicto armado interno, en orden a alcanzar relaciones sociales que aseguren una paz integral permanente (artículo 3°, inciso 1°).

Adicionalmente, según el inciso 1° del artículo 13 la misma ley, las asambleas departamentales y los concejos municipales están autorizados, a iniciativa del gobernador o del alcalde respectivo, para crear los Consejos Departamentales o Municipales de Paz. Sus funciones y composición serán análogas a las del Consejo Nacional de Paz, salvo en lo referente a las ejercidas en desarrollo de delegación presidencial (artículo 13, inciso 2°).

De otro lado, la Ley 434 de 1998 creó el Comité Nacional de Paz, que será designado de sus propios miembros por el Consejo Nacional de Paz, y que actuará como órgano ejecutor de las funciones que le delegue el Presidente de la República y aquellas que le asigne o delegue el Consejo Nacional de Paz, de conformidad con su reglamento (artículo 7°, inciso 1°).

La Ley 434 de 1998 establece en el mismo artículo 3° que las actuaciones de los Consejos Departamentales y Municipales de Paz deberán ser realizadas en coordinación con el Comité Nacional de Paz y en concordancia con las directrices y parámetros que este señale.

En consideración a todo lo anterior, la presente Directiva convoca a los servidores públicos destinatarios de la misma para que, en cumplimiento de la Ley 434 de 1998, adelanten las siguientes acciones en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales:

- 1. Respaldo institucionalmente las acciones que desarrolle el Consejo Nacional de Paz, como órgano asesor y consultivo del Gobierno nacional.
- 2. En el marco de sus competencias, crear los Consejos Departamentales y los Consejos Municipales de Paz y promover las actuaciones de los mismos como órganos de participación de la ciudadanía en articulación con los gobiernos departamentales y municipales, en la construcción y mantenimiento de la paz, así como su articulación con el Consejo Nacional de Paz y el Comité Nacional de Paz.
- 3. Disponer el apoyo logístico, operativo y financiero para cada una de las entidades involucradas, con el fin de implementar y poner en funcionamiento los Consejos Territoriales de Paz.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1481 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se delegan unas funciones constitucionales.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 196 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República se trasladará entre los días 17 al 22 de septiembre de 2016 a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, con el fin de participar en las sesiones plenarias y reuniones conexas de la 71ª Asamblea General de la ONU.

Que de conformidad con las disposiciones constitucionales y con la precedencia establecida en la ley, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural está habilitado para ejercer las funciones constitucionales y legales como Ministro Delegatario.

DECRETA:

Artículo 1°. Por el tiempo que dure la ausencia del Presidente de la República, en razón del viaje a que se refieren los considerandos del presente Decreto, deléganse en el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia, las funciones legales y las correspondientes a las siguientes atribuciones constitucionales:

- 1. Artículos 129, 189, con excepción de lo previsto en los numerales 1 y 2, 303, 304, 314 y 323.
- 2. Artículo 150, numeral 10, en cuanto se refiere al ejercicio de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República.
- 3. Artículos 163, 165 y 166.
- 4. Artículos 200 y 201.
- 5. Artículos 213, 214 y 215.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Informa que como lo dispone el Decreto número 53 de enero 13 de 2012, artículo 3°, del Departamento Nacional de Planeación, a partir del 1° de junio de 2012 los contratos estatales no requieren publicación ante la desaparición del Diario Único de Contratación Pública.

DIARIO OFICIAL

Fundado el 30 de abril de 1864
Por el Presidente **Manuel Murillo Toro**
Tarifa postal reducida No. 56

DIRECTOR: **PAULO EMILIO GUERRERO IBARRA**

MINISTERIO DEL INTERIOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

PAULO EMILIO GUERRERO IBARRA
Gerente General (e)

Carrera 66 N° 24-09 (Av. Esperanza-Av. 68) Bogotá, D. C. Colombia
Conmutador: PBX 4578000.

e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR**DECRETOS****DECRETO NÚMERO 1473 DE 2016**

(septiembre 15)

por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Hugo Alberto Galarza Florián, en su condición de Gobernador encargado del departamento del Vaupés.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 304 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, mediante fallo de primera Instancia del 25 de junio de 2015, proferido dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número IUS:2010-318760- IUC -2012-652-312302, adelantado en contra del señor Hugo Alberto Galarza Florián, identificado con la cédula de ciudadanía número 79212903, en su condición de gobernador encargado del departamento del Vaupés, para el año 2010, impuso sanción disciplinaria consistente en la suspensión del ejercicio del cargo por un término de dos (2) meses.

Que la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia del 16 de junio de 2016, aprobada en Acta de Sala número 18, dentro del expediente número 161-6271 (IUS2010-318760- IUC-2012-652-312302), confirmó parcialmente el fallo radicado bajo el número IUS:2010-318760- IUC-2012-652-312302 del 25 de junio de 2015, emitido por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de sancionar al señor Hugo Alberto Galarza Florián, con suspensión en el ejercicio del cargo por un término de dos (2) meses, convertidos en el equivalente de dos (2) salarios mensuales, devengados por él durante el año 2010, que corresponde a la suma de siete millones ochocientos ochenta y un mil doscientos ocho pesos (\$7.881.208) moneda corriente.

Que según constancia secretarial del 11 de agosto de 2016, suscrita por la Secretaria de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, la decisión cobró ejecutoria el día 16 de junio de 2016, bajo el entendido que los efectos jurídicos se surten a partir de la misma fecha.

Que mediante oficio de salida número 136278 del 19 de agosto de 2016, dirigido al Presidente de la República, la señora Emperatriz Flórez Barajas, en calidad de Secretaria de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, remitió copia de las providencias de primera y segunda instancia proferidas por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, para que se haga efectiva la sanción Impuesta al señor Hugo Alberto Galarza Florián, en su condición de Gobernador encargado del departamento del Vaupés.

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, es necesario hacer efectiva la medida de suspensión del ejercicio del cargo por un término de dos (2) meses, impuesta al señor Hugo Alberto Galarza Florián, en su condición de gobernador encargado del departamento del Vaupés, para el año 2010, convertida en salarios conforme a lo establecido por el artículo 46 de la Ley 734 de 2002.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Sanción.* Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en suspensión del ejercicio del cargo por un término de dos (2) meses, impuesta al señor Hugo Alberto Galarza Florián, identificado con la cédula de ciudadanía número 79212903, en su condición de gobernador encargado del departamento del Vaupés, para la época de los hechos (2010); sanción que para efectos de su ejecución ha sido convertida en salarios y, en consecuencia, el exmandatario deberá pagar la suma de siete millones ochocientos ochenta y un mil doscientos ocho pesos (\$7.881.208) moneda corriente, en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal de la Procuraduría General de la Nación, en providencia de fecha 25 de junio de 2015, proferida dentro del proceso disciplinario con radicado el número IUS:2010-318760- IUC-2012-652-312302, confirmado por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en fallo del 16 de junio de 2016, dentro del expediente número 161-6271 (IUS 2010-318760- IUC -2012-652-312302) de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. *Comunicación.* Comunicar el contenido de este decreto al señor Hugo Alberto Galarza Florián, a la Procuraduría General de la Nación y a la Gobernación del departamento del Vaupés, para que efectúe el cobro de la sanción y realice las anotaciones en la hoja de vida.

Artículo 3° *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y contra él no procede recurso alguno.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN.

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

DECRETO NÚMERO 1474 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria Impuesta al señor Samuel Moreno Rojas, en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 323 de la Constitución Política, 44 del Decreto-ley 1421 de 1993, en concordancia con los artículos 66 de la Ley 4ª de 1913, 172 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que el Procurador General de la Nación, mediante fallo de única Instancia del 4 de agosto de 2015, proferido dentro del proceso disciplinario radicado bajo el número IUS 298674-IUC-D-139-463399, adelantado entre otros, en contra del señor Samuel Moreno Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía número 19385159, en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., para la época de los hechos, impuso sanción disciplinaria consistente en destitución del cargo e Inhabilidad general por el término de dieciocho (18) años.

Que el Procurador General de la Nación, mediante providencia del 29 de julio de 2016, resolvió recurso de reposición interpuesto en contra del fallo de única Instancia mencionado, confirmando la sanción disciplinaria impuesta.

Que según constancia Secretarial del 22 de agosto de 2016, suscrita por la secretaria general de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, la decisión cobró ejecutoria el día 2 de agosto de 2016, bajo el entendido que los efectos jurídicos se surten a partir de la misma fecha.

Que mediante oficio de salida número 140103 del 25 de agosto de 2016, dirigido al Presidente de la República, la secretaria general de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación remitió copia del fallo de única instancia y providencia mediante la cual se resolvió recurso de reposición, proferidas por el Procurador General de la Nación, respectivamente, para que se haga efectiva la sanción impuesta al señor Samuel Moreno Rojas, en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, D. C.

Que en cumplimiento de lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación, es necesario hacer efectiva la medida de destitución e inhabilidad general por un término de dieciocho (18) años, impuesta al señor Samuel Moreno Rojas, en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, D. C., para la época de los hechos.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Sanción.* Hacer efectiva la sanción disciplinaria consistente en destitución e inhabilidad general por un término de dieciocho (18) años, impuesta al señor Samuel Moreno Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía número 19385159, en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá D. C., para la época de los hechos (2009-2011); en cumplimiento de lo ordenado por el Procurador General de la Nación, en providencia de fecha 4 de agosto de 2015, proferida dentro del proceso disciplinario con radicado número IUS 298674-IUC-D-139-463399, confirmado en providencia del 29 de julio de 2016, de conformidad con lo señalado en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. *Comunicación.* Comunicar el contenido de este decreto al señor Samuel Moreno Rojas, a la Procuraduría General de la Nación y a la Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C.

Artículo 3°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y contra él no procede recurso alguno.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**DECRETOS****DECRETO NÚMERO 1482 DE 2016**

(septiembre 15)

por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Jamaica como Embajador No Residente ante el Gobierno de San Cristóbal y Nieves.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto-ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 514 del 30 de marzo de 2016, el doctor Roberto García Márquez, Identificado con cédula de ciudadanía 73072875, fue nombrado en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica.

Que el doctor Roberto García Márquez tomó posesión de manera efectiva en la ciudad de Kingston, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, el 1° de junio de 2016.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante podrá después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores Interesados, acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica es concurrente ante el Gobierno de San Cristóbal y Nieves, y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicho Gobierno.

Que el Gobierno de San Cristóbal y Nieves mediante Nota Verbal 0551 de 2016 del 27 de julio de 2016, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno de Colombia, del doctor Roberto García Márquez como Embajador no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo. 1° Designase al doctor Roberto García Márquez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica, como Embajador de Colombia No Residente ante el Gobierno de San Cristóbal y Nieves.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1483 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Jamaica como Embajador No Residente ante el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el Decreto–ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 514 del 30 de marzo de 2016, el doctor Roberto García Márquez, Identificado con cédula de ciudadanía 73072875, fue nombrado en el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica.

Que el doctor Roberto García Márquez tomó posesión de manera efectiva en la ciudad de Kingston, del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, el 1° de junio de 2016.

Que la Convención de Viena de 1961 sobre Relaciones Diplomáticas, aprobada por Ley 6ª de 1972 y en vigor para Colombia, establece en el artículo 5° que un Estado acreditante podrá después de haberlo notificado en debida forma a los Estados receptores interesados, acreditar a un jefe de misión ante dos o más Estados.

Que la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica es concurrente ante el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica, y se encarga, por lo tanto, de atender las relaciones diplomáticas al no existir una Misión Diplomática de Colombia ante dicho Gobierno.

Que el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica mediante Nota Verbal 204/02/1 – 2858 del 22 de julio de 2016, concedió el beneplácito de estilo para la designación por parte del Gobierno de Colombia, del doctor Roberto García Márquez como Embajador no residente ante dicho Gobierno.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designase al doctor Roberto García Márquez, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, Código 0036, Grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Jamaica, como Embajador de Colombia No Residente ante el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1485 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se declara una insubsistencia y se efectúa un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades legales y, en especial de las que le confieren, el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, el literal a) del artículo 25 del Decreto 2400 de 1968, los artículos 60 y 61 del Decreto–ley 274 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 2557 del 19 de noviembre de 2013 se nombró provisionalmente a la doctora Jimena Garzón Mateus, en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Francia.

Que mediante Decreto 799 del 23 de abril de 2014, se trasladó a la doctora Jimena Garzón Mateus, al cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Francia y tomó posesión del mismo el 02 de mayo de 2014.

Que en consideración a la demanda de trámites notariales que se deben desarrollar en el Consulado de Colombia en París, Francia, es necesario contar con funcionarios que acrediten conocimientos específicos en la materia y cuya experiencia garantice la prestación efectiva de este tipo de servicios con idoneidad, eficacia y eficiencia.

Que revisada la historia laboral de la doctora Lida Beatriz Salazar Moreno, Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, adscrito al Consulado de Colombia en París, Francia, se pudo establecer que cuenta con el perfil profesional para las necesidades que se requieren, toda vez que es especialista en Derecho Notarial y de Registro, así mismo, su experiencia laboral ha sido como Superintendente de Notariado y Registro, en otras áreas afines, hechos que permiten determinar que acredita las calidades para ocupar el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, en el Consulado de Colombia en París, Francia.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Declárese Insubsistente el nombramiento con carácter provisional en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, efectuado mediante Resolución 2557 del 19 de noviembre de 2013, a la señora Jimena Garzón Mateus, identificada con cédula de ciudadanía número 51633741.

Parágrafo. De conformidad con el literal d) del artículo 61 del Decreto 274 de 2000, la doctora Jimena Garzón Mateus tiene derecho a dos meses de plazo para hacer dejación del cargo y regresar al país.

Artículo 2°. Nómbrase Provisionalmente a la doctora Lida Beatriz Salazar Moreno, identificada con la cédula de ciudadanía número 39682760, en el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su notificación.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1488 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se autoriza a los Jefes de Oficina Consular y Cónsules Honorarios de Colombia debidamente acreditados ante otros Estados para llevar a cabo el proceso electoral del plebiscito para la refrendación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por los numerales 2 y 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política en sus artículos 1° y 2° proclama la democracia participativa como uno de los pilares bajo los cuales se debe organizar el Estado, y así mismo establece, dentro de los fines esenciales, el facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el artículo 40 de la Constitución Política consagra el derecho de los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, y que, en virtud de este derecho, los nacionales pueden tomar parte en los mecanismos de participación democrática.

Que el artículo 103 de la Constitución Política consagra el plebiscito como un mecanismo de participación democrática.

Que siendo el plebiscito un mecanismo por el cual se somete a la voluntad popular la decisión de apoyar o rechazar una determinada decisión del Ejecutivo, y de conformidad con la Ley 134 de 1994, la Ley 1757 de 2015, el artículo 116 del Decreto 2241 de 1986, tienen derecho a participar en él todos los ciudadanos colombianos aptos para votar, residentes en el territorio nacional y en el exterior, debiéndose aplicar a esta votación la normatividad electoral vigente para toda elección de carácter nacional.

Que la Ley Estatutaria 1806 del 24 de agosto de 2016, “*por el cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*”, fue previamente declarada exequible por la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-379 del 18 de julio de 2016.

Que para los fines de facilitar el proceso electoral de los ciudadanos colombianos en el exterior, se hace necesario autorizar a los Jefes de Oficina Consular y Cónsules Honorarios de Colombia, debidamente acreditados ante otros Estados, para llevar a cabo el proceso electoral del plebiscito para la refrendación del “*Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*”.

Que el numeral 5 del artículo 2° de la Ley Estatutaria 1806 de 2016, habilitó la votación del Plebiscito para los colombianos residentes en el exterior, por lo cual se hace necesario incorporar transitoriamente, al Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores, la autorización a los Jefes de Oficina Consular de Colombia acreditados ante otros Estados y Cónsules Honorarios, para llevar a cabo el proceso electoral en el exterior que se realizará el día 2 de octubre de 2016.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese transitoriamente un capítulo nuevo al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1067 de 2015, “*por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario Administrativo de Relaciones Exteriores*”, el cual quedará así:

CAPÍTULO TRANSITORIO

Plebiscito para la Refrendación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” a realizarse el 2 de octubre de 2016.

Artículo 2.2.1.14.1 Autorícese a los Jefes de Oficina Consular de Colombia acreditados ante otros Estados, para habilitar puestos de votación en las sedes diplomáticas y consulares o en los sitios donde autorice la Registraduría Nacional del Estado Civil, en los cuales los ciudadanos colombianos que se encuentren o residan en el exterior pueden participar en el plebiscito para la refrendación del “*Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera*”.

Artículo 2.2.1.14.2. Autorícese a los Cónsules Honorarios, con el visto bueno de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para habilitar puestos de votación en las sedes donde habitualmente atienden al público.

Artículo 2.2.1.14.3. Los Jefes de Oficina Consular y Cónsules Honorarios de Colombia designarán ciudadanos colombianos, para ejercer como jurados de votación.

Artículo 2.2.1.14.4. Los Jefes de Oficina Consular, Cónsules Honorarios, funcionarios y colombianos voluntarios que intervengan en el proceso de votación se ceñirán a las instrucciones impartidas de forma conjunta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Registraduría Nacional del Estado Civil por conducto de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro del Interior,

Juan Fernando Cristo Bustos.

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1489 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 61 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1°. Trasladar a la doctora Camila Muñoz Ucros, identificada con cédula de ciudadanía número 1071162418, con el cargo de Segundo Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2114, Grado 15, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, reubicándolo de la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Socialista de Vietnam a la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Marruecos.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1490 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 61 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1°. Trasladar al doctor Bernardo Javier Romero Calderón, identificado con cédula de ciudadanía número 79784883, con el cargo de Consejero de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, reubicándolo de la Embajada de Colombia ante la Confederación Suiza en la Embajada de Colombia ante la República Federal de Alemania.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1491 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 61 del Decreto-ley 274 de 2000

DECRETA:

Artículo 1°. Trasladar a la doctora Claudia Liliana Zambrano Naranjo, identificada con cédula de ciudadanía número 31928256, con el cargo de Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, reubicándolo de la Embajada de Colombia ante la Federación de Rusia a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República Socialista de Vietnam.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1492 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, y los artículos 35 al 40 del Decreto-ley 274 de 2000,

DECRETA:

Artículo 1°. Trasládase a la planta externa a la doctora María Rosa Ferrer Cabrales, identificada con cédula de ciudadanía número 52261557, al cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2112, Grado 19, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante la República Francesa.

La doctora María Rosa Ferrer Cabrales es funcionaria inscrita en el escalafón de la Carrera Diplomática y Consular, en la categoría de Primer Secretario.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1493 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confiere el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, y el artículo 61 del Decreto-ley 274 de 2000.

DECRETA:

Artículo 1°. Trasladar al doctor Carlos Edgardo Barragán Vega, identificado con cédula de ciudadanía número 79951048, con el cargo de Ministro Plenipotenciario, Código 0074, Grado 22, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, reubicándolo de la Embajada de Colombia ante el Gobierno del Reino de Bélgica a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Confederación Suiza.

Artículo 2°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1501 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3. del Decreto número 1083 de 2015 y los artículos 60 y 61 del Decreto-ley 274 de 2000

DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrase Provisionalmente al doctor Miguel Ramón Linero de Cambil, identificado con cédula de ciudadanía número 1136883895, en el cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2116, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Mancomunidad de Australia.

Artículo 2°. De acuerdo con el parágrafo 3° del artículo 62 del Decreto-ley 274 de 2000, el doctor Miguel Ramón Linero de Cambil, no tendrá derecho a la asignación que por concepto de viáticos, menaje y pasajes aéreos se reconoce a los funcionarios que son designados en la planta externa, toda vez que en la actualidad presta sus servicios en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la Mancomunidad de Australia.

Artículo 3°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

DECRETO NÚMERO 1502 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales y, en especial, de las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 2.2.2.7.3. del Decreto número 1083 de 2015 y los artículos 60 y 61 del Decreto-ley 274 de 2000.

DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrase Provisionalmente al doctor Manuel Alberto Gómez González, identificado con cédula de ciudadanía número 1015997221, en el cargo de Tercer Secretario de Relaciones Exteriores, Código 2116, Grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General Central de Colombia en Madrid (España).

Artículo 2°. El doctor Manuel Alberto Gómez González ejercerá las funciones de Vicecónsul en el Consulado General Central de Colombia en Madrid (España).

Artículo 3°. Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto, se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 262 DE 2016

(septiembre 15)

por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul General.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales y, en especial, las que le confieren el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política y la Ley 17 de 1971 que aprobó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963,

RESUELVE:

Artículo 1°. Vistas las correspondientes Letras Patentes de Provisión, reconócese al señor Saïd Metwalli, como Cónsul General de la Mancomunidad de Australia en la ciudad de Bogotá, con circunscripción en todo el territorio colombiano.

Artículo 2°. La Presente resolución ejecutiva rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1471 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se designa un representante del Presidente de la República en la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el artículo 189 numeral 13 de la Constitución Política y, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto número 2206 de 1998

DECRETA:

Artículo 1°. Designase como representante del señor Presidente de la República ante la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop) al doctor Édgar Eduardo Pinto Hernández, identificado con cédula de ciudadanía número 19445743 de Bogotá D. C.,

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su expedición y deroga los Decretos número 2730 de 2013 y 3038 de 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

DECRETO NÚMERO 1472 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se designa un representante del Presidente de la República en la Junta Directiva de la Fiduciaria La Previsora S. A.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en particular de las conferidas por el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política,

DECRETA:

Artículo 1. Designación. Designase como representante del Presidente de la República ante la Junta Directiva de la Fiduciaria La Previsora S. A., como miembro principal, al doctor Camilo Martínez Ávila, identificado con la cédula de ciudadanía número 79158401, en reemplazo del doctor Juan Rafael Mesa Zuleta.

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el artículo 1° del Decreto número 2729 de 2013.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1476 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se acepta la renuncia al Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Santa Marta (Magdalena).

EL Presidente de la República, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial la conferida por el artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 1309 de 18 de junio de 2015, el Gobierno nacional nombró en propiedad, como Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Santa Marta (Magdalena), Código 0191, Grado 20, al señor Fabricio Pinzón Barreto, identificado con la cédula de ciudadanía número 79046688.

Que a través de comunicación de 22 de agosto de 2016, el señor Fabricio Pinzón Barreto, presentó renuncia irrevocable al cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Santa Marta (Magdalena), Código 0191, Grado 20.

Que el parágrafo 1° del artículo 75 de la Ley 1579 de 2012, establece en el Gobierno nacional la competencia para nombrar a los Registradores de Instrumentos Públicos Principales, en consecuencia le corresponde también aceptar las renunciaciones.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Aceptación de la renuncia.* Acéptase la renuncia presentada por el señor Fabricio Pinzón Barreto, identificado con la cédula de ciudadanía número 79046688, al cargo de Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Santa Marta (Magdalena), Código 0191 Grado 20 de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 1477 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se designa un Superintendente de Notariado y Registro ad hoc.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 189 numeral 13 de la Constitución Política, y

CONSIDERANDO:

Que el Ministro de Justicia y del Derecho mediante la Resolución número 0653 del 30 de agosto de 2016, aceptó el impedimento manifestado por el doctor Jorge Enrique Vélez García en su calidad de Superintendente de Notariado y Registro, para conocer de los recursos de apelación interpuestos por el señor Pedro Elías Betancourt Rodríguez, en calidad de quejoso y de disciplinado, dentro de los procesos disciplinarios con radicados 3862-2015 y 2818-2012, adelantados por la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia de Notariado y Registro contra José Luis Ochoa Escobar y Pedro Elías Betancourt Rodríguez, respectivamente.

Que con ocasión a la aceptación del impedimento del doctor Jorge Enrique Vélez García en su calidad de Superintendente de Notariado y Registro, se hace necesario designar un Superintendente ad hoc para conocer de los recursos de apelación interpuestos por el señor Pedro Elías Betancourt Rodríguez, en calidad de quejoso y de disciplinado, dentro de los procesos disciplinarios con radicados 3862-2015 y 2818-2012, adelantados por la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia de Notariado y Registro contra José Luis Ochoa Escobar y Pedro Elías Betancourt Rodríguez, respectivamente.

Que para la designación se considera el nombre de Marcos Jaher Parra Oviedo, identificado con la cédula de ciudadanía número 79126005, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Código 1045 Grado 15 de la Superintendencia de Notariado y Registro, quien según certificación de fecha 31 de agosto de 2016, suscrita por Lina Marcela Mejía Álvarez, Directora de Talento Humano, de la Superintendencia de Notariado y Registro, cumple los requisitos establecidos en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para el cargo de Superintendente de Notariado y Registro Código 0030 Grado 26.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designase como Superintendente de Notariado y Registro ad hoc, al doctor Marcos Jaher Parra Oviedo, quien se desempeña como Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, para conocer de los recursos de apelación interpuestos por el señor Pedro Elías Betancourt Rodríguez, en calidad de quejoso y de disciplinado, dentro de los procesos disciplinarios con Radicados 3862-2015 y 2818-2012, adelantados por la Oficina de Control Disciplinario de la Superintendencia de Notariado y Registro contra José Luis Ochoa Escobar y Pedro Elías Betancourt Rodríguez, respectivamente.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 1478 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un nombramiento en propiedad en virtud del numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, en el Círculo Notarial de Pereira (Risaralda).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confieren el artículo 131 de la Constitución Política, 5° del Decreto-ley 2163 de 1970, 2° de la Ley 588 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto número 1214 del 25 de julio de 2016, el señor José Daniel Trujillo Arcila, notario primero (1°) en propiedad del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda), fue

retirado del cargo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso, en virtud de lo contemplado en el artículo 2.2.6.1.5.3.13 del Decreto número 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, que establece como edad de retiro forzoso para los notarios la de 65 años.

Que el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que el pertenecer a la carrera notarial implica la preferencia para ocupar, a solicitud propia y dentro de la misma circunscripción político-administrativa, otra notaría de la misma categoría que se encuentre vacante.

Que en los artículos 2.2.6.3.1.1., a 2.2.6.3.4.1. del Decreto número 1069 de 26 de mayo de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, se compiló el Decreto número 2054 de 2014, reglamentario del derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970 y, en su artículo 2.2.6.3.2.3 se establecieron como causales de vacancia, las siguientes: “1. Muerte, 2. Renuncia aceptada, 3. Destitución del cargo, 4. Retiro forzoso por cumplir la edad de 65 años, 5. Declaratoria de abandono del cargo. 6. Ejercicio de cargo público no autorizado por la ley”.

Que el día 26 de julio de 2016, teniendo en cuenta lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 1° del Acuerdo número 003 de 2014 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, por el cual se establece el procedimiento operativo para implementar el derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, se dio inicio al trámite de recepción de solicitudes de los notarios de carrera para proveer la vacante generada en la notaría primera (1ª) del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda), tal como lo informa el Secretario Técnico del Consejo Superior en certificación de fecha 26 de agosto de 2016.

Que el señor José Helmer Zapata Cardona – notario séptimo (7°) del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda), nombrado en propiedad mediante el Decreto número 903 del 16 de marzo de 2009, en virtud del derecho de preferencia consagrado en el numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, a través del escrito de fecha 28 de julio de 2016 solicitó su designación en la notaría primera (1ª) del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda).

Que mediante certificación del 26 de agosto de 2016, el Secretario Técnico del Consejo Superior, informó que “en ejercicio del derecho de preferencia y para proveer la vacante generada en la Notaría Primera (1ª) del Círculo de Pereira (Risaralda), de conformidad con lo establecido en los artículos 2.2.6.3.1.1. a 2.2.6.3.3.4., del Decreto número 1069 de 26 de mayo de 2015, Reglamentario Único del Sector Justicia y del Derecho, y el numeral 1 del artículo 1° del Acuerdo número 003 de 2014 del Consejo Superior, solo se presentó la solicitud del doctor José Helmer Zapata Cardona – Notario Séptimo (7°) del Círculo de Pereira (Risaralda)”.

Que a través de comunicación del 17 de agosto de 2016, suscrita por el Secretario Técnico del Consejo Superior, se postuló al señor José Helmer Zapata Cardona – notario séptimo (7°) del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda), para ser designado como notario primero (1°) del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda).

Que en escrito del 17 de agosto de 2016, el señor José Helmer Zapata Cardona, aceptó la postulación que le hiciera el Consejo Superior como notario primero (1°) del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda).

Que mediante certificación del 26 de agosto de 2016, el Secretario Técnico del Consejo Superior indicó que, “adelantado el trámite contenido en el Acuerdo número 003 de 2014 para proveer la vacante de la Notaría Primera del Círculo de Pereira (Risaralda), se debe nombrar al doctor José Helmer Zapata Cardona – Notario Séptimo del Círculo de Pereira (Risaralda)”.

Que el Secretario Técnico del Consejo Superior, mediante documento de 26 de agosto de 2016, certificó que “teniendo en cuenta que el Decreto número 1069 de 2015, reglamentario del numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, en su artículo 2.2.6.3.2.3. no establece el nombramiento en ejercicio del Derecho de Preferencia de un notario como causal de vacancia para el ejercicio del derecho de preferencia, para la provisión de la Notaría Séptima (7ª) del Círculo de Pereira (Risaralda), no es aplicable el Derecho de Preferencia”.

Que a través del Acuerdo número 001 del 9 de abril de 2015, el Consejo Superior de la Carrera Notarial estableció en su artículo 1° “Convócase a concurso de méritos público y abierto para el nombramiento de notarios en propiedad e ingreso a la carrera notarial, para proveer a nivel nacional la totalidad de notarías que a la fecha se encuentren en interinidad o en encargo, las que se llegaren a crear durante el desarrollo del concurso y la vigencia de la lista de elegibles, o las que resulten vacantes después del ejercicio de los derechos de Carrera”.

Que mediante Acuerdo número 026 de 29 de junio de 2016 del Consejo Superior de la Carrera Notarial, se aprobó la lista definitiva de elegibles en el Concurso de Méritos Público y Abierto para el Nombramiento de Notarios en Propiedad e Ingreso a la Carrera Notarial, y se ordenó su publicación.

Que el artículo 150 del Decreto-ley 960 de 1970 establece que “el Notario no podrá separarse del desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba remplazarlo”.

Que de conformidad con la norma anterior el señor José Helmer Zapata Cardona, deberá permanecer en el cargo de Notario Séptimo (7°) del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda), hasta que se dé aplicación a lo dispuesto en el artículo 146 del Decreto-ley 960 de 1970, y se efectúe el nombramiento en propiedad como resultado del agotamiento de la lista de elegibles resultado del Concurso de Méritos Público y Abierto para el Nombramiento de Notarios en Propiedad e Ingreso a la Carrera Notarial.

En mérito de lo expuesto.

DECRETA:

Artículo 1°. *Nombramiento en ejercicio del derecho de preferencia.* Nómbrase al señor José Helmer Zapata Cardona, identificado con la cédula de ciudadanía número 10083724

de Pereira, actual Notario Séptimo (7°) en Propiedad del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda), como Notario Primero (1°) en Propiedad del Círculo Notarial de Pereira (Risaralda).

Parágrafo. El señor José Helmer Zapata Cardona, no podrá separarse del desempeño de sus funciones en el cargo de Notario Séptimo (7°) en Propiedad del Círculo de Pereira (Risaralda), mientras no se haya hecho cargo de ellas quien debe remplazarlo.

Artículo 2°. *Acreditación de documentos para tomar posesión del cargo.* Para tomar posesión del cargo, el designado deberá acreditar ante la Superintendencia de Notariado y Registro, la documentación de ley.

Artículo 3°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

DECRETO NÚMERO 1479 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se modifican las circunscripciones territoriales de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Agua de Dios, Girardot, La Mesa en el departamento de Cundinamarca; Mompós en el departamento de Bolívar; Ocaña y Cúcuta en el departamento de Norte de Santander; Andes, Bolívar, Marinilla y Rionegro en el departamento de Antioquia; Bolívar y Popayán en el departamento del Cauca; El Banco y Plato en el departamento del Magdalena; Aguachica en el departamento del Cesar y San Martín y Villavicencio en el departamento del Meta.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades, en especial las que le confieren los artículos 131 de la Constitución Política de Colombia y 73 de la Ley 1579 de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso 3° del artículo 131 de la Constitución Política establece que “*corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de Notarías y Oficinas de Registro*”;

Que el Decreto número 2723 de 2014, en el artículo 13 define las funciones del Despacho del Superintendente y en el numeral 17 se establece “Proponer al Gobierno nacional la creación, supresión o recategorización de Notarías, y creación, supresión, fusión y modificación de Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y sus respectivos círculos”;

Que el Gobierno nacional de conformidad con lo señalado en el parágrafo 3° del artículo 73 de la Ley 1579 de 2012, a solicitud de la Superintendencia de Notariado y Registro, teniendo en cuenta las necesidades del servicio determinará la categoría a la que pertenecerá cada oficina de registro, así como el número de servidores de cada una y sus funciones, su categoría y asignación;

Que el Consejo de Estado –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera–, en sentencia de 9 de noviembre de 1994, entre sus consideraciones, especialmente en relación con la aplicación del artículo 131 del Estatuto Superior, señaló lo siguiente:

“... que se trata entonces de la presencia de unas competencias autónomas y directas otorgadas por la Constitución al Ejecutivo, que dan lugar a la expedición de los llamados por la jurisprudencia y la doctrina reglamentos o decretos constitucionales o autónomos” (...)

“... constituye simplemente el ejercicio por parte del ejecutivo de una función que le ha sido otorgada directamente por la Constitución Política, sin sometimiento a la ley” (...);

Que de acuerdo con el artículo 209 constitucional, “*la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones*”;

Que el Gobierno nacional y la Superintendencia de Notariado y Registro, tienen como objetivos, entre otros, la accesibilidad de la ciudadanía al servicio registral inmobiliario en forma oportuna, mejorar los índices de satisfacción a los usuarios, facilitar el desarrollo económico, la conectividad y el posicionamiento de la imagen institucional;

Que la Superintendencia de Notariado y Registro en ejercicio de las funciones consagradas en el numeral 17 del artículo 13 del Decreto número 2723 de 2014, con miras a mejorar la prestación del servicio público registral, disminuyendo notablemente los tiempos de desplazamiento y los costos de transporte, los cuales influyen dentro de la población campesina, propone en la Región Central la modificación de la circunscripción territorial de las Oficinas Seccionales de Registro de Instrumentos Públicos de Agua de Dios, Girardot y La Mesa en el departamento de Cundinamarca, Bolívar y Popayán en el departamento del Cauca y Ocaña y Cúcuta en el departamento de Norte de Santander; en la Región Caribe la modificación de la circunscripción territorial de las Oficinas Seccionales de Registro de Instrumentos Públicos Mompós en el departamento de Bolívar, Aguachica en el departamento de Cesar y El Banco y Plato en el departamento del Magdalena; en la Región Andina la modificación de la circunscripción territorial de las Oficinas Seccionales de Registro de Instrumentos Públicos de Marinilla, Rionegro, Andes y Bolívar en el departamento de Antioquia y en la Región de la Orinoquia la modificación de la circunscripción territorial de las Oficinas Seccionales de Registro de Instrumentos Públicos de Villavicencio y San Martín en el departamento del Meta;

Que según el artículo 73 de la Ley 1579 de 2012, para el manejo administrativo, financiero, operativo y de personal de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, el territorio nacional se divide en cinco (5) regiones registrales;

Que la circunscripción territorial actual de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Agua de Dios, Girardot, La Mesa en el departamento de Cundinamarca; Mompós en el departamento de Bolívar; Ocaña y Cúcuta en el departamento de Norte de Santander; Andes, Bolívar, Marinilla y Rionegro en el departamento de Antioquia; Bolívar y Popayán en el departamento del Cauca; El Banco y Plato en el departamento del Magdalena; Aguachica en el departamento del Cesar y San Martín y Villavicencio en el departamento del Meta, es la siguiente:

Círculo registral	Oficina de Registro de Instrumentos Públicos	Marco normativo	Circunscripción territorial
Bogotá	Girardot	Decreto número 2432 de 1972	Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Tocaima y Ricaurte (Decreto Departamental número 00409 de 1968).
	La Mesa	Decreto número 2432 de 1972	La Mesa, Anapoima, El Colegio, Pulí, Apulo (mediante Decreto número 03490 de 1975 cambió su nombre de Rafael Reyes por el de Apulo), San Antonio del Tequendama (mediante Ordenanza número 026 de 1975 cambió su nombre de San Antonio de Tena por el de San Antonio del Tequendama), Tena y Viotá.
	Agua de Dios	Decreto número 2432 de 1972	Agua de Dios
Cartagena	Mompós	Decreto número 1955 de 1971, modificado mediante Decreto número 2319 de 1996	Mompós, Cicuco, Margarita, San Fernando, Talaigua Nuevo.
Cúcuta	Ocaña	Decreto número 2444 de 1972, modificado mediante Decreto número 2508 de 2009.	Ocaña, Ábrego, Bucarasica, Hacari, La Playa, Villa Caro.
	Cúcuta	Creado en virtud del Decreto-ley 1250 de 1970 (anterior Estatuto de Registro) artículo 58, y su comprensión territorial está definida en el artículo 2° del Decreto número 2444 de 1972	Cúcuta, Cucutilla, Durania, El Zulía, Gramalote, Lourdes, San Cayetano, Santiago, Sardinata, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y Tibú (estos últimos creados mediante Ordenanzas números 13 de 1985, 80 de 1993 y 3 de 1977, en su orden).
Medellín	Marinilla	Decreto número 2433 de 1972	Marinilla, Granada, El Carmen de Viboral, Cocorná, Guatapé, Peñol, El Santuario, San Carlos, San Luis, San Rafael, San Francisco y Puerto Triunfo (estos últimos creados mediante Ordenanzas números 57 de 1986 y 24 de 1977, en su orden).
	Rionegro	Decreto número 2433 de 1972	Rionegro, Guarne y San Vicente
	Andes	Decreto número 2433 de 1972	Andes, Concordia, Salgar y Jardín.
	Bolívar	Decreto número 2433 de 1972	Bolívar, Betania e Hispania (creado mediante Ordenanza número 8 de 1983)
Popayán	Bolívar	Decreto número 2434 de 1972	Bolívar, Almaguer, La Vega, San Sebastián, Santa Rosa, Sucre y Piamonte (estos últimos creados mediante Ordenanzas números 09 de 1999 y 24 de 1996, en su orden).
	Popayán	Creado en virtud del Decreto-ley 1250 de 1970 (anterior Estatuto de Registro) artículo 58, y su comprensión territorial está definida en el artículo 2° del Decreto número 2434 de 1972	Popayán, Cajibío, El Tambo, La Sierra, Morales, Piendamó, Puracé, Rosas, Sotará y Timbío.
Santa Marta	El Banco	Decreto número 2449 de 1972, modificado mediante Decreto número 2319 de 1996	El Banco, Guamal, San Sebastián de Buenavista y San Zenón.
	Plato	Decreto número 2449 de 1972	Plato, Ariguaní - El Difícil, Cerro de San Antonio, Santa Ana, Tenerife, El Piñón, Pedraza, Chivolo, Concordia, Nueva Granada, Pijiño del Carmen, Sabanas de San Ángel, Santa Bárbara de Pinto y Zapayán (estos últimos creados mediante Ordenanzas números 4 de 1975, 007 de 1999, 004 de 2000, 01 de 1996, 006 de 1999, 003 de y 005 de 2000, en su orden).
Valledupar	Aguachica	Decreto número 2319 de 1996, modificado mediante Decreto número 2513 de 1997.	Aguachica, Río de Oro, González, Gamarra, La Gloria, San Martín, San Alberto y Pelaya.
Villavicencio	Villavicencio	Creado en virtud del Decreto-ley 1250 de 1970, (anterior Estatuto de Registro) artículo 58, y su comprensión territorial está definida en el artículo 2° del Decreto número 2445 de 1972.	Villavicencio, Cumaral, El Calvario, Restrepo, San Juanito y Barranca de Upiá (creado mediante Ordenanza número 005 de 1990).
	San Martín	Decreto número 2445 de 1972, modificado mediante los Decretos números 159 de 1994, 190 de 2004 y 3109 de 2007	San Martín, El Castillo, Fuente de Oro, Granada, La Macarena, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia, Puerto Lleras, Puerto Rico, San Carlos de Guaroa, San Juan de Arama, Uribe y Vistahermosa.

Que al ciudadano se le continuará prestando un eficiente servicio público registral, por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos a la cual se le anexa la comprensión territorial,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese la circunscripción territorial actual de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Agua de Dios, Girardot, La Mesa en el departamento de Cundinamarca; Mompós en el departamento de Bolívar; Ocaña y Cúcuta en el departamento de Norte de Santander; Andes, Bolívar, Marinilla y Rionegro en el departamento de Antioquia; Bolívar y Popayán en el departamento del Cauca; El Banco y Plato en el departamento del Magdalena; Aguachica en el departamento del Cesar y San Martín y Villavicencio en el departamento del Meta, las cuales quedarán así:

OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
AGUA DE DIOS	Municipio de Agua de Dios
	Municipio de Jerusalén – Segregado de Girardot
	Municipio de Nilo – Segregado de Girardot
	Municipio de Tocaima – Segregado de Girardot
	Municipio de Viotá –Segregado de La Mesa
	Municipio de Pulí – Segregado de La Mesa
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
GIRARDOT	Municipio de Girardot
	Municipio de Guataquí
	Municipio de Nariño
	Municipio de Ricaurte
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
LA MESA	Municipio de La Mesa
	Municipio de Anapoima
	Municipio de Apulo
	Municipio de El Colegio
	Municipio de San Antonio del Tequendama
	Municipio de Tena
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
MOMPÓS	Municipio de Mompós
	Municipio de Cicuco
	Municipio de Margarita
	Municipio de Pijiño del Carmen – Segregado de Plato
	Municipio de San Fernando
	Municipio de San Sebastián de Buenavista – Segregado de El Banco
	Municipio de Santa Ana – Segregado de Plato
	Municipio de Santa Bárbara de Pinto – Segregado de Plato
	Municipio de San Zenón – Segregado de El Banco
	Municipio de Talaigua Nuevo
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
OCAÑA	Municipio de Ocaña
	Municipio de Ábrego
	Municipio de González – Segregado de Aguachica
	Municipio de La Playa
	Municipio de Río de Oro – Segregado de Aguachica
	Municipio de Villa Caro
	Municipio de Hacarí
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
CÚCUTA	Municipio de Cúcuta
	Municipio de Bucarasica – Segregado de Ocaña
	Municipio de Cucutilla
	Municipio de Durania
	Municipio de El Zulia
	Municipio de Gramalote
	Municipio de Los Patios
	Municipio de Lourdes
	Municipio de Puerto Santander
	Municipio de San Cayetano
	Municipio de Santiago
	Municipio de Sardinata
	Municipio de Tibú
	Municipio de Villa del Rosario
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
ANDES	Municipio de Andes
	Municipio de Betania – Segregado de Bolívar
	Municipio de Jardín
	Municipio de Hispania – Segregado de Bolívar
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
BOLÍVAR	Municipio de Bolívar
	Municipio de Concordia – Segregado de Andes
	Municipio de Salgar – Segregado de Andes
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
MARINILLA	Municipio de Marinilla
	Municipio de Cocorná
	Municipio de El Santuario
	Municipio de Granada
	Municipio de Guatapé
	Municipio de Peñol
	Municipio de Puerto Triunfo
	Municipio de San Carlos
	Municipio de San Francisco
	Municipio de San Luis
	Municipio de San Rafael

OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
RIONEGRO	Municipio de Rionegro
	Municipio de El Carmen de Viboral – Segregado de Marinilla
	Municipio de Guarne
	Municipio de San Vicente
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
BOLÍVAR	Municipio de Bolívar
	Municipio de Almaguer
	Municipio de La Vega
	Municipio de San Sebastián
	Municipio de Santa Rosa
	Municipio de Sucre
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
POPAYÁN	Municipio de Popayán
	Municipio de Cajibío
	Municipio de El Tambo
	Municipio de La Sierra
	Municipio de Morales
	Municipio de Piamonte – Segregado de Bolívar
	Municipio de Piendamó
	Municipio de Puracé
	Municipio de Rosas
	Municipio de Sotará
	Municipio de Timbío
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
EL BANCO	Municipio de El Banco
	Municipio de Guamal
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
PLATO	Municipio de Plato
	Municipio de Ariguani-El Difícil
	Municipio de Cerro San Antonio
	Municipio de Chivolo
	Municipio de Concordia
	Municipio de El Piñón
	Municipio de Nueva Granada
	Municipio de Pedraza
	Municipio de Sabanas de San Ángel
	Municipio de Tenerife
	Municipio de Zapayán
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
AGUACHICA	Municipio de Aguachica
	Municipio de Gamarra
	Municipio de La Gloria
	Municipio de Pelaya
	Municipio de San Alberto
	Municipio de San Martín
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
VILLAVICENCIO	Municipio de Villavicencio
	Municipio de Barranca de Upía
	Municipio de Cumaral
	Municipio de El Calvario
	Municipio de La Macarena – Segregado de San Martín
	Municipio de Restrepo
	Municipio de San Juanito
OFICINA DE REGISTRO	CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL
SAN MARTÍN	Municipio de San Martín
	Municipio de El Castillo
	Municipio de Fuente de Oro
	Municipio de Granada
	Municipio de Lejanías
	Municipio de Mapiripán
	Municipio de Mesetas
	Municipio de Puerto Concordia
	Municipio de Puerto Lleras
	Municipio de Puerto Rico
	Municipio de San Carlos de Guaroa
	Municipio de San Juan de Arama
	Municipio de Uribe
	Municipio de Vistahermosa

Artículo 2°. Las Oficinas de Registro no enunciadas en el presente decreto, conservarán la circunscripción territorial ya asignada.

Artículo 3°. La Superintendencia de Notariado y Registro tendrá un plazo de seis (6) meses para la reorganización de las circunscripciones territoriales, teniendo en cuenta la

transición para el traslado de los folios de matrícula inmobiliaria de los predios que hacen parte de su nueva circunscripción.

Parágrafo. Las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos que se enuncian en el presente decreto, continuarán prestando el servicio en la circunscripción territorial que en la actualidad tienen, hasta tanto no se realice el traslado de los folios de matrícula inmobiliaria.

Artículo 4°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y modifica en lo pertinente a los Decretos números 2432, 2433, 2434, 2444, 2445, 2449 de 1972; 2319 de 1996, 2513 de 1997, 3109 de 2007 y 2508 de 2009.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIONES EJECUTIVAS

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 254 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Notas Verbales números 281 y 282 del 15 de septiembre de 2014, el Gobierno de la República Federativa del Brasil, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición de los ciudadanos colombianos Yul Neyder Morales Sánchez, y Cristóbal Morales Velásquez, requeridos por el Juzgado Federal del 5° Tribunal de la Ciudad de Santos - Estado de Sao Paulo, dentro de la causa número 0004167-34.2014.403.6104.001, por los delitos de tráfico internacional de drogas y concierto para delinquir, de conformidad con el auto de prisión preventiva del 11 de febrero de 2015.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 16 de septiembre de 2014, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1020721533; quien había sido detenido el 9 de septiembre de 2014, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que la Embajada de Brasil, mediante Nota Verbal número 322 del 16 de octubre de 2014, solicitó la cancelación del pedido de prisión preventiva con fines de extradición de los señores Yul Neyder Morales Sánchez, y Cristóbal Morales Velásquez.

4. Que el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 17 de octubre de 2014, canceló la orden de captura con fines de extradición y ordenó su libertad inmediata.

5. Que la Embajada de Brasil, mediante Nota Verbal número 091 del 29 de abril de 2015, formalizó la solicitud de extradición únicamente para el ciudadano Yul Neyder Morales Sánchez.

6. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, el ++Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0955 del 30 de abril de 2015, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y la República Federativa del Brasil.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentran vigentes los siguientes tratados de extradición y multilaterales de Cooperación entre las Partes:

1. El ‘Tratado de Extradición’ entre la República Federativa del Brasil y la República de Colombia, suscrito en Río de Janeiro, el 28 de diciembre de 1938.

2. La ‘Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas’, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988¹.

Es del caso traer a colación lo dispuesto en el artículo 6, numeral 2, de la precitada Convención, el cual obra en los siguientes términos:

‘[...] Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artículo se considerará incluido entre los delitos que den lugar a extradición en todo tratado de extradición vigente entre las Partes.[...]’.”.

7. Que en atención a la formalización de la solicitud de extradición, el Fiscal General de la Nación, mediante Resolución del 16 de febrero de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1020721533, la cual no se ha hecho efectiva a la fecha.

8. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Yul Neyder Morales Sánchez, el Ministerio de Justicia y del Derecho mediante oficio número OFI16-0014225-OAI-1100 del 27 de mayo de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

9. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 24 de agosto de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano Yul Neyder Morales Sánchez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:

“8. *Concepto*

*Los anteriores razonamientos acordes con lo señalado por el Ministerio Público, permiten tener por acreditadas las exigencias legales para conceptuar de manera **Favorable** a la solicitud de extradición formalizada por el Gobierno de la República Federativa del Brasil a través de su Embajada en nuestro país, respecto del ciudadano colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, según el requerimiento formulado mediante Nota Verbal No. 91 del 29 de abril de 2014 y conforme se desprende de la actuación que se sigue en su contra ante el Juez Federal del 5° Tribunal de la Ciudad de Santos, Estado de Sao Paulo, Brasil, dentro de la causa número 0004167- 34.2014.403.6104-001.*

8.1. La Corte considera pertinente precisar, en orden a proteger los derechos fundamentales del requerido, que el Estado solicitante deberá garantizarle la permanencia en el país extranjero y el retorno al de origen en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando llegare a ser sobreseído, absuelto, declarado no culpable o eventos similares, incluso después de su liberación por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en razón de los cargos que motivaron la solicitud de extradición.

Igualmente, surge necesario indicar que la extradición de Yul Neyder Morales Sánchez debe supeditarse a los hechos ocurridos con posterioridad al 17 de diciembre de 1997, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 35 de la Constitución Política.

Del mismo modo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional puede subordinar la concesión de la extradición a las condiciones consideradas oportunas y exigir que el solicitado no sea juzgado por hechos diversos de los que motivaron la solicitud de extradición, ni sometido a sanciones distintas de las impuestas en la eventual condena, ni a penas de muerte, destierro, prisión perpetua o confiscación, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, por el país solicitante.

Así mismo, debe condicionar la entrega de Morales Sánchez a que se le respeten -como a cualquier otro nacional en las mismas condiciones- todas las garantías debidas a su condición de justiciable, en particular a que tenga acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presuma su inocencia, cuente con un intérprete, tenga un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, presente pruebas y controvierta las que se aduzcan en contra, a que su situación de privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas, a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a que la sentencia pueda ser apelada ante un tribunal superior, a que la sanción privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

Además, no puede ser condenado dos veces por el mismo hecho, por mandato de la Carta Política, ni dársele una denominación jurídica distinta a la misma circunstancia fáctica.

Igualmente, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país solicitante, conforme a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que el extraditado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, y garantiza su protección².

De la misma manera, el Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, deberá efectuar el respectivo seguimiento a las exigencias que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Política.

Finalmente, el Gobierno nacional advertirá al del Estado requirente, que en caso de un fallo de condena, deberá computarse el tiempo que Yul Neyder Morales Sánchez ha permanecido privado de la libertad con ocasión de este trámite de extradición.

*Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, **Conceptúa Favorablemente** a la extradición de Yul Neyder Morales Sánchez de anotaciones conocidas en el curso del proceso, para que responda por los cargos que se le endilgan dentro del proceso No. 0004167-34.2014.403.6104-001 que cursa ante el Juez Federal del 5° Tribunal de la Ciudad de Santos, Estado de Sao Paulo, Brasil...”.*

10. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el concepto negativo obliga al Gobierno pero si es favorable lo deja en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, el Gobierno Nacional en este caso, concederá la extradición del colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1020721533, requerido por el Juzgado Federal del 5° Tribunal de la Ciudad de Santos - Estado de Sao Paulo, Brasil, dentro de la causa número 0004167-34.2014.403.6104.001, por los delitos de tráfico internacional de drogas y concierto para delinquir, de conformidad con el auto de prisión preventiva del 11 de febrero de 2015.

11. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Yul Neyder Morales Sánchez no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

12. Que el Gobierno nacional en atención a lo dispuesto en el artículo XI del “Tratado de Extradición”, entre la República Federativa de Brasil y la República de Colombia, suscrito en 1938, advertirá al Estado requirente que el ciudadano colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, solo podrá ser juzgado por el delito por el que se autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, con las salvedades que la misma norma contempla. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

¹ Párrafo 1° del artículo 3°.

² Postulado que encuentra respaldo en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23)

13. Que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

14. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

Que en caso de hacerse efectiva la captura del ciudadano requerido, este podrá solicitar a la Fiscalía General de la Nación la constancia sobre el tiempo que permanezca detenido en Colombia por cuenta del trámite de extradición, para acreditar esa situación y hacerla valer en el exterior.

Finalmente, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del colombiano Yul Neyder Morales Sánchez, identificado con la cédula de ciudadanía número 1020721533, requerido por el Juzgado Federal del 5° Tribunal de la Ciudad de Santos - Estado de Sao Paulo, Brasil, dentro de la causa número 0004167-34.2014.403.6104.001, por los delitos de tráfico internacional de drogas y concierto para delinquir, de conformidad con el auto de prisión preventiva del 11 de febrero de 2015.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano Yul Neyder Morales Sánchez, al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado solo podrá ser juzgado por el delito por el que se autoriza la extradición, sin que pueda ser juzgado por ninguna otra infracción cometida con anterioridad a la solicitud de extradición, ni podrá ser entregado a un tercer país que lo reclame, de conformidad con lo dispuesto en el artículo XI del “Tratado de Extradición”, entre la República Federativa de Brasil y la República de Colombia, con las salvedades que la misma norma contempla. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderada o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 255 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Embajada en nuestro país, mediante Notas Verbales números II.2.C6.E3 000208 y 000328 del 21 y 29 de enero de 2016, respectivamente, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombo-venezolano Víctor Manuel Consuegra Rocha, requerido por el Juzgado Décimo Sexto Estatal de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con la orden de aprehensión del 20 de agosto de 2015, corregida el 20 de enero de 2016, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución del 22 de enero de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano colombo-venezolano Víctor Manuel Consuegra Rocha, identificado con la Cédula de Identidad Venezolana número V-14-388.895, también conocido como Víctor Manuel Pérez Morales con cédula de ciudadanía colombiana número 1043984166, quien había sido detenido el 15

de enero de 2016, con fundamento en una circular roja de Interpol y notificado de la orden de captura con fines de extradición el 22 de enero de 2016.

3. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Embajada en nuestro país mediante Nota Verbal II.2.C6.E3 número 001355 del 11 de abril de 2016, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano colombo-venezolano Víctor Manuel Consuegra Rocha.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 0815 del 11 de abril de 2016, conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que en caso de proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente para los dos Estados, el ‘Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano colombo-venezolano, Víctor Manuel Consuegra Rocha, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OFI16-0009655-OAI-1100 del 19 de abril de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 31 de agosto de 2016, habiendo encontrado cumplidos para el cargo los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorable a la extradición del ciudadano Víctor Manuel Consuegra Rocha.

En relación con la identidad de ciudadano requerido la Honorable Corporación manifestó:

“La identificación plena del requerido

El artículo 8° del acuerdo en cita, según se anotó, prevé que la documentación soporte de la petición de extradición ha de incluir “en cuanto sea posible, las señas de la persona reclamada”, con el objeto de constatar que se trata del mismo individuo cuya entrega se encuentra en curso de resolver.

De esta forma, se tiene que las autoridades foráneas aportaron copia de la tarjeta alfabética correspondiente a la cédula de identidad número 14.388.895 expedida a nombre de Víctor Manuel Consuegra Rocha, nacido el 10 de agosto de 1979 en Cartagena (Colombia), hijo de José Consuegra Criado y Carmen Rocha de Consuegra y cuyos generales de ley coinciden con los que reportó la Policía Nacional como del ciudadano a quien se le enteró en su momento de la orden de captura con fines de extradición proferida por la Fiscalía General de la Nación el 22 de enero de 2016, aspecto corroborado mediante dictamen de perito en dactiloscopia de aquella institución¹.

Por tanto, el presupuesto de la identidad del ciudadano reclamado en extradición se satisface, circunstancia que, por demás, tampoco ha sido materia de controversia por este o su defensa...

Adicionalmente la Honorable Corporación señaló:

“CONCLUSIÓN

En consecuencia, ya que la totalidad de los requisitos formales contemplados en las disposiciones referidas en precedencia se satisfacen a cabalidad y que los hechos fueron cometidos con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 17 de diciembre de 1997, modificadorio del artículo 35 de la Constitución Nacional, la Corte Conceptúa Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respecto del ciudadano colombo-venezolano Víctor Manuel Consuegra Rocha, por los cargos que le son endilgados en la orden de aprehensión del 20 de agosto de 2015, corregida el 20 de enero de 2016, librada en su contra por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

Valga acotar que en este asunto no es viable demandar la presencia de resolución de acusación o su equivalente, como lo entiende equívocamente la delegada del Ministerio Público en sus alegatos de conclusión haciendo cita del artículo 493, numeral 2 de la Ley 906 de 2004, toda vez que, según se señaló en el auto del 6 de julio del año en curso, la normatividad que rige estas diligencias la constituye el “Acuerdo sobre Extradición”, suscrito en Caracas, el 18 de julio de 1911. De esta manera, los presupuestos de este Tratado Internacional son los que orientan la emisión del concepto a cargo de la Corte, en consonancia con el artículo 502 de la codificación en cita, por lo que se le llama la atención a esa funcionaria para que a futuro esté atenta a observar el contenido las decisiones proferidas por la Sala, en lugar de actuar con la manifiesta ligereza que ha mostrado en el presente trámite.

ACOTACIÓN FINAL

En caso de que el Gobierno nacional conceda la extradición de Víctor Manuel Consuegra Rocha, en los términos que más adelante se precisa, se debe condicionar su entrega de tal modo que no sea juzgado por hechos distintos a los que originaron la reclamación, sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a las sanciones de destierro, cadena perpetua o confiscación, conforme lo previsto en los artículos 12 y 34 de la Carta Política, ni se le impondrá la pena capital, al tenor del artículo 10 del Acuerdo de Extradición.

También debe condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten, como a cualquier otro nacional en las mismas circunstancias, todas las garantías debidas en razón de

¹ En este aspecto cabe mencionar que el informe OT.201600211 de 15 de enero de 2016, remitido por el laboratorio móvil de criminalística de la DIJIN, detalló el procedimiento agotado para llegar a esa conclusión y que incluyó el cotejo de: i) las huellas dactilares obrantes en la orden de captura internacional A-7478/9 a nombre de **Consuegra Rocha**, ii) la toma de impresiones dactilares provenientes del aprehendido, y iii) la tarjeta decadactilar de la cédula de ciudadanía 1.043.984.166 expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil a nombre de Víctor Manuel Pérez Morales, estableciéndose que “corresponden entre sí”. (Cfr. Fls. 10 y s.s cuaderno anexos).

su calidad de justiciable, en particular a tener acceso a un proceso público sin dilaciones injustificadas, se presume su inocencia, contar con un defensor designado por él o por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, a que su situación de detenido se desarrolle en condiciones dignas y a que la eventual pena privativa de la libertad que se le imponga tenga como finalidad esencial la resocialización, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 5, 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 9, 10, 14 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Así mismo, al Gobierno nacional le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca al requerido posibilidades razonables y reales para que pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, amparo fundamental que se refuerza con la protección que le prodiga la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 17 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el 23.

También se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como Jefe de Estado, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el ordinal 2° del artículo 189 de la Constitución Nacional.

De igual modo, en caso de que Víctor Manuel Consuegra Rocha sea absuelto, sobreseído o, por cualquier otra vía legal declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su entrega en extradición y, en consecuencia, dejado en libertad, el Estado reclamante -si el ciudadano desea regresar al país- deberá asumir los gastos de transporte y manutención correspondientes de acuerdo con su dignidad humana (artículos 1° y 93 de la Constitución Nacional).

Adicionalmente, se le pide al Ejecutivo que recomiende al Estado requirente que, en el evento de que el ciudadano solicitado sea objeto de una decisión condenatoria dentro del proceso por el cual es reclamado, tenga en cuenta como parte de la pena el tiempo que haya podido estar privado de la libertad con motivo del trámite de extradición.

Por último, atendiendo que a Víctor Manuel Consuegra Rocha se le expidió en Colombia la cédula de ciudadanía número 1043984166 de Cartagena a nombre de Víctor Manuel Pérez Morales, pese a acreditarse, según se analizó, que sus apellidos corresponden a los dos primeros por cuenta de la identidad de sus padres (José Consuegra Criado y Carmen Rocha de Consuegra, tal y como se consignó en la documentación remitida por la autoridad foránea y en el acta de derecho de capturado)², se dispone oficialiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil con el fin de que agote las verificaciones y cumpla con los procedimientos a los que haya lugar.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
CONCEPTÚA

Favorablemente a la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela respecto del ciudadano Víctor Manuel Consuegra Rocha, en cuanto se refiere a los cargos que le son formulados en la orden de aprehensión de 20 de agosto de 2015, corregida el 20 de enero de 2016, librada en su contra por el Juzgado Décimo Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas...".

7. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, **concederá** la extradición del ciudadano colombo-venezolano Víctor Manuel Consuegra Rocha, identificado con la Cédula de Identidad Venezolana número V-14-388.895, también conocido como Víctor Manuel Pérez Morales con cédula de ciudadanía colombiana número 1043984166 requerido por el Juzgado Décimo Sexto Estadual de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela, de conformidad con la orden de aprehensión del 20 de agosto de 2015, corregida el 20 de enero de 2016, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano Víctor Manuel Consuegra Rocha no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 11 del Acuerdo Bolivariano sobre Extradición, el Gobierno nacional advertirá al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco será entregado a otra Nación. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Víctor Manuel Consuegra Rocha, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

² Cfr. Fl. 26 cuaderno anexos.

No obstante lo anterior se advierte que, tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombo-venezolano Víctor Manuel Consuegra Rocha, identificado con la Cédula de Identidad Venezolana número V-14-388.895, también conocido como Víctor Manuel Pérez Morales con Cédula de Ciudadanía colombiana número 1043984166, requerido por el Juzgado Décimo Sexto Estadual de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Venezuela, de conformidad con la orden de aprehensión del 20 de agosto de 2015, corregida el 20 de enero de 2016, por la presunta comisión del delito de homicidio calificado.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano colombo-venezolano Víctor Manuel Consuegra Rocha, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que motiva la presente solicitud de extradición.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado sino por los hechos mencionados en la solicitud de extradición, ni tampoco será entregado a otra Nación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo Bolivariano de Extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores, y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 256 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal número 165/2016 del 28 de abril de 2016, el Gobierno de España, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma, requerido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, para su enjuiciamiento dentro de las diligencias previas número 57/16 que se le adelantan por un presunto delito contra la salud pública, de conformidad con el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza proferido el 26 de abril de 2016.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante Resolución del 5 de mayo de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma, identificado con el Documento Nacional de Identidad número 74505796X y Pasaporte número AAE458642, quien había sido capturado el 29 de abril de 2016 por funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número 239/2016 del 30 de junio de 2016, la Embajada de España en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante oficio DIAJI número 1481 del 5 de julio de 2016, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y el Reino de España.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de precisar que se encuentran vigentes los siguientes tratados en materia de extradición y multilaterales de Cooperación entre las Partes:

- La ‘Convención de Extradición de Reos’, suscrita en Bogotá D.C., el 23 de julio de 1892.
- El ‘Protocolo modificadorio a la Convención de Extradición entre la República de Colombia y el Reino de España’, adoptado en Madrid, el 16 de marzo de 1999.
- La ‘Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas’, adoptada en Viena, el 20 de diciembre de 1988.¹...

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante oficio número OF116-0018298-OAI-1100 del 8 de julio de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 31 de agosto de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas convencionales aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma.

Sobre el particular, la Honorable Corporación precisó:

“6. Condicionamientos:

6.1. *El Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona solicitada, de conformidad con lo estipulado en el artículo 494 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con el artículo V de la Convención de Extradición de Reos, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos anteriores ni distintos a los que motivan la extradición, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención en razón del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como también a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.*

6.2. *Se advierte, además, que en atención a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, es del resorte del Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y supremo director de la política exterior y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición, quien a su vez debe determinar las consecuencias que se deriven de su eventual incumplimiento.*

7. Cuestión final:

De conformidad con lo señalado en precedencia, la Sala es del criterio que el Gobierno nacional puede entregar al ciudadano colombiano (sic) Pedro Martín Mancebo Coloma bajo los condicionamientos anotados, pues como viene de constatarse, están satisfechos los requisitos establecidos en la Convención de Extradición de Reos, suscrita entre el Reino de España y la República de Colombia en Bogotá, el 23 de julio de 1892 y en el Protocolo Modificadorio firmado en Madrid el 16 de marzo de 1999.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

EMITE CONCEPTO FAVORABLE

En relación con la solicitud de extradición del ciudadano colombiano (sic) Pedro Martín Mancebo Coloma, formulada por el Gobierno de España a través de su embajada con base en el auto de “prisión provisional, comunicada y sin fianza” proferido el 26 de abril de 2015 (sic) por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia dentro del sumario número 8/2014 (sic), por “un Delito contra la Salud Pública, según artículos 368, 369 y 370 del Código Penal de España vigente”...

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno Nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma, identificado con el Documento Nacional de Identidad número 74505796X y Pasaporte número AAE458642, requerido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, España, para su enjuiciamiento dentro de las diligencias previas número 57/16 que se le adelantan por un presunto delito contra la salud pública, de conformidad con el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza proferido el 26 de abril de 2016.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno Nacional, en atención a lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención de Extradición de Reos, advertirá al Gobierno de España que el ciudadano requerido no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, con las salvedades allí señaladas.

10. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente como parte cumplida de una eventual condena, el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma, identificado con el Documento Nacional de Identidad número 74505796X y Pasaporte número AAE458642, requerido por el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia,

España, para su enjuiciamiento dentro de las diligencias previas número 57/16 que se le adelantan por un presunto delito contra la salud pública, de conformidad con el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza proferido el 26 de abril de 2016.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano español Pedro Martín Mancebo Coloma al Estado requirente.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado por delito distinto del que motivó la extradición, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención de Extradición de Reos, con las salvedades allí establecidas.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, notifíquese al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 257 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se da por terminado un trámite de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y,

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, mediante Notas Verbales números MRC 010/16 y 011/16 del 19 y 21 de enero de 2016, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano colombiano Salvador Velasco Rodríguez, requerido por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8, Secretaría número 15, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de la Causa número 850 de 2012, por el delito de “tentativa de contrabando de estupefacientes” de conformidad con la orden de detención nacional e internacional emitida el 29 de septiembre de 2015.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 21 de enero de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Salvador Velasco Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91179465, quien había sido capturado el 14 de enero de 2016, por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional, con fundamento en una Notificación Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal número MRC 021/16 del 10 de febrero de 2016, la Embajada de Argentina en nuestro país, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Salvador Velasco Rodríguez.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano Salvador Velasco Rodríguez, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0280 del 10 de febrero de 2016, conceptuó:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y la República Argentina.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente el siguiente tratado regional de extradición entre las Partes: la ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano Salvador Velasco Rodríguez, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OF116-0003911-OAI-1100 del 18 de febrero de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que estando en curso el trámite, en la etapa judicial que se adelanta en la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, la Embajada de la República Argentina mediante Nota Verbal MRC 190/16 del 25 de julio de 2016 informó que el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante resolución del 15 de julio de 2016, dispuso la libertad inmediata de Salvador Velasco Rodríguez en la Causa número 850 de 2012.

Mediante Nota Verbal MRC 211/16 del 8 de agosto de 2016, la Embajada de la República Argentina remitió a la Corte Suprema de Justicia copia del exhorto librado por el Juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el que solicita hacer efectiva la libertad inmediata del ciudadano requerido haciéndole saber *“que se dispuso respecto del nombrado la restricción prevista en el artículo 310 del CPPN, en cuanto deberá concurrir al Consulado de la República Argentina en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, cada veintiún días (21) a labrar acta compromisorio sobre su sujeción al proceso...”*, allegando igualmente copia certificada de la resolución del 15 de julio de 2016, junto con copia certificada del acta de audiencia de indagatoria recibida al señor Velasco Rodríguez mediante videoconferencia.

¹ Artículo 3° numeral 1 literal a).

7. Que en virtud de lo anterior, el Fiscal General de la Nación (e), a través de resolución del 25 de julio de 2016, canceló la orden de captura con fines de extradición que había proferido el 21 de enero de 2016 en contra del ciudadano Salvador Velasco Rodríguez y ordenó su libertad inmediata.

En la mencionada decisión, el Fiscal General de la Nación (e), precisó:

“En ese orden de ideas, si el Estado requirente desiste del pedido de extradición, de esta manera pone término, en consecuencia, al trámite que nos ocupa.

*Por su parte, la Unidad de Antecedentes y Anotaciones Judiciales de la Subdirección Nacional de Atención a Víctimas y Usuarios de la Fiscalía General de la Nación, certificó mediante Oficio FGN-SNAVU-1449 del 25 de julio de 2016, que el señor **Salvador Velasco Rodríguez**, identificado con cédula de ciudadanía 91179465, no registra órdenes de captura o requerimientos de autoridades judiciales, diversos al trámite de extradición.*

*Por tal motivo este Despacho debe cancelar la orden de captura con fines de extradición de fecha 21 de enero de 2016, proferida contra el señor **Salvador Velasco Rodríguez**, y, en consecuencia, ordenar su libertad inmediata para propósitos de la solicitud de extradición...”.*

8. Que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 31 de agosto de 2016, declaró terminado el trámite de extradición adelantado por solicitud del Gobierno de la República de Argentina en relación con el ciudadano colombiano Salvador Velasco Rodríguez.

Sobre el particular, la Honorable Corporación señaló:

“...De esta manera, constituye requisito indispensable para solicitar y decretar la detención con fines de extradición –cuando se trata de procesados–, la vigencia del auto de detención dictado por autoridad competente.

Con el propósito de disponer la captura con fines de extradición del ciudadano colombiano Salvador Velasco Rodríguez, la Fiscalía General de la Nación verificó el cumplimiento de la aludida exigencia. Así mismo, previo a avocar el conocimiento del presente asunto y durante las actuaciones adelantadas, la Sala corroboró la validez y actualidad del auto de detención que sirvió de fundamento a este trámite.

No obstante, mediante Nota Verbal número 211/16 del 8 de agosto de 2016, el Gobierno de la República Argentina remitió exhorto internacional a través del cual el doctor Gustavo D. Meirovich, Juez Nacional en lo Penal Económico número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que:

*Que por ante este Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8, a mi cargo (...) tramita la Causa número CPE 850/2012 (...) en la cual se ha dispuesto librar el presente (...) con el objeto de que tenga a bien, por los medios que estime corresponder, en notificar al señor Salvador Velasco Rodríguez (documento de la República de Colombia número CC91179465), actualmente detenido en la Cárcel “La Picota” de la ciudad de Bogotá, Torre F, y a su defensa lo resuelto por el Suscripto (sic), en el marco del expediente de referencia, y hacer efectiva su **LIBERTAD INMEDIATA** (...). Asimismo, hágasele saber que se dispuso respecto del nombrado restricción prevista en el artículo 310 del CPPN, en cuanto deberá concurrir al Consulado de la República de Argentina en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, cada veintitún días (21) a labrar acta compromisoria con sujeción al proceso.*

En constancia de lo anterior aportó copia auténtica del auto del 15 de julio de 2016, mediante el cual decidió:

I. Declarar la falta de mérito en la presente causa de señor Salvador Velasco Rodríguez (con documento de la República de Colombia número CC91179465), para procesar o sobreseer al nombrado respecto del hecho que le fuera imputado (ver considerando I- Del hecho investigado), debiendo continuarse con la investigación hasta que se pueda resolver su situación en uno u otro sentido procesal (...).

II. En virtud de lo resuelto en el punto que antecede **dispóngase la libertad inmediata** de señor Salvador Velasco Rodríguez (con documento de la República de Colombia número CC91179465) siempre que el nombrado no posea en este país o en el exterior orden de detención emanada de una autoridad judicial competente.

III. Dispóngase respecto del nombrado la restricción prevista en el artículo 310 del CPPN, en cuanto deberá concurrir al Consulado de la República de Argentina en la ciudad de Bogotá, República de Colombia, cada veintitún días (21) a labrar acta compromisoria con sujeción al proceso, la que será enviada por mail a dicho Consulado como modelo a reproducir.

(...)

Lo anterior, con base en el siguiente razonamiento efectuado por el juez:

En este caso las medidas de prueba realizadas a partir de la declaración de Morera Morera, a la fecha no sirvieron para verificar ni acreditar la participación del señor Velasco Rodríguez en estos autos. La única información brindada, respecto del señor Salvador Velasco Rodríguez, en oportunidad de la declaración de indagatoria del señor Morera Morera, que pudo constatarse es que el primero estuvo en el país en el período (...), siento estas pruebas suficientes para imputarle el hecho investigado en autos al señor Velasco Rodríguez y recibírsele declaración de indagatoria, **pero no para dictar auto de procesamiento por el momento.**

(...) En esta línea de análisis la doctrina ha expresado en reiteradas oportunidades que “...La falta de mérito importa la ausencia de elementos de prueba suficientes como para imputar un delito (de cualquier clase) a un individuo...” (...) por lo que, para el caso de autos se impone relevar en profundidad, a través de las medidas de prueba sugeridas por la señora Fiscal, la intervención en los hechos del imputado, razón por la cual es viable el auto de falta de mérito a fin de determinar tal pronóstico jurídico.

En ese orden, resulta palmario que la solicitud de extradición de Salvador Velasco Rodríguez, efectuada por la referida representación diplomática, mediante Nota Verbal número 21/16 del 10 de febrero del año que avanza quedó sin sustento pues, a la fecha, el auto de ‘detención preventiva con fines de extradición’ que libró la autoridad judicial foránea, el 18 de enero de 2016, perdió vigencia.

Además, es importante resaltar que la finalidad para cual las autoridades de la República de Argentina demandaron la extradición de Velasco Rodríguez ya se cumplió. Según el auto de ‘solicitud de extradición’ de fecha 26 de enero de 2016, el Juzgado Nacional en lo Penal y Económico número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispuso: ‘I. LIBRAR EXHORTO DIPLOMÁTICO a las autoridades competentes de la República de Colombia, a fin de solicitarle formalmente la extradición de Salvador Velasco Rodríguez (Pasaporte de la República Colombiana número CC 91179465), a efectos de recibirle declaración de indagatoria prevista por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina, como imputado. (Artículo 53 del CPPN)’. Y en efecto, como lo informó la Embajada de Argentina, tal diligencia se llevó a cabo el 15 de julio de 2016, ‘mediante acto de videoconferencia realizado de forma simultánea’ en las dos ciudades de Buenos Aires y Bogotá.

Por consiguiente, la situación descrita en precedencia impone declarar terminado el trámite surtido ante la Corte en aras de preservar el debido proceso propio de las actuaciones judiciales.

En consecuencia, se dará por terminada la actuación, informando de manera inmediata esta decisión a la Fiscalía General de la Nación, de cara a que, si aún no lo ha hecho, resuelva lo pertinente sobre la libertad de Salvador Velasco Rodríguez (artículos 506, 509 y 511 de la Ley 906 de 2004). De Igual forma, se ordenará devolver el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho.

En mérito de lo expuesto, la **Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,**

RESUELVE:

1. Declarar terminado el trámite de extradición adelantado por solicitud del Gobierno de la República de Argentina en relación con el colombiano Salvador Velasco Rodríguez, conforme las razones expuestas.

2. Informar de manera inmediata esta decisión a la Fiscalía General de la Nación, de cara a que, si aún no lo ha hecho resuelva lo pertinente sobre la libertad de Salvador Velasco Rodríguez...”.

9. Que al quedar sin efecto la orden de detención que sirvió de fundamento para el pedido de extradición formalizado por la Embajada de la República Argentina mediante Nota Verbal número MRC 021/16 del 10 de febrero de 2016, y atendiendo lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia en su concepto, el Gobierno nacional dará por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano Salvador Velasco Rodríguez.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Dar por terminado el trámite de extradición del ciudadano colombiano Salvador Velasco Rodríguez, identificado con la cédula de ciudadanía número 91179465, quien había sido requerido por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en el marco de la Causa número 850 de 2012, que se le adelantaba por el delito de “tentativa de contrabando de estupefacientes”, de conformidad con lo mencionado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2º. Comunicar la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada.

Artículo 3º. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese en el **Diario Oficial, comuníquese** al ciudadano requerido o a su apoderada, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 258 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su Embajada en nuestro país, mediante Nota Verbal número II.2.C6.E3 001677 del 21 de abril de 2015, solicitó la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano Silverio González, requerido por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de conformidad con la orden de aprehensión del 5 de junio de 2012, por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación mediante resolución del 22 de abril de 2015, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano Silverio González, identificado con la cédula de identidad venezolana número V-13-429.592, también conocido como Silverio Fince Epinayu, con cédula de ciudadanía colombiana número 17868674, decisión que le fue notificada el 15 de abril de 2015, en el establecimiento carcelario donde se encontraba previamente detenido.

3. Que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Embajada en nuestro país mediante Nota Verbal II.2.C6.E3 número 003075 del 13 de julio de 2015, formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Silverio González.

4. Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1611 del 13 de julio de 2015, conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que en caso de proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente el siguiente tratado regional de extradición entre las Partes:

- El ‘Acuerdo sobre extradición’, adoptado en Caracas, el 18 de julio de 1911...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de la solicitud de extradición del ciudadano Silverio Fince Epinayu, o Silverio González el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI15-0018433-OAI-1100 del 16 de julio de 2015, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 10 de agosto de 2016, no habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó desfavorablemente a la extradición del ciudadano Silverio Fince Epinayu.

En relación con la identidad del ciudadano requerido la Honorable Corporación manifestó:

“(…)

4. Conclusión sobre la identidad del requerido por las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela.

Como se reseñó, la Carpeta remitida a esta Corporación contiene un dictamen pericial, elaborado el 16 de abril de 2015 por Leonardo González Drada, Técnico Profesional en Dactiloscopia, Seccional de Investigación Criminal e Interpol, en el cual se afirma que el ciudadano colombiano Silverio Fince Epinayu, identificado con cédula de ciudadanía número 17868674, es la persona requerida en extradición por las autoridades judiciales de la República Bolivariana de Venezuela.

Ese informe de laboratorio se basó en la confrontación entre la tarjeta decadactilar del ciudadano venezolano, aportada por Interpol-Caracas, la cual reposa en los folios 86 (91) del cuaderno de la Corte y 32 de la carpeta anexa, y los documentos que acreditan la plena identidad del ciudadano colombiano.

No obstante, en el presente trámite se obtuvieron dos informes científicos (LN No. IP 3002477, de 10 de diciembre de 2015 y LN No. IP 3032879, de 13 de enero de 2016), ambos emitidos por el Departamento de Criminalística, Grupo Lofoscopia NNs, de la Fiscalía General de la Nación, en los cuales se informó que no es posible realizar el cotejo dactiloscópico requerido porque las impresiones obrantes a folios 86 (91) del cuaderno de la Corte y 32 de la carpeta anexa no son aptas para tal estudio, dado que se trata de una fotocopia ampliada ilegible, la cual no reúne los requisitos mínimos para ese tipo de análisis comparativo.

Debido a esa circunstancia, la Sala descartará el Informe de Laboratorio de 16 de abril de 2015 porque, a la luz de esos dictámenes periciales, su conclusión carece de fundamento empírico.

Por otro lado, se resalta que la información aportada por la República Bolivariana de Venezuela, a través de su embajada en Colombia, es insuficiente debido a que no se aportó el original de la tarjeta decadactilar, o al menos una copia idónea de la misma, reproducción digital o impresa de la cédula de ciudadanía o una reseña fotográfica. Esa deficiencia no fue superada pese al requerimiento realizado por esta Corporación en tal sentido.

Por último, conviene aclarar que no es posible a partir de “... las señas de la persona reclamada” existentes en el plenario, determinar si Silverio Fince Epinayu es Silverio González porque tal información, dada su precariedad, no permite llegar a una conclusión desprovista de dudas.

Sobre ese punto tiene dicho esta Sala¹:

En el marco de la normatividad procesal penal, la palabra individualización corresponde a la operación a través de la cual se especifica o determina a una persona, por sus rasgos particulares que permiten distinguirla de todas las demás. Alude a la persona como fenómeno natural, a las características personalísimas de un ser humano, que lo hace único e inconfundible frente a todos los demás pertenecientes a su misma especie. En este sentido, la individualización es un concepto interesante a la antropología física, a la morfología.

Entonces, puede colegirse que la expresión ‘plenamente identificada’ en la prohibición que el legislador estableció en las citadas normas, apunta a la persona integralmente considerada, como fenómeno natural, individual e inconfundible con otra, única en su especie, y también lo atinente a su entorno sociocultural, en el sentido de que no está permitido emplazar o vincular a alguien indeterminado, con el propósito de no resulte como sujeto pasivo de la acción penal una persona distinta a la que desplegó la conducta punible, o se dificulte o impida la ejecución de la sentencia.

Adicionalmente, tampoco corresponde a esta autoridad judicial esclarecer si el ciudadano colombiano participó en los hechos que dieron lugar a la Orden de Aprehensión número 8C-14901-12 de 5 de junio de 2012, dictada por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, porque tal actividad excedería los límites de verificación formal del concepto de extradición y usurparía las funciones de investigación a cargo de la autoridad foránea.

Así las cosas, dado que no se evidencia en el expediente elemento alguno que permita afirmar, con certeza, que Silverio Fince Epinayu es el ciudadano venezolano requerido en extradición, Silverio González, el requisito de la plena identidad no se satisface.

Frente a esa circunstancia resulta innecesario abordar los demás presupuestos.

5. Decisión.

De acuerdo con lo anotado en precedencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia **conceptúa desfavorablemente** a la extradición del ciudadano colombiano Silverio Fince Epinayu, identificado con cédula de ciudadanía número 17868674, formalizada por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Nota Verbal II.2.C6.E3 003075 del 13 de junio de 2015, con fundamento en la Orden de Aprehensión número 8C-14901-12 de 5 de junio de 2012, dictada en contra de Silverio González, por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia...”.

7. Que el Fiscal General de la Nación, teniendo en cuenta el concepto desfavorable emitido por la Corte Suprema de Justicia el 10 de agosto de 2016, decretó mediante resolución del 11 de agosto de 2016, la cancelación de la orden de captura con fines de extradición proferida, mediante resolución del 22 de abril de 2015, contra el ciudadano colombiano Silverio Fince Epinayu, identificado con cédula de ciudadanía número 17868674 y en consecuencia ordenó que **“el señor Silverio González, quien también se identifica como Silverio Fince Epinayu, deberá continuar a disposición del Juzgado Segundo Municipal con Función de Control de Garantías de Riohacha, ya que esta persona no se encuentra detenida a disposición de este Despacho para los fines del trámite de extradición”**.

8. Que atendiendo el concepto desfavorable de la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para la extradición de este ciudadano y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional negará la extradición del señor Silverio Fince Epinayu.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Negar la extradición del ciudadano colombiano Silverio Fince Epinayu, identificado con cédula de ciudadanía número 17868674, requerido por el Juzgado Octavo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Venezuela, de conformidad con la orden de aprehensión del 5 de junio de 2012, por la presunta comisión de los delitos de secuestro agravado y asociación para delinquir.

Artículo 2°. Notificar la presente decisión personalmente al interesado, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 3°. Enviar copia de la presente resolución, previa su ejecutoria, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo Municipal con Función de Control de Garantías de Riohacha, Guajira y al Fiscal General de la Nación para lo de sus competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** al ciudadano requerido, a su representante o apoderada, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Segundo Municipal con Función de Control de Garantías de Riohacha, Guajira y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 259 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Nota Verbal MRC número 238/15 del 18 de noviembre de 2015, el Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de la ciudadana colombiana Yeimmy Stacy Garzón Escobar, requerida para el cumplimiento de la condena impuesta mediante sentencias del 5 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal en lo Criminal número 7 de San Isidro, y del 28 de octubre de 2015 dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, dentro de la Causa número 2718, caratulada **“Garzón Escobar Yeimmy Stacy, González Díaz Yeison Javier y Rubio Díaz Edson Jair s/ tentativa de homicidio doblemente agravado”**, por los delitos de **“robo doblemente calificado por efracción y en poblado y en banda y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, reiterado –dos hechos–, en grado de tentativa, todos en concurso real...”**.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 19 de noviembre de 2015, decretó la captura con fines de extradición de la ciudadana Yeimmy Stacy Garzón Escobar, identificada con la cédula de ciudadanía número 53009288, quien había sido detenida el 11 de noviembre de 2015, con fundamento en una Circular Roja de Interpol.

3. Que mediante Nota Verbal MRC número 5/15 del 12 de enero de 2015, el Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, formalizó la solicitud de extradición de la ciudadana Yeimmy Stacy Garzón Escobar.

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición de la ciudadana Yeimmy Stacy Garzón Escobar, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos

¹ Sentencia de 23 de mayo de 2007, Radicación 25393.

Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 0058 del 13 de enero de 2016, conceptuó que:

“Conforme a lo establecido en nuestra legislación procesal penal interna, se informa que es del caso proceder con sujeción a los instrumentos internacionales vigentes entre la República de Colombia y la República Argentina.

En consecuencia, y una vez revisado el archivo de tratados de este Ministerio, es de indicar que se encuentra vigente el siguiente tratado regional de extradición entre las Partes: la ‘Convención sobre Extradición’, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933...”.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición de la ciudadana Yeimmy Stacy Garzón Escobar, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI16-0000939-OAI-1100 del 20 de enero de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que mediante Notas Verbales MRC números 39/16 y 49/16 del 24 de febrero y 1° de marzo de 2016, respectivamente, el Gobierno de la República Argentina, a través de su Embajada en Colombia, allegó documentos relacionados con la formalización de la solicitud de extradición de la ciudadana Yeimmy Stacy Garzón Escobar.

7. Que la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 24 de agosto de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición de la ciudadana Yeimmy Stacy Garzón Escobar.

Sobre el particular la Honorable Corporación manifestó:

“5. Satisfechos así los presupuestos señalados en la legislación interna y en el instrumento internacional invocado se exhortará al Ejecutivo, tal como lo solicita el Ministerio Público y en últimas la defensa, para que en caso de concederse la extradición ella se condicione a que la persona solicitada no vaya a ser juzgada por hechos ocurridos antes del 17 de diciembre de 1997 o diversos de los que motivan la extradición, ni sometida a desaparición forzada, a torturas ni penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua o confiscación, o a sanciones distintas de las que se le hubieren impuesto en la condena, y si la legislación del Estado requirente sanciona con la muerte el injusto que motiva la extradición, la entrega se hará bajo la condición de que tal pena sea conmutada, en orden a lo contemplado en el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.

Adicionalmente la Corte condicionará el concepto que ahora rinde a que el Presidente de la República en ejercicio de sus deberes constitucionales y de la función de dirigir las relaciones internacionales, disponga lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos antes referidos y a que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de libertad por virtud de este trámite.

El Gobierno debe, además, condicionar la entrega de Yeimmy Stacy Garzón Escobar a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

A la par, el Gobierno debe condicionar la entrega a que el país reclamante, conforme con sus políticas internas sobre la materia, le ofrezca posibilidades racionales y reales para que la eventual extraditada pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, habida cuenta que la Constitución de 1991, en su artículo 42, reconoce a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza con la protección adicional que a ese núcleo le otorgan la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 17) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 23).

Concepto

En consecuencia la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, conceptúa favorablemente sobre la solicitud de extradición elevada por el Gobierno de la República Argentina, respecto de la ciudadana Yeimmy Stacy Garzón Escobar, a fin de que cumpla la pena allí impuesta mediante sentencias de 5 de septiembre de 2014 dictada por el Tribunal en lo Criminal número 7 Departamento Judicial de San Isidro y de 28 de octubre de 2015 proferida por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, por los delitos de “robo doblemente calificado por efracción y en poblado y en banda y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, reiterado –dos hechos–, en grado de tentativa, todos en concurso real”...”.

8. Que en atención al concepto favorable emitido por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004 el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición de la ciudadana colombiana **Yeimmy Stacy Garzón Escobar**, identificada con la cédula de ciudadanía número 53009288, requerida para el cumplimiento de la condena impuesta mediante sentencias del 5 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal en lo Criminal número 7 de San Isidro, y del 28 de octubre de 2015 dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, dentro de la Causa número 2718, caratulada “**Garzón Escobar Yeimmy Stacy, Gonzalez Díaz Yeison Javier y Rubio Díaz Edson Jair s/tentativa de homicidio doblemente agravado**”, por los delitos de “robo doblemente calificado por efracción y en poblado y en banda y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, reiterado –dos hechos–, en grado de tentativa, todos en concurso real...”.

9. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que la ciudadana **Yeimmy Stacy Garzón Escobar** no se encuentra requerida por autoridad judicial colombiana, ni le aparecen registros sobre antecedentes penales.

10. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el artículo 17 de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933, advertirá al Gobierno de la República Argentina la obligación de no procesar ni juzgar a la ciudadana **Yeimmy Stacy Garzón Escobar** por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte; sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para el delito que

motiva la presente solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

11. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega de la ciudadana **Yeimmy Stacy Garzón Escobar**, bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004; esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

12. Que la ciudadana requerida le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenida por cuenta del trámite de extradición y, para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente, el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición de la ciudadana colombiana **Yeimmy Stacy Garzón Escobar**, identificada con la cédula de ciudadanía número 53009288, requerida para el cumplimiento de la condena impuesta mediante sentencias del 5 de septiembre de 2014 proferida por el Tribunal en lo Criminal número 7 de San Isidro, y del 28 de octubre de 2015 dictada por el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Argentina, dentro de la Causa número 2718, caratulada “**Garzón Escobar Yeimmy Stacy, González Díaz Yeison Javier y Rubio Díaz Edson Jair s/tentativa de homicidio doblemente agravado**”, por los delitos de “robo doblemente calificado por efracción y en poblado y en banda y homicidio agravado por el uso de arma de fuego, reiterado –dos hechos–, en grado de tentativa, todos en concurso real...”.

Artículo 2°. Ordenar la entrega de la ciudadana **Yeimmy Stacy Garzón Escobar** al Estado requirente, bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso 2° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que la ciudadana requerida no será sometida a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente la obligación de no procesar ni juzgar a la ciudadana **Yeimmy Stacy Garzón Escobar** por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición y de remitir copia de la eventual sentencia que se dicte, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 494 de la Ley 906 de 2004 y lo señalado en el artículo 17 de la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo en 1933. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anteriores al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar la presente decisión personalmente a la interesada, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma, a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** a la ciudadana requerida, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por la interesada para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación, y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 260 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, y

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal número 0355 del 1° de marzo de 2016, solicitó la detención provisional con fines de extradición del ciudadano colombiano **Nidal Waked Hatum**, requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de dinero.

2. Que en atención a dicha solicitud, el Fiscal General de la Nación (e), mediante Resolución del 30 de marzo de 2016, decretó la captura con fines de extradición del ciudadano

Nidal Waked Hatum, identificado con la cédula de ciudadanía número 79586210, la cual se hizo efectiva el 4 de mayo de 2016, por funcionarios de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.

3. Que mediante Nota Verbal número 1095 del 1° de julio de 2016, la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país formalizó la solicitud de extradición del ciudadano Nidal Waked Hatum.

En dicha Nota se informa lo siguiente:

“Nidal Waked Hatum es requerido para comparecer a juicio por delitos de lavado de dinero. Es el sujeto de la Acusación número 15-20189-CR-Scola (también enunciada como número 15-20189-CR-Scola/OTAZO-REYES), dictada el 24 de marzo de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante la cual se le acusa de:

-- Cargo Uno: Concierto para cometer delitos de lavado de dinero, en violación del Título 18, Secciones 1956(a)(2)(A), 1956(h), y 1957 del Código de los Estados Unidos; y

-- Cargo Dos: Concierto para cometer delitos de lavado de dinero, en violación del Título 18, Secciones 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i), y 1956(h) del Código de los Estados Unidos.
(...)

Un auto de detención contra Nidal Waked Hatum por estos cargos fue dictado el 24 de marzo de 2015, por orden de la corte arriba mencionada. Dicho auto de detención permanece válido y ejecutable.

(...)

Todas las acciones adelantadas por el acusado en este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997...”

4. Que luego de formalizada la solicitud de extradición del ciudadano **Nidal Waked Hatum**, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales, mediante Oficio DIAJI número 1475 del 1° de julio de 2016, conceptuó que por no existir tratado de extradición aplicable al presente caso, es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano.

5. Que perfeccionado así el expediente de extradición del ciudadano **Nidal Waked Hatum**, el Ministerio de Justicia y del Derecho, mediante Oficio número OFI16- 0018108-OAI-1100 del 6 de julio de 2016, lo remitió a la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia para el concepto correspondiente.

6. Que la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante pronunciamiento del 24 de agosto de 2016, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano **Nidal Waked Hatum**.

Sobre el particular, la honorable Corporación precisó:

“...2. Si el Gobierno nacional accede a la entrega de la persona reclamada, debe condicionarla a que no sea juzgada ni sancionada por hechos diferentes a los relacionados en la solicitud. Tampoco podrá ser sometida a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni castigada con pena perpetua. Si la legislación extranjera permite imponer la pena de muerte, debe exigirse que sea conmutada según lo señala el artículo 494 del Código de Procedimiento Penal.

3. Al Gobierno nacional también le corresponde condicionar la entrega a que el país reclamante, de acuerdo a sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el requerido pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos.

4. Finalmente, el tiempo en que el ciudadano estuvo detenido por cuenta del trámite debe serle reconocido como parte cumplida de la posible sanción que se le imponga.

5. De la misma manera, se exhorta al Gobierno, encabezado por el señor Presidente de la República como supremo director de la política exterior y las relaciones internacionales, para que efectúe el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la concesión de la extradición y determine las consecuencias que se derivarían de su eventual incumplimiento, al tenor de lo señalado en el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política.

6. En caso de que Nidal Waked Hatum sea absuelto o declarado no culpable de los cargos que dieron origen a su extradición y dejado en libertad, el Estado requirente deberá asumir los gastos de transporte y manutención del extraditado, con destino a su país natal.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,
CONCEPTÚA

En Forma Favorable sobre la petición de extradición del ciudadano **Nidal Waked Hatum**, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de América, respecto de los cargos uno y dos, relacionados en la acusación formal dentro de la causa número 15-20189-CR-SOLA/OTAZO REYES seguida en el Tribunal para el Distrito Sur de Florida...”

7. Que en atención al concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, y teniendo en cuenta que de acuerdo con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, el Gobierno nacional está en libertad de obrar según las conveniencias nacionales, concederá la extradición del ciudadano colombiano **Nidal Waked Hatum**, identificado con la cédula de ciudadanía número 79586210, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los cargos **Uno y Dos** (Concierto para cometer delitos de lavado de dinero), mencionados en la Acusación número 15-20189-CR-Scola (también enunciada como número 15-20189-CR-Scola/OTAZO-REYES), dictada el 24 de marzo de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

8. Que de acuerdo con la información allegada al expediente se puede establecer que el ciudadano **Nidal Waked Hatum** no se encuentra requerido por autoridad judicial colombiana y su captura obedece únicamente a los fines del trámite de extradición.

9. Que el Gobierno nacional, en atención a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, debe exigir al Gobierno de los Estados Unidos de América que el ciudadano requerido no sea juzgado por un hecho anterior y distinto del que motiva la solicitud de extradición. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

10. Que el Gobierno nacional ordenará la entrega del ciudadano Nidal Waked Hatum bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la presente solicitud de extradición.

11. Que al ciudadano requerido le asiste el derecho de que se le reconozca en el Estado requirente el tiempo que permaneció detenido por cuenta del trámite de extradición, y para acreditar esa situación, podrá solicitar la respectiva constancia a la Fiscalía General de la Nación, por ser la entidad competente para esos efectos.

No obstante lo anterior, se advierte que tal y como ha sido costumbre, la Dirección de Gestión Internacional de la Fiscalía General de la Nación remite la certificación sobre el tiempo de detención de los ciudadanos requeridos por cuenta del trámite de extradición a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el fin de que el Cónsul respectivo tenga conocimiento de esa situación.

Finalmente el Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, remitirá copia de la presente decisión a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores para los fines indicados en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la honorable Corte Suprema de Justicia en su concepto.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Conceder la extradición del ciudadano colombiano **Nidal Waked Hatum** identificado con la cédula de ciudadanía número 79586210, para que comparezca a juicio ante las autoridades de los Estados Unidos de América por los cargos **Uno y Dos** (Concierto para cometer delitos de lavado de dinero), mencionados en la Acusación número 15-20189-CR-Scola (también enunciada como número 15-20189-CR-Scola/OTAZO-REYES), dictada el 24 de marzo de 2015, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.

Artículo 2°. Ordenar la entrega del ciudadano **Nidal Waked Hatum** al Estado requirente bajo el compromiso de que este cumpla las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.

Artículo 3°. Advertir al Estado requirente que el ciudadano extraditado no podrá ser juzgado ni condenado por un hecho anterior y distinto del que motiva la presente extradición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 494 de la Ley 906 de 2004. De igual forma se advierte que no podrán ser incluidos hechos o material probatorio anterior al 17 de diciembre de 1997.

Artículo 4°. Notificar personalmente la presente decisión al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, haciéndole saber que contra la misma procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer por escrito en la diligencia o dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Artículo 5°. Una vez ejecutoriada la presente resolución, enviar copia de la misma a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 6°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

Publíquese en el *Diario Oficial*, **notifíquese** al ciudadano requerido o a su apoderado o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse, **comuníquese** al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General de la Nación y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa

RESOLUCIÓN EJECUTIVA NÚMERO 261 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 491 de la Ley 906 de 2004, conforme a lo previsto en los artículos 74 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO:

1. Que mediante Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016, el Gobierno nacional decidió sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano **Robinson Díaz Rodríguez**, identificado con la cédula de ciudadanía número 94425389, en el sentido de **conceder la extradición** de este ciudadano para que comparezca a juicio en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, **por el delito de tráfico de estupefacientes**, mencionado en la Acusación número 13-20304-CR-ALTONAGA/SIMONTÓN, dictada el 3 de mayo de 2013, y **negar la extradición por el delito de concierto**

para delinquir, mencionado en la misma acusación, teniendo en cuenta lo conceptuado por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 4 de mayo de 2016.

2. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la anterior decisión se notificó personalmente a la abogada defensora del ciudadano requerido, el 13 de julio de 2016, situación comunicada a este último mediante Oficio OFI16-0018752- OAI-1100 de la misma fecha.

Tanto a la abogada defensora como al ciudadano requerido se les informó que contra la decisión del Gobierno nacional procedía el recurso de reposición, indicándoles que la oportunidad para hacerlo era dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de la diligencia de notificación personal.

3. Que estando dentro del término legal, la apoderada del ciudadano **Robinson Díaz Rodríguez**, mediante escrito radicado el 26 de julio de 2016 en el Ministerio de Justicia y del Derecho, interpuso recurso de reposición contra la Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016, con el propósito de que se revoque la decisión.

4. Que el mencionado recurso está fundamentado en los siguientes argumentos:

Después de hacer una descripción detallada de los antecedentes y mencionar las diferentes decisiones que se adoptaron en los casos de Segundo Gregorio Enríquez Guerrero, Luis Alberto Díaz Rodríguez y Robinson Díaz Rodríguez, quienes advierte, están cobijados bajo una misma acusación en los Estados Unidos de América, señala la recurrente que si bien la solicitud de **“devolución del expediente”** que, para el caso de su representado, presentó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia y del Derecho, no es un procedimiento establecido en la Ley 906 de 2004, ni siquiera bajo el argumento de un **“pronunciamiento oficioso frente a una irregularidad sustancial que afecta el principio de igualdad”**, tal situación le dio una esperanza al ciudadano Robinson Díaz Rodríguez y a su familia, al pensar que se iba a corregir el error en que había incurrido la honorable Corporación en el concepto emitido el 14 de octubre de 2015.

Afirma que la Corte Suprema de Justicia, desconociendo los argumentos plasmados en el pronunciamiento del 24 de febrero de 2016 a través del cual decretó la nulidad de lo actuado, cometió nuevamente un gran error en el concepto emitido el 4 de mayo de 2016, al conceptuar favorablemente a la extradición del señor **Díaz Rodríguez** por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, bajo el argumento equívoco de que los cargos de concierto para delinquir imputaban dicho delito de manera independiente, situación que vulnera de manera grave los derechos fundamentales del ciudadano requerido.

Manifiesta la defensora que el ciudadano **Robinson Díaz Rodríguez** ya fue juzgado y condenado en Colombia por los cargos que motivan la solicitud de extradición y que, en consecuencia, con su entrega se presentaría un daño irreparable por la vulneración de las garantías constitucionales del debido proceso y *non bis in idem*.

Después de hacer un análisis sobre este último aspecto, la recurrente concluye que en este caso se vulnera el principio fundamental del *non bis in idem*, comoquiera que (i) tanto la acusación foránea como la sentencia emitida por el Juzgado 5 Penal del Circuito Especializado de Cali, se refieren a la misma persona, es decir, a **Robinson Díaz Rodríguez**; (ii) existe sentencia en firme contra este ciudadano, quien fue condenado a siete (7) años de prisión por el delito de concierto para delinquir agravado y (iii) los hechos por los que se encuentra acusado en el exterior son los mismos por los que fue condenado en Colombia.

Asegura que el argumento esgrimido por la Corte Suprema de Justicia en el concepto proferido el 4 de mayo de 2016, en el que indica que en la acusación americana se le imputan al señor **Robinson Díaz Rodríguez** cargos por tráfico de estupefacientes y que por dicho punible no fue condenado en Colombia, carece de sustento probatorio y como respaldo de su afirmación transcribe apartes del concepto desfavorable que en su momento profirió la Corte Suprema de Justicia para el caso de Luis Alberto Díaz Rodríguez.

De igual forma, considera la recurrente que la extradición del señor Robinson Díaz Rodríguez a un Estado fuera del alcance de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo expondría a una tortura física y psicológica. En cuanto a lo primero, asegura que el riesgo se presenta por tratarse de un paciente con antecedentes de enfermedad coronaria y respecto de lo segundo, tortura psicológica, afirma que se presentaría al ser procesado, condenado y privado de la libertad en los Estados Unidos de América de manera injusta y lejos de su familia, en especial de su hijo.

Adicionalmente, la recurrente asevera que el riesgo de tortura del ciudadano requerido se extiende a su esposa e hijo, haciendo los siguientes cuestionamientos: *“¿Qué más tortura que ser condenado dos veces por el mismo hecho?”* y *“¿Qué tan reparable puede ser el tiempo que pase privado de la libertad cumpliendo una pena en Estados Unidos que ya había sido impuesta en Colombia y que se encontraba purgando con el apoyo y cercanía de su familia?”*.

Finalmente, en el escrito de impugnación la defensora relaciona 13 documentos como anexos, pero solo adjunta, en 63 folios, los referidos en los numerales 11 (*Paz y Salvo de la Fiscalía Once Especializada*) y 12 (*Constancia de la sentencia impuesta al ciudadano Segundo Gregorio Enríquez Guerrero*).

5. Que en relación con los argumentos expuestos en el recurso, el Gobierno nacional considera:

La reflexión que hace la recurrente en el escrito de impugnación permite inferir que el sustento de su recurso es la inconformidad que tiene frente al sentido favorable del concepto que emitió la Corte Suprema de Justicia, el 4 de mayo de 2016, precisando que corresponde al Gobierno nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho tomar la última decisión en el trámite de extradición e impedir que se configure un daño irreparable al ciudadano requerido.

Lo pretendido por la recurrente no es viable si se tiene en cuenta que el pronunciamiento que emite la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro de un trámite de extradición es solo un concepto que en el caso de ser favorable no es vinculante, sin

que sea acertado considerar que el Gobierno nacional es una instancia superior que puede entrar a revisar el concepto y modificarlo.

En el presente caso, la Corte Suprema de Justicia, en pronunciamiento del 24 de febrero de 2016, decretó la nulidad de lo actuado en el trámite de extradición del ciudadano colombiano **Robinson Díaz Rodríguez**, a partir inclusive del Concepto CP141-2015 que había emitido el 14 de octubre de 2015, justificando su actuación en la necesidad de garantizar los derechos constitucionales fundamentales del requerido, especialmente la igualdad de trato judicial y el *non bis in idem*, ante lo cual dispuso proferir un nuevo concepto y adoptar el criterio mayoritario que sobre el carácter de permanencia del delito de concierto para delinquir tiene sentado la Sala.

La anterior situación llevó a que la honorable Corporación, en pronunciamiento del 4 de mayo de 2016, emitiera concepto **desfavorable** a la petición de entrega en extradición del ciudadano colombiano **Robinson Díaz Rodríguez** por el delito de concierto para delinquir y **favorable** por el delito de tráfico de estupefacientes.

Respecto de esta última decisión, la honorable Corporación encontró que en la solicitud del Estado requirente, adicional al delito de concierto para delinquir, se indica que “además”, la conducta imputada “implicó cinco kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”; y que de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, en relación con los cargos en los que se imputa al reclamado en extradición los artículos 959, 960 y 963, se ha adoptado por admitir que los cargos corresponden en Colombia al concierto para delinquir y al tráfico de estupefacientes, de que tratan los artículos 340 y 376 del C. P., con las modificaciones de la Ley 733 de 2002, 890 de 2004 y 1121 de 2006.

En esa medida, la Corte Suprema de Justicia ratificó el criterio mayoritario en este caso aduciendo las siguientes razones: “i) la imputación jurídica es elemento esencial de la acusación y su señalamiento establece los parámetros de los cargos que debe defenderse el procesado en el juicio; ii) las autoridades judiciales colombianas no tienen competencia para modificar los reproches que se le hacen al requerido por la autoridad judicial extranjera; iii) el adverbio «además» que se utiliza en la imputación jurídica del Indictment, luego de referir que el reclamado en extradición incurrió en concierto por conspirar, confederar o acordar, es aditiva, de agregación, indicativa que también se suma la conducta del tráfico que involucra una cantidad de cocaína equivalente a 5 kilogramos o más; y iv) los artículos 959, 960 y 963 de la Legislación Penal de los Estados Unidos aluden los dos primeros a la posesión, fabricación o distribución de sustancia ilícita y el 963 al concierto para delinquir...”.

Ahora bien, la existencia de cosa juzgada en el trámite de extradición es un asunto que corresponde estudiar a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse precisamente de una causal de improcedencia de orden constitucional.

En efecto, la Alta Corporación, sustentada en un análisis de la normatividad procesal penal, previa y actual, así como en jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha determinado que la revisión de los presupuestos jurídicos que hacen viable la procedencia de la extradición, le corresponde exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia.

Así lo ha precisado la honorable Corporación:

“Por manera que ante una causal de improcedencia de extradición, se impone para la Corte abordar su estudio, junto con los expresamente señalados por el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, pues en ese orden de ideas,

‘no es ciertamente al Gobierno nacional al que corresponda establecer su existencia o no, tratándose como se trata además de un aspecto jurídico, de un presupuesto de la extradición, del ejercicio soberano de la jurisdicción ordinaria a cuya cabeza se encuentra la Corte y de la observación de garantías fundamentales de los asociados a cuya preservación la justicia se encuentra compeliada a partir de lo dispuesto por el artículo 2º de nuestra Constitución’¹. (Se resalta).

“En este orden, es claro que ante el principio de la cosa juzgada y por tanto la prohibición de la doble incriminación como causal de improcedencia de la extradición, y si bien es cierto que el único facultado en nuestro ordenamiento para extraditar es el Gobierno nacional, no menos lo es que la única facultada para determinar los requisitos de procedencia del mecanismo es la Corte Suprema a través del concepto que de ella se demanda en estos asuntos”². (Negrilla agregada).

Así las cosas, a la Corte Suprema de Justicia le concierne el estudio no solo de las exigencias a que se refiere el artículo 502 del Código de Procedimiento Penal, sino también de los demás presupuestos de orden constitucional que para efecto de la extradición deben verificarse para determinar su procedencia, como sucede con la determinación de que en Colombia el requerido no haya sido ni esté siendo juzgado por los mismos hechos que sustentan el pedido de extradición al momento en que este se formule³.

En el presente caso, en la oportunidad prevista dentro del trámite de extradición para solicitar la práctica de pruebas, la defensa del ciudadano requerido manifestó que el señor **Robinson Díaz Rodríguez** fue juzgado en Colombia por los mismos hechos que motivan el pedido de extradición, dentro del proceso radicado bajo el número 760016000000201200326, adelantado por el Juzgado 5 Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Cali, Valle, en el que fue condenado, mediante sentencia anticipada del 26 de junio de 2012, por el delito de concierto para delinquir agravado, solicitando oficiar al despacho judicial para que se allegara copia del mencionado fallo.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró conducente y pertinente, de cara a los elementos del concepto, corroborar si se había ejercido con anterioridad la jurisdicción respecto de los hechos base del requerimiento, razón por la cual, mediante

¹ Concepto desfavorable del 19 de febrero de 2009, radicado 30374.

² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Concepto de 6 de mayo de 2009. Trámite de extradición radicado número 30373.

³ CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Concepto de 19 de febrero de 2009. Trámite de extradición radicado número 30374.

auto del 29 de abril de 2015, accedió a la petición probatoria, admitiendo como prueba la copia de la sentencia anticipada del 26 de junio de 2012, y dispuso oficiar al despacho judicial para establecer cuál era el estado del proceso y los hechos del mismo, así como la constancia de ejecutoria del mencionado fallo.

Una vez analizada y confrontada la información suministrada por el Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados del Sistema Penal Acusatorio de Cali, Valle, en especial la sentencia condenatoria dictada en contra de **Robinson Díaz Rodríguez** y Luis Alberto Díaz Rodríguez, y la acusación dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el concepto emitido el 4 de mayo de 2016 concluyó que **Robinson Díaz Rodríguez** fue judicializado e investigado y se le impuso detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y lavado de activos, pero únicamente aceptó cargos y fue condenado por el primero de los ilícitos en mención, es decir, por el delito de concierto para delinquir agravado.

Bajo ese presupuesto, la Corte Suprema de Justicia concluyó que, **al amparo del non bis ibídem, no existe impedimento legal para conceder la extradición solicitada por el delito de tráfico de estupefacientes**, por el que ha sido reclamado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos de América mediante la Nota Verbal número 2080 del 21 de octubre de 2014.

Así lo señaló la Alta Corporación judicial en su concepto:

“7. Prohibición de doble juzgamiento

*En el trámite de extradición, se estableció que **Robinson Díaz Rodríguez** fue condenado el 26 de junio de 2012 por el Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali a las penas principales de 84 meses de prisión y multa equivalente al valor de 1.574 salarios mínimos legales mensuales vigentes, como autor del delito de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico (artículo 340, inciso segundo y tercero, de la Ley 599 de 2000, modificado por los artículos 8° y 19 de las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006). Esa decisión, en la cual también fue condenado Luis Alberto Díaz Rodríguez, hermano del ahora requerido, cobró ejecutoria el día de su emisión, como así aparece en la constancia correspondiente⁴.*

*Los congéneres Díaz Rodríguez, asesorados por sus defensores, celebraron **preacuerdo** con la Fiscalía 11 Especializada de Cali, de fecha 4 de mayo de 2012 y que culminó con la sentencia referida⁵.*

La condena del 26 de junio de 2012 del Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali en nuestro país, indicó respecto a la situación fáctica:

‘Da cuenta la investigación que durante el mes de mayo de 2009 miembros de la Policía Judicial, a través de llamadas anónimas, conocieron de la presunta existencia de una organización delictiva que operaba en los departamentos del Valle del Cauca y Nariño, dedicada al tráfico de estupefacientes, cuyo liderazgo era ejercido por un sujeto conocido como Robinson Díaz Rodríguez, alias ‘El Gordo’, quien era el encargado de proporcionar los recursos económicos para que otros miembros adquirieran las sustancias estupefacientes y posteriormente ser enviadas y comercializadas en el exterior; a través de nuevos contactos que se ubican en Panamá y mantienen comunicación directa con el líder de la organización Robinson Díaz Rodríguez, quien se encarga de recibir el estupefaciente que se envía de este país y posterior distribución a México, Europa y Estados Unidos.

Se supo también que los integrantes de la red se radican en Cali, Popayán y los municipios de Argelia, Balboa y los corregimientos de El Plateado, Sinaí, El Mango y La Playa, lugares estos de donde planean, coordinan y ejecutan el comercio de alcaloides, pues en estas zonas rurales poseen laboratorios donde se procesa el estupefaciente.

Se informó igualmente que para el mes de julio de 2009, alias “el Gordo” y alias el “Cabezón” enviarían desde esta ciudad con destino al Cauca, una fuerte suma de dinero, la cual iba camuflada en el camión distinguido con placas VSD-007, siendo por ello que se articuló el operativo y el 30 de ese mismo mes, se registró el automotor en el que se transportaba el alimento para equinos y bovinos, encontrando la suma de \$385.250.000 camuflados en cuatro bultos, operando (sic) la captura de su conductor José Fidel Rosero Guevara.

Sobre la base de dicha información se adelantó el programa metodológico y fue en desarrollo de las pesquisas adelantadas por el órgano de la acusación, tales como interceptación de comunicaciones de distintos abonados telefónicos, vigilancia y seguimiento de personas, búsquedas selectivas en base de datos, entre otras técnicas de investigación –ordenadas y legalizadas por el Juez de Control de Garantías que se logró establecer que efectivamente la banda delincuencia existía y que se dedicaba a actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico; así como que se había incautado grandes cantidades de dinero; destruidos laboratorios e incautación de sustancias estupefacientes.

Así mismo, se conocieron los alias de los integrantes de la estructura criminal y el rol que desempeñaba cada uno de ellos. (...)

Fue en virtud de la anterior información que se solicitó ante el Juez de Control de Garantías la captura de los mencionados sujetos, las cuales se materializaron y legalizaron el día 26 de enero de 2012 y 31 del mismo mes y año, el Juez 25 PMG legalizó la captura y dirigió el proceso hacia la formulación de imputación e impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, sin que ninguno de los aquí procesados se hubiese allanado a los cargos de Concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes y lavado de activos para Robinson Díaz Rodríguez y de concierto para delinquir agravado para Luis Alberto Díaz Rodríguez. (...)’⁶.

*La síntesis de los hechos hasta la definición de situación jurídica, arroja como conclusión que en el proceso adelantado en el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali contra **Robinson Díaz Rodríguez** y Luis Alberto Díaz Rodríguez, se les dio un trato fáctico y jurídico diferenciado, a saber: al primero se le formuló imputación e impuso detención preventiva por ‘concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de estupefacientes y lavado de activos’; en tanto que al segundo se le atribuyó únicamente ‘concierto para delinquir agravado’.*

El 5 de mayo de 2012, según da cuenta el fallo proferido por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali, los hermanos Díaz Rodríguez suscribieron preacuerdo, cuyo contenido se registra en la sentencia que profiriera dicho despacho judicial a folio 5, así: ‘ambos aceptaron responsabilidad como coautores del delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico agravado conforme al inciso 2° del artículo 340 del Código Penal’.

El Juzgador les otorgó una rebaja de pena del 41.66% de la que correspondería imponer, como descuento punitivo por el hecho de haberse acogido al trámite abreviado, con base en el artículo 351 del C. P. P.

El texto del preacuerdo con Luis Alberto Díaz Rodríguez, fue citado en el concepto de extradición tramitado bajo el radicado número 44.938, cuyo tenor es el siguiente:

‘ACUERDO: El señor Luis Alberto Díaz Rodríguez, en presencia de su defensor de confianza, acepta el cargo de coautor material del delito de concierto para delinquir agravado por darse con fines de narcotráfico, artículo 340, inciso 2 del C.P. La Fiscalía acuerda con el imputado reconocerle el 41.66% de descuento de la pena por tratarse de acuerdo de voluntades firmado luego de transcurridos más de tres meses desde el acto de la imputación, lo que comportó un desgaste mayor para la investigación penal que nos ocupa. En consecuencia se establece la pena de prisión mínima de 96 meses u 8 años de prisión, que resultan de partir del mínimo consagrado en el delito de concierto para delinquir agravado. Total del cual debe descontarse el 41.66% (que equivalen a 39.999 meses) por consecuencia, se itera, del presente preacuerdo para arribar entonces a una pena definitiva de CUATRO años y 8 meses, o 56 meses, de prisión y multa de mil quinientos setenta y cuatro (1574) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá el señor Juez de conocimiento, en el evento que la hallare ajustada a derecho...’.

*Ese convenio celebrado entre Luis Alberto Díaz Rodríguez, su defensor y el fiscal, que también lo suscribió en iguales términos el inculcado **Robinson Díaz Rodríguez**, fue autorizado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali, al hallarlo conforme a derecho, por eso se lee al folio 9 del fallo lo siguiente: ‘Teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que no se advirtieron violaciones esta instancia impartió aprobación a cada uno de los preacuerdos en la correspondiente audiencia, y es por ese motivo que el fallo que hoy se emite va a ser conforme a sus términos’.*

El Juzgado de marras en sentencia de fecha 26 de junio de 2012 declaró la responsabilidad penal por el delito de concierto para delinquir agravado contra los señores Díaz Rodríguez, les impuso la pena correspondiente y las únicas copias que ordenó fueron las dirigidas al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el cumplimiento de la sanción impuesta (numeral 6 de la parte resolutive).

*De lo expuesto surge entonces que: i) Luis Alberto Díaz Rodríguez no fue judicializado, esto es, no fue investigado ni condenado por el delito de tráfico de estupefacientes en el proceso que adelantó el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Conocimiento de Santiago de Cali, únicamente fue responsabilizado por el delito de concierto para delinquir agravado; y ii) **Robinson Díaz Rodríguez** fue judicializado e investigado y se le impuso detención preventiva por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y lavado de activos, pero únicamente aceptó cargos y fue condenado por el primero de los ilícitos en mención, las demás conductas judicializadas debieron seguir el trámite ordinario.*

*En el trámite de la extradición no está demostrado que **Robinson Díaz Rodríguez** hubiese aceptado cargos por el delito de tráfico de estupefacientes y lavado de activos, tampoco que haya sido condenado en trámite ordinario por esas conductas punibles, luego al amparo del non bis ibídem no existe impedimento legal de la Corte para conceder la extradición solicitada respecto de él por el delito de tráfico de estupefacientes, por el que ha sido reclamado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos mediante la Nota Verbal número 2080 del 21 de octubre de 2014, cargo formulado en la Acusación Formal número 13- 20304-CR-ALTONAGA/SIMONTON del 3 de mayo de 2013 según el siguiente apartado: “Section 960(b)(1)(B), it is further alleged that this violation involved five (5) kilograms or more of a mixture and substance containing a detectable amount of cocaine”, es decir, “Sección 960(b) (1) (B) del Título 21 del Código de los Estados Unidos, además se alega que esta contravención implicó (sic) cinco (5) kilogramos o más de una sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína”.*

En cuanto al lavado de activos se remitirá copia de este concepto a la autoridad judicial o de la fiscalía que esté conociendo de la instrucción o juzgamiento, para lo de su competencia.

(...)

*El registro referido permite concluir que la situación jurídica de **Robinson y Luis Alberto Díaz Rodríguez** no es idéntica en los hechos por los que se les inició investigación penal en lo que atañe al delito de tráfico de estupefacientes aunque sí lo es en relación con el concierto para delinquir por el que fueron condenados.*

En consecuencia debe admitirse que opera el non bis in ídem por el delito de concierto para delinquir respecto de la reclamación que por ese reato se hace para Robinson Díaz Rodríguez, porque por tales hechos fue juzgado y condenado en Colombia.

Veamos, la solicitud de captura con fines de extradición de Robinson Díaz Rodríguez, proveniente del Gobierno de los Estados Unidos se produjo a través de Nota Verbal nú-

⁴ Folio 164 a 202 Carpeta del proceso penal. Se presentó una ruptura procesal del expediente con radicado 760016000000201200326.

⁵ Radicado 760016000193200919334. Folio 1 a 5 Ib.

⁶ Folio 202 Ib.

mero 1067 del 16 de junio de 2014. Así mismo, la solicitud formal de extradición aparece contenida en la Comunicación Diplomática número 2080 del 21 de octubre de 2014, que específicamente tiene como soporte:

‘La investigación reveló que desde enero del 2007 hasta el 11 de diciembre de 2011, **Robinson Díaz Rodríguez, Luis Alberto Díaz Rodríguez y Segundo Gregorio Enríquez Guerrero** eran miembros de una organización de tráfico de narcóticos (DTO) que operaba en Colombia, la cual transportaba cantidades de múltiples kilogramos de cocaína, a través de lanchas rápidas, desde Colombia hacia los Estados Unidos. Robinson Díaz Rodríguez, el líder de la DTO, suministraba la cocaína, la cual era producida en laboratorios regionales en el departamento del Cauca, Colombia y coordinaba el transporte de la cocaína, por medio de lanchas rápidas, a través de Panamá y Guatemala hacia México para su posterior distribución en los Estados Unidos. **Luis Alberto Díaz Rodríguez** supervisó la administración diaria de la DTO y coordinó la producción y el transporte de la cocaína. **Segundo Gregorio Enríquez Guerrero** era un administrador del laboratorio de cocaína para uno de los laboratorios regionales y negoció directamente con Robinson Díaz Rodríguez y Luis Alberto Díaz Rodríguez para suministrarles la cocaína distribuida por la DTO.

El 10 de diciembre de 2011, Robinson Díaz Rodríguez, Luis Alberto Díaz Rodríguez y Segundo Gregorio Enríquez Guerrero estuvieron involucrados en una operación marítima de contrabando que resultó en la interdicción de una lancha rápida por parte de la Policía Nacional de Colombia (CNP) y de la Armada de Colombia. Oficiales de las fuerzas del orden de Colombia incautaron un total de aproximadamente 1.522 kilogramos de cocaína de la lancha rápida’.

Asimismo, complementa la acusación número 13-20304-CR-Altonaga/Simonton del 3 de mayo de 2013, y de las citadas notas verbales –1067 y 2080–, la declaración juramentada rendida por el investigador del caso –Paul Cohén–, quien manifestó:

‘La investigación reveló que de enero de 2007 al 11 de diciembre de 2011, Robinson Díaz Rodríguez (Robinson Días) Luis Alberto Díaz Rodríguez (Luis Díaz) y Segundo Gregorio Enríquez Guerrero (Enríquez Guerrero) fueron miembros de una organización narcotraficante con sede en Colombia que transportaba múltiples kilogramos de cocaína, por medio de lanchas rápidas, de Colombia a los Estados Unidos (...)’.

A fin de especificar los hechos fácticos atribuidos en la acusación foránea, el agente de la DEA señaló en su declaración:

‘El 9 de diciembre de 2011, durante varias llamadas telefónicas interceptadas lícitamente por la Policía Nacional de Colombia (PNC), Robinson Díaz, Luis Díaz y Enrique Guerrero son escuchados cuando hablaban de una futura operación de contrabando marítimo de cocaína’.

(...)

*“El 10 de diciembre de 2011, la PNC, en conjunto con la Marina de Colombia, encontraron e interceptaron una lancha rápida sin nombre y apátrida en aguas colombianas. Durante la operación de interdicción los miembros de la tripulación saltaron por la borda y evitaron ser capturados. Sin embargo, la PNC abordó la embarcación e incautó un total de 1.522 kilogramos de cocaína de la nave. Según CW-2, Luis Díaz coordinó el transporte de la cocaína desde el laboratorio colombiano hasta el punto de zarpado en Colombia, en donde fue posteriormente cargada en la embarcación. CW-2 declaró que **Robinson Díaz** había sido su punto de contacto principal en la organización para esta operación, y que Luis Díaz había ayudado con la vigilancia cotidiana de la misma”.*

(...)

*“Por petición de los agentes de la DEA, CW-2 escuchó varias de las llamadas interceptadas lícitamente del 9 al 10 de diciembre de 2011, e identificó las voces de **Robinson Díaz, Luis Rodríguez y Enríquez Guerrero** como las voces de las personas escuchadas hablando de las operaciones de cocaína mencionadas anteriormente. (...) CW-2 declaró que Luis Rodríguez administraba los asuntos de la organización DTO y coordinaba la producción y el transporte de la cocaína a distintos puntos de zarpado. Y que Enríquez Guerrero trabajaba como administrador de un laboratorio de cocaína para uno de los laboratorios regionales de cocaína de la organización en Colombia”.*

*“Según CW-1 y CW-2 el 10 de diciembre de 2011, y como lo hablaron los acusados en las llamadas interceptadas mencionadas en el párrafo 11, una segunda lancha rápida llegó a Centroamérica y entregó aproximadamente 1000 kilogramos de cocaína. CW-1 y CW-2 declararon que **Robinson Díaz** y Luis Díaz habían estado involucrados en la planeación y el zarpado de la segunda lancha rápida, y que la cocaína iba con destino a Estados Unidos⁸’.*

*En consecuencia, con soporte en la prueba documental arribada al trámite de extradición, encuentra la Corte, que el hecho del concierto para delinquir que motiva el pedido de entrega de **Robinson Díaz Rodríguez** respecto a las circunstancias fácticas a las que hace relación la acusación número 13-20304-CR-Altonaga/Simonton del 3 de mayo de 2013 y las notas verbales 1067 y 2080 del 16 de junio y 21 de octubre de 2014 de la Corte del distrito Sur de Florida de los Estados Unidos, ya fue juzgado en Colombia.*

Reitérese que, al comparar el escrito de preacuerdo suscrito en la Fiscalía, la sentencia emitida por el Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado de Cali con la acusación extranjera, presentan similitud en los hechos descritos en las actuaciones judiciales referidas y que se relacionan con el delito de concierto para delinquir de la empresa delincuencial dirigida por Robinson Díaz Rodríguez, cuya finalidad ilícita era exportar drogas estupefacientes desde Colombia hacia otros países, entre los que se incluye, Estados Unidos.

*En el sub iudice, se establece que **Robinson Díaz Rodríguez** y Luis Alberto Díaz Rodríguez (hermano del peticionado), pertenecían a la misma organización criminal y fueron solicitados en extradición por los Estados Unidos en razón, a la misma situación táctica, por la que fueron condenados en Colombia.*

*Las circunstancias que rodearon el asunto y los cargos de la petición de Robinson Díaz Rodríguez son iguales a los fundamentados de extradición de Luis Alberto Díaz Rodríguez en lo que atañe al concierto para delinquir. En consecuencia, la Sala emitirá concepto desfavorable para la entrega en extradición de **Robinson Díaz Rodríguez**, por el citado delito.*

Pero, a diferencia de lo expresado en el párrafo anterior, no existe non bis in idem en relación con el tráfico de estupefacientes, como ya se explicó en el capítulo anterior...” (Se resalta).

(...)

9. Concepto de la Corporación.

*Conforme lo expuesto, la Corte **Conceptúa desfavorablemente** a la petición de entrega en extradición del ciudadano colombiano **Robinson Díaz Rodríguez** por el delito de concierto para delinquir y **Favorable** por el delito de tráfico de estupefacientes, Cargos contenidos en la acusación número 13-20304-CR-Altonaga/Simonton, dictada el 3 de mayo de 2013, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de América para el Distrito Sur de la Florida...”.*

Como puede observarse, la Corte Suprema de Justicia ya hizo el análisis jurídico del presente caso y en su concepto expuso claramente las razones que llevaron a emitir concepto desfavorable por el delito de concierto para delinquir y favorable por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, conducta esta que, según indicó la honorable Corporación, no ha sido juzgada en Colombia.

Efectuada entonces la evaluación jurídica por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, de la solicitud de extradición del señor **Díaz Rodríguez**, fundada tanto en el estudio de la documentación aportada por el Estado requirente como de la sentencia proferida por el Juzgado 5° Penal del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Cali, Valle; y sustentada en los preceptos constitucionales y legales que regulan el trámite de extradición, el Gobierno nacional se abstendrá de pronunciarse sobre los cuestionamientos de la recurrente en los que se califica de equivocada la decisión de la Alta Corporación, porque de hacerlo estaría invadiendo y desconociendo la competencia propia de ese Alto Tribunal de justicia.

Debe precisarse que el recurso de reposición contra la resolución del Gobierno nacional que decide sobre una solicitud de extradición no puede ser utilizado por las personas reclamadas y sus abogados defensores como un instrumento para desconocer el concepto emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y convertir al Gobierno nacional en instancia de revisión de las decisiones de esa Corporación Judicial.

En ese sentido se pronunció esa Corporación, en el concepto del 29 de noviembre de 1983, con ponencia del Magistrado Alfonso Reyes Echandía, cuyo criterio se mantiene invariable:

*“La intervención de esta Sala se concreta en lo sustancial a realizar una confrontación entre los documentos aportados por el Estado requirente y las normas del respetivo convenio, o subsidiariamente de la legislación nacional, para determinar si se acomoda integralmente a estas en cuyo caso conceptuará favorablemente a la extradición, o no se aviene a ellas y entonces emitirá opinión adversa. Frente a ese pronunciamiento de la Corte, el Gobierno decidirá sobre el requerimiento de extradición en resolución que debe ser negativa si así fue el concepto de la Corte, pero que puede ser favorable o desfavorable cuando dicha opinión sea positiva; en tal evento, la resolución gubernamental que niega la extradición ha de estar fundada en razones de conveniencia nacional, como lo precisa el inciso 2° del artículo 748 del C. de P. P. aplicable como complemento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 12 del Tratado que exige razonar la “denegación total o parcial de la solicitud de extradición”. **Y es que si la Corte ha hecho ya en su concepto –como debe hacerlo– el examen jurídico de la cuestión, no es tarea del Gobierno volver sobre ese aspecto y menos aún cimentar su decisión contraria a la extradición en consideraciones jurídicas opuestas a las que sirvieron a la Corte para emitir su concepto favorable; si así fuera, sobraría el pronunciamiento previo de la Sala, a más de que se le estaría sometiendo a una instancia de revisión administrativa no prevista en la ley ni tratado alguno. Es innegable, clara y necesaria –desde luego– la potestad gubernamental para optar por conceder o negar la extradición pedida cuando el concepto de la Corte es favorable, pero se trata de una decisión política en cuanto autónoma y ligada solamente a consideraciones soberanas de conveniencia nacional; solo así se respetan las órbitas judicial y administrativa que armoniosamente concurren en el examen y decisión de esta materia”.** (Negrilla fuera de texto).*

Así las cosas, no le está atribuido al Gobierno nacional, como al parecer lo espera la abogada defensora, apartarse y contradecir, a través de la resolución de un recurso reposición, los conceptos y pronunciamientos jurídicos que hace la Corte Suprema de Justicia sobre determinados aspectos dentro del trámite de una solicitud de extradición. Todo lo contrario, antes que intentar contradecirlos o reevaluarlos le sirven al Ejecutivo como sustento jurídico para adoptar una decisión, esencialmente discrecional.

De otra parte, en punto de lo dicho por la recurrente sobre el riesgo de tortura física y psicológica a que quedaría expuesto el señor Robinson Díaz Rodríguez de concederse su extradición, debe precisarse que tal afirmación carece de sustento si se tiene en cuenta que el padecimiento que afecta la salud del requerido y la apreciación referida a una extradición “injusta y lejos de su familia”, si bien son sufrimientos, estos son consecuencia de la aplicación de una medida de cooperación legal con la cual se pretende que el ciudadano requerido comparezca a juicio en el Estado requirente, por presuntos delitos ocurridos en el exterior, situación que en ningún caso podría ser considerada como tortura, a la luz de lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley 599 de 2000 y en el artículo 2° de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, suscrita el 12 de septiembre de 1985.

En aras de proteger el derecho fundamental a la salud del ciudadano requerido, el Gobierno nacional, en la resolución impugnada consideró oportuno advertir al Estado requirente sobre las condiciones de salud en que se encuentra el señor Robinson Díaz Rodríguez, con el fin de que las autoridades extranjeras adopten las medidas que estimen conducentes de acuerdo con su legislación para brindarle a este ciudadano la asistencia médica y el tratamiento que requiera y así evitar un detrimento en su salud.

⁷ Folio 75 y 117 Carpeta Anexa

⁸ Folio 76 a 79 y 118 a 120 Ibidem.

De igual forma, dispuso que se remitiera copia de dicha resolución al Instituto Penitenciario y Carcelario Inpec, a fin de que se adopten las medidas que se estimen pertinentes para preservar la salud del ciudadano requerido, y a la Fiscalía General de la Nación, con el objeto de que, de considerarlo procedente y previamente a que se lleve a cabo la entrega, ordene una valoración medicolegal que permita establecer que con el traslado de este ciudadano no se pone en riesgo su vida.

Aunado a lo anterior, debe precisarse que las garantías exigidas en el acto administrativo por medio del cual se concedió la extradición del ciudadano **Robinson Díaz Rodríguez**, se ajustan a los lineamientos señalados por la normatividad aplicable al caso, pues ellas responden claramente a los aspectos que el legislador ha considerado que el Gobierno nacional, como garante de los derechos fundamentales, en particular de la dignidad humana, debe tener en cuenta respecto de los ciudadanos que están incurso en el trámite de extradición.

En el presente caso, el Gobierno nacional al expedir la Resolución Ejecutiva por medio de la cual concedió la extradición del ciudadano **Robinson Díaz Rodríguez condicionó su entrega a que el país requirente garantice que no lo someterá a desaparición forzada, a torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes**, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme lo establecen los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política.

También es pertinente recalcar que los países a los cuales el Gobierno nacional concede la extradición, tanto de ciudadanos colombianos como de extranjeros, bien sea en aplicación de tratados internacionales o con fundamento en la normatividad interna, cuentan con normas, procedimientos y autoridades judiciales respetuosas y garantistas de los derechos procesales de todo enjuiciado.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos, ha señalado:

*“La extradición (...) se orienta a permitir que la investigación o el juicio por una determinada conducta punible, o el cumplimiento de la sanción que corresponda, se den en el Estado requiriente, cuando el presunto infractor se encuentre en territorio de Estado distinto de aquel en el que se cometió el hecho o que resulte más gravemente afectado por el mismo. Para el efecto se parte del criterio de que ante el Estado requiriente podrá la persona extraditada hacer efectivas las garantías procesales que rigen en países civilizados, y que incorporan las que se derivan del debido proceso. A ese efecto la Corte ha precisado que además de los condicionamientos previstos en el artículo 550 del anterior Código de Procedimiento Penal, conforme a los cuales el solicitado no será juzgado por hechos distintos del que motiva la extradición, ni sometido a sanciones diferentes a la que se le hubiese impuesto en la condena, ni sometido a pena de muerte, la cual deberá ser conmutada, resultan imperativos los que se refieren a que al extraditado no se le someta a desaparición forzada, a torturas ni a tratos crueles inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, conforme a lo dispuesto por los artículos 11, 12 y 34 de la Constitución Política”.*⁹ (Negrilla agregada).

Como puede observarse, los derechos fundamentales derivados de un debido proceso deben ser observados en todos los países civilizados como lo señaló la Corte Suprema de Justicia.

De otra parte, cabe señalar que el ciudadano requerido tiene derecho a solicitar la asistencia consular en procura de hacer valer sus derechos y garantías fundamentales que no pierde por su calidad de extraditado. En ese sentido, puede elevar las solicitudes que considere pertinentes a los Consulados quienes prestan la asistencia necesaria a los connacionales que se encuentran detenidos en el exterior, esto dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Para tal efecto, el Ministerio de Justicia y del Derecho remitirá copia auténtica de la Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016, así como, del presente acto administrativo, a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de que el respectivo Cónsul pueda, en caso de que el ciudadano requerido lo solicite, brindarle la respectiva asistencia, atendiendo de esta forma lo establecido en la Directiva Presidencial número 07 de 2005 y lo señalado por la H. Corte Suprema de Justicia en su concepto.

A través de estos mecanismos, el Gobierno nacional garantiza y protege los derechos humanos de sus connacionales que son entregados para ser juzgados en el exterior, pues el propósito de la Directiva Presidencial número 07 del 3 de noviembre de 2005, es precisamente *“implementar las actuaciones que deben seguir las diferentes entidades gubernamentales que intervienen en el trámite de extradición, con el efectivo seguimiento de las condiciones exigidas a los países requirentes para la extradición de los ciudadanos colombianos”*.

De conformidad con lo expuesto, teniendo en cuenta que el trámite de extradición del ciudadano colombiano Robinson Díaz Rodríguez se ha cumplido con plena observancia y acatamiento del debido proceso, que cuenta con el concepto previo y favorable de la Corte Suprema de Justicia y que con el presente recurso no se aportaron nuevos elementos de juicio que conduzcan a variar la decisión inicial, el Gobierno nacional, en virtud de la discrecionalidad que le asiste, confirmará en todas sus partes la Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016.

Por lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Confirmar la Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016, por medio de la cual se decidió sobre la solicitud de extradición del ciudadano colombiano **Robinson Díaz Rodríguez**, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta resolución.

Artículo 2°. Ordenar la comunicación de la presente decisión al ciudadano requerido o a su apoderada, haciéndole saber que no procede recurso alguno, quedando en firme la Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016, conforme lo establece el numeral 2 del artículo 87 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

⁹ Corte Constitucional. Sentencia SU. 110. Febrero 20 de 2002.

Artículo 3°. Ordenar el envío de copia del presente acto administrativo a la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y a la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano del Ministerio de Relaciones Exteriores, al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec y al Fiscal General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias.

Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

Publíquese en el *Diario Oficial*, comuníquese al ciudadano requerido o a su apoderada, al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la autoridad judicial, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y a la Fiscalía General de la Nación, y **cúmplase**.

Dada en Bogotá, D.C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Justicia y del Derecho,

Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1470 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se crea y confiere la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 189 numeral 3 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 66 de la Ley 4ª de 1913, 39 de la Ley 836 de 2003 y 56 del Decreto-ley 1792 de 2000, y

CONSIDERANDO:

Que durante casi seis décadas de conflicto armado, las Fuerzas Armadas de Colombia sostenidas siempre por el honor, la vocación de servicio, el más alto sentir patriótico y abrigadas por la pasión de la libertad, en una empresa común, fueron capaces de orientar el destino de la nación colombiana y convertir en realidad tangible la paz, el mayor anhelo de los colombianos.

Que esas Fuerzas Armadas del ayer y de hoy –la historia es testigo– han cumplido con su deber y asumieron el rol protagónico que la realidad les exigía, para llegar victoriosas, laureadas y firmes a las dimensiones del presente, cerrando un ciclo de dolor, de miedo y angustia, donde su sacrificio y voluntad de vencer fueron la prueba fehaciente de su extraordinaria calidad profesional.

Que es deber del Gobierno nacional honrar a quienes con sus acciones meritorias y servicios distinguidos en defensa de la vida, los bienes, el patrimonio de los colombianos, llevaron la Victoria Militar y Policial hasta los más apartados horizontes de la patria, manteniendo vivos los lejanos triunfos y la herencia que nos legara nuestro padre el Libertador General Simón Bolívar.

Que corresponde al Gobierno nacional enaltecer a los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas, quienes afianzados en sus sinceras convicciones, no claudicaron ante los impulsos apátridas del terror y mantuvieron en alto la bandera de la Patria, para izarla triunfante, con honor y heroísmo en los escenarios del presente esperanzador de la nación Colombiana.

Que por lo expuesto se creará y conferirá la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial.

DECRETA:

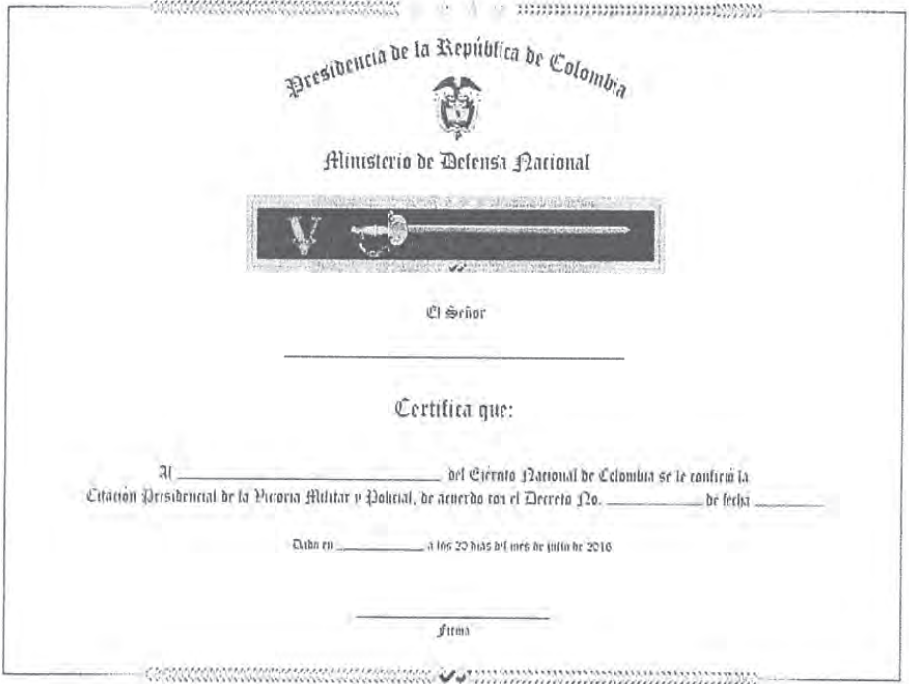
Artículo 1°. *Creación.* Créase la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, en categoría única y por una sola vez, para efectuar un reconocimiento al personal uniformado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, y civiles al servicio del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía Nacional, que a la fecha estén activos, y que con su trabajo abnegado allanaron el camino de la Victoria Militar Y Policial, para las armas de la República, en el conflicto armado colombiano.

Artículo 2°. *Características de la Citación.* De forma rectangular. Su borde es un marco de acabado dorado conformado por los siguientes elementos: en la parte superior, cuatro (4) estrellas de cinco (5) puntas; a cada costado, una rama de laurel de dos en dos, una arriba y una abajo; al primer tercio, el laurel se convierte en una línea recta, la cual continúa hasta la parte inferior, para luego convertirse nuevamente en la rama de laurel; en el centro lleva entrelazado el tricolor nacional. El centro de la Citación será de color azul (pantone 269C) y puede ser textil y/o esmalte, sobre el cual estará la figura de la espada de Simón Bolívar, y, al costado izquierdo, la letra “V”, la cual tiene en el centro una cinta que lleva inscrito el año “2016”. Dimensiones: alto, 15 mm; ancho, 80 mm; alto de la letra “V”, 7.5 mm; ancho de la letra “V”, 8.5 mm; alto de la espada, 9 mm; ancho de la espada, 57 mm.

Artículo 3°. *Requisitos.* Los requisitos para el otorgamiento de la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial son: Ser Oficial, Suboficial o Soldado de las Fuerzas Militares; Oficial, Suboficial, miembro del Nivel Ejecutivo o Agente de la Policía Nacional; personal civil del Ministerio de Defensa Nacional – Fuerzas Militares o personal no uniformado de la Policía Nacional, que a la fecha se encuentren activos.

Artículo 4°. *Diploma.* El diploma que acredita el otorgamiento de la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial, debe ser elaborado en Papel Opalina de 200 gramos. Sentido:

Horizontal. Dimensiones: Treinta y cinco centímetros (35 cm) de ancho, por Veinticinco centímetros (25 cm) de alto. Fuente tipográfica: Ord. Enlisa Texto MT. Imágenes: Escudo de Colombia y Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial. Textos: Los incluidos en el modelo presentado a continuación:



Parágrafo. Este diploma se otorgará al personal citado en el artículo primero del presente Decreto de manera simbólica, a través de los Comandos de Fuerza, Dirección de la Policía Nacional y Secretaría General del Ministerio de Defensa.

Artículo 5°. *Otorgamiento.* La Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial será conferida por una sola vez, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente decreto.

Artículo 6°. *Imposición.* La Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial será impuesta en ceremonia especial, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Protocolo y Ceremonial Militar y/o Policial.

Artículo 7°. *Disposiciones Complementarias.* Es responsabilidad de cada Fuerza y de la Dirección General de la Policía Nacional, expedir los actos administrativos que correspondan, a efecto de reglamentar su uso en el respectivo manual o reglamento de uniformes, así como su adquisición.

Artículo 8°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Defensa Nacional,

Luis C. Villegas Echeverri.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1462 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se designa un delegado del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, (ANT).

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 5 del artículo 8° del Decreto 2363 de 2015.

DECRETA:

Artículo 1°. Designese como miembro delegado del Presidente de la República para formar parte del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), a la doctora Mariana Escobar Arango, identificada con la cédula de ciudadanía número 39776812, Directora General de la Agencia de Renovación del Territorio (ART).

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Aurelio Iragorri Valencia.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1495 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se modifican los artículos 2.9.2.5.2, 2.9.2.5.3 y 2.9.2.5.8 del Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial, de las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en los artículos 154 y 157 de la Ley 100 de 1993, 42.3 de la Ley 715 de 2001, 14 literal a) de la Ley 1122 de 2007; 32 de la Ley 1438 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto 780 de 2016 en el Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2, definió un mecanismo para garantizar el aseguramiento en salud de los migrantes colombianos repatriados, o que retornaron voluntariamente al país, o que fueron deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela durante el año 2015, mediante su definición como población especial y prioritaria y su consecuente afiliación al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de listados censales.

Que esta disposición se expidió en razón a las contingencias presentadas con los migrantes colombianos repatriados, o que retornaron voluntariamente al país, o que fueron deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela durante el año 2015, dada su afectación socioeconómica y la manifiesta vulnerabilidad que esta circunstancia les generó, sin embargo, en la actualidad persisten dichas condiciones por lo que se hace necesario continuar garantizando su aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud hasta el año 2017 y por ende modificar algunas disposiciones previstas para el efecto.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 2.9.2.5.2 del Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del, Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.5.2** *Ámbito de aplicación.* Las normas contenidas en el presente Capítulo aplican a todas las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, a las entidades territoriales del orden departamental, distrital y municipal, y a los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela y a su núcleo familiar.

Artículo 2°. Modifíquese el artículo 2.9.2.5.3 del Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del, Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.5.3** *Aseguramiento en salud.* Para efectos de la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud de los migrantes colombianos que han sido repatriados, han retornado voluntariamente al país, o han sido deportados o expulsados de la República Bolivariana de Venezuela, durante los años 2015 y 2016, cada entidad territorial municipal o distrital donde se encuentren ubicados, de manera temporal o definitiva, será la responsable de garantizar su afiliación y de elaborar el respectivo listado censal.

Las entidades territoriales municipales y distritales elaborarán los listados censales verificando la condición de nacional, de quien manifiesta ser migrante colombiano; este último deberá acreditar el vínculo con su núcleo familiar y manifestar bajo la gravedad del juramento su condición. Dicha población será afiliada al Régimen Subsidiado en Salud, en virtud de lo definido en el presente capítulo. Los listados censales deberán ser remitidos al Ministerio de Salud y Protección Social para efectos de las validaciones a que haya lugar en la Base de Datos Única de Datos de Afiliados (BDUA), de conformidad con las condiciones y estructura de datos que el Ministerio defina.

En el caso de que el migrante cambie temporalmente de municipio de residencia donde se encuentra afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, podrá aplicar el mecanismo de portabilidad, conforme a lo establecido en los artículos 2.1.12.1 a 2.1.12.9 del presente decreto. No obstante, si se produce el cambio de residencia por parte del migrante de manera permanente, la entidad territorial municipal o distrital en la cual aquel fije su nueva residencia, deberá incluirlo en el listado censal y dar cumplimiento a las reglas establecidas en los referidos artículos.

Cuando varíe la situación socioeconómica de las personas beneficiarias del presente decreto, y en consecuencia, se encuentren obligadas a cotizar al Régimen Contributivo, por haber adquirido capacidad de pago o por haber iniciado una relación laboral o contractual generadora de ingresos, el afiliado o el empleador según el caso, deberá reportar la novedad a la EPS-S en la cual se encuentra afiliado. Lo anterior sin perjuicio de las acciones de verificación y control a que haya lugar, en el marco de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley 1438 de 2011.

En todo caso, las personas que no se encuentren en los listados censales o no estén plenamente identificadas y que manifiesten estar en las situaciones de que trata el presente decreto, para acceder al Régimen Subsidiado en Salud deberán solicitar ante la entidad territorial municipal o distrital donde se encuentren ubicadas, la aplicación de la Encuesta Sisbén, con el fin de determinar si cumplen con las condiciones y requisitos para pertenecer a dicho Régimen.

Hasta tanto se logre el proceso de afiliación y de identificación plena, las personas a que refiere este decreto que requieran servicios de salud, deberán ser atendidas con cargo a los recursos para la atención a la población pobre no asegurada”.

Artículo 3°. Modifíquese el artículo 2.9.2.5.8 del Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del, Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

“**Artículo 2.9.2.5.8 Transitoriedad.** El presente Capítulo rige hasta el 31 de diciembre de 2017”.

Artículo 4°. *Vigencia.* El presente decreto rige desde la fecha de su publicación, y modifica los artículos 2.9.2.5.2, 2.9.2.5.3 y 2.9.2.5.8 del Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del, Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministerio de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

DECRETO NÚMERO 1500 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se modifica el artículo 2.6.1.4.3.10 de la sección 3 del Capítulo 4 del título 1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la verificación de requisitos para el reconocimiento de los gastos e indemnizaciones cubiertos por la Subcuenta ECAT del Fosyga.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades, constitucionales y legales, en especial, las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, los numerales 5 del artículo 193, 6 del artículo 195 y 5 del artículo 197 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, los artículos 43 y 167 de la Ley 100 de 1993 y en desarrollo del parágrafo 4° del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y de los artículos 111, 112, 113, 114 y 115 del Decreto-ley 019 de 2012 y,

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno nacional expidió el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social con el propósito de compilar las normas de carácter reglamentario que rigen el sector, dentro del cual se incorporaron las disposiciones que contienen las reglas para el funcionamiento de la Subcuenta del Seguro de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT) y las condiciones de cobertura, reconocimiento y pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos derivados de accidentes de tránsito, eventos catastróficos de origen natural, eventos terroristas o los demás eventos aprobados por el Ministerio de Salud y Protección Social en su calidad de Consejo de Administración del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), por parte de las entidades aseguradoras autorizadas para operar el SOAT y de la Subcuenta ECAT, administrada por la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social del Ministerio de Salud y Protección Social.

Que la misma norma en los artículos 2.6.1.4.2.20 a 2.6.1.4.3.3, relaciona los documentos que deberán acreditarse por parte de los reclamantes de prestaciones por eventos catastróficos y accidentes de tránsito, y que serán objeto de verificación por parte de las compañías de seguros autorizadas para operar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, en los términos del artículo 2.6.1.4.3.10 del precitado Decreto 780 de 2016.

Que los grupos étnicos del país, en razón a sus condiciones socioculturales han visto limitado el reconocimiento de los gastos e indemnizaciones previamente citados, por la dificultad para aportar la totalidad de documentos exigidos para su reconocimiento, lo que hace necesario, en aras de garantizar el principio de igualdad que orienta las actuaciones administrativas, facultar al Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, o quien haga sus veces, para establecer documentos equivalentes con base en los cuales se verificarán los requisitos previstos para el reconocimiento de los gastos e indemnizaciones cubiertos por la Subcuenta ECAT del Fosyga.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Modificar el artículo 2.6.1.4.3.10 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, el cual quedará así:

“**Artículo 2.6.1.4.3.10. Verificación de requisitos.** Presentada la reclamación, las compañías de seguros autorizadas para operar el SOAT y el Ministerio de Salud y Protección Social o quien este designe, según corresponda, estudiarán su procedencia, para lo cual, deberán verificar la ocurrencia del hecho, la acreditación de la calidad de víctima o del beneficiario, según sea el caso, la cuantía de la reclamación, su presentación dentro del término a que refiere este capítulo y si esta ha sido o no reconocida y/o pagada con anterioridad.

Con el objeto de evitar duplicidad de pagos, dichas entidades podrán cruzar los datos que consten en las reclamaciones presentadas, con aquellos disponibles en la base de datos SII ECAT, la base de pólizas expedidas y pagos realizados por las aseguradoras, y la base de datos de indemnizaciones de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, entre otras.

Parágrafo 1°. Las instituciones prestadoras de servicios de salud, deberán adoptar mecanismos tendientes a garantizar la adecuada recopilación y diligenciamiento de la información requerida y demás datos necesarios para el pago. La Superintendencia Nacional de Salud de acuerdo con sus competencias, vigilará que las precitadas instituciones den

cumplimiento a lo ordenado en esta disposición, so pena de la imposición de las sanciones correspondientes.

Parágrafo 2°. El Fosyga y las compañías aseguradoras autorizadas para expedir el SOAT, en cuanto detecten pólizas sin cobertura, deberán informar los datos conocidos de vehículos no asegurados implicados en un accidente de tránsito, a los organismos de tránsito enuncidos en el artículo 6° de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, para efectos de la aplicación de las multas de que trata el artículo 131 de la citada ley.

Parágrafo 3°. Cuando un evento de los que trata el presente capítulo afecte a un grupo étnico que en razón de sus condiciones socioculturales manifieste la imposibilidad de acreditar los documentos de que tratan los artículos 2.6.1.4.2.20 a 2.6.1.4.3.3 de este acto administrativo, el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, o quien haga sus veces, en atención a dichas condiciones, podrá establecer los documentos equivalentes a estos para la verificación de los requisitos previstos en el inciso primero del presente artículo”.

Artículo 2°. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de su publicación y modifica el artículo 2.6.1.4.3.10 de la sección 3 del capítulo 4 del título 1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,

Mauricio Cárdenas Santamaría.

El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1480 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se efectúa un nombramiento.

El Presidente de La República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confiere el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política.

DECRETA:

Artículo 1°. Nombrar, a partir de la fecha, a la doctora Rutty Paola Ortiz Jara, identificada con cédula de ciudadanía 52260962 de Bogotá, en el cargo de Viceministro 0020-0, Viceministra de Energía, del Ministerio de Minas y Energía.

Artículo 2°. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.

MINISTERIO DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y TURISMO

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1463 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se hace un nombramiento.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas en el numeral 13 del artículo 189 de la Constitución Política.

DECRETA:

Artículo 1°. Nómbrase al doctor Nicolás Torres Álvarez, identificado con cédula de ciudadanía número 79368984 expedida en Bogotá, en el cargo de Negociador Internacional, código 0088, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Comercio, Industria y Turismo,

María Claudia Lacouture Pinedo.

MINISTERIO DE AMBIENTE
Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1462 DE 2016

(septiembre 8)

por la cual se hace una adición al cupo global de aprovechamiento forestal otorgado a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) mediante Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016, y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de las facultades legales y en especial las conferidas por el numeral 42 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, el numeral 10 del artículo 16 del Decreto número 3570 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el numeral 42 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, establece dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la de “Fijar los cupos globales y determinar las especies para el aprovechamiento de bosques naturales y la obtención de especímenes de flora y fauna silvestres, teniendo en cuenta la oferta y la capacidad de renovación de dichos recursos, con base en los cuales las Corporaciones Autónomas Regionales otorgarán los correspondientes permisos y autorizaciones de aprovechamiento”;

Que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado de impulsar una relación de respeto y armonía del hombre con la naturaleza y definir en los términos de la Ley 99 de 1993, las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la recuperación, conservación y protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables con el propósito de asegurar el desarrollo sostenible;

Que mediante el Decreto número 3570 de 2011 se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dispone en el numeral 19 del artículo 2° que la Entidad tiene como funciones, además de las dispuestas en los demás numerales, “Las demás señaladas en la Ley 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias a lo dispuesto en el presente decreto”;

Que mediante la 0490 del 18 de marzo de 2016, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible fijó como cupo global para el otorgamiento de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal de bosques naturales en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), un volumen de trescientos mil cuatrocientos ochenta y nueve metros cúbicos (300.489 m³), en el departamento del Chocó;

Que el doctor Teófilo Cuesta Borja, Director General de Codechocó mediante oficio con Radicado MADS número 020976 del 9 de agosto de 2016, solicita al señor Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, adición de volumen al cupo global de aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016, señalando que el Consejo Directivo de Codechocó, aprobó mediante Acuerdo número 004 del 8 de agosto de 2016, el Plan de Ordenación Forestal para la Cuenca del Medio y Bajo Atrato Chocoano. A la solicitud se allegó el respectivo Plan de Ordenación Forestal;

Que el total en hectáreas de las áreas forestales protectoras y productoras ordenadas para la jurisdicción de Codechocó de conformidad con el Acuerdo número 004 del 8 de agosto de 2016, es de 1.429.087 ha, de tal manera que 771.798 ha corresponde a áreas forestales productoras y 657.289 ha a áreas forestales protectoras;

Que Codechocó reporta en la información de solicitud de adición al cupo global de aprovechamiento forestal, que a 9 de agosto de 2016 se han asignado un total de 15 autorizaciones de aprovechamiento forestal persistente, para un total de 124.650 m³, en un área de 5.114 hectáreas;

Que la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos atendiendo la solicitud de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), en el marco de las funciones asignadas en el numeral 10 del artículo 16 del Decreto-ley 3570 de 2011, emitió Concepto Técnico número 003 del 5 de septiembre de 2016, al Expediente CGAF número 002-2016 Codechocó, con el fin de establecer la adición al cupo global para el aprovechamiento forestal otorgado mediante Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016, en jurisdicción del departamento del Chocó, en los siguientes términos:

Consideraciones silviculturales para la asignación de cupo global de aprovechamiento forestal

• Bertalanffy 1976 y Ortega 2001, determinaron que el crecimiento de los árboles es producto de la acción encontrada entre el anabolismo (fotosíntesis) y el catabolismo (respiración), dicho crecimiento, está influenciado por diversos factores ambientales, como la intensidad de luz, temperatura, concentración de CO₂, vientos, nubosidad, suministro de agua y condiciones del suelo (Taiz & Zeiger 1991, Baker et al. 2003); incluso las variaciones interanuales en el clima pueden llegar a explicar parcialmente las tasas de crecimiento de los árboles (Clark y Clark 1994)¹.

¹ MOSQUERA Harley, HURTADO Flavio. Crecimiento de árboles en un bosque pluvial tropical del Chocó y sus posibles efectos sobre las líneas de energía. En: Revista de Biología y Ciencias de la Tierra: Volumen 10 - Número 2 - 2º Semestre 2010. P. 13.

• Las estimaciones de las tasas de crecimiento de los árboles en bosques tropicales son fundamentales pues proveen información relevante sobre la ecología y la dinámica de las poblaciones arbóreas (Melo y Vargas 2003, Vallejo et al. 2005), lo cual permite mejorar considerablemente el manejo de estos ecosistemas.²

• Una forma práctica de estimar a gran escala las edades de los bosques tropicales, ha sido por medio de extrapolación de las tasas de crecimiento, sin embargo, por cuidadosas que sean las medidas, incluso bajo condiciones aparentes de uniformidad climática, el error en la muestra permanece relativamente alto debido a la variación a corto plazo en el contenido de agua en el tronco, lo mismo que los errores que contienen las medidas a largo plazo, a pesar que de disponga de parcelas permanentes bien establecidas (Vanclay, 1998)³.

• Se asume que el Ciclo de Corta de los bosques objeto de aprovechamiento es de 30 años, que se considera el tiempo mínimo para regeneración del bosque y que este vuelva a tener una condición silvicultural apropiada para volver a ser cosechado.

• La Posibilidad de Corta en Volumen por hectárea, es la cantidad de metros cúbicos que se puede cosechar del total de metros cúbicos disponibles (según inventarios forestales), de manera que se mantenga la capacidad de carga, la capacidad de regeneración y la salud y vitalidad del bosque. Se fija una posibilidad de extracción de 25 m³ por hectárea (según criterios de extracción de impacto reducido), para aplicar el método de cortas de selección y el sistema policíclico, y con base en tasas de crecimiento en área basal total de 1 a 3 m² por hectárea cada año, de tal manera que se estima que la intensidad de corta anual será máximo del 50% de la posibilidad, es decir, 12.5 m³ x ha x año.

• Se permite solamente la extracción de esta Posibilidad en Volumen para aplicar un Método de Manejo de Cortas de Selección, en el que mantiene el equilibrio entre categorías diamétricas y se hace cortas bajo dosel protector.

• El cálculo del cupo se hace para un Diámetro Mínimo de Corta de 50 centímetros para todas las especies, con corteza.

• El cupo calculado equivale a volúmenes del bosque en pie, sin talar ni aserrar.

Fórmula de cálculo

En consideración a los principios de manejo silvicultural descritos en la consideraciones silviculturales para la asignación de cupo global de aprovechamiento forestal, se establece la siguiente fórmula para el cálculo del cupo de aprovechamiento forestal en el área de jurisdicción de Codechocó, entendiéndose como cupo, el volumen, área y ciclo de corta de productos forestales maderables en bruto aprovechable en la jurisdicción de cada Corporación, de tal forma que se garantice la oferta del recurso forestal y la capacidad de renovación.

Este puede ser calculado de manera global o a nivel de especies (dependiendo de la disponibilidad de información), con la asignación de valores particulares para cada taxón.

Para el caso de la asignación del cupo global de aprovechamiento forestal para Codechocó se tienen los siguientes parámetros:

• **Área aprovechable anualmente:** teniendo en cuenta la renovabilidad, surge de la relación de las áreas productoras y el ciclo de corta, calculado con la siguiente ecuación:

Aa = Ap/Cc

Donde:

Aa es el área en hectáreas aprovechable anualmente (cupo).

Ap es el área en hectáreas productora de la jurisdicción.

Cc es el ciclo de corta en años, que se asume de 30 años como valor fijo.

De esta manera se consideran los siguientes aspectos:

El área productiva en jurisdicción de Codechocó está determinada por los planes de ordenación aprobados por el Consejo Directivo mediante los Acuerdos número 15 del 12 de diciembre de 2012 y número 004 del 8 de agosto de 2016, la cual corresponde a **1.132.385 hectáreas** de las cuales se destinaron **360.587 hectáreas** para el análisis del cupo asignado mediante Resolución número 490 del 18 de marzo de 2016, es así, que para el presente análisis se tendrá como área de producción **771.798 hectáreas**.

De esta manera, el área adicional aprovechable anual calculada para Codechocó corresponde a:

Área aprovechable:	Aa = Ap/Cc
	Aa = 771.798 ha / 30 años
	Aa = 25.727 ha / año

• **Volumen total del cupo global:** se relaciona con el volumen en metros cúbicos de madera en bruto en el área estimada para producción anual y su correlación con el área máxima aprovechable por hectárea. Se obtiene mediante la siguiente expresión:

CI = Aa x V

Donde:

CI es el volumen en metros cúbicos de madera en bruto del cupo de aprovechamiento.

Aa es el área en hectáreas aprovechable anualmente (cupo).

V es el volumen en metros cúbicos de madera en bruto aprovechable por hectárea.

Volumen total del cupo global:	CI = Aa x V
	CI = 25.727 ha/año x 25 m³/ha
	CI = 643.175 m³

² Ibid. P. 13.

³ O., Melo & R., Ríos. Óp. cit. P. 152.

Concepto

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, para el cálculo del cupo global de aprovechamiento forestal en la jurisdicción de Codechocó, considera viable incorporar al área de oferta de producción las **771.798 hectáreas** ordenadas mediante Acuerdo número 004 del 8 de agosto de 2016, como áreas de producción forestal.

La Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, considera viable adicionar al cupo global para el otorgamiento de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal persistente y doméstico señalado en el artículo 1° de la Resolución número 490 del 18 de marzo de 2016, un volumen de **643.175 m³**, considerando el área de producción ordenada en la región del Medio y Bajo Atrato mediante Acuerdo número 004 del 8 de agosto de 2016.

Las demás disposiciones señaladas en la Resolución número 490 del 18 de marzo de 2016, deberán ser aplicadas al nuevo volumen otorgado;

Que de conformidad con lo expuesto por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos de este Ministerio en el Concepto Técnico número 003 del 5 de septiembre de 2016, se hace necesario y procedente adicionar el cupo de aprovechamiento forestal otorgado a Codechocó en el artículo 1° de la Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016, en el sentido de adicionar seiscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y cinco metros cúbicos (643.175 m³) a los 300.489 m³ previamente otorgados.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. *Adición.* Adicionar al cupo global para el otorgamiento de permisos y autorizaciones de aprovechamiento forestal persistente y doméstico otorgado mediante la Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016, un volumen de seiscientos cuarenta y tres mil ciento setenta y cinco metros cúbicos (643.175 m³) en el departamento del Chocó.

Artículo 2°. *Obligación.* Las disposiciones contempladas en la Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016, deberán ser aplicadas al volumen que se adiciona mediante la presente resolución.

Artículo 3°. *Continuidad.* La Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) deberá dar continuidad a los compromisos, obligaciones y acciones contempladas en la Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016.

Artículo 4°. *Comunicación.* Por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, comunicar la presente resolución a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) y a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Artículo 5°. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de su publicación en el *Diario Oficial*.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2016.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo Urrutia.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1478 DE 2016

(septiembre 12)

por medio de la cual se aprueba y actualiza la zonificación de los manglares de la unidad Ciénaga de Mallorquín, ubicada en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y se adoptan otras determinaciones.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en ejercicio de sus facultades legales en especial las atribuidas en el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011 y el artículo 5° numerales 12 y 24 de la Ley 99 de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia establece en sus artículos 8°, 58, 79 y 80 que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación; que la propiedad es una función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica; que es deber del Estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar, entre otros fines, su conservación y restauración, así como proteger la diversidad e integridad del ambiente y de manera particular el deber de conservar las áreas de especial importancia ecológica;

Que al respecto, la Corte Constitucional mediante Sentencia C-431 de 2000, dispuso que le corresponde al Estado con referencia a la protección del ambiente: "... 1. Proteger su diversidad e integridad. 2. Salvaguardar las riquezas naturales de la nación. 3. Conservar las áreas de especial importancia ecológica. 4. Fomentar la educación ambiental, 5) planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para así garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 6. Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. 7. Imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados al ambiente, y 8. Cooperar con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas de frontera";

Que con este marco, el ambiente se reconoce como un interés general en el que el Estado, a través de sus diferentes entidades del orden nacional, regional y local, y los particulares deben concurrir para garantizar su conservación y restauración en el marco del desarrollo sostenible. Esta concurrencia de los entes territoriales, las autoridades ambientales y la población en general, se hace en el marco de lo dispuesto por la Ley 99 de 1993, en razón a que las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares;

Que con la expedición de la Ley 99 de 1993, se organizó en nuestro país el Sistema Nacional Ambiental y en general la institucionalidad pública encargada de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, estableciendo los principios generales de la política ambiental colombiana; entre los que se encuentran los contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo, de los cuales vale la pena citar los relacionados con el desarrollo sostenible (principios 3 y 4 de la Declaración de Río de 1992), que expresan: "El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes y futuras"; "A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma aislada";

Que en concordancia con la Ley 99 de 1993, y el artículo 2.2.2.3.2.4 del Decreto número 1076 de 2015, se reconoce a los manglares como *ecosistemas de especial importancia ecológica*, que gozan de protección especial, por lo que las autoridades ambientales deben adelantar las acciones tendientes a su conservación y manejo;

Que el artículo 2° de la Ley 99 de 1993, dispuso la creación del Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como organismo rector de la gestión del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, encargado entre otras cosas, de definir las regulaciones a las que se sujetarán la conservación, protección, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente de la nación, a fin de asegurar el desarrollo sostenible;

Que el numeral 2 del artículo 2° del Decreto-ley 3570 de 2011, establece como funciones del Ministerio del Ambiente "Diseñar y regular (...) las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo, aprovechamiento, conservación, restauración y recuperación de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en todos los sectores económicos y productivos".

Así mismo, deberá expedir y actualizar el estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio para su apropiado ordenamiento y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente a sus aspectos ambientales y fijar pautas generales para el ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas y demás áreas de manejo especial y regular las condiciones de conservación y manejo de ciénagas, pantanos, lagos y demás ecosistemas hídricos continentales;

Que en cumplimiento de las funciones mencionadas, el Ministerio expidió las Resoluciones números 1602 de 1995, 20 de 1996 y 223 de 1999, a través de las cuales se dictaron medidas para garantizar la sostenibilidad de los manglares de Colombia, se estableció para las Corporaciones Autónomas Regionales la obligación de elaborar estudios sobre el estado de los manglares en el territorio de su jurisdicción y propuestas para la zonificación y realización de actividades en áreas de manglares que serían aprobados por este Ministerio.

I. Antecedentes

Que mediante el artículo 1° de la Resolución número 442 de 14 de marzo de 2008 se aprobó el estudio denominado "Actualización y ajuste del diagnóstico y zonificación de los manglares de la zona costera del departamento del Atlántico-Caribe Colombiano" presentado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA);

Que la citada resolución determinó la zonificación y caracterización de cada una de las zonas estudiadas y se tuvieron en cuenta los criterios o categorías de manejo, preservación, restauración y uso sostenible definiendo cada uno de los criterios para la zonificación y la caracterización de la siguiente manera:

(...) 4. Zonificación

El desarrollo de la zonificación con fines de manejo del estudio, parte de la zonificación ecológica, que tiene como base conceptual la definición de Unidades Ecológicas de Paisaje, consideradas estas como regiones homogéneas desde los aspectos físicos y bióticos.

En el estudio realizado por la CRA, se consideran áreas de manejo, preservación, recuperación y uso sostenible las cuales fueron utilizadas no solo para la zonificación del manglar, sino también para zonificar las ciénagas, salitrales y playones que tienen una relación directa con este ecosistema, lo que garantiza la sostenibilidad del recurso.

La base generada a partir del diagnóstico y la zonificación de los manglares, se constituye en una herramienta para el manejo de los mismos, considerando que en la zonificación propuesta confluyen los principales elementos ecológicos, sociales, económicos y de gestión relacionados con las áreas de manglar.

De forma general, el uso de las áreas de manejo definidas en la zonificación, pueden considerar, según las características de cada una de ellas, el espacio geográfico y los objetivos que se les asignen, diversos grados de intervención, desde aquellas con altas restricciones encaminadas a la recuperación del ecosistema ya sea natural o inducida, hasta zonas que pueden destinarse para el uso sostenible implicando esta categoría un mayor grado de intervención en el ecosistema.

Zona de preservación:

Se definen como zonas de preservación las que deben dirigirse a garantizar el mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones actuales de productividad óptima presentadas por el manglar, a través de acciones de manejo que reduzcan los factores de intervención sobre el ecosistema. Se busca proteger y potencializar las funciones que el manglar puede cumplir en una determinada área.

Zonas de recuperación:

Las acciones propuestas se dirigen a restablecimiento del manglar de manera natural o inducida, y a la recuperación de las funciones estratégicas que puede cumplir, en áreas donde anteriormente se encontraba este ecosistema y que por efectos de la alteración del ecosistema fueron perdiendo su cobertura.

Se definieron dos tipos de categorías de recuperación basándose en la posibilidad de que esta sea natural o inducida y en prioridad que tenga el sitio de adelantar acciones de reforestación.

La categoría recuperación tipo I; considera sitios donde es posible adelantar acciones de reforestación y en donde es prioritario llevarlas a cabo. La categoría de recuperación tipo II, considera sitios donde la recuperación del manglar se puede dar de manera natural, si son eliminados los factores de disturbio del ecosistema.

Zonas de uso sostenible:

Las áreas de manglar en cuanto a su extensión y grado de conservación indican que la oferta de uso no es alta y por esto no fueron definidas áreas de manglar para uso sostenible que tenga que ver directamente con el aprovechamiento directo del manglar.

Un criterio fundamental de áreas catalogadas como de uso sostenible es tener un componente fuerte de control y vigilancia por parte de las autoridades competentes para que no se utilicen métodos inapropiados e ilícitos para el desarrollo de la actividad pesquera.

Las acciones a implementar para estas áreas se refieren fundamentalmente a la implementación de proyectos productivos a partir de una educación ambiental, promover la articulación de la comunidad con instituciones facilitadoras que otorguen incentivos, financieros, capacitación técnica y fortalecimiento de la capacidad de autogestión.

Además se hace una propuesta de usos permitidos y no permitidos para áreas de manglar en el departamento del Atlántico. Para cada zona de manejo se definieron acciones específicas e identificaron usos permitidos en aras de proporcionar herramientas para el ordenamiento del territorio.

Como recomendaciones generales se propone que el manejo del ecosistema de manglar se articule al manejo integrado de la cuenca y la zona costera, el desarrollo de procesos con el soporte de la generación de información y conocimiento, la participación comunitaria, el fortalecimiento del control y vigilancia y la evaluación de los procesos de desarrollo urbanístico;

Que el Director General de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), con Radicado MADS E1-2016-019263 de 19 de julio de 2016, solicitó a este Ministerio el ajuste y modificación de la zonificación de los manglares aprobada mediante la Resolución número 442 de 14 de marzo de 2008, en lo que respecta a la unidad Ciénaga de Mallorquín. Para lo cual refiere se deberá tener en cuenta la zonificación señalada en el estudio denominado como “Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín y formulación del plan de manejo de manglares en el departamento del Atlántico”.

II. Consideraciones técnicas del Ministerio

a) Objetivo general y específicos

Se refiere como objetivo general del estudio “Desarrollar esfuerzos conjuntos entre la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y la Universidad del Magdalena, a través del Grupo de Investigación Integrado de Ingeniería Civil (GIIC), con la finalidad de definir la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín y Formular la Fase número 1 del Plan de manejo de manglares en el departamento del Atlántico”.

Y como objetivos específicos los siguientes:

- a) “Elaborar un mapa de áreas de manglar con base en la información secundaria obtenida y los trabajos de campo a escala 1:25.000”;
- b) “Realizar el análisis y tabulación de las especies de manglar nativas, Introducidas o foráneas, existentes en el departamento, clasificándolas específicamente por zona manglar identificada, Con (sic) base en muestreos estadísticos de las áreas de Manglar representativas”;
- c) “Establecer un mapa de conflictos que permita identificar las condiciones de aprovechamiento de las áreas de manglar en estudio (subutilización, sobreutilización,) a escala 1:25.000, en plataforma SIG”;
- d) “Elaborar un mapa de zonificación ambiental de manglares donde se identifiquen las áreas que ameriten ser preservadas o restauradas según sea el caso, con base al estado y calidad del ecosistema”;
- e) “Determinar los tipos de riesgos naturales y/o antrópicos que incidan sobre la sostenibilidad de las áreas de manglar identificadas”;
- f) “Identificar e indicar específicamente los ecosistemas de manglar en el área de estudio”.

b) Área de estudio

Se refiere que el área de interés se circunscribe a los manglares que se emplazan en la unidad hidrológica denominada como Ciénaga de Mallorquín, que en su área costera comprende la mencionada ciénaga, además de las de Manatíes y Balboa, no obstante, la solicitud presentada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) refiere que la revisión y ajuste de zonificación solo es requerida para la unidad de manglares de la Ciénaga de Mallorquín, de acuerdo con lo que se presenta en el Mapa 1.

c) Metodología

Se especifican los aspectos metodológicos implementados para evaluar el conjunto de componentes del ecosistema de manglar, se refiere se siguieron las propuestas de: “Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de Biodiversidad” (2004) del IAvH.

En lo que respecta al componente faúnico se señala que para el grupo de aves se implementaron transectos de caracterización y capturas con redes de niebla; para los mamíferos registros visuales, evidencias determinadas a partir de huellas, heces fecales y otros rastros encontrados en recorridos libres, capturas con redes de niebla (para el grupo de quirópteros) y entrevistas informales con habitantes del área de estudio.

Mapa 1. Área de estudio de la solicitud de revisión y ajuste de la zonificación de manglares para la unidad Ciénaga de Mallorquín teniendo en cuenta la zonificación señalada por el estudio realizado por la Universidad del Magdalena y denominado como “Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín y formulación del plan de manejo de manglares del departamento del Atlántico”.



En lo que respecta al componente faúnico se señala que para el grupo de aves se implementaron transectos de caracterización y capturas con redes de niebla; para los mamíferos registros visuales, evidencias determinadas a partir de huellas, heces fecales y otros rastros encontrados en recorridos libres, capturas con redes de niebla (para el grupo de quirópteros) y entrevistas informales con habitantes del área de estudio.

El método de registro por encuentro visual fue el implementado para evaluar el grupo de reptiles y anfibios, realizando recorridos en diferentes sitios del área de interés. Para el grupo íctico se realizaron muestreos utilizando varios tipos de atarrayas (tanto en tamaño como en ojo de malla) y redes de arrastre, además del registro de información de la pesca en sitios de desembarco, a partir de entrevistas con pescadores.

En relación a moluscos y crustáceos se implementaron varios métodos, a saber: colecta de raíces de mangles cubiertas previamente con mallas (invertebrados asociados a raíces), toma con draga tipo Ponar (para moluscos), recolección con redes camaroneras y jamas (para crustáceos).

Para el componente de vegetación se implementaron transectos de 50 metros por un metro de ancho para las comunidades vegetales diferentes al manglar, y parcelas de 50 metros por diez metros de ancho para los bosques de mangles. En este último caso las unidades de muestreo fueron distribuidas de manera sistemática, y se levantó información en 28 parcelas, para una intensidad de muestreo equivalente al 1% del área de interés (cerca de 300 hectáreas).

Para el componente socioambiental se implementaron técnicas de la etnografía, entre estas: entrevistas semiestructuras, reuniones, talleres, observación participante, cartografía social y permanencia en la zona.

En lo que respecta a la identificación de conflictos por uso se señala se emplearon herramientas de sistemas de información geográfica que permitieron la superposición de diversas variables, como: amenazas por inundación, erosión, incendios forestales, remoción en masa y sismos, y de ecosistemas estratégicos.

En relación al análisis de riegos se señala se llevó a cabo revisión de información secundaria, procesamiento de imágenes de satélite (de los sensores Pleiades y Spot), corroboración de campo y validación con actores locales (a partir de talleres).

Para el proceso de zonificación se refiere se realizó la integración y proyección de escenarios futuros de los siguientes aspectos: uso actual, comunidades aledañas, estado de conservación o alteración, propiedades ecológicas, características estructurales del bosque, ubicación geográfica, grado de amenaza y potencialidad desde el punto de vista productivo y científico.

d) Caracterización y diagnóstico de los ecosistemas de manglar

Para el componente vegetal

Se identificaron como especies características del ecosistema de manglar de la Ciénaga de Mallorquín los mangles: salado (*Avicennia germinans*), zaragoza (*Conocarpus erecta*), amarillo (*Laguncularia racemosa*) y rojo (*Rhizophora mangle*). El taxón más común fue el mangle salado, seguido en importancia por el mangle amarillo y rojo, siendo el mangle zaragoza el menos frecuente, tal situación advierte una baja diversidad pues la heterogeneidad de especies es poca y la abundancia de un poco número de estas es alta.

En la categoría diamétrica de fustales (mayores a 15 centímetros de diámetro la altura del pecho, DAP) dominaron individuos de mangle salado y mangle amarillo, siendo poco frecuentes los árboles de mangle rojo y zaragoza. En el grupo de latizales y brinzales (entre 5 y 15, y entre 2,5 y 5 centímetros respectivamente) fue más frecuente el mangle amarillo seguido en importancia por el mangle salado.

En relación al área basal se estiman cuantías promedio de 8,5 metros cuadrados por hectárea, con cuantías que varían entre 0,4 y 20,4 metros cuadrados por hectárea. La especie que exhibió el mayor índice de valor de importancia (simple y ampliado) fue el mangle salado, seguido en orden de importancia por el mangle amarillo (Tabla 1).

Se concluye que los bosques de mangles de la Ciénaga de Mallorquín exhiben un significativo deterioro estructural, definido por la baja densidad de individuos por área, su exigua participación en el parámetro área basal, y la poca presencia de regeneración natural.

Tabla 1. Abundancia, frecuencia y dominancia relativa e índice de valor de importancia (IVI) por especie

Nombre científico	Nombre común	Abundancia	Frecuencia	Dominancia	IVI
Avicennia germinans (L.) L.	Mangle negro	81,43	55,17	80,61	217,22
Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn.	Mangle amarillo	11,43	24,14	11,09	46,65
Cocos nucifera L.	Coco	3,81	3,45	4,80	12,05
Rhizophora mangle L.	Mangle rojo	1,43	6,90	1,77	10,09
Conocarpus erectus L.	Mangle zaragoza	0,95	3,45	0,90	5,30
Prosopis juliflora (Sw.) DC.	Trupillo	0,48	3,45	0,59	4,51
Pereskia guamacho F.A.C. Weber	Guamacho	0,48	3,45	0,25	4,18

Para el componente Fáunico

– En el grupo de mamíferos se identificaron (por captura, evidencia o entrevista con pobladores del área) 16 especies, distribuidas en 12 familias y cinco órdenes, siendo Chiroptera y Rodentia, con 7 y 4 especies, los órdenes más abundantes, respectivamente. De las especies identificadas dos se encuentran incluidas en categoría de amenaza, a saber: zorra chucha (*Didelphis marsupialis*) y nutria (*Lontra longicaudis*), catalogadas en preocupación menor y vulnerable, respectivamente. Se señala la importancia de la Ciénaga de Mallorquín como resguardo de un número importante de especies de mamíferos.

– Para el grupo de aves se registraron (a través de observación registro auditivo) 100 especies, organizadas en 18 órdenes y 387 familias, el mencionado número de especies corresponde a un poco menos de la mitad del conjunto de aves reportadas para el Departamento del Atlántico. Los órdenes que mayor número de especies registraron fueron: Passeriformes, Charadriiformes y Pelecaniformes, que en conjunto agrupan el 60% de las especies consideradas. Y las familias más representativas fueron las denominadas como: Tyrannidae, Ardeidae y Scolopacidae, comúnmente denominadas como las de: atrapamoscas, garzas y chorlos, respectivamente. Se destaca que las garzas utilizan, como áreas zonas de forrajeo, reproducción y refugio, los manglares y humedales; por otra parte, se refiere se observa con frecuencia la golondrina ribereña (*Hirundo rustica*), ave migratoria que sobrevuela rodales de mangle salado (*Avicennia germinans*) en búsqueda de insectos.

– Se precisa que la Ciénaga de Mallorquín es de gran importancia para el grupo de aves, pues esta alberga un importante número y variedad de individuos, siendo el complejo de mayor diversidad exhibe, en comparación con las ciénagas de Manatíes y Balboa.

– Se destaca en el grupo de aves la presencia de tres especies endémicas, con distribución restringida para Colombia, a saber: guacharaca (*Ortalis garrula*), chamón caribeño (*Molothrus aeneus*) y carpinterito castaño (*Picumnus cinnamomeus*). No se identificaron especies en categoría de amenaza alguna.

– Para anfibios y reptiles se observaron 23 especies (14 y 9 respectivamente), las que están organizadas en 14 familias y cuatro órdenes, siendo los que mayor número de taxones agrupan, los órdenes Anura y Lepidosauria y las familias Gekkonidae y Teiidae. Se señala que el manglar corresponde al hábitat más diverso en relación al número y variedad de herpetos encontrados. Se destaca que solo una especie es reportada en la categoría de amenaza vulnerable, a saber: tapaculo (*Kinosternon scorioides*), y los taxones boa, lobo pollero, iguana y babilla (*Boa constrictor*, *Tupinambis teguixin*, *Iguana iguana* y *Caiman crocodilus*, respectivamente) en el Apéndice II de CITES.

Para el componente íctico

– En el grupo de peces se identificaron 18 especies, de estas diez a partir del ejercicio de pesca exploratoria y el restante número con base en el monitoreo de la actividad de captura artesanal. El mencionado grupo de taxones se organiza en cinco órdenes y ocho familias, siendo Perciformes el orden que agrupa un mayor número de especies, seguido en importancia por Mugiliformes y Siluriformes. En concordancia las familias que acumulan el mayor número de taxones son Mugilidae y Ariidae, con las especies lisa (*Mugil incilis*) y lebranche (*Mugil lisa*), y chivo cabezón (*Notarius bonillai*) y chivo mapale (*Cathorops spixii*), respectivamente.

– Se concluye que, a partir del análisis de tallas de los peces capturados, estos hacen parte de una población joven, propia de este ambiente estuarino donde los peces pasan sus primeras etapas de vida (condición ratificada por los estados gonadales I y II identificados para la mayoría de peces analizados), encontrando allí una apropiada oferta alimentaria (verificada a partir de un bajo nivel de vacuidad, inferior a un tercio). Los ítems alimenticios más frecuentes, precisados a partir del análisis de contenido estomacal, fueron: materia orgánica, restos de peces y peces.

– En términos tróficos se destaca que, del grupo de peces capturados, un poco más de dos terceras partes de estos corresponden a la categoría de consumidores de tercer orden (carnívoros), seguido en importancia por los herbívoros-detritívoros, y en menor importancia, cerca del 10%, por herbívoros. Situación que podría derivar en la afirmación de que el flujo de energía se mantiene en los diferentes niveles tróficos identificados para la Ciénaga de Mallorquín, ratificando la importancia de esta área en el reclutamiento y alimentación de peces eurihalinos y estenohalinos.

– En lo concerniente a aspectos sexuales, se destaca que para las especies objeto de análisis, lisa, róbalo, chivo cabezón y chivo mapale (*Mugil incilis*, *Centropomus ensiferus*, *Notarius bonillai* y *Cathorops spixii*), dominan las hembras, por cada macho seis hembras, siendo más conspicua esta situación para los taxones chivo cabezón y chivo mapale.

– Para el grupo de crustáceos se registraron en la Ciénaga de Mallorquín, dos especies de camarón, militar (*Penaeus monodon*) y de viento (*Litopenaeus schmitti*), de la familia Penaidae, y dos taxones de jaiba azul (*Callinectes sapidus*) y roja (*Callinectes bocourti*), de la familia Portunidae. La especie que contribuyó con el mayor número de individuos fue el camarón de viento y la de mayor aporte en biomasa la jaiba azul.

– En relación a los cangrejos se señala que el grupo de los violinistas (del género *Uca*) cumple un importante papel en la red trófica, pues constituye parte de la dieta de otros crustáceos, peces, aves y mamíferos. De igual manera se señala que el cangrejo azul (*Cardisoma guanhumi*) cumplen un importante rol en el ciclaje de nutrientes (pues consumen y

fraccionan hojarasca) y la aireación del suelo (a través de la construcción y mantenimiento de madrigueras).

– Se estima una densidad de 3 individuos por metro cuadrado en el caso de cangrejos violinistas y cangrejo azul, en el primero de los casos se considera una densidad baja, y en el otro se corresponde con una abundancia promedio, similar a la registrada en otros países del caribe. Se refiere la importancia económica de la captura de cangrejos, que tiene su máxima expresión en la temporada de lluvias, y de la que participan niños y jóvenes principalmente provenientes del sector “La Cangrejera” en el barrio La Playa.

– En lo que respecta al grupo de moluscos se puede señalar que las especies más conspicuas, por su importancia otrora en la captura artesanal, son: chipi chipi (*Anomalocardia brasiliensis* y *Donax sp.*), caracol pata de mula (*Melongena melongena*) y ostra de mangle (*Crassostrea rhizophorae*). De esta última especie se refiere que su población está al borde de la desaparición en el área de interés.

– Finalmente, en el acápite de fauna se señala que el uso de este recurso se ha abordado de manera equívoca, afectando la permanencia de poblaciones de algunas especies, como: nutria (*Lontra longicaudis*), zorro perro (*Cerdocyon thous*), zorra chucha (*Didelphis marsupialis*), zorra patona (*Procyon cancrivorus*), y conejo (*Sylvilagus floridanus*), algunas de las cuales son utilizadas con fines alimentarios y medicinales, y en otros casos controladas por considerarse como plagas para cultivos o animales domésticos.

– Por otra parte, especies como el loro manglero (*Aratinga pertinax*), la tortuga tapaculo (*Kinosternon scorioides*) y la babilla (*Caiman crocodylus*) se extraen para la comercialización como mascotas o la venta en zoológicos. Se enfatiza que la fauna del área de interés no podría ser objeto de manejo sustentable, pues la alta intervención de la que ha sido objeto aunada a la limitada área de hábitat, hacen que la estrategia de preservación sea más acorde con las características intrínsecas de las poblaciones presentes en la Ciénaga de Mallorquín.

Para el componente socioambiental

– El municipio de Puerto Colombia y el corregimiento de La Playa (de la ciudad de Barranquilla) constituyen las unidades administrativas territoriales que se emplazan en inmediaciones de la Ciénaga de Mallorquín. En términos generales se señala que el municipio de Puerto Colombia alberga cerca de 27 mil personas, concentrados en su mayoría (78%) en la cabecera municipal, la cobertura del servicio de agua es del 90%, de alcantarillado del 63%, de aseo y energía del 97% y de gas del 75%. La mayoría de vías (pavimentadas y afirmadas) se refiere están en mal estado, y para una cuarta parte de la población se registran necesidades básicas insatisfechas.

– En el municipio de Puerto Colombia se concentran treinta instituciones educativas de básica primaria y secundaria, además de un importante número de entes de educación superior. Se estima que solo el 6% de la población mayor de 15 años no sabe leer ni escribir. El 28% de la población ha cursado la básica primaria, una tercera parte hasta la secundaria, y tan solo el 18% accedió a un nivel educativo superior.

– En relación a instituciones prestadoras de salud se refiere el ESE Hospital de Puerto Colombia y un centro de salud en el corregimiento de Puerto Salgar. En lo referente a aspectos económicos se menciona que gran parte de la población de Puerto Colombia vive de la informalidad, principalmente se ocupa en ventas o en la prestación de servicios en las playas del municipio o las aledañas a este. La pesca es una actividad frecuente, y se realiza en cercanía de la costa, una parte de la producción es destinada a la comercialización y otra buena parte al autoconsumo.

– Se destaca el potencial de Puerto Colombia en el ámbito turístico, se refiere que existen cuatro hoteles, algunos de los cuales son patrimonio arquitectónico, y varios sitios de interés como: el muelle, el Castillo de Salgar, la Casa de la Cultura, y las iglesias de Puerto Salgar y Puerto Colombia.

– En lo que respecta al corregimiento de La Playa (o Eduardo Santos) se refiere que los habitantes de este se encuentran asentados alrededor de la Ciénaga de Mallorquín, y que en total son cerca de 9 mil, cuantía que se ha visto incrementada en la última década por la llegada de población víctima del desplazamiento forzado. La cobertura del servicio de agua y de energía es del 80% y de gas del 75%, no hay redes de alcantarillado y en la mayoría de las oportunidades los residuos sólidos son dispuestos por la comunidad en los alrededores de sus viviendas, a las afueras del corregimiento o enterradas.

– En el corregimiento de La Playa se emplazan tres centros de educación media vocacional, se estima que dos terceras partes de la población escolar no asiste a los mencionados colegios, y que el índice de analfabetismo es cercano al 8%. Se cuenta con centro de salud privado y un puesto de salud público.

– Se estima que tres cuartas partes de la población económicamente activa se encuentra desempleada, solo el 8% es asalariada, y el restante porcentaje vive en la informalidad. Los pescadores del mencionado centro poblado se agrupan en asociaciones, y para estas se estima un total de 361 integrantes. Ejercen su actividad en embarcaciones de madera y con atarrayas, y en los últimos años se han dedicado a cultivar sábalo en estanques artesanales, contruidos en los patios de sus viviendas o inmediaciones de estos.

– En lo que respecta a la identificación de actores que se relacionan con el ecosistema de manglar se refiere el grupo de pescadores, que entre el municipio de Puerto Colombia y el corregimiento de La Playa se estima en 476 personas, las que tradicionalmente han derivado su sustento de la extracción de recursos hidrobiológicos en la Ciénaga de Mallorquín.

– Otros actores con injerencia en el área de interés son: “propietarios privados” (que han cercado el manglar con el propósito de apropiarse de estos terrenos), poseedores de títulos mineros (que a través de su actividad, en inmediaciones del área de interés, propician la destrucción y contaminación del ecosistema), prestadores de servicios turísticos (que han favorecido el desecamiento de cuerpos de agua y el vertimiento de residuos sólidos y aguas servidas sobre las áreas de manglar), entidades gubernamentales como: alcaldías municipales, gobernación departamental y autoridad ambiental regional (que ejercen su ejercicio en entorno al ordenamiento territorial y ambiental), la autoridad nacional de acuicultura y pesca (encargada de la planificación, ordenamiento, control y vigilancia de la actividad

pesquera y acuícola en el país) y las organizaciones no gubernamentales (que promueven valores ecológicos en la comunidad y usuarios del manglar).

De las presiones, impactos ambientales y amenazas sobre el ecosistema de manglar

– Se refiere que la contaminación es una de las presiones ejercidas sobre la Ciénaga de Mallorcaín, esta se deriva del vertimiento de aguas servidas, dispuestas desde el sector suroccidental de la ciudad de Barranquilla, de los corregimientos que se emplazan en la parte alta y media de la cuenca del Arroyo León y del conjunto de viviendas ubicadas en el corregimiento de La Playa. Tal situación deriva en la eutrofización y contaminación del complejo cenagoso.

– Otra presión ejercida sobre los manglares, tiene que ver con la desecación y relleno de áreas de manglar, derivada del ejercicio de ampliación de terrenos ocupados por pobladores que se asientan en las riberas de la ciénaga. Por otra parte, la obstrucción de la dinámica hídrica, por el emplazamiento de obras de infraestructura sobre el margen occidental del río Magdalena y el mal diseño de soluciones para el intercambio de agua, es otra de las problemáticas referidas con la comunidad (se puntualiza que otrora la Ciénaga de Mallorcaín era de tipo deltaico estuarino y que con el emplazamiento de los tajamares pasa a tener un comportamiento de laguna costera).

– Por otra parte, señala que las actividades de siembra de mangles sobre cuerpos de agua, ha derivado en la pérdida del espejo de estos, pues con la implantación de las plántulas y su posterior desarrollo se propicia la acumulación de sedimentos, y por ende la pérdida de profundidad en algunos sectores de la Ciénaga de Mallorcaín.

– Otra actividad que deriva en impactos significados sobre los recursos hidrobiológicos es la pesca ilegal, la que se lleva a cabo con artes ilícitas y no reglamentarias, lo que deriva en la captura de individuos por debajo de la talla mínima permitida.

– Como presiones potenciales se identifica la construcción y operación del proyecto denominado “Superpuerto de Aguas Profundas”, el que se prevé construir sobre el mar en el margen izquierdo del tamar occidental, y que contempla la movilización, entre otros productos, de carbón e hidrocarburos.

– En lo que respecta a las causas que propician las referidas problemáticas, se señalan las siguientes: “no existe apropiación de la normativa y hay desinterés generalizado por parte de las autoridades competentes”, “falta educación ambiental”, una fuerte dependencia de los recursos que provee el ecosistema, y el incremento de población asociado con el desplazamiento por el conflicto armado.

– Las consecuencias de las mencionadas problemáticas y sus respectivas causas, tiene que ver con: deterioro general de los ecosistemas y de la salud de los miembros de la comunidad, y disminución de los recursos hidrobiológicos.

De los conflictos de uso sobre el ecosistema de manglar

A partir del análisis integrado del conjunto de variables referidas en la metodología se identificaron los siguientes conflictos en el área de interés: por deforestación del bosque de mangles (relacionada con el reclamo de terrenos para el emplazamiento de infraestructura habitacional), desarrollo de ganadería en zonas con aptitud para la preservación, desarrollo de actividades portuarias, y desarrollo de actividades pesqueras sin consideraciones de sostenibilidad.

De las amenazas naturales y antrópicas sobre el ecosistema de manglar

Las amenazas naturales identificadas para el complejo de manglares de la Ciénaga de Mallorcaín se relacionan con los siguientes aspectos: erosión, remoción en masa, incendios forestales, inundación y cambio climático. En relación a la erosión se señala que solo el 4% de los manglares exhiben una susceptibilidad alta; por otra parte en la Tabla 2, se refiere que el manglar cumple un papel preponderante en la mitigación de esta condición, y que la línea de costa exhibió un retroceso de 3,5 metros por año, en el periodo comprendido entre 1989 y 2013.

En lo referente a fenómenos de remoción en masa se destaca que los manglares son muy poco susceptibles a estos, pues se emplazan en áreas de baja pendiente y la cobertura arbórea atenúa tal situación. Se estima que menos del 1% del ecosistema de manglar exhibe una susceptibilidad alta, Tabla 2.

Por el contrario, un poco menos de la tercera parte de los bosques de mangles es alta y muy altamente susceptible a los incendios forestales, situación aunada a la frecuente práctica de quema con el propósito de adecuar áreas para la construcción de viviendas. De igual manera el ecosistema de manglar, por sus condiciones intrínsecas, presenta una alta y muy alta susceptibilidad (cerca de tres cuartas de los bosques de mangles) a eventos de inundación. Finalmente, se refiere que los manglares del complejo Ciénaga de Mallorcaín son muy vulnerables ante eventos como ascenso del nivel del mar asociado al cambio climático.

Tabla 2. Distribución (en hectáreas y en porcentaje) de la susceptibilidad de las amenazas en la unidad de manglares, Ciénaga de Mallorcaín.

Susceptibilidad	Por erosión		Por remoción en masa		Por incendios forestales		Por inundación	
	Área	%	Área	%	Área	%	Área	%
Baja	49,8	13,5	220,5	59,7	-	-	6,3	1,7
Moderadamente baja	132,4	35,8	53,7	14,5	26,5	7,19	14,3	3,9
Moderada	97,8	26,5	20,4	5,5	41,4	11,2	53,1	14,3
Alta	13,1	3,5	1,5	0,4	20,9	5,6	226,1	61,2
Muy alta	-	-	-	-	207,1	56,1	-	-
Cuerpo de agua	63,3	17,1	61,9	16,7	61,8	16,7	58,0	15,7
Tejidos urbanos	12,5	3,4	11,2	3,0	11,2	3,0	11,1	3,0
Total	369,1	100	369,1	100	369,1	100	369,1	100

En lo que respecta a amenazas antrópicas se señalan las siguientes: por crecimiento urbano e inadecuada disposición de residuos y vertimientos, por tala de mangle para usos agropecuarios y construcción de vivienda, y por bajo intercambio de agua dulce y salada, Tabla 3.

Tabla 3. Distribución (en hectáreas y en porcentaje) de las amenazas antrópicas en la unidad de manglares, Ciénaga de Mallorcaín.

Amenaza	Área	%
Sin amenaza aparente	75,4	20,3
Amenaza alta de la desaparición del manglar para la construcción de vivienda campestre	16,5	4,4
Amenaza alta por la presión del crecimiento urbano y disposición inadecuada de residuos y vertimientos	91,2	24,6
Amenaza alta por la tala de manglar y títulos privados	25,2	6,8
Amenaza alta por la tala del manglar para construcción de viviendas y expansión de áreas urbanas	9,8	2,6
Amenaza alta por la tala del manglar para construcción de viviendas y zonas campestres	45,6	12,3
Amenaza alta por la tala del mangle para usos agropecuarios y construcción de vivienda	57,8	15,6
Amenaza alta por la tala del mangle y bajo intercambio de agua dulce y salada	48,8	13,0
Total	369,9	100

Zonificación de los ecosistemas de manglar

Las categorías consideradas en el proceso de zonificación de los manglares de la Ciénaga de Mallorcaín son las que se refieren a continuación, para cada una de ellas se señala la razón de ser y el fin último que persiguen, a saber:

– Preservación, entendida como “...aquellas que, por su importancia ecológica, con ecosistemas de alta productividad biótica, ubicación estratégica, función relevante e insustituible y en general buen estado de conservación, deberán ser protegidas y sostenidas sin alteración, para la investigación científica, la educación y el mantenimiento de especies y comunidades en procura del beneficio común y permanente de las poblaciones humanas locales”.

– Restauración, “aquellas áreas que se encuentran en mal estado o en proceso de degradación, que no están cumpliendo con sus funciones y pueden haberse perdido sus atributos naturales, o algunos de ellos están siendo severamente afectados. Igualmente, comprende áreas que, si bien es cierto en la actualidad, no evidencian daños severos, mantienen actividades potenciales que pueden destruir los ecosistemas, o desarrollaron actividades en el pasado que ya lo afectaron significativamente. También se incluyen en este tipo de zonas aquellas áreas en donde los procesos naturales han afectado el estado de los ecosistemas”.

– Uso sostenible, “se definen como aquellas donde las características del medio natural permiten desarrollar acciones de conservación y actividades productivas. Son zonas con índices estructurales altos, actividades de subsistencia diversas y productividades que oscilan entre media y alta, son zonas que permiten el aprovechamiento de los recursos desde el principio de sostenibilidad”.

En la categoría de preservación se zonificaron 209 hectáreas (46% del área de interés) (Tabla 4 y Mapa 2), que incluyen bosques de mangles bien conservados y cuerpos de agua localizados al interior de estos, y los cuales no son afectados por aguas servidas. En esta unidad de manejo se permiten usos como: investigación, pesca artesanal, aprovechamiento de fauna asociada al bosque y a los cuerpos de agua, monitoreo y ecoturismo, y se prohíbe el aprovechamiento forestal.

Tabla 4. Distribución de áreas de las categorías de zonificación ambiental de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorcaín.

Categoría de manejo	Área (hectáreas)	Área (porcentaje)
Preservación	208,9	46,3
Recuperación	131,9	29,2
Uso sostenible	110,9	24,5

Las zonas con limitadas posibilidades de prestación de servicios ecosistémicos, con un alto a medio grado de intervención, con presencia de elementos fáunicos de interés, y con conflictos de uso asociados al desarrollo de ganadería y la expansión urbana fueron catalogados en la categoría de restauración, ocupa cerca del 30% del área de interés, lo que equivale a 131,9 hectáreas (Tabla 4 y Mapa 2).

En esta unidad de manejo los usos se limitarán a aquellos que se requieran para llevar a cabo la recuperación del ecosistema, entre estos están: monitoreo, investigación, reforestación, mantenimiento de manglares y control de la contaminación. Los usos restringidos serán el de aprovechamiento de los recursos del bosque, tanto forestales como fáunicos. Se puntualiza que la destinación hacia futuro, luego de la recuperación, será la preservación.

Bajo la categoría de uso sostenible se zonificaron 110,9 hectáreas, que corresponde al 24% del ecosistema de manglar de la Ciénaga de Mallorcaín (Tabla 4 y Mapa 2). Se puntualiza que en esta unidad de manejo se permite el desarrollo de obras que faciliten el acceso al sector portuario, sin que se afecte la vegetación de manglar existente. El régimen de uso para las diferentes unidades de manejo se sintetiza en la Tabla 5.

Tabla 5. Usos permitidos y no permitidos para los manglares de la Ciénaga de Mallorcaín.

Usos	Preservación	Restauración	Uso sostenible
Ampliación de cultivos acuícolas hacia áreas de manglar	No permitido	No permitido	No permitido
Agrícola	No permitido	No permitido	No permitido
Construcción de viviendas	No permitido	No permitido	No permitido
Ganadero	No permitido	No permitido	No permitido
Industrial	No permitido	No permitido	No permitido
Introducción de especies de fauna y flora, investigación	No permitido	No permitido	No permitido
Loteo	No permitido	No permitido	No permitido
Vertimiento de aguas residuales y desechos sólidos	No permitido	No permitido	No permitido
Captura de moluscos y crustáceos	No permitido	No permitido	Permitido
Pesca deportiva	No permitido	No permitido	Permitido
Pesca artesanal	No permitido	No permitido	Permitido
Acuicultura (encierrros en esteros y canales)	No permitido	No permitido	Permitido

Usos	Preservación	Restauración	Uso sostenible
Obras de infraestructura de acceso (vías y canales)	No permitido	No permitido	Permitido
Recolección de leña seca para uso doméstico	No permitido	Permitido	Permitido
Conservación	Permitido	Permitido	Permitido
Ecoturismo	Permitido	Permitido	Permitido
Educación	Permitido	Permitido	Permitido
Establecimiento de viveros de mangle	Permitido	Permitido	Permitido
Obras para la protección de la línea de costa en beneficio de las áreas de manglar	Permitido	Permitido	Permitido
Monitoreo	Permitido	Permitido	Permitido
Obras e infraestructura para mantenimiento de arroyos y pantanos de manglar	Permitido	Permitido	Permitido
Paisajístico o contemplativo	Permitido	Permitido	Permitido
Pesca científica	Permitido	Permitido	Permitido
Reforestación con especies de mangle	Permitido	Permitido	Permitido

Mapa 2. Zonificación propuesta de los manglares para la unidad Ciénaga de Mallorcaín teniendo en cuenta la zonificación señalada por el estudio realizado por la Universidad del Magdalena y denominado como “Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorcaín y formulación del plan de manejo de manglares del departamento del Atlántico”.



Consideraciones respecto de solicitud de la modificación

- El estudio “Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorcaín y formulación del plan de manejo de manglares en el departamento del Atlántico” presenta de manera actualizada la caracterización, el diagnóstico y la zonificación de los manglares de la Ciénaga de Mallorcaín; ejercicio acorde con los términos de referencia establecidos en la Resolución número 924 del 16 de octubre de 1997.
- El mencionado estudio precisa con detalle el estado actual de los manglares de la Ciénaga de Mallorcaín, se destacan los principales usos que del ecosistema hace la comunidad, relacionados con la pesca y la recolección de moluscos y crustáceos.
- Se precisaron los diferentes actores con injerencia en la gestión del ecosistema de manglar, cada uno de estos fue caracterizado, concretando el conjunto de relaciones entre ellos. Se caracterizaron los diversos recursos del ecosistema, a partir de muestreos en campo y de ejercicios de construcción colectiva con los actores del área, se presenta información primaria acerca del recurso fáunico, íctico y de la vegetación.
- Se identificaron y caracterizaron los conflictos de uso (por deforestación del bosque de mangles, por desarrollo de ganadería en zonas con aptitud para la preservación, por desarrollo de actividades portuarias, y por desarrollo de actividades pesqueras sin consideraciones de sostenibilidad) y las amenazas naturales (por erosión, remoción en masa, incendios forestales, inundación y cambio climático) y antrópicas (por crecimiento urbano e inadecuada disposición de residuos y vertimientos, por tala de mangle para usos agropecuarios y construcción de vivienda, y por bajo intercambio de agua dulce y salada) que se presentan sobre los manglares de la Ciénaga de Mallorcaín. Cada una de estas fue definida y espacializada.
- Para definir la zonificación se integraron varios aspectos ecológicos, sociales, económicos, culturales, de impactos y amenazas, a partir de los cuales se establecieron las unidades de zonificación, categorizadas en: preservación, restauración y uso sostenible. Para cada una de estas se precisó el régimen de usos, identificando el conjunto de actividades permitidas y no permitidas. Cabe aclarar que conforme a este ejercicio se plantea una recategorización de las zonas actualmente existentes la cual como se ha establecido obedece también a los criterios de ordenamiento de otros instrumentos ambientales existentes en la zona.
- De acuerdo con lo referido antes se considera pertinente modificar la zonificación aprobada mediante Resolución número 0442 del 14 de marzo de 2008 para los manglares de la Ciénaga de Mallorcaín, por la propuesta en el estudio denominado como “Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorcaín y formulación del plan de manejo de manglares en el departamento del Atlántico”, y sintetizada en el ítem anterior.
- De acuerdo con lo referido antes se considera pertinente aprobar el régimen de uso propuesto en el estudio denominado como “Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de

Mallorquín y formulación del plan de manejo de manglares en el departamento del Atlántico”, a excepción del denominado como “Acuicultura (encierros en esteros y canales)”, el que estará prohibido o no permitido en todas las categorías de manejo, en concordancia con lo establecido en el párrafo 1° del artículo 207 de la Ley 1450 del 16 de junio de 2011, que refiere “en arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, exploración de hidrocarburos, acuicultura, pesca industrial de arrastre y la extracción de componentes de corales para la elaboración de artesanías”.

– Es preciso señalar que para el cuerpo de agua de la Ciénaga de Mallorcaín seguirá vigente la categoría de uso sostenible definida en la Resolución número 0442 del 14 de marzo de 2008 “por la cual se aprueba el estudio y propuesta de zonificación de las áreas de manglar presentado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)”, y que tiene su sustento técnico en el estudio denominado “Actualización y ajuste del diagnóstico y zonificación de los manglares de la zona costera del departamento del Atlántico, Caribe colombiano”.

– Es preciso señalar que para los manglares que no hacen parte de la Ciénaga de Mallorcaín y están en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) seguirá vigente la Resolución número 0442 del 14 de marzo de 2008 “por la cual se aprueba el estudio y propuesta de zonificación de las áreas de manglar presentado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)”, y que tiene su sustento técnico en el estudio denominado “Actualización y ajuste del diagnóstico y zonificación de los manglares de la zona costera del departamento del Atlántico, Caribe colombiano”.

– En relación al uso denominado como “paisajístico o contemplativo” es preciso señalar que este no incluye la construcción, adecuación, montaje y/o puesta en funcionamiento de infraestructura para tal propósito en las zonas de recuperación y preservación.

III. Consideraciones jurídicas del Ministerio

Que conforme a la solicitud de ajuste y modificación de la zonificación de los manglares aprobada mediante la Resolución número 442 de 14 de marzo de 2008, en lo que respecta a la Unidad Ciénaga de Mallorcaín, esta cartera considera que se cumplen los requisitos plasmados en las Resoluciones números 1602 de 1995, 20 de 1996 y 924 de 1997; sin embargo, este ministerio se permite ajustar el régimen de usos presentado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) para los usos denominados acuicultura y paisajístico o contemplativo, así:

1. Respecto al uso denominado Acuicultura

Que el párrafo 1° del artículo 207 de la Ley 1450 de 16 de junio de 2011, estableció que “en arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, exploración de hidrocarburos, acuicultura, pesca industrial de arrastre y la extracción de componentes de corales para la elaboración de artesanías”;

Que la nueva solicitud presentada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), concerniente al ajuste y modificación de la zonificación de los manglares aprobada mediante la Resolución número 442 de 14 de marzo de 2008, en lo que respecta a la unidad Ciénaga de Mallorcaín, estableció dentro del régimen de usos para la Ciénaga de Mallorcaín la actividad de acuicultura (encierros en esteros y canales) como permitida en la zona de uso sostenible;

Que teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 207 de la Ley 1450 de 2011 antes transcrito, dicha actividad se encuentra prohibida, por lo cual esta cartera procederá a modificar el uso en zona de uso sostenible, en el entendido de que dicha actividad se encuentra prohibida.

2. Respecto al uso denominado paisajístico o contemplativo

Que en el estudio presentado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), se estableció que el uso denominado paisajístico o contemplativo, en las zonas de preservación, restauración y uso sostenible se encuentra permitido;

Que esta cartera considera que dicha actividad por sí sola no le es atribuible un impacto negativo sobre el ecosistema estudiado, por ende esta no incluye actividades conexas como la construcción, adecuación, montaje y/o puesta en funcionamiento de infraestructura para tal propósito en las zonas de recuperación y preservación;

Que respecto al cuerpo de agua de la Ciénaga de Mallorcaín seguirá vigente la categoría de uso sostenible definida en la Resolución número 0442 del 14 de marzo de 2008, “por la cual se aprueba el estudio y propuesta de zonificación de las áreas de manglar presentado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA)”, y que tiene su sustento técnico en el estudio denominado “Actualización y ajuste del diagnóstico y zonificación de los manglares de la zona costera del departamento del Atlántico, Caribe colombiano”;

Que es importante puntualizar que para los manglares que no hacen parte de la Ciénaga de Mallorcaín y están en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico seguirá vigente la Resolución número 0442 del 14 de marzo de 2008;

Que, conforme a lo anterior, se aprueba y actualiza la zonificación de los manglares de la Unidad Ciénaga de Mallorcaín, ubicada en el departamento del Atlántico, en el municipio de Puerto Colombia y Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Objeto. Aprobar y actualizar la zonificación de los manglares de la Unidad Ciénaga de Mallorcaín, ubicada en el departamento del Atlántico, en el municipio de Puerto Colombia y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, presentada por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) mediante el documento denominado “Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorcaín y formulación del plan de manejo de manglares en el departamento del Atlántico”, el cual hace parte integral de este acto administrativo.

Parágrafo. Los manglares que no hacen parte de la Unidad Ciénaga de Mallorcaín y están en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) se seguirán rigiendo por la Resolución número 0442 del 14 de marzo de 2008.

Artículo 2°. *Prohibición de actividades.* Prohíbanse las actividades de acuicultura (encierros en esteros y canales) en la zona de uso sostenible y las actividades conexas como la construcción, adecuación, montaje y/o puesta en funcionamiento de infraestructura para el uso paisajístico y contemplativo en las zonas de recuperación y preservación de la Unidad Ciénaga de Mallorquín.

Artículo 3°. *Zonificación y régimen de usos.* Conforme a lo previsto por el documento técnico presentado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), el denominado “*Definición de la ronda hídrica de la Ciénaga de Mallorquín y formulación del plan de manejo de manglares en el departamento del Atlántico*”, se establece el siguiente régimen de usos en las zonas de preservación, restauración y uso sostenible de la Unidad Ciénaga de Mallorquín, el cual quedará así:

Usos	Preservación	Restauración	Uso sostenible
Ampliación de cultivos acuícolas hacia áreas de manglar	No permitido	No permitido	No permitido
Agrícola	No permitido	No permitido	No permitido
Construcción de viviendas	No permitido	No permitido	No permitido
Ganadero	No permitido	No permitido	No permitido
Industrial	No permitido	No permitido	No permitido
Introducción de especies de fauna y flora, investigación	No permitido	No permitido	No permitido
Loteo	No permitido	No permitido	No permitido
Vertimiento de aguas residuales y desechos sólidos	No permitido	No permitido	No permitido
Captura de moluscos y crustáceos	No permitido	No permitido	Permitido
Pesca deportiva	No permitido	No permitido	Permitido
Pesca artesanal	No permitido	No permitido	Permitido

Acuicultura (encierros en esteros y canales)	No permitido	No permitido	No permitido ¹
Obras de infraestructura de acceso (vías y canales)	No permitido	No permitido	Permitido
Recolección de leña seca para uso doméstico	No permitido	Permitido	Permitido
Conservación	Permitido	Permitido	Permitido
Ecoturismo	Permitido	Permitido	Permitido
Educación	Permitido	Permitido	Permitido
Establecimiento de viveros de mangle	Permitido	Permitido	Permitido
Obras para la protección de la línea de costa en beneficio de las áreas de manglar	Permitido	Permitido	Permitido
Monitoreo	Permitido	Permitido	Permitido
Obras e infraestructura para mantenimiento de arroyos y pantanos de manglar	Permitido	Permitido	Permitido
Paisajístico o contemplativo	Permitido	Permitido	Permitido
Pesca científica	Permitido	Permitido	Permitido
Reforestación con especies de mangle	Permitido	Permitido	Permitido

Artículo 4°. *Administración y manejo.* La administración y manejo de la Unidad Ciénaga de Mallorquín y sus manglares corresponde a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA).

Artículo 5°. *Control y vigilancia.* Las entidades territoriales, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y las Fuerzas Armadas deben coordinar el ejercicio de sus funciones, para garantizar la protección y defensa del medio ambiente y los recursos naturales renovables y el cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas.

Artículo 6°. *Seguimiento y monitoreo.* La Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) debe realizar seguimiento al cumplimiento de las disposiciones legales y las demás establecidas en la presente resolución. Esta labor debe monitorear el estado y la funcionalidad del ecosistema y el impacto de la gestión de conservación en dicha área.

La información resultante del seguimiento y monitoreo debe ser pública y retroalimentar los ejercicios de planificación, ordenamiento y zonificación.

Artículo 7°. *Determinante ambiental.* Las decisiones establecidas en la presente resolución, deben ser incorporadas en el articulado, la cartografía y demás documentos que formen parte de los planes de ordenamiento territorial de los municipios circundantes y/o adyacentes de la Unidad Ciénaga de Mallorquín.

Artículo 8°. *Comunicación.* La Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos debe comunicar el presente acto administrativo a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), a la Gobernación del Departamento del Atlántico, los municipios circundantes y/o adyacentes de la Unidad Ciénaga de Mallorquín, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Departamento de la Prosperidad Social para su conocimiento y fines pertinentes.

Artículo 9°. *Publicación y vigencia.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Comuníquese, publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 12 de septiembre de 2016.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo Urrutia.
(C. F.).

¹ LEY 1450 DE 2011, ARTÍCULO 207. CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS DE ARRECIFES DE CORAL. Se dará protección a los ecosistemas de arrecifes de coral, manglares y praderas de pastos marinos de todas las zonas marinas de jurisdicción nacional definidos por el “Atlas de Áreas Coralinas de Colombia” y el “Atlas Las Praderas de Pastos Marinos en Colombia: estructura y distribución de un ecosistema estratégico”, elaborados por el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andreis”.

Parágrafo 1°. En arrecifes de coral y manglares se prohíbe el desarrollo de actividades mineras, exploración, explotación de hidrocarburos, acuicultura, pesca industrial de arrastre y la extracción de componentes de corales para la elaboración de artesanías. (..)

MINISTERIO DE CULTURA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1464 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual modifica parcialmente el Decreto 1257 del 14 de junio de 2012.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular, las previstas en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y el artículo 45 de la Ley 489 de 1998 y,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 113 y 209 de la Constitución Política de Colombia establecen la colaboración armónica entre las ramas del poder público y el deber de coordinación de los diferentes órganos del Estado y de las autoridades administrativas; para el adecuado cumplimiento de sus fines.

Que el artículo 5° de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 2° de la Ley 1185 de 2008, establece que “*El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, información, y por las competencias y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación (“...”)”.*

Que el artículo 4° de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco, aprobado por Colombia mediante la Ley 45 de 1983, que establece que “*Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención, reconoce que la obligación de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le incumbe primordialmente*”.

Que la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial de conformidad con el artículo 1° del Decreto 2406 de 2005 integra todas las entidades involucradas en el manejo, cuidado y protección del patrimonio cultural y natural de la nación.

Que el Decreto 1257 de 2012 modificó la organización de la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial (Cinpm) indicando la conformación de la misma y estableció las funciones específicas de la comisión con relación a los bienes inscritos en la *Lista de patrimonio mundial y en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la Unesco*.

Que el Decreto-ley 4131 de 2011 cambió la naturaleza jurídica del Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas) de establecimiento público a Instituto Científico y Técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa, técnica, financiera y patrimonio independiente, que se denominará Servicio Geológico Colombiano, adscrito al Ministerio de Minas y Energía, el cual hará parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti).

Que el artículo 4° o numeral 9 del Decreto-ley 4131 de 2011 establece como función del Servicio Geológico Colombiano la de *identificar, evaluar y establecer zonas de protección que, en razón de la presencia de patrimonio geológico o paleontológico del país, puedan considerarse áreas protegidas*.

Que con el fin de integrar a todas las entidades involucradas en el manejo, cuidado y protección del patrimonio cultural y natural de la Nación, se hace necesaria la inclusión del Servicio Geológico Colombiano en la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial (Cinpm), en relación a su función referente al patrimonio geológico y paleontológico y la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco.

DECRETA:

Artículo 1°. Modificación del artículo 2° del Decreto 1257 de 2012.

El artículo 2° del Decreto 1257 de 2012 quedará así:

“**Artículo 2°. Conformación.** La Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial estará conformada por:

- El Ministro de Cultura o su delegado, quien lo presidirá.
- El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado.
- El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado.
- El Director del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) o su delegado.
- El Director del Servicio Geológico Colombiano o su delegado.

Parágrafo 1°. A las sesiones de la Comisión podrán asistir funcionarios de las entidades que la conforman y que estén relacionados de manera directa con las funciones que desarrollará, quienes tendrán voz, pero no voto.

Parágrafo 2°. Podrán asistir, en calidad de invitados permanentes, el presidente del Comité Nacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) Colombia, el representante de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para Colombia (UICN), el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Cooperación con la Unesco y el Viceministro de Turismo.

Parágrafo 3°. La Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial podrá invitar a sus deliberaciones a funcionarios públicos, o a particulares representantes de las agremiaciones u organizaciones sectoriales, así como a las demás personas y sectores de

la sociedad civil que estime necesario, dependiendo de los temas específicos que se vayan a tratar, quienes participarán con voz, pero sin voto.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Ministra de Relaciones Exteriores,

María Ángela Holguín Cuéllar.

El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,

Luis Gilberto Murillo.

El Ministro de Minas y Energía,

Germán Arce Zapata.

La Ministra de Cultura,

Mariana Garcés Córdoba.

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0679 DE 2016

(septiembre 15)

por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios.

El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 1° del Decreto número 1338 de 2015,

RESUELVE:

Artículo 1°. Nombrar con carácter ordinario en la planta de personal del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la siguiente persona:

DESPACHO DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

CARGO	CÓDIGO	GRADO	NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA
Profesional	3320	01	Lina Paola	Lagos Ruiz	1018408340

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

El Director,

Guillermo Vélez Cabrera.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DECRETOS

DECRETOS NÚMERO 1497 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se da cumplimiento a una providencia del Consejo de Estado y se adoptan otras decisiones.

El Presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere la Ley 909 de 2004 y el artículo 66 de la Ley 4ª de 1913, y

CONSIDERANDO:

Que la doctora Blanca Clemencia Romero Acevedo, identificada con la cédula de ciudadanía número 51760521, fue designada, a través del Decreto 708 del 27 de abril de 2016, como miembro de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para el período institucional comprendido entre el 7 de diciembre de 2014 y el 6 de diciembre de 2018, inclusive, como resultado del proceso de selección público y abierto adelantado por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP).

Que en el proceso de nulidad electoral promovido por el señor Nicolás Rodríguez contra el acto administrativo de designación de la doctora Blanca Clemencia Romero Acevedo en el empleo de Comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Sección Quinta del Consejo de Estado profirió el auto de fecha 21 de julio de 2016, expediente número 11001032800020160004800, con radicado interno número 2016-00048, confirmado mediante providencia del 25 de agosto de 2016 y notificada en el estado de 29 de agosto de 2016, por virtud del cual se ordena suspender provisionalmente el Decreto 708 del 27 de abril de 2016.

Que la suspensión provisional del Decreto 708 de 2016, por el cual se designó a la Doctora Blanca Clemencia Romero Acevedo en el empleo de Comisionada de la Comisión Nacional del Servicio Civil, lleva implícita la imposibilidad transitoria de ejercer el referido cargo, generándose por virtud de la medida cautelar una vacancia temporal que debe ser suplida conforme a la normatividad vigente sobre la materia.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Suspensión.* Suspéndase provisionalmente el nombramiento de la doctora Blanca Clemencia Romero Acevedo, identificada con la cédula de ciudadanía número 51760521, en el cargo de Comisionado de la Comisión Nacional del Servicio Civil, en cumplimiento del auto de fecha 21 de julio de 2016, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral de única instancia, expediente número 11001032800020160004800, con radicado interno 2016-00048, confirmado mediante providencia de fecha 25 de agosto de 2016.

Artículo 2°. *Comunicación.* Comunicar el contenido de este decreto a la doctora Blanca Clemencia Romero Acevedo, a la Sección Quinta, Sala de lo Contencioso Administrativa, del Consejo de Estado y al Presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil, para los fines pertinentes.

Artículo 3°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y contra él no procede ningún recurso, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Liliana Caballero Durán.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 1499 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se designa un Director General ad hoc del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren el artículo 189 numeral 13 de la Constitución Política de Colombia, y

CONSIDERANDO:

Que mediante comunicación recibida el 12 de agosto de 2016 por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la doctora Cristina Plazas Michelsen, Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), identificada con cédula de ciudadanía número 52419907, se declaró impedida para adelantar las actuaciones administrativas que se siguen en contra del Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Akatsinja Wakuaipa de Riohacha, integrantes de la Unión Temporal Watepichin y de la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona Makuira, la Asociación Arregopine -hoy Fundación Asouta Sau Wayuu- y la Fundación Kootirrawa con fundamento en la denuncia penal presentada en su contra el 4 de agosto de 2016 ante la Fiscalía General de la Nación, por presuntas conductas punibles en contra de la administración pública.

Que mediante Resolución 02329 del 24 de agosto de 2016, la Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social aceptó el impedimento presentado por la doctora Cristina Plazas Michelsen, para adelantar las actuaciones administrativas relacionadas con el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Akatsinja Wakuaipa de Riohacha, la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona Makuira, la Asociación Arregopine -hoy Fundación Asouta Sau Wayuu- y la Fundación Kootirrawa, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Que en consecuencia, se hace necesario designar un Director General *ad hoc* del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras, con el fin de que adelante las actuaciones administrativas para las cuales fue aceptado el impedimento a la doctora Cristina Plazas Michelsen.

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. *Designación.* Designase como Directora General *ad hoc* del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras a la doctora Margarita Barraquer Sourdis, identificada con cédula de ciudadanía número 39776077, quien se desempeña actualmente como Subdirectora General de esa entidad, para que conozca y decida las actuaciones administrativas relacionadas con el Cabildo Mayor Regional del Pueblo Zenú, la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu Akatsinja Wakuaipa de Riohacha, la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuu de la Zona Makuira, la Asociación Arregopine -hoy Fundación Asouta Sau Wayuu- y la Fundación Kootirrawa, por las razones expuestas en la parte motiva del presente decreto.

Artículo 2°. *Comunicación.* Comuníquese el contenido del presente decreto a las doctoras Margarita Barraquer Sourdis y Cristina Plazas Michelsen.

Artículo 3°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

La Directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social,

Tatiana Orozco de la Cruz.

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

CIRCULARES EXTERNAS

CIRCULAR EXTERNA NÚMERO 20167000000215 DE 2016

(septiembre 14)

Para: Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada
De: Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Asunto: Derogatoria de la Circular Externa 335 de 2013

De conformidad con el Decreto 2355 de 2006, corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ejercer el control, inspección y vigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad privada para alcanzar sus objetivos, a través de la gestión propia de los asuntos de los vigilados a su cargo, mediante la suscripción de actos administrativos y la toma de decisiones sobre los trámites previstos por la normativa vigente.

Con el fin de adecuar los términos de respuesta frente a los distintos trámites adelantados por la Entidad, fue expedida la Circular Externa 20131200000335 del 30 de diciembre de 2013 en la cual se determinaron los días hábiles dentro de los cuales, bajo ciertos parámetros, serían resueltos los trámites correspondientes.

Sin embargo, en la búsqueda de mecanismos idóneos para la gestión de los asuntos a cargo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no se puede desconocer la legislación procedimental y contencioso administrativa vigente – Ley 1437 de 2011–, norma esta de orden público y de obligatorio cumplimiento expedida por el Legislador para un ámbito normativo concreto, no modificable por la sola voluntad de la Administración.

La Ley 1437 de 2011 en su artículo 2° señala:

“(…) **Ámbito de Aplicación.** Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades.

Las disposiciones de esta Parte Primera no se aplicarán en los procedimientos militares o de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la facultad de libre nombramiento y remoción.

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los mismos se aplicarán las disposiciones de este Código (…)” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Dado que en materia de Vigilancia y Seguridad Privada no existe normatividad administrativa especial que señale un procedimiento distinto al procedimiento ordinario adoptado por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le es dable a esta Entidad sujetarse a los términos procesales en su integridad, a fin de garantizar los postulados constitucionales contenidos en el artículo 209 Superior y en la normativa vigente.

Así mismo, resulta imperioso para esta administración adecuarse a la realidad administrativa y al crecimiento y proliferación del sector, de la misma manera que evidenciar la especificidad y profesionalización que demanda el sector vigilado, entendido este como prestadores de un servicio público esencial a cargo del Estado.

En consecuencia, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en aras de garantizar los principios de transparencia, eficacia y debido proceso; deroga la Circular Externa 20131200000335 del 30 de diciembre de 2013 –“*Tiempos-Trámites Permisos de Estado*”–, quedando por tanto los términos para resolver las actuaciones administrativas sujetos a lo establecido en el procedimiento administrativo contenido en la primera parte del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La presente circular rige a partir de su publicación.

Con toda atención,

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

Carlos Alfonso Mayorga Prieto.
(C. F.).

UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 02694 DE 2016

(septiembre 14)

por la cual se establecen las tarifas por Concepto de Canon Variable por Venta de Combustible, a las empresas que no tiene infraestructura dentro del Aeropuerto de San Andrés.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren los artículos 5° y 9° del Decreto 260 del 28 de enero de 2004, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 4° del Decreto 260 de 2004, constituyen ingresos y patrimonio de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: “3. Las sumas, valores o bienes que la Unidad reciba por la prestación de servicios de cualquier naturaleza y demás operaciones que realice en cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas”.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo 5° del Decreto 260 de 2004, a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil le corresponde: “17. Fijar, recaudar y cobrar las tasas, tarifas y derechos por la prestación de los servicios aeronáuticos y aeroportuarios o los que se generen por las concesiones, autorizaciones, licencias o cualquier otro tipo de ingreso o bien patrimonial”.

Dado que este cobro no se realizaba en el aeropuerto de San Andrés, antes del proceso de Concesión, mediante las facultades establecidas en el contrato de concesión número 7000002-OK, Casyp como Operador del aeropuerto, realizó contrato con la firma Chevron en la que para el año 2007 indicó el valor por tanqueo en el 1% del valor de abastecimiento y en los años sucesivos generó valores constantes que generaron distorsión en los precios de cobro; hecho que a la postre terminó en la imposición de multa por parte de la SIC.

Con ocasión de la retoma de operación del aeropuerto por parte de la Aerocivil, los contratos vigentes que tenía la firma concesionaria continuaron su curso con la Unidad; entre ellos el de abastecimiento de combustible a las aeronaves (suspendido de acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior).

Tal como se evidencia en oficio 1070.092.6.2015028921 de fecha 15 de octubre de 2015, frente al requerimiento de la Dirección Regional Atlántico, se hace necesario definir un método para cobrar por el uso de la infraestructura para realizar las actividades de suministro de combustibles a las aeronaves en el aeropuerto de San Andrés, y que tenga en cuenta el estudio de mercado realizado entre la Oficina de Comercialización en Inversión y la Dirección Regional Atlántico.

Que el Comité de Tarifas, creado mediante la Resolución 1863 del 20 de mayo de 2004, recomendó, como consta en el Acta número 03 del 30 de junio de 2016, aprobar el cobro por concepto de canon variable por venta de combustible en el Aeropuerto de San Andrés.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Establecer para el cobro por concepto de canon variable por venta de combustible el siguiente factor:

Aplicar el factor de 1,5% al valor total de las ventas mensuales abastecidas en el aeropuerto, como canon variable por venta de combustible.

Artículo 2°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 14 de septiembre de 2016.

El Director General,

Alfredo Bocanegra Varón.
(C. F.).

Comisión de Regulación de Energía y Gas

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 125 DE 2016

(agosto 16)

por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “por la cual se modifica el Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013”.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994, y en desarrollo de los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013, y

CONSIDERANDO QUE:

Conforme a lo dispuesto por el artículo 8° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como de acuerdo con lo establecido en el Decreto número 2696 de 2004, el cual ha sido compilado en los numerales 2.2.13.1 y siguientes del Decreto número 1078 de 2015, la Comisión debe hacer público en su página web todos los proyectos de resolución de carácter general que pretenda adoptar.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en su Sesión número 728 del 16 de agosto de 2016, aprobó hacer público el proyecto de resolución “por la cual se modifica el Anexo número 2 de la Resolución CREG 089 de 2013”,

RESUELVE:

Artículo 1°. Hágase público el siguiente proyecto de resolución “por la cual se modifica el Anexo número 2 de la Resolución CREG 089 de 2013”.

Artículo 2°. Se invita a los agentes, a los usuarios, a las autoridades competentes, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que remitan sus observaciones o sugerencias sobre la propuesta, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la vigencia de la presente resolución.

Artículo 3°. La presente resolución rige a partir de su publicación en el *Diario Oficial* y no deroga disposiciones vigentes por tratarse de un acto de trámite.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de agosto de 2016.

El Presidente,

Germán Arce Zapata,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

por la cual se modifica el Anexo número 2 de la Resolución CREG 089 de 2013.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 142 de 1994 y los Decretos números 2253 de 1994 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:

Según lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994, corresponde a las comisiones regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes prestan servicios públicos, para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de posición dominante y produzcan servicios de calidad.

De acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, es función de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), regular el ejercicio de las actividades de los sectores de energía y gas combustible para asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia en el sector de minas y energía, proponer la adopción de las medidas necesarias para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación gradual de los mercados hacia la libre competencia.

El literal b) del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994 determina que corresponde a la CREG expedir regulaciones específicas para el uso eficiente del gas combustible por parte de los consumidores.

De acuerdo con lo establecido en el literal c) del numeral 74.1 del artículo 74 de la Ley 142 de 1994, es función de la CREG establecer el reglamento de operación para regular el funcionamiento del mercado mayorista de gas combustible.

La potestad normativa atribuida a las comisiones de regulación es una manifestación de la intervención del Estado en la economía expresada en la regulación con la finalidad de corregir las fallas del mercado, delimitar la libertad de empresa, preservar la competencia económica, mejorar la prestación de los servicios públicos y proteger los derechos de los usuarios.

El artículo 1° del Decreto número 1710 de 2013 establece que al expedir el reglamento de operación del mercado mayorista de gas natural la CREG podrá “a) (e)stablecer los lineamientos y las condiciones de participación en el mercado mayorista, las modalidades y requisitos mínimos de ofertas y contratos, los procedimientos y los demás aspectos que requieran los mecanismos de comercialización de gas natural y de su transporte en el mercado mayorista” y “b) (s)ñalar la información que será declarada por los participantes del mercado y establecer los mecanismos y procedimientos para obtener, organizar, revisar y divulgar dicha información en forma oportuna para el funcionamiento del mercado mayorista de gas natural”.

El artículo 2° del Decreto número 1710 de 2013 modificó el artículo 20 del Decreto número 2100 de 2011 y dispuso que “(l)a CREG, en desarrollo de su función de expedir el reglamento de operación del mercado mayorista de gas natural de que trata el literal c) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994, establecerá el alcance de los servicios que prestará un gestor de los mecanismos de comercialización y de la información, las reglas para la selección de este gestor y las condiciones de prestación de sus servicios. Estas reglas y condiciones deberán asegurar la neutralidad, transparencia, objetividad e independencia del gestor, así como su experiencia comprobada en las actividades a desarrollar. Así mismo, la CREG determinará la forma y remuneración de los servicios del gestor”. También dispuso en el parágrafo del citado artículo que “(l)a CREG seleccionará al gestor del mercado mediante un concurso sujeto a los principios de transparencia y selección objetiva que garanticen la libre competencia”.

Mediante la Resolución CREG 089 de 2013, y otras que la han modificado y complementado, la CREG reglamentó aspectos comerciales del mercado mayorista de gas natural, que hacen parte del reglamento de operación de gas natural.

En el numeral 2 del artículo 6° de la Resolución CREG 089 de 2013, referente a los servicios del gestor del mercado, se establece que el gestor del mercado deberá:

a) *Recopilar, verificar, publicar y conservar la información sobre el resultado de las negociaciones realizadas en el mercado primario y en el mercado secundario, tal como se establece en el Anexo 2 de esta resolución;*

b) *Recopilar, verificar, publicar y conservar la información sobre el resultado de las negociaciones entre comercializadores y usuarios no regulados, tal como se establece en el Anexo 2 de esta resolución;*

c) *Recopilar, verificar, publicar y conservar la información operativa del sector de gas natural, tal como se establece en el Anexo 2 de esta resolución.*

En este numeral también se establece que “Como parte de este servicio el gestor del mercado publicará a través del BEC la información que se señala en los numerales 1, 2, 3 y 4 del Anexo 2 de esta resolución. Cualquier persona podrá acceder, sin costo alguno, a esta información agregada y publicada por el gestor del mercado. El gestor del mercado podrá prestar otros servicios de información que podrán dar lugar a su cobro”.

De igual forma se establece que todos los participantes del mercado mayorista de gas natural deben reportar la información que allí se menciona y de no hacerlo, esa conducta será tomada por la autoridad competente como práctica restrictiva de la competencia.

Por su parte en el Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013, en desarrollo del servicio al que se hace referencia en el numeral 2 del artículo 6°, se detalla la información que el gestor del mercado recopilará, verificará, publicará y conservará. La declaración de la información señalada en este anexo se hará a partir de la fecha en que el gestor del mercado inicie la prestación de sus servicios.

Mediante la Resolución CREG 094 de 2014 la CREG escogió a la Bolsa Mercantil de Colombia S. A., como gestor del mercado quien comenzó a prestar sus servicios por 5 años a partir del 5 de enero de 2015.

Mediante la Resolución CREG 071 de 1999, y otras que la han modificado y complementado, la CREG adoptó el Reglamento de Transporte de Gas Natural (RUT), en el cual se establecen reglas operativas que contribuyen a la operación eficiente, económica y confiable del Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (SNT).

En los numerales 4.5.1 y 4.5.2 del RUT, modificado por la Resolución CREG 154 de 2008, se establecen los ciclos de nominación de transporte y de suministro de gas.

En el numeral 4.5.1.3 del RUT se establece que “el remitente podrá efectuar, y el CPC respectivo deberá aceptar, por lo menos cuatro (4) renominaciones durante el Día de Gas, siempre y cuando las respectivas solicitudes sean enviadas al menos con seis (6) horas de anticipación al momento en que se requiera la modificación en el flujo de Gas”.

El Gobierno nacional mediante el Decreto número 2100 de 2011, compilado en el Decreto número 1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, estableció los mecanismos para promover el aseguramiento del abastecimiento nacional de gas natural y dictó otras disposiciones.

En el artículo 2.2.2.2.21 del Decreto número 1073 de 2015 se prevé la obligación de los productores y productores comercializadores de gas natural de declarar al Ministerio de Minas y Energía o a quien este determine y con base en toda la información disponible al momento de calcularla: (i) la producción total disponible para la venta, (ii) la producción comprometida debidamente discriminada conforme a lo indicado en el artículo 2.2.2.1.4. del mismo decreto.

Así mismo, en el citado artículo 2.2.2.2.21 se prevé que el productor que sea el operador de cada campo deberá declarar: (i) el potencial de producción de gas natural de cada campo y (ii) el porcentaje de participación de los productores y el Estado en la producción de hidrocarburos de cada campo o de aquellos de explotación integrada.

Análisis realizados por la Comisión sobre la evolución del mercado de gas bajo las reglas de la Resolución CREG 089 de 2013 sugieren la necesidad de establecer indicadores de mercado y operativos que permitan a los agentes, a los usuarios y a las autoridades mejor conocimiento sobre las transacciones que hay en el mercado mayorista de gas natural. Para establecer estos indicadores es necesario que el gestor del mercado cuente con información adicional a aquella establecida en el Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013,

RESUELVE:

Artículo 1°. *Modifíquese el numeral v del literal a) del numeral 1.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013.* El numeral v del literal a) del numeral 1.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 quedará así:

“

v) Punto de entrega de la energía al comprador. Se entenderá por punto de entrega el campo, punto de entrada al SNT o punto del SNT que corresponda al sitio de inicio o terminación de alguno de los tramos de gasoductos definidos para efectos tarifarios. Se deberá indicar el nombre del campo de producción o del punto de importación del cual se contrató la cantidad de energía pactada en el contrato”.

Artículo 2°. *Modifíquese el literal a) del numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013, modificado por el artículo 8° de la Resolución CREG 122 de 2014.* El literal a) del numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 quedará así:

“

a) Suministro

A más tardar a las 12:00 horas del día calendario siguiente al día de gas, los productores-comercializadores que operen campos de producción y los comercializadores de gas importado deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información operativa del día de gas:

i) Cantidad total de energía inyectada en cada punto de entrada al SNT y la cantidad total entregada a través de otros medios de transporte como gasoductos dedicados y gas natural comprimido, expresada en MBTU. Los comercializadores de gas importado y los productores-comercializadores de campos aislados también deberán declarar al gestor del mercado aquella cantidad total de energía que es consumida en el territorio nacional y no pasa por el SNT, expresada en MBTU;

ii) Cantidad de energía exportada, expresada en MBTU, con sujeción a las medidas que el Ministerio de Minas y Energía adopte sobre la materia;

iii) La demás información que determine la CREG”.

Artículo 3°. *Modifíquense los numerales i) y ii) del literal b) del numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013.* Los numerales i) y ii) del literal b) del numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 quedarán así:

“

i) Cantidad de energía recibida en cada punto de entrada o de transferencia del SNT, y cantidad de energía en gas o electricidad consumida por estaciones de compresión en cada uno de los tramos de gasoductos definidos por la CREG en las resoluciones de cargos, expresada en MBTU;

ii) Cantidad de energía tomada en cada punto de salida del respectivo sistema de transporte, expresada en MBTU. Adicionalmente, el transportador declarará el número

del contrato bajo el cual el remitente tomó dicha energía en el respectivo punto de salida. En los puntos de transferencia entre transportadores se deberá declarar la cantidad total transferida al siguiente transportador, expresada en MBTU. Para cada punto de salida y de transferencia entre transportadores el transportador indicará si la cantidad declarada corresponde a medición directa (i.e. punto con telemetría) o indirecta (i.e. punto sin telemetría)".

Artículo 4°. *Adiciónese el literal d) al numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013.* El literal d) del numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 quedará así:

“d) Información sobre nominaciones de suministro de gas

i) Los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información de nominación para el siguiente día de gas, antes de las 15:55 horas del día D-1, por cada campo de producción y para cada una de sus contrapartes así:

– Código contraparte.

– Número de operación asignado por el gestor.

– Nombre de los puntos de entrada donde se inyecta la energía al SNT. Estos puntos de entrada deberán corresponder a los puntos de entrada con código asignado por el gestor del mercado.

– Destino del gas contratado: Costa, interior, zona aislada en costa o interior.

– Cantidad de energía nominada por el remitente expresada en MBTU, determinada por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros;

ii) Los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información de nominación para el siguiente día de gas, antes de las 19:50 horas del día D-1, por cada campo de producción y para cada una de sus contrapartes:

– Código contraparte.

– Número de operación asignado por el gestor.

– Nombre de los puntos de entrada donde se inyecta la energía al SNT. Estos puntos de entrada deberán corresponder a los puntos de entrada con código asignado por el gestor del mercado.

– Destino del gas contratado: Costa, interior, zona aislada en costa o interior.

– Cantidad de energía a suministrar incluida en el programa de suministro de gas definitivo expresada en MBTU, determinada por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros;

iii) Los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información de cada renominación ocurrida durante el día de gas, antes de las 12:00 horas del día D+1, por cada campo de producción y para cada una de sus contrapartes:

– Código contraparte.

– Número de operación asignado por el gestor.

– Nombre de los puntos de entrada donde se inyecta la energía al SNT. Estos puntos de entrada deberán corresponder a los puntos de entrada con código asignado por el gestor del mercado.

– Hora en la cual el productor-comercializador o el comercializador de gas importado recibió la renominación.

– Destino del gas contratado: Costa, interior, zona aislada en costa o interior.

– Cantidad de energía a suministrar incluida en el programa de suministro de gas definitivo (dato final después de la renominación) para el día de gas expresada en MBTU, determinada por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros.

El gestor del mercado definirá el medio y los formatos para la declaración de la información señalada en este literal".

Artículo 5°. *Adiciónese el literal e) al numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013.* El literal e) del numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 quedará así:

“e) Información sobre nominaciones de capacidad de transporte de gas

i) Los transportadores deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información de nominación para el siguiente día de gas, antes de las 16:50 horas del día D-1, la cual debe corresponder al nombre y código que el gestor asignó al punto de inicio y de terminación del servicio de transporte en el SNT, para cada una de sus contrapartes:

– Código contraparte.

– Número de operación asignado por el gestor.

– Nombre del punto de entrada o de transferencia entre transportadores donde el transportador recibe el gas.

– Nombre del punto de salida o de transferencia entre transportadores donde el transportador entrega el gas.

– Destino del gas contratado: Costa, interior, zona aislada en costa o interior.

– Cantidad de energía nominada por el remitente a la hora límite en punto de entrada, de salida o de transferencia, expresada en MBTU y su equivalente en KPC, determinada por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros;

ii) Los transportadores deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información de nominación para el siguiente día de gas, antes de las 20:20 horas del día D-1, la cual debe corresponder al nombre y código que el gestor asignó al punto de inicio y de terminación del servicio de transporte en el SNT, para cada una de sus contrapartes:

– Código contraparte.

– Número de operación asignado por el gestor.

– Nombre del punto de entrada o de transferencia entre transportadores donde el transportador recibe el gas.

– Nombre del punto de salida o de transferencia entre transportadores donde el transportador entrega el gas.

– Destino del gas contratado: Costa, interior, zona aislada en costa o interior.

– Cantidad de energía autorizada por el transportador al remitente incluida en el programa de transporte de gas definitivo por punto de entrada, de salida o de transferencia, expresada en MBTU y su equivalente en KPC, determinada por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros;

iii) Los transportadores deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información de cada renominación ocurrida durante el día de gas, antes de las 12:00 horas del día D+1, la cual debe corresponder al nombre y código que el gestor asignó al punto de inicio y de terminación del servicio de transporte en el SNT, para cada una de sus contrapartes:

– Código contraparte.

– Número de operación asignado por el gestor.

– Nombre del punto de entrada o de transferencia entre transportadores donde el transportador recibe el gas.

– Nombre del punto de salida o de transferencia entre transportadores donde el transportador entrega el gas.

– Destino del gas contratado: Costa, interior, zona aislada en costa o interior.

– Hora en la cual el transportador recibió la renominación.

– Cantidad de energía autorizada por el transportador al remitente incluida en el programa de transporte de gas definitivo (dato final después de la renominación) para el día de gas por punto de entrada, de salida o de transferencia, expresada en MBTU y su equivalente en KPC, determinada por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros.

El gestor del mercado definirá el medio y los formatos para la declaración de la información señalada en este literal".

Artículo 6°. *Adiciónese el literal f) al numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013.* El literal f) del numeral 4.1 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 quedará así:

“f) Otra información operativa

i) Los productores-comercializadores deberán declarar al gestor del mercado la información sobre producción total disponible para la venta, PTDV, y producción comprometida, PC. El productor-comercializador que sea operador del campo deberá declarar al gestor del mercado la información sobre potencial de producción, PP. Los comercializadores de gas importado deberán declarar al gestor del mercado las cantidades importadas disponibles para la venta para el consumo interno, CIDV.

Estas declaraciones se realizarán (i) teniendo en cuenta las definiciones de PTDV, PC, PP y CIDV establecidas en el artículo 2.2.2.1.4 del Decreto número 1073 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan; (ii) con la desagregación, fecha de reporte y período establecido en el segundo inciso del artículo 2.2.2.2.21 del Decreto número 1073 de 2015, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan; (iii) teniendo en cuenta lo previsto en el párrafo 2° del artículo 2.2.2.2.21 del Decreto número 1073 de 2015, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan, para el caso de campos que se encuentren en pruebas extensas o sobre los cuales no se haya declarado su comercialidad.

La primera declaración de los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado se realizará a más tardar el 30 de septiembre de 2016. A partir del 1° de octubre de 2016 estos participantes del mercado actualizarán la información ante el gestor del mercado cuando la actualicen al Ministerio de Minas y Energía en virtud de lo establecido en el artículo 2.2.2.2.22 del Decreto número 1073 de 2015, o aquellos que lo modifiquen o sustituyan;

ii) Los productores-comercializadores y los comercializadores de gas importado deberán declarar al gestor del mercado la siguiente información, cada vez que sea necesario para mantenerla actualizada, por cada fuente de suministro que debe corresponder al código que el gestor asignó al punto de entrada donde el productor inyecta el gas al SNT:

– Tipo de fuente de suministro: planta de importación de gas, campo de producción (menor, aislado, pruebas extensas, yacimiento no convencional, nuevo campo y otros).

– Nombre del punto de entrada: punto de entrada donde se inyecta el gas al SNT que corresponda al nombre y código asignado por el gestor del mercado. En caso de que el punto de entrada esté sobre un sistema de distribución se deberá indicar el nombre del mercado relevante y del municipio donde está ubicado el punto de entrada. Si se trata de una fuente que no tiene conexión al SNT o a un sistema de distribución (e.g. porque entrega gas a sistemas de transporte de gas natural comprimido) el nombre del punto de entrada será igual al nombre de la fuente;

iii) El gestor del mercado tomará la información sobre capacidad máxima de mediano plazo, CMMP, por tramos y grupos de gasoductos definidos en las resoluciones de cargos regulados aprobados por la CREG, publicada en cada una de las resoluciones de cargos.

Los transportadores actualizarán esta información ante el gestor del mercado dentro de las 24 horas siguientes cuando la actualicen en virtud de lo establecido en el párrafo 1° del artículo 4° de la presente resolución, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. Esta actualización se deberá reportar al gestor del mercado dentro de las 24 horas siguientes a la verificación de la misma por parte la firma auditora de que trata el párrafo 1° del artículo 4° de la presente resolución, o aquellas que la modifiquen o sustituyan. En todo caso, cada vez que la CREG adopte nuevos cargos regulados el gestor del mercado tomará la nueva información de CMMP para actualizar su base de datos;

iv) Los transportadores deberán declarar al gestor del mercado, y cada vez que exista una modificación o actualización, la siguiente información para todos los tramos del SNT que corresponda:

– Nombre del tramo o grupo de gasoductos definidos en las resoluciones de cargos regulados aprobados por la CREG para efectos tarifarios. El tramo deberá corresponder con el código asignado por el gestor del mercado.

– Nombre de los puntos de entrada al sistema de transporte con su respectiva georreferenciación dada en longitud, latitud y altitud. El punto de entrada deberá corresponder con el código asignado por el gestor del mercado y se deberá especificar el nombre del tramo de gasoducto sobre el cual se ubica. En caso de que en el punto de entrada se reciba gas de un sistema de distribución se deberá indicar el nombre del mercado relevante de distribución y del municipio donde está ubicado el punto de entrada.

– Nombre de puntos de salida asociados a cada tramo o grupo de gasoductos definidos en las resoluciones de cargos regulados aprobados por la CREG y su respectiva georreferenciación dada en longitud, latitud y altitud. El punto de salida deberá corresponder con el código asignado al punto de salida por el gestor del mercado.

– Georreferenciación dada en longitud, latitud y altitud de (i) el punto sobre el troncal o gasoducto principal del que se desprende un gasoducto ramal; el transportador asignará y declarará un nombre al punto de salida del cual se desprende el respectivo ramal; (ii) el punto sobre el sistema de transporte donde termina un tramo de gasoducto, definido en las resoluciones de cargos regulados aprobados por la CREG, e inicia el siguiente tramo; el transportador asignará y declarará un nombre para este punto; (iii) el punto sobre sistema donde se ubica una estación de compresión; el transportador asignará y declarará un nombre para la respectiva estación de compresión; (iv) punto donde se presenta transferencia de custodia entre transportadores; el transportador asignará y declarará un nombre para este punto y declarará el nombre del transportador a quien le transfiere la custodia del gas en ese punto. Esta información de georreferenciación no será pública y solo podrá ser utilizada por las entidades del Estado que la requieran para el ejercicio de sus funciones;

v) Los comercializadores que atienden usuarios finales deberán declarar al gestor, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la siguiente información:

– Nombre de los mercados relevantes de comercialización en los que atiende usuarios finales.

– Cantidad de energía consumida en el mes anterior por los usuarios atendidos por el comercializador y desagregada para cada uno de sus mercados relevantes de comercialización y por tipo de demanda residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas térmicas u otros, expresada en MBTU;

vi) Los transportadores que posean estaciones de compresión en sus sistemas de transporte deberán declarar al gestor del mercado, dentro de los primeros 10 días hábiles de cada mes, la siguiente información del mes anterior para cada estación de compresión:

– Nombre de la estación de compresión.
– Horas de uso de la estación.
– Factor de carga para cada uno de los días del respectivo mes entendido como la relación entre la potencia entregada y la potencia nominal de la estación.
– Consumo de combustible o energía durante el respectivo mes en MBTU.

El gestor del mercado definirá el medio y los formatos para la declaración de la información señalada en este artículo”.

Artículo 7°. *Modifíquense los numerales ii, vi y vii del literal b) del numeral 4.2 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013.* Los numerales ii), vi) y vii) del literal b) del numeral 4.2 del Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013 quedarán así:

“ii) La cantidad total de energía tomada y la transportada diariamente de cada tramo de gasoducto definido para efectos tarifarios y el total de energía tomada de cada sistema de transporte, expresada en MBTU. El total de energía tomada de cada tramo y del sistema de transporte deberá estar determinada por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros.

El total de energía tomada de cada sistema de transporte corresponderá a la suma de las cantidades tomadas en cada uno de los tramos de gasoductos del respectivo sistema y de las cantidades entregadas en los puntos de transferencia con otros sistemas de transporte. La anterior información se actualizará dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada

mes y deberá mostrar el histórico de los últimos doce (12) meses. Durante los primeros 12 meses de recolección de información se publicará el histórico de los meses sobre los que se haya recolectado información”;

“vi) Las cantidades totales diarias de energía nominada, reportada al gestor antes de las 15:55 horas del día D-1, y la incluida en el programa de suministro de gas definitivo, reportada al gestor antes de las 19:50 horas del día D-1, en cada punto de entrada al SNT, expresadas en MBTU. Estas cantidades deberán estar determinadas por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros.

Esta información se actualizará dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y deberá mostrar el histórico de los últimos doce (12) meses. Durante los primeros 12 meses de recolección de información se publicará el histórico de los meses sobre los que se haya recolectado información”;

“vii) Las cantidades totales diarias de energía nominada, reportada al gestor antes de las 16:50 horas del día D-1, y la autorizada en el programa de transporte de gas definitivo, reportada al gestor antes de las 20:20 horas del día D-1, por cada sistema de transporte, expresadas en MBTU. Estas cantidades deberán estar determinadas por tipo de demanda no regulada la cual deberá ser desagregada en comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, refinería, gas natural vehicular comprimido, plantas de generación térmica u otros y demanda regulada la cual deberá ser desagregada en residencial, comercial, industrial, gas para transportadores, petroquímica, gas natural vehicular comprimido u otros.

Esta información se actualizará dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes y deberá mostrar el histórico de los últimos doce (12) meses. Durante los primeros 12 meses de recolección de información se publicará el histórico de los meses sobre los que se haya recolectado información”.

Artículo 8°. *Vigencia y derogatorias.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial** y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Firma del proyecto,

El Presidente,

Germán Arce Zapata,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 128 DE 2016

(agosto 16)

por la cual se establecen reglas en el Código de Medida para proyectos en etapa de construcción y se establecen otras disposiciones.

La Comisión de Regulación de Energía y Gas, en ejercicio de las atribuciones legales, en especial las conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y los Decretos números 1524 y 2253 de 1994 y 1260 de 2013,

CONSIDERANDO QUE:

El artículo 11 de la Ley 143 de 1994 establece que el Reglamento de operaciones es el “conjunto de principios, criterios y procedimientos establecidos para realizar el planeamiento, la coordinación y la ejecución de la operación del sistema interconectado nacional y para regular el funcionamiento del mercado mayorista de energía eléctrica. El reglamento de operación comprende varios documentos que se organizarán conforme a los temas propios del funcionamiento del sistema interconectado nacional”.

En concordancia con lo anterior, el literal i) del artículo 23 de la Ley 143 de 1994 consagra que le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas con relación al servicio de electricidad establecer el Reglamento de Operación para realizar el planeamiento y la coordinación de la operación del Sistema Interconectado Nacional.

Mediante la Resolución CREG 025 de 1995 la Comisión adoptó en el Anexo General el Código de Redes como parte del Reglamento de Operación del SIN, el cual incluyó el Código de Medida.

En dicho Código se definieron las características técnicas que debían cumplir los equipos de medición, telecomunicaciones y de respaldo, y los requisitos de instalación, pruebas, calibración, certificación, operación y mantenimiento de los mismos.

Mediante la Resolución CREG 038 de 2014 se modificó el Código de Medida con el objetivo de garantizar que las mediciones empleadas con propósitos operativos, comerciales, regulatorios y de vigilancia y control, sean exactas y confiables y se desarrollen de acuerdo con las capacidades tecnológicas actuales.

Mediante la Resolución CREG 047 de 2016 la Comisión amplió el plazo para la realización de las pruebas requeridas en el artículo 10 de la Resolución CREG 038 de 2016 en 12 meses adicionales para los transformadores de medición con tensiones iguales o superiores a 115 kV.

Mediante la Resolución CREG 058 de 2016 la Comisión amplió el plazo para la realización de las pruebas requeridas en el artículo 10 de la Resolución CREG 038 de 2016 en 18 meses adicionales para los transformadores de medición en todos los niveles de tensión.

El artículo 9° de la Resolución CREG 038 de 2014 establece los requisitos de exactitud para los medidores, los transformadores de medida, en caso de que estos sean utilizados, y para los cables de conexión de los nuevos sistemas de medición y los que se adicionen o reemplacen en los sistemas de medición existentes.

El artículo 20 de la Resolución CREG 038 de 2014 define las reglas para la conformación de fronteras de distribución.

Mediante las comunicaciones con Radicados CREG E-2016-005211 y E2016005219 la Comisión recibió la solicitud del Ministerio de Minas y Energía para que se analizara la aplicación de los requisitos de los artículos 9° y 20 de la Resolución CREG 038 de 2014 para aquellos proyectos que estaban en construcción a la fecha de expedición de la resolución.

Con la Resolución CREG 069 de 2016 se puso en conocimiento, para comentarios de los agentes, usuarios y terceros interesados, el proyecto de resolución para la modificación del artículo 9° de la Resolución CREG 038 de 2014 y establecer otras disposiciones.

Se recibieron comentarios de las siguientes entidades con las comunicaciones radicadas en la CREG así: Empresa de Energía de Bogotá S. A. E.S.P., E2016006433; Codensa S. A. E.S.P., E2016006630 y E2016006693, Electricaribe S. A. E.S.P. E2016006631, y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, E2016-006650.

Adicionalmente, mediante comunicación radicada en la CREG bajo el número E-2016-006797 XM, Compañía de Expertos en Mercados S. A. E.S.P., puso de manifiesto a la Comisión, la inconveniencia de adelantar en la fecha establecida por la Resolución CREG 038 de 2014, la primera verificación quinquenal de que trata el artículo 39, por no estar concluidos los plazos otorgados en las Resoluciones CREG 047 y 058 de 2016. Por lo anterior se considera adecuado ampliar el plazo para iniciar la citada verificación.

El análisis de las comunicaciones enviadas se encuentra en el Documento CREG 078 de 2016.

Según lo señalado en el Decreto número 1074 de 2015 “por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Industria y Comercio”, no se informa de esta resolución a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) por cuanto, se respondió el cuestionario establecido por dicha entidad para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, aplicando las reglas allí previstas y la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia.

La Comisión, en Sesión número 728 del 16 de agosto de 2016, acordó expedir la presente resolución.

RESUELVE:

Artículo 1°. *Adiciónese un párrafo al artículo 9° de la Resolución CREG 038 de 2014. El nuevo párrafo del artículo 9° de la Resolución CREG 038 de 2014 quedará así:*

“**Parágrafo 3°.** *Para los proyectos en etapa de construcción a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución, ya sea por procesos de libre concurrencia o por ejecución de un TN o un OR, los requisitos de exactitud para los medidores, los transformadores de medida, en caso de que estos sean utilizados, y los cables de conexión podrán corresponder a los definidos en el Anexo denominado Código de Medida de la Resolución CREG 025 de 1995 y en la Resolución CREG 070 de 1998.*

Se entenderán como proyectos en etapa de construcción los siguientes:

a) Para generación: aquellos registrados en Fase III ante la UPME de acuerdo con la Resolución UPME 0638 de 2007 o aquella que la modifique o remplace;

b) Para proyectos en el STN, STR y SDL: aquellos con concepto aprobado de conexión por parte del OR, TN y UPME, en caso de que este último se requiera de acuerdo con la regulación vigente;

c) Para proyectos adjudicados a través de procesos de libre concurrencia: la fecha de adjudicación de la respectiva convocatoria;

d) Para las ampliaciones en el STN o los proyectos del STR ejecutados directamente por los OR: la fecha de manifestación a la UPME de la intención de construcción”.

Artículo 2°. *Adiciónese un párrafo al artículo 19 de la Resolución CREG 038 de 2014. El párrafo que se adiciona al artículo 19 de la Resolución CREG 038 de 2014 es el siguiente:*

“**Parágrafo.** *En los proyectos en etapa de construcción a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución el punto de medición podrá no coincidir con el punto de conexión, conforme con lo establecido en el anexo denominado Código de Medida de la Resolución CREG 025 de 1995 y el numeral 7 del Anexo General de la Resolución CREG 070 de 1998, siempre y cuando el operador de red haya emitido su concepto de conexión antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución.*

Se entenderán como proyectos en etapa de construcción los siguientes:

a) Para generación: aquellos registrados en fase III ante la UPME de acuerdo con la Resolución UPME 0638 de 2007 o aquella que la modifique o remplace;

b) Para proyectos en el STN, STR y SDL: aquellos con concepto aprobado de conexión por parte del OR, TN y UPME, en caso de que este último se requiera de acuerdo con la regulación vigente;

c) Para proyectos adjudicados a través de procesos de libres concurrencia: la fecha de adjudicación de la respectiva convocatoria;

d) Para las ampliaciones en el STN o los proyectos del STR ejecutados directamente por los OR: la fecha de manifestación a la UPME de la intención de construcción”.

Artículo 3°. *Adiciónese un párrafo al artículo 20 de la Resolución CREG 038 de 2014. El párrafo que se adiciona al artículo 20 de la Resolución CREG 038 de 2014 es el siguiente:*

“**Parágrafo.** *Los proyectos en etapa de construcción a la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución deberán realizar el registro de la frontera comercial señalada en este artículo dentro de los 36 meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución.*

Corresponderá al Representante de la Frontera demostrar y documentar en la hoja de vida de la frontera comercial esta condición”.

Artículo 4°. *Modificar el plazo establecido en el artículo 39 de la Resolución CREG 038 de 2014. El artículo 39 quedará así:*

“**Artículo 39. Verificación quinquenal de los sistemas de medición.** *El ASIC debe contratar cada cinco (5) años la ejecución de una verificación general de las fronteras comerciales con reporte al ASIC, de acuerdo con los criterios y lineamientos señalados en el Anexo 9 de la presente resolución.*

La primera verificación debe realizarse cuarenta y dos (42) meses después de la entrada en vigencia de la presente resolución.

Los costos de las verificaciones deben ser asignados a los agentes del Mercado Mayorista de Energía de acuerdo con los criterios definidos para el pago de los servicios regulados prestados por el ASIC, establecidos en la Resolución CREG 174 de 2013 o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Las empresas que realicen las verificaciones deben cumplir con lo señalado en el Anexo 9 de la presente resolución.

El informe final así como los informes parciales deben ser publicados por el ASIC y remitidos a la CREG y a la SSPD para lo de su competencia, de conformidad con lo señalado en el Anexo 9 de la presente resolución.

Parágrafo. *La CREG podrá solicitar la realización de verificaciones a las fronteras comerciales con reporte al ASIC antes de los cuarenta y dos (42) meses de entrada en vigencia de la presente resolución para analizar el avance en el cumplimiento de los requisitos señalados en este Código”.*

Artículo 5°. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de su publicación en el **Diario Oficial** y deroga aquellas disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 16 de agosto de 2016.

El Presidente,

Germán Arce Zapata,
Ministro de Minas y Energía.

El Director Ejecutivo,

Jorge Pinto Nolla.
(C. F.).

CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1784 DE 2016

(agosto 25)

por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada Pantano Hondo.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 (numeral 1) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 42 (numerales 1 y 27) de la Resolución número 703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación;

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental;

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano;

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2 y 11) de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables;

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, “*por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio*” (antes artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998), dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público;

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 (elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas;

Que el artículo 1° del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social;

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “*salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...*”;

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos;

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 (antes artículo 14 del Decreto número 1541 de 1978) dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado;

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del citado decreto, establece que, para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares;

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 2º del Decreto-ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que dependen del mismo;

Que el Plan de Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estableció como Meta 4.1 Realizar anualmente veinte (20) campañas de monitoreo a las cuencas de segundo orden con cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) y definir o delimitar las zonas de ronda de noventa y seis (96) corrientes priorizadas, dentro del Programa 3, Incidencia de modelos territoriales, la Actividad 4.1.2, número de corrientes con zona de ronda definida o delimitada;

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Suárez, la CAR consideró necesario contar con una Guía metodológica para definir y delimitar las zonas de ronda de cuerpos hídricos, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos;

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015 (antes correspondientes a los artículos 19 y 46 del Decreto número 1640 del 2 de agosto de 2012, “*por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos*”), la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas;

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, “*por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*”, las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “*apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo*”;

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 19 de 2012 dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “*cuando se garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente*”;

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas;

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del territorio, las normas y emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial;

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo 1º del Acuerdo número 16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), “*por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipales*”, las “*áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general*” se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“*Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.*”

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación”;

Que en similar sentido, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 (antes artículo 3º del Decreto número 1449 de 1977, “*por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1º del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974*”), establece que los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del inmueble respectivo, las áreas forestales protectoras, entendiéndose por estas, entre otras, “*una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua*”;

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Radicación 1200-E2-101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: “*... estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad*”;

Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de la CAR expidió la Resolución número 0608 del 18 marzo de 2014, por medio de la cual se adoptó la guía metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual soporta técnicamente la delimitación del cauce natural o cauce permanente del río, con la siguiente definición: la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias, correspondiendo estos niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias a las cotas naturales promedio (líneas o niveles ordinarios) más altas de los últimos quince (15) años;

Que dando alcance a la Meta 4.1 realizar anualmente veinte (20) campañas de monitoreo a las cuencas de segundo orden con cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) y definir o delimitar las zonas de ronda de noventa y seis (96) corrientes priorizadas., dentro del Programa 3, Incidencia de modelos territoriales, la Actividad 4.1.2, número de corrientes con zona de ronda definida o delimitada, la entonces Dirección de Monitoreo, Modelamiento, Laboratorio ambiental, conformó un equipo técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, ingeniería catastral, geología y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de ronda consignadas en dicha meta.

Que dicho grupo elaboró el estudio (Anexo número 1) denominado: *Estudio hidrológico e hidráulico para la determinación de la ronda de la quebrada Pantano Hondo*, donde se, determinaron los niveles máximos anuales presentados en los últimos quince (15) años; se promediaron; se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en la Vereda Páramo de Guerreo del municipio de Zipaquirá, determinando secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de inundación de la quebrada Pantano Hondo, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente;

Que la quebrada Pantano Hondo, por ser de cuarto orden, y dada su importancia geográfica, económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes;

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a determinar la zona de ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo, buscando su articulación con los planes de ordenamiento territorial del municipio de Zipaquirá, pertenecientes a la cuenca; y por supuesto, con el proceso de ordenación de la cuenca;

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 4º, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados;

Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: “*todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley*”. Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo, que cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de conservación consagrados en el presente acto;

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar como zona de ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce, con un área total de noventa y un mil ochocientos veintiséis punto setenta y seis (91826,76) metros cuadrados, aproximadamente. Dicha franja está limitada por las siguientes coordenadas:

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1003579,186	1057946,549	Izquierdo	1004823,141	1058234,666
Derecho	1003578,625	1057951,039	Izquierdo	1004822,108	1058233,847
Derecho	1003578,789	1057955,798	Izquierdo	1004820,57	1058232,812
Derecho	1003578,989	1057957,545	Izquierdo	1004816,603	1058230,592
Derecho	1003579,846	1057962,01	Izquierdo	1004812,346	1058228,996
Derecho	1003581,369	1057966,294	Izquierdo	1004807,897	1058228,063
Derecho	1003583,522	1057970,299	Izquierdo	1004803,358	1058227,812
Derecho	1003586,255	1057973,933	Izquierdo	1004798,833	1058228,25
Derecho	1003589,506	1057977,112	Izquierdo	1004794,426	1058229,367
Derecho	1003593,2	1057979,763	Izquierdo	1004790,239	1058231,137
Derecho	1003597,252	1057981,825	Izquierdo	1004786,367	1058233,52
Derecho	1003601,569	1057983,251	Izquierdo	1004782,899	1058236,46
Derecho	1003613,705	1057986,201	Izquierdo	1004779,916	1058239,89
Derecho	1003618,312	1057986,947	Izquierdo	1004775,555	1058245,748
Derecho	1003619,607	1057987,027	Izquierdo	1004773,601	1058248,727
Derecho	1003630,309	1057987,449	Izquierdo	1004772,013	1058251,917
Derecho	1003642,947	1057988,515	Izquierdo	1004770,815	1058255,273
Derecho	1003648,868	1057996,938	Izquierdo	1004769,567	1058259,559
Derecho	1003649,737	1057998,113	Izquierdo	1004760,153	1058265,574
Derecho	1003653,227	1058001,88	Izquierdo	1004757,279	1058266,93
Derecho	1003676,549	1058022,837	Izquierdo	1004733,336	1058278,37
Derecho	1003698,147	1058042,215	Izquierdo	1004712,009	1058287,956
Derecho	1003701,774	1058045,001	Izquierdo	1004707,679	1058290,375
Derecho	1003706,085	1058047,339	Izquierdo	1004702,9	1058290,256
Derecho	1003721,638	1058054,192	Izquierdo	1004680,467	1058283,519
Derecho	1003722,456	1058056,682	Izquierdo	1004675,84	1058282,519
Derecho	1003724,044	1058060,514	Izquierdo	1004671,114	1058282,26
Derecho	1003726,145	1058064,089	Izquierdo	1004666,406	1058282,747
Derecho	1003728,72	1058067,341	Izquierdo	1004661,833	1058283,968
Derecho	1003745,484	1058085,742	Izquierdo	1004657,51	1058285,893
Derecho	1003755,19	1058101,416	Izquierdo	1004652,852	1058288,425
Derecho	1003757,566	1058104,727	Izquierdo	1004640,813	1058287,83
Derecho	1003760,368	1058107,685	Izquierdo	1004636,854	1058287,896
Derecho	1003763,546	1058110,236	Izquierdo	1004632,299	1058288,63
Derecho	1003767,039	1058112,333	Izquierdo	1004619,893	1058291,621
Derecho	1003770,785	1058113,937	Izquierdo	1004619,424	1058291,739
Derecho	1003794,128	1058122,108	Izquierdo	1004597,01	1058297,639
Derecho	1003809,222	1058134,72	Izquierdo	1004588,633	1058296,069
Derecho	1003814,322	1058146,97	Izquierdo	1004585,583	1058295,657
Derecho	1003816,325	1058150,929	Izquierdo	1004583,679	1058295,561
Derecho	1003818,89	1058154,55	Izquierdo	1004569,392	1058295,287
Derecho	1003821,961	1058157,752	Izquierdo	1004544,134	1058287,743
Derecho	1003825,471	1058160,466	Izquierdo	1004540,434	1058286,888
Derecho	1003829,343	1058162,633	Izquierdo	1004536,656	1058286,508
Derecho	1003833,492	1058164,205	Izquierdo	1004532,86	1058286,609
Derecho	1003837,828	1058165,148	Izquierdo	1004529,107	1058287,187
Derecho	1003851,417	1058167,064	Izquierdo	1004489,356	1058295,926
Derecho	1003856,036	1058167,355	Izquierdo	1004485,808	1058296,938
Derecho	1003860,645	1058166,933	Izquierdo	1004482,411	1058298,379
Derecho	1003865,134	1058165,806	Izquierdo	1004463,294	1058307,911
Derecho	1003869,396	1058164,002	Izquierdo	1004451,645	1058311,228
Derecho	1003900,698	1058147,801	Izquierdo	1004437,659	1058302,602
Derecho	1003944,725	1058128,357	Izquierdo	1004412,914	1058286,691
Derecho	1003947,891	1058126,728	Izquierdo	1004386,692	1058269,011
Derecho	1003950,841	1058124,735	Izquierdo	1004368,02	1058256,131
Derecho	1003953,534	1058122,408	Izquierdo	1004367,512	1058255,788
Derecho	1003980,382	1058096,266	Izquierdo	1004343,296	1058239,805
Derecho	1003982,231	1058097,215	Izquierdo	1004340,209	1058234,835
Derecho	1004007,618	1058108,209	Izquierdo	1004337,778	1058231,467
Derecho	1004031,392	1058120,737	Izquierdo	1004334,905	1058228,467
Derecho	1004033,327	1058121,67	Izquierdo	1004331,646	1058225,893
Derecho	1004038,17	1058123,309	Izquierdo	1004328,063	1058223,793
Derecho	1004042,079	1058125,743	Izquierdo	1004304,489	1058212,094
Derecho	1004043,723	1058126,723	Izquierdo	1004257,887	1058182,377
Derecho	1004070,02	1058141,292	Izquierdo	1004255,319	1058180,912
Derecho	1004098,51	1058157,037	Izquierdo	1004231,573	1058168,878
Derecho	1004128,461	1058174,312	Izquierdo	1004215,356	1058157,138
Derecho	1004158,741	1058191,88	Izquierdo	1004193,346	1058141,024
Derecho	1004179,043	1058206,775	Izquierdo	1004192,033	1058140,115
Derecho	1004197,818	1058220,412	Izquierdo	1004191,081	1058139,518
Derecho	1004199,039	1058221,253	Izquierdo	1004159,817	1058120,726
Derecho	1004202,209	1058223,059	Izquierdo	1004128,803	1058102,862
Derecho	1004225,395	1058234,46	Izquierdo	1004099,955	1058086,933
Derecho	1004269,885	1058265,175	Izquierdo	1004074,219	1058072,73
Derecho	1004270,52	1058265,602	Izquierdo	1004065,228	1058067,132

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1004275,04	1058268,031	Izquierdo	1004062,211	1058065,483
Derecho	1004291,601	1058275,064	Izquierdo	1004059,019	1058064,204
Derecho	1004292,985	1058277,725	Izquierdo	1004055,698	1058063,313
Derecho	1004294,947	1058280,926	Izquierdo	1004037,303	1058052,372
Derecho	1004297,294	1058283,858	Izquierdo	1004034,196	1058050,762
Derecho	1004299,989	1058286,472	Izquierdo	1004007,765	1058038,963
Derecho	1004302,989	1058288,73	Izquierdo	1004007,021	1058038,646
Derecho	1004332,002	1058307,838	Izquierdo	1003994,978	1058033,701
Derecho	1004347,901	1058320,903	Izquierdo	1003990,765	1058032,325
Derecho	1004372,236	1058340,893	Izquierdo	1003986,395	1058031,585
Derecho	1004374,87	1058342,826	Izquierdo	1003981,964	1058031,496
Derecho	1004377,552	1058344,387	Izquierdo	1003977,569	1058032,062
Derecho	1004405,397	1058358,715	Izquierdo	1003961,999	1058035,248
Derecho	1004431,947	1058372,499	Izquierdo	1003958,022	1058036,351
Derecho	1004435,827	1058374,178	Izquierdo	1003954,235	1058037,99
Derecho	1004439,905	1058375,295	Izquierdo	1003950,708	1058040,133
Derecho	1004444,099	1058375,827	Izquierdo	1003947,509	1058042,741
Derecho	1004448,327	1058375,765	Izquierdo	1003914,98	1058073,718
Derecho	1004452,504	1058375,108	Izquierdo	1003874,535	1058091,108
Derecho	1004477,318	1058369,286	Izquierdo	1003872,907	1058091,873
Derecho	1004481,523	1058368,393	Izquierdo	1003859,947	1058098,451
Derecho	1004484,605	1058367,594	Izquierdo	1003858,231	1058095,841
Derecho	1004487,522	1058366,317	Izquierdo	1003856,2	1058093,467
Derecho	1004491,283	1058364,475	Izquierdo	1003853,887	1058091,368
Derecho	1004505,198	1058358,061	Izquierdo	1003828,978	1058070,541
Derecho	1004533,59	1058353,898	Izquierdo	1003826,123	1058068,428
Derecho	1004561,007	1058358,177	Izquierdo	1003823,038	1058066,668
Derecho	1004580,435	1058361,322	Izquierdo	1003819,767	1058065,284
Derecho	1004582,753	1058361,605	Izquierdo	1003801,837	1058058,921
Derecho	1004586,857	1058361,664	Izquierdo	1003796,195	1058049,997
Derecho	1004600,406	1058360,928	Izquierdo	1003794,512	1058047,602
Derecho	1004601,256	1058360,869	Izquierdo	1003793,636	1058046,529
Derecho	1004605,069	1058360,305	Izquierdo	1003778,617	1058028,968
Derecho	1004631,512	1058354,634	Izquierdo	1003774,883	1058019,534
Derecho	1004645,655	1058354,292	Izquierdo	1003772,837	1058015,348
Derecho	1004661,166	1058354,512	Izquierdo	1003770,167	1058011,53
Derecho	1004665,423	1058354,27	Izquierdo	1003766,938	1058008,17
Derecho	1004669,603	1058353,426	Izquierdo	1003763,228	1058005,352
Derecho	1004673,621	1058351,998	Izquierdo	1003759,126	1058003,141
Derecho	1004677,399	1058350,345	Izquierdo	1003735,186	1057992,55
Derecho	1004694,588	1058353,94	Izquierdo	1003717,632	1057976,82
Derecho	1004698,253	1058354,473	Izquierdo	1003698,172	1057959,394
Derecho	1004703,235	1058354,471	Izquierdo	1003692,921	1057949,967
Derecho	1004724,698	1058352,653	Izquierdo	1003689,019	1057943,147
Derecho	1004729,228	1058351,925	Izquierdo	1003686,637	1057939,599
Derecho	1004733,59	1058350,502	Izquierdo	1003683,776	1057936,426
Derecho	1004737,678	1058348,419	Izquierdo	1003680,493	1057933,691
Derecho	1004741,392	1058345,725	Izquierdo	1003676,855	1057931,451
Derecho	1004744,643	1058342,487	Izquierdo	1003672,935	1057929,75
Derecho	1004757,36	1058338,174	Izquierdo	1003668,814	1057928,623
Derecho	1004783,406	1058329,522	Izquierdo	1003664,574	1057928,093
Derecho	1004787,207	1058327,968	Izquierdo	1003634,547	1057926,498
Derecho	1004790,758	1058325,906	Izquierdo	1003626,168	1057925,598
Derecho	1004793,991	1058323,376	Izquierdo	1003615,198	1057923,123
Derecho	1004796,846	1058320,424	Izquierdo	1003610,484	1057922,447
Derecho	1004799,267	1058317,107	Izquierdo	1003605,723	1057922,525
Derecho	1004801,209	1058313,489	Izquierdo	1003601,035	1057923,355
Derecho	1004813,392	1058306,409	Izquierdo	1003596,536	1057924,917
Derecho	1004816,853	1058304,06	Izquierdo	1003592,342	1057927,171
Derecho	1004819,955	1058301,252	Izquierdo	1003588,557	1057930,06
Derecho	1004822,635	1058298,04	Izquierdo	1003585,277	1057933,512
Derecho	1004824,842	1058294,486	Izquierdo	1003582,584	1057937,439
Derecho	1004826,534	1058290,66	Izquierdo	1003580,546	1057941,742
Derecho	1004827,677	1058286,636	Izquierdo	1003579,215	1057946,314
Derecho	1004829,912	1058275,993	Izquierdo	1003579,186	1057946,549
Derecho	1004830,728	1058274,696			
Derecho	1004832,877	1058270,614			
Derecho	1004834,375	1058266,251			
Derecho	1004835,186	1058261,711			
Derecho	1004835,291	1058257,099			
Derecho	1004834,689	1058252,526			
Derecho	1004833,392	1058248,1			
Derecho	1004831,433	1058243,924			
Derecho	1004828,856	1058240,098			
Derecho	1004825,723	1058236,713			
Derecho	1004823,141	1058234,666			

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico (Anexo número 1) y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes coordenadas (Anexo número 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. **Ámbito de aplicación espacial.** La zona determinada como ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo número 2, que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. **Objeto.** El objetivo fundamental de la ronda de protección, definida mediante la presente resolución, es la conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Artículo 4°. **Régimen de usos de la zona de ronda de protección.** El régimen de usos de la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.

Parágrafo 1°. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2°. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3°. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. **Parámetros para los usos condicionados.** La implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros:

- Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar;
- Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR);
- No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural;
- La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo;
- El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. **Zonas de alto riesgo no mitigable.** Bajo ninguna circunstancia se permitirá la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control por la Administración Municipal de Zipaquirá, perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. **Aumento de cobertura boscosa.** Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados en la ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. **Determinante ambiental.** De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. **Limitación.** La presente resolución conlleva una afectación del derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el artículo 3°.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. **Sanciones.** Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. **Inscripción.** Solicitar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda de protección de la quebrada Pantano Hondo.

Artículo 12. **Comunicaciones.** Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía del municipio en el cual se localiza el área objeto de la presente resolución, para el caso el municipio de Zipaquirá.

Artículo 13. **Publicación.** Publicar el presente acto administrativo en el **Diario Oficial** y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. **Vigencia.** La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el **Diario Oficial**.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Néstor Guillermo Franco González.

(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1880 DE 2016

(septiembre 6)

por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada Chuncesia.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 (numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 42 (numerales 1 y 27) de la Resolución número 703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aprobaron los estatutos de la CAR,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación;

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental;

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano;

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2° y 11) de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables;

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio” (antes artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998), dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público;

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 (elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas;

Que el artículo 1° del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo; asimismo, dispone que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social;

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...”;

Que asimismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos;

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 (antes artículo 14 del Decreto número 1541 de 1978) dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado;

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del citado decreto, establece que, para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán alindar zonas

aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares;

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 2º del Decreto-ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que dependen del mismo;

Que el Plan de Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estableció como meta 4.1 realizar anualmente 20 campañas de monitoreo a las cuencas de segundo orden con cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) y definir o delimitar las zonas de ronda de 96 corrientes priorizadas, dentro del Programa 3, incidencia de modelos territoriales, la actividad 4.1.2, numero de corrientes con zona de ronda definida o delimitada;

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 1979, 2006 y 2010 en la sabana de Bogotá y la cuenca del río Suárez, la CAR consideró necesario contar con una guía metodológica para definir y delimitar las zonas de ronda de cuerpos hídricos, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos;

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015 (antes correspondientes a los artículos 19 y 46 del Decreto número 1640 del 2 de agosto de 2012, “por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos”), la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas;

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”, las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo”;

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 19 de 2012 dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “cuando se garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente”;

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas;

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial;

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo 1º del Acuerdo número 16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), “por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipales”, las “áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general” se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación”;

Que en similar sentido, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 (antes artículo 3º del Decreto número 1449 de 1977, “por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1º del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974”), establece que los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del inmueble respectivo, las áreas forestales protectoras, entendiéndose por estas, entre otras, “una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua”;

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Radicación 1200-E2-101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: “... estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad”;

Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de la CAR expidió la Resolución número 0608 del 18 marzo de 2014, por medio de la cual se adoptó la guía metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual soporta técnicamente la delimitación del cauce natural o cauce permanente del río, con la siguiente definición: la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias, correspondiendo estos niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias a las cotas naturales promedio (líneas o niveles ordinarios) más altas de los últimos quince (15) años;

Que dando alcance a lo consignado como meta 4.1, realizar anualmente veinte (20) campañas de monitoreo a las cuencas de segundo orden con cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) y definir o delimitar las zonas de ronda de noventa y seis (96) corrientes priorizadas, dentro del programa 3, incidencia de modelos territoriales, la actividad 4.1.2, número de corrientes con zona de ronda definida o delimitada, la Dirección de Monitoreo, Modelamiento, Laboratorio ambiental conformó un equipo técnico de profesionales especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, ingeniería catastral, geología y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de ronda consignadas en dicha meta, con base en lo establecido en la Resolución número 608 del 18 de marzo de 2014;

Que dicho grupo elaboró el estudio (anexo número 1) denominado: *Estudio hidrológico e hidráulico para la determinación de la ronda de la quebrada Chuncesia*, donde se, determinaron los niveles máximos anuales presentados en los últimos quince (15) años; se promediaron; se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las veredas Atraviesas, La Toma, Aposentos, Buita, La Florida, La Ramada y Media Luna del municipio de Cucunubá, determinando secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de inundación de la quebrada Chuncesia, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente;

Que la quebrada Chuncesia, por ser de cuarto orden, y dada su importancia geográfica, económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes;

Que en consideración con lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a determinar la ronda de protección de la quebrada Chuncesia, buscando su articulación con los planes de ordenamiento territorial del municipio de Cucunubá, y por supuesto, con el proceso de ordenación de la cuenca;

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 4º, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la quebrada Chuncesia, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados;

Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”. Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda de protección de la quebrada Chuncesia, que cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de conservación consagrados en el presente acto;

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1º. Determinar como zona de ronda de protección de la quebrada Chuncesia, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce, con un área total de quinientos cincuenta y siete mil novecientos siete punto ochenta y ocho (557.907,88) metros cuadrados, aproximadamente. Dicha franja está limitada por las siguientes coordenadas:

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1035933,108	1070278,892	Izquierdo	1035935,938	1070214,387
Derecho	1035923,109	1070278,770	Izquierdo	1035925,953	1070214,769
Derecho	1035913,110	1070278,648	Izquierdo	1035915,984	1070215,550
Derecho	1035903,194	1070277,580	Izquierdo	1035906,116	1070214,471
Derecho	1035893,419	1070275,471	Izquierdo	1035896,290	1070212,613
Derecho	1035883,644	1070273,362	Izquierdo	1035886,457	1070210,792
Derecho	1035873,823	1070271,523	Izquierdo	1035876,553	1070209,413
Derecho	1035863,900	1070270,284	Izquierdo	1035866,648	1070208,034
Derecho	1035853,977	1070269,045	Izquierdo	1035856,744	1070206,655
Derecho	1035844,054	1070267,805	Izquierdo	1035846,839	1070205,276
Derecho	1035834,131	1070266,566	Izquierdo	1035836,935	1070203,897
Derecho	1035824,208	1070265,327	Izquierdo	1035827,031	1070202,518

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1035814,250	1070265,624	Izquierdo	1035817,048	1070202,504
Derecho	1035804,280	1070266,403	Izquierdo	1035807,063	1070203,060
Derecho	1035794,311	1070267,183	Izquierdo	1035797,079	1070203,616
Derecho	1035784,341	1070267,962	Izquierdo	1035787,094	1070204,172
Derecho	1035776,868	1070272,414	Izquierdo	1035777,110	1070204,728
Derecho	1035773,537	1070281,843	Izquierdo	1035767,125	1070205,285
Derecho	1035770,207	1070291,272	Izquierdo	1035757,149	1070205,968
Derecho	1035766,876	1070300,701	Izquierdo	1035747,523	1070208,483
Derecho	1035763,546	1070310,130	Izquierdo	1035739,209	1070213,940
Derecho	1035760,215	1070319,559	Izquierdo	1035732,808	1070221,596
Derecho	1035756,881	1070328,987	Izquierdo	1035727,127	1070229,812
Derecho	1035753,544	1070338,414	Izquierdo	1035723,423	1070239,093
Derecho	1035750,207	1070347,841	Izquierdo	1035719,995	1070248,488
Derecho	1035746,870	1070357,267	Izquierdo	1035716,595	1070257,892
Derecho	1035742,219	1070366,077	Izquierdo	1035713,196	1070267,296
Derecho	1035734,965	1070372,908	Izquierdo	1035709,797	1070276,701
Derecho	1035726,808	1070378,693	Izquierdo	1035706,398	1070286,105
Derecho	1035718,652	1070384,479	Izquierdo	1035702,998	1070295,510
Derecho	1035710,496	1070390,264	Izquierdo	1035699,586	1070304,910
Derecho	1035702,310	1070396,007	Izquierdo	1035696,070	1070314,271
Derecho	1035693,983	1070401,546	Izquierdo	1035692,553	1070323,632
Derecho	1035685,657	1070407,084	Izquierdo	1035686,571	1070331,082
Derecho	1035677,331	1070412,622	Izquierdo	1035678,383	1070336,823
Derecho	1035669,002	1070418,156	Izquierdo	1035670,194	1070342,563
Derecho	1035660,672	1070423,689	Izquierdo	1035661,937	1070348,204
Derecho	1035652,927	1070429,916	Izquierdo	1035653,658	1070353,812
Derecho	1035646,067	1070437,192	Izquierdo	1035645,379	1070359,421
Derecho	1035639,207	1070444,468	Izquierdo	1035637,133	1070365,077
Derecho	1035632,161	1070451,551	Izquierdo	1035628,987	1070370,877
Derecho	1035624,304	1070457,737	Izquierdo	1035620,841	1070376,678
Derecho	1035616,431	1070463,903	Izquierdo	1035613,112	1070382,989
Derecho	1035608,558	1070470,069	Izquierdo	1035606,211	1070390,227
Derecho	1035600,640	1070476,173	Izquierdo	1035599,311	1070397,465
Derecho	1035591,729	1070480,600	Izquierdo	1035592,411	1070404,703
Derecho	1035581,905	1070482,421	Izquierdo	1035584,620	1070410,960
Derecho	1035572,022	1070483,944	Izquierdo	1035576,750	1070417,129
Derecho	1035562,474	1070486,368	Izquierdo	1035568,582	1070422,602
Derecho	1035554,003	1070491,682	Izquierdo	1035558,685	1070424,034
Derecho	1035545,777	1070497,312	Izquierdo	1035548,788	1070425,467
Derecho	1035538,548	1070504,221	Izquierdo	1035539,321	1070428,529
Derecho	1035531,318	1070511,130	Izquierdo	1035530,770	1070433,703
Derecho	1035524,096	1070518,047	Izquierdo	1035522,313	1070439,041
Derecho	1035516,903	1070524,993	Izquierdo	1035513,857	1070444,378
Derecho	1035509,710	1070531,940	Izquierdo	1035505,928	1070450,434
Derecho	1035502,523	1070538,893	Izquierdo	1035498,725	1070457,370
Derecho	1035495,338	1070545,849	Izquierdo	1035491,521	1070464,306
Derecho	1035488,154	1070552,805	Izquierdo	1035484,317	1070471,242
Derecho	1035480,958	1070559,749	Izquierdo	1035477,125	1070478,190
Derecho	1035475,365	1070567,866	Izquierdo	1035469,936	1070485,140
Derecho	1035471,979	1070577,179	Izquierdo	1035462,745	1070492,089
Derecho	1035470,135	1070587,007	Izquierdo	1035455,551	1070499,036
Derecho	1035467,841	1070596,723	Izquierdo	1035448,358	1070505,982
Derecho	1035463,004	1070605,435	Izquierdo	1035441,165	1070512,930
Derecho	1035457,261	1070613,622	Izquierdo	1035433,975	1070519,879
Derecho	1035451,519	1070621,809	Izquierdo	1035427,324	1070527,315
Derecho	1035445,511	1070629,790	Izquierdo	1035422,646	1070536,147
Derecho	1035437,942	1070636,317	Izquierdo	1035418,160	1070545,084
Derecho	1035430,201	1070642,648	Izquierdo	1035414,101	1070554,203
Derecho	1035422,459	1070648,978	Izquierdo	1035412,014	1070563,977
Derecho	1035414,718	1070655,308	Izquierdo	1035410,171	1070573,806
Derecho	1035406,976	1070661,638	Izquierdo	1035404,491	1070582,009
Derecho	1035399,235	1070667,968	Izquierdo	1035398,165	1070589,659
Derecho	1035391,081	1070673,752	Izquierdo	1035390,420	1070595,985
Derecho	1035382,755	1070679,285	Izquierdo	1035382,674	1070602,310
Derecho	1035373,991	1070684,100	Izquierdo	1035374,929	1070608,635
Derecho	1035365,226	1070688,914	Izquierdo	1035367,183	1070614,960
Derecho	1035356,461	1070693,729	Izquierdo	1035359,353	1070621,172
Derecho	1035347,696	1070698,543	Izquierdo	1035351,065	1070626,761
Derecho	1035338,931	1070703,357	Izquierdo	1035342,293	1070631,563
Derecho	1035330,166	1070708,171	Izquierdo	1035333,522	1070636,365
Derecho	1035321,401	1070712,985	Izquierdo	1035324,750	1070641,167
Derecho	1035312,636	1070717,799	Izquierdo	1035315,979	1070645,970
Derecho	1035303,503	1070721,864	Izquierdo	1035307,207	1070650,772
Derecho	1035294,305	1070725,787	Izquierdo	1035298,436	1070655,574
Derecho	1035285,107	1070729,710	Izquierdo	1035289,665	1070660,377
Derecho	1035275,908	1070733,633	Izquierdo	1035280,730	1070664,843
Derecho	1035266,697	1070737,525	Izquierdo	1035271,530	1070668,763

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1035257,485	1070741,416	Izquierdo	1035262,330	1070672,682
Derecho	1035248,273	1070745,308	Izquierdo	1035253,131	1070676,602
Derecho	1035239,079	1070749,241	Izquierdo	1035243,929	1070680,516
Derecho	1035229,887	1070753,179	Izquierdo	1035234,726	1070684,429
Derecho	1035220,695	1070757,117	Izquierdo	1035225,523	1070688,342
Derecho	1035211,503	1070761,056	Izquierdo	1035216,323	1070692,262
Derecho	1035202,546	1070765,478	Izquierdo	1035207,125	1070696,184
Derecho	1035193,750	1070770,236	Izquierdo	1035197,926	1070700,106
Derecho	1035184,955	1070774,995	Izquierdo	1035188,727	1070704,028
Derecho	1035176,160	1070779,753	Izquierdo	1035179,580	1070708,064
Derecho	1035167,612	1070784,874	Izquierdo	1035170,794	1070712,838
Derecho	1035159,981	1070791,337	Izquierdo	1035162,012	1070717,621
Derecho	1035152,350	1070797,800	Izquierdo	1035153,230	1070722,405
Derecho	1035144,719	1070804,263	Izquierdo	1035144,448	1070727,188
Derecho	1035137,088	1070810,725	Izquierdo	1035135,704	1070732,036
Derecho	1035129,457	1070817,188	Izquierdo	1035127,871	1070738,239
Derecho	1035121,740	1070823,543	Izquierdo	1035120,226	1070744,685
Derecho	1035112,849	1070828,030	Izquierdo	1035112,581	1070751,131
Derecho	1035103,477	1070831,518	Izquierdo	1035104,936	1070757,577
Derecho	1035094,105	1070835,006	Izquierdo	1035097,291	1070764,023
Derecho	1035084,733	1070838,494	Izquierdo	1035089,645	1070770,469
Derecho	1035076,171	1070843,653	Izquierdo	1035080,632	1070774,580
Derecho	1035067,625	1070848,847	Izquierdo	1035071,271	1070778,098
Derecho	1035059,079	1070854,038	Izquierdo	1035061,911	1070781,616
Derecho	1035050,519	1070859,208	Izquierdo	1035052,960	1070786,021
Derecho	1035041,959	1070864,378	Izquierdo	1035044,415	1070791,215
Derecho	1035032,906	1070868,540	Izquierdo	1035035,869	1070796,409
Derecho	1035023,039	1070870,047	Izquierdo	1035027,322	1070801,600
Derecho	1035013,091	1070871,064	Izquierdo	1035018,760	1070806,767
Derecho	1035003,143	1070872,081	Izquierdo	1035009,514	1070809,886
Derecho	1034994,053	1070875,203	Izquierdo	1034999,566	1070810,908
Derecho	1034986,226	1070881,428	Izquierdo	1034989,619	1070811,929
Derecho	1034978,400	1070887,652	Izquierdo	1034979,690	1070813,092
Derecho	1034970,573	1070893,877	Izquierdo	1034970,293	1070816,345
Derecho	1034962,747	1070900,102	Izquierdo	1034962,178	1070822,164
Derecho	1034955,565	1070907,038	Izquierdo	1034954,305	1070828,330
Derecho	1034948,604	1070914,217	Izquierdo	1034946,432	1070834,495
Derecho	1034941,642	1070921,396	Izquierdo	1034938,560	1070840,661
Derecho	1034936,958	1070930,181	Izquierdo	1034930,687	1070846,827
Derecho	1034934,050	1070939,594	Izquierdo	1034922,814	1070852,993
Derecho	1034932,919	1070949,530	Izquierdo	1034915,418	1070859,697
Derecho	1034931,788	1070959,466	Izquierdo	1034908,555	1070866,969
Derecho	1034930,657	1070969,402	Izquierdo	1034901,691	1070874,242
Derecho	1034929,526	1070979,338	Izquierdo	1034894,828	1070881,514
Derecho	1034928,395	1070989,274	Izquierdo	1034888,755	1070889,412
Derecho	1034925,894	1070998,914	Izquierdo	1034884,238	1070898,330
Derecho	1034920,448	1071007,240	Izquierdo	1034879,816	1070907,300
Derecho	1034913,551	1071014,478	Izquierdo	1034875,673	1070916,390
Derecho	1034906,620	1071021,686	Izquierdo	1034873,868	1070926,201
Derecho	1034899,688	1071028,894	Izquierdo	1034872,735	1070936,137
Derecho	1034893,042	1071036,274	Izquierdo	1034871,603	1070946,072
Derecho	1034890,202	1071045,840	Izquierdo	1034870,471	1070956,008
Derecho	1034888,763	1071055,736	Izquierdo	1034869,339	1070965,944
Derecho	1034887,323	1071065,632	Izquierdo	1034866,402	1070975,035
Derecho	1034885,778	1071075,509	Izquierdo	1034859,502	1070982,273
Derecho	1034883,060	1071085,101	Izquierdo	1034852,602	1070989,511
Derecho	1034879,696	1071094,467	Izquierdo	1034845,702	1070996,749
Derecho	1034873,505	1071102,250	Izquierdo	1034839,589	1071004,618
Derecho	1034865,872	1071108,707	Izquierdo	1034835,896	1071013,884
Derecho	1034858,189	1071115,107	Izquierdo	1034832,774	1071023,384
Derecho	1034850,269	1071121,191	Izquierdo	1034830,154	1071033,021
Derecho	1034841,029	1071124,887	Izquierdo	1034826,167	1071039,328
Derecho	1034833,694	1071131,439	Izquierdo	1034816,244	1071038,699
Derecho	1034826,387	1071138,267	Izquierdo	1034806,673	1071041,413
Derecho	1034818,341	1071144,183	Izquierdo	1034798,569	1071047,177
Derecho	1034809,735	1071149,248	Izquierdo	1034792,627	1071055,175
Derecho	1034803,981	1071155,844	Izquierdo	1034787,496	1071063,758
Derecho	1034799,346	1071164,641	Izquierdo	1034781,127	1071071,388
Derecho	1034792,184	1071171,563	Izquierdo	1034775,397	1071079,535
Derecho	1034784,291	1071177,704	Izquierdo	1034772,485	1071089,042
Derecho	1034776,398	1071183,844	Izquierdo	1034769,045	1071096,514
Derecho	1034768,505	1071189,984	Izquierdo	1034759,770	1071100,160
Derecho	1034760,612	1071196,124	Izquierdo	1034752,225	1071106,646
Derecho	1034752,719	1071202,265	Izquierdo	1034746,347	1071114,730
Derecho	1034744,827	1071208,405	Izquierdo	1034741,479	1071123,421
Derecho	1034736,621	1071214,097	Izquierdo	1034739,512	1071133,165
Derecho	1034728,036	1071219,227	Izquierdo	1034732,213	1071139,539

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1034719,452	1071224,356	Izquierdo	1034724,199	1071145,520
Derecho	1034710,868	1071229,485	Izquierdo	1034716,184	1071151,501
Derecho	1034705,695	1071237,903	Izquierdo	1034708,170	1071157,482
Derecho	1034700,885	1071246,670	Izquierdo	1034699,811	1071162,947
Derecho	1034696,157	1071255,482	Izquierdo	1034691,229	1071168,080
Derecho	1034691,450	1071264,304	Izquierdo	1034682,646	1071173,213
Derecho	1034686,683	1071273,092	Izquierdo	1034674,064	1071178,346
Derecho	1034680,895	1071281,239	Izquierdo	1034665,762	1071183,885
Derecho	1034674,874	1071289,222	Izquierdo	1034659,390	1071191,523
Derecho	1034668,852	1071297,206	Izquierdo	1034654,537	1071200,265
Derecho	1034662,553	1071304,970	Izquierdo	1034649,727	1071209,032
Derecho	1034656,103	1071312,611	Izquierdo	1034644,918	1071217,800
Derecho	1034649,653	1071320,253	Izquierdo	1034640,172	1071226,602
Derecho	1034643,509	1071328,139	Izquierdo	1034635,432	1071235,408
Derecho	1034637,483	1071336,119	Izquierdo	1034630,286	1071243,957
Derecho	1034631,391	1071344,046	Izquierdo	1034624,392	1071252,035
Derecho	1034624,513	1071351,301	Izquierdo	1034618,497	1071260,113
Derecho	1034617,537	1071358,466	Izquierdo	1034612,095	1071267,792
Derecho	1034610,561	1071365,631	Izquierdo	1034605,640	1071275,430
Derecho	1034603,544	1071372,753	Izquierdo	1034599,202	1071283,081
Derecho	1034595,351	1071378,385	Izquierdo	1034593,190	1071291,071
Derecho	1034586,040	1071382,020	Izquierdo	1034587,195	1071299,075
Derecho	1034576,774	1071385,778	Izquierdo	1034580,864	1071306,798
Derecho	1034567,523	1071389,575	Izquierdo	1034574,025	1071314,093
Derecho	1034558,272	1071393,372	Izquierdo	1034567,185	1071321,388
Derecho	1034549,021	1071397,170	Izquierdo	1034558,428	1071325,831
Derecho	1034539,770	1071400,967	Izquierdo	1034549,190	1071329,659
Derecho	1034530,609	1071404,975	Izquierdo	1034539,952	1071333,488
Derecho	1034521,457	1071409,006	Izquierdo	1034530,714	1071337,316
Derecho	1034512,306	1071413,036	Izquierdo	1034521,476	1071341,145
Derecho	1034503,154	1071417,067	Izquierdo	1034512,251	1071345,005
Derecho	1034494,782	1071422,363	Izquierdo	1034503,066	1071348,958
Derecho	1034487,410	1071429,051	Izquierdo	1034493,880	1071352,912
Derecho	1034481,468	1071437,094	Izquierdo	1034484,695	1071356,865
Derecho	1034475,526	1071445,137	Izquierdo	1034475,510	1071360,819
Derecho	1034469,087	1071452,753	Izquierdo	1034466,462	1071365,057
Derecho	1034460,833	1071458,341	Izquierdo	1034458,513	1071371,084
Derecho	1034452,118	1071463,245	Izquierdo	1034450,875	1071377,539
Derecho	1034443,403	1071468,149	Izquierdo	1034443,389	1071384,153
Derecho	1034434,688	1071473,053	Izquierdo	1034437,043	1071391,871
Derecho	1034425,973	1071477,957	Izquierdo	1034430,919	1071399,777
Derecho	1034417,542	1071483,315	Izquierdo	1034424,326	1071407,149
Derecho	1034409,343	1071489,038	Izquierdo	1034415,706	1071412,219
Derecho	1034401,143	1071494,762	Izquierdo	1034407,087	1071417,290
Derecho	1034392,943	1071500,486	Izquierdo	1034398,468	1071422,360
Derecho	1034384,070	1071505,032	Izquierdo	1034389,839	1071427,414
Derecho	1034374,761	1071508,683	Izquierdo	1034380,993	1071432,076
Derecho	1034365,451	1071512,334	Izquierdo	1034372,146	1071436,739
Derecho	1034356,142	1071515,986	Izquierdo	1034363,300	1071441,401
Derecho	1034346,832	1071519,637	Izquierdo	1034354,325	1071445,802
Derecho	1034337,523	1071523,289	Izquierdo	1034345,234	1071449,970
Derecho	1034327,843	1071525,638	Izquierdo	1034336,144	1071454,137
Derecho	1034317,855	1071525,310	Izquierdo	1034327,054	1071458,305
Derecho	1034307,875	1071524,683	Izquierdo	1034317,754	1071461,374
Derecho	1034297,925	1071524,563	Izquierdo	1034307,768	1071460,846
Borde	1034288,091	1071526,378	Borde	1034297,780	1071460,419
Derecho	1034278,257	1071528,193	Izquierdo	1034287,867	1071461,579
Derecho	1034268,423	1071530,008	Izquierdo	1034278,004	1071463,228
Derecho	1034258,589	1071531,823	Izquierdo	1034268,141	1071464,878
Derecho	1034248,755	1071533,638	Izquierdo	1034258,278	1071466,527
Derecho	1034238,912	1071535,402	Izquierdo	1034248,415	1071468,177
Derecho	1034229,061	1071537,123	Izquierdo	1034238,552	1071469,826
Derecho	1034219,211	1071538,845	Izquierdo	1034228,700	1071471,537
Derecho	1034209,360	1071540,566	Izquierdo	1034218,864	1071473,339
Derecho	1034199,509	1071542,287	Izquierdo	1034209,027	1071475,141
Derecho	1034189,659	1071544,009	Izquierdo	1034199,191	1071476,943
Derecho	1034179,858	1071545,981	Izquierdo	1034189,355	1071478,745
Derecho	1034170,100	1071548,168	Izquierdo	1034179,518	1071480,547
Derecho	1034160,342	1071550,355	Izquierdo	1034169,691	1071482,395
Derecho	1034150,584	1071552,542	Izquierdo	1034159,887	1071484,366
Derecho	1034140,826	1071554,729	Izquierdo	1034150,083	1071486,337
Derecho	1034131,068	1071556,916	Izquierdo	1034140,279	1071488,308
Derecho	1034121,336	1071559,198	Izquierdo	1034130,475	1071490,279
Derecho	1034111,894	1071562,487	Izquierdo	1034120,672	1071492,249
Derecho	1034102,492	1071565,893	Izquierdo	1034110,868	1071494,220
Derecho	1034093,089	1071569,298	Izquierdo	1034101,125	1071496,451
Derecho	1034083,687	1071572,703	Izquierdo	1034091,636	1071499,584

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1034074,285	1071576,108	Izquierdo	1034082,271	1071503,091
Derecho	1034064,882	1071579,513	Izquierdo	1034072,906	1071506,598
Derecho	1034055,480	1071582,918	Izquierdo	1034063,540	1071510,104
Derecho	1034046,111	1071586,414	Izquierdo	1034054,175	1071513,611
Derecho	1034036,756	1071589,946	Izquierdo	1034044,810	1071517,117
Derecho	1034027,400	1071593,479	Izquierdo	1034035,445	1071520,624
Derecho	1034018,045	1071597,011	Izquierdo	1034026,083	1071524,137
Derecho	1034008,690	1071600,544	Izquierdo	1034016,725	1071527,663
Derecho	1033999,335	1071604,077	Izquierdo	1034007,367	1071531,188
Derecho	1033991,480	1071610,198	Izquierdo	1033998,009	1071534,713
Derecho	1033983,766	1071616,561	Izquierdo	1033988,651	1071538,238
Derecho	1033976,052	1071622,924	Izquierdo	1033979,293	1071541,764
Derecho	1033968,337	1071629,287	Izquierdo	1033969,961	1071545,351
Derecho	1033960,419	1071635,383	Izquierdo	1033961,533	1071550,638
Derecho	1033952,041	1071640,841	Izquierdo	1033954,209	1071557,446
Derecho	1033943,662	1071646,300	Izquierdo	1033946,913	1071564,284
Derecho	1033935,283	1071651,758	Izquierdo	1033939,616	1071571,122
Derecho	1033926,904	1071657,217	Izquierdo	1033932,319	1071577,960
Derecho	1033918,861	1071663,040	Izquierdo	1033924,743	1071584,420
Derecho	1033912,728	1071670,939	Izquierdo	1033916,074	1071589,405
Derecho	1033906,595	1071678,837	Izquierdo	1033907,405	1071594,389
Derecho	1033900,462	1071686,736	Izquierdo	1033898,736	1071599,374
Derecho	1033894,329	1071694,634	Izquierdo	1033890,067	1071604,359
Derecho	1033888,196	1071702,533	Izquierdo	1033881,398	1071609,344
Derecho	1033882,063	1071710,431	Izquierdo	1033873,695	1071615,643
Derecho	1033875,930	1071718,330	Izquierdo	1033867,517	1071623,501
Derecho	1033871,182	1071727,109	Izquierdo	1033861,450	1071631,450
Derecho	1033866,633	1071736,014	Izquierdo	1033855,382	1071639,399
Derecho	1033862,085	1071744,920	Izquierdo	1033849,315	1071647,348
Derecho	1033857,536	1071753,825	Izquierdo	1033843,248	1071655,298
Derecho	1033852,988	1071762,731	Izquierdo	1033837,181	1071663,247
Derecho	1033848,439	1071771,637	Izquierdo	1033831,113	1071671,196
Derecho	1033843,890	1071780,542	Izquierdo	1033825,046	1071679,145
Derecho	1033839,342	1071789,448	Izquierdo	1033819,308	1071687,324
Derecho	1033834,802	1071798,358	Izquierdo	1033814,607	1071696,150
Derecho	1033830,269	1071807,272	Izquierdo	1033809,905	1071704,976
Derecho	1033825,736	1071816,185	Izquierdo	1033805,203	1071713,801
Derecho	1033821,203	1071825,099	Izquierdo	1033800,502	1071722,627
Derecho	1033816,670	1071834,013	Izquierdo	1033795,800	1071731,453
Derecho	1033812,137	1071842,926	Izquierdo	1033791,098	1071740,279
Derecho	1033807,604	1071851,840	Izquierdo	1033786,396	1071749,105
Derecho	1033803,072	1071860,753	Izquierdo	1033781,695	1071757,930
Derecho	1033798,539	1071869,667	Izquierdo	1033777,085	1071766,803
Derecho	1033794,006	1071878,581	Izquierdo	1033772,598	1071775,741
Derecho	1033789,431	1071887,472	Izquierdo	1033768,112	1071784,678
Derecho	1033784,261	1071896,032	Izquierdo	1033763,626	1071793,615
Derecho	1033779,076	1071904,582	Izquierdo	1033759,140	1071802,552
Derecho	1033773,913	1071913,146	Izquierdo	1033754,653	1071811,489
Derecho	1033769,853	1071922,275	Izquierdo	1033750,167	1071820,427
Derecho	1033766,182	1071931,576	Izquierdo	1033745,681	1071829,364
Derecho	1033762,560	1071940,897	Izquierdo	1033741,195	1071838,301
Derecho	1033758,937	1071950,218	Izquierdo	1033736,708	1071847,238
Derecho	1033756,990	1071959,911	Izquierdo	1033732,101	1071856,106
Derecho	1033756,319	1071969,889	Izquierdo	1033726,612	1071864,465
Derecho	1033755,649	1071979,866	Izquierdo	1033721,124	1071872,824
Derecho	1033754,978	1071989,844	Izquierdo	1033715,924	1071881,363
Derecho	1033754,308	1071999,821	Izquierdo	1033711,540	1071890,329
Derecho	1033753,637	1072009,799	Izquierdo	1033707,976	1071899,672
Derecho	1033752,967	1072019,776	Izquierdo	1033704,834	1071909,163
Derecho	1033752,297	1072029,754	Izquierdo	1033701,816	1071918,697
Derecho	1033751,626	1072039,731	Izquierdo	1033698,797	1071928,230
Derecho	1033750,956	1072049,709	Izquierdo	1033695,779	1071937,764
Derecho	1033750,285	1072059,686	Izquierdo	1033694,164	1071947,603
Derecho	1033749,615	1072069,664	Izquierdo	1033693,467	1071957,579
Derecho	1033748,947	1072079,641	Izquierdo	1033692,770	1071967,555
Derecho	1033748,282	1072089,619	Izquierdo	1033692,072	1071977,530
Derecho	1033747,617	1072099,597	Izquierdo	1033691,375	1071987,506
Derecho	1033746,952	1072109,575	Izquierdo	1033690,678	1071997,482
Derecho	1033746,287	1072119,553	Izquierdo	1033689,980	1072007,457
Derecho	1033745,622	1072129,531	Izquierdo	1033689,283	1072017,433
Derecho	1033744,957	1072139,508	Izquierdo	1033688,586	1072027,409
Derecho	1033744,292	1072149,486	Izquierdo	1033687,889	1072037,384
Derecho	1033743,627	1072159,464	Izquierdo	1033687,191	1072047,360
Derecho	1033742,962	1072169,442	Izquierdo	1033686,494	1072057,336
Derecho	1033742,288	1072179,419	Izquierdo	1033685,797	1072067,311
Derecho	1033741,602	1072189,396	Izquierdo	1033685,107	1072077,287
Derecho	1033740,916	1072199,372	Izquierdo	1033684,422	1072087,264

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1033740,231	1072209,349	Izquierdo	1033683,737	1072097,240
Derecho	1033739,545	1072219,325	Izquierdo	1033683,052	1072107,217
Derecho	1033738,859	1072229,302	Izquierdo	1033682,366	1072117,193
Derecho	1033738,173	1072239,278	Izquierdo	1033681,681	1072127,170
Derecho	1033737,487	1072249,255	Izquierdo	1033680,996	1072137,146
Derecho	1033737,022	1072259,243	Izquierdo	1033680,311	1072147,123
Derecho	1033736,590	1072269,234	Izquierdo	1033679,626	1072157,099
Derecho	1033736,157	1072279,225	Izquierdo	1033678,941	1072167,076
Derecho	1033735,725	1072289,215	Izquierdo	1033678,228	1072177,050
Derecho	1033735,293	1072299,206	Izquierdo	1033677,500	1072187,024
Derecho	1033734,860	1072309,197	Izquierdo	1033676,773	1072196,997
Derecho	1033734,428	1072319,187	Izquierdo	1033676,045	1072206,971
Derecho	1033735,024	1072329,164	Izquierdo	1033675,317	1072216,944
Derecho	1033735,727	1072339,139	Izquierdo	1033674,589	1072226,918
Derecho	1033736,430	1072349,115	Izquierdo	1033673,861	1072236,891
Derecho	1033737,132	1072359,090	Izquierdo	1033673,134	1072246,865
Derecho	1033737,835	1072369,065	Izquierdo	1033672,639	1072256,853
Derecho	1033738,664	1072379,030	Izquierdo	1033672,160	1072266,841
Derecho	1033739,550	1072388,991	Izquierdo	1033671,680	1072276,830
Derecho	1033740,436	1072398,952	Izquierdo	1033671,200	1072286,818
Derecho	1033741,323	1072408,912	Izquierdo	1033670,721	1072296,806
Derecho	1033742,209	1072418,873	Izquierdo	1033670,241	1072306,795
Derecho	1033743,095	1072428,834	Izquierdo	1033669,762	1072316,783
Derecho	1033743,994	1072438,793	Izquierdo	1033669,929	1072326,770
Derecho	1033744,973	1072448,745	Izquierdo	1033670,603	1072336,747
Derecho	1033745,953	1072458,697	Izquierdo	1033671,278	1072346,724
Derecho	1033746,932	1072468,649	Izquierdo	1033671,952	1072356,702
Derecho	1033747,912	1072478,601	Izquierdo	1033672,627	1072366,679
Derecho	1033748,891	1072488,553	Izquierdo	1033673,301	1072376,656
Derecho	1033749,871	1072498,505	Izquierdo	1033674,161	1072386,619
Derecho	1033750,850	1072508,456	Izquierdo	1033675,036	1072396,581
Derecho	1033751,893	1072518,401	Izquierdo	1033675,911	1072406,542
Derecho	1033753,068	1072528,332	Izquierdo	1033676,785	1072416,504
Derecho	1033754,243	1072538,263	Izquierdo	1033677,660	1072426,466
Derecho	1033755,418	1072548,194	Izquierdo	1033678,535	1072436,427
Derecho	1033756,593	1072558,124	Izquierdo	1033679,438	1072446,386
Derecho	1033757,983	1072568,025	Izquierdo	1033680,411	1072456,339
Derecho	1033759,573	1072577,898	Izquierdo	1033681,384	1072466,291
Derecho	1033761,163	1072587,771	Izquierdo	1033682,357	1072476,244
Derecho	1033762,753	1072597,644	Izquierdo	1033683,330	1072486,197
Derecho	1033764,342	1072607,516	Izquierdo	1033684,304	1072496,149
Derecho	1033766,734	1072617,210	Izquierdo	1033685,277	1072506,102
Derecho	1033768,451	1072627,057	Izquierdo	1033686,250	1072516,054
Derecho	1033769,980	1072636,940	Izquierdo	1033687,361	1072525,991
Derecho	1033771,509	1072646,822	Izquierdo	1033688,759	1072535,892
Derecho	1033773,038	1072656,705	Izquierdo	1033690,157	1072545,794
Derecho	1033776,277	1072666,115	Izquierdo	1033691,554	1072555,696
Derecho	1033780,036	1072675,381	Izquierdo	1033692,952	1072565,598
Derecho	1033783,794	1072684,648	Izquierdo	1033694,362	1072575,498
Derecho	1033787,553	1072693,915	Izquierdo	1033695,803	1072585,394
Derecho	1033791,312	1072703,181	Izquierdo	1033697,244	1072595,289
Derecho	1033795,071	1072712,448	Izquierdo	1033698,685	1072605,185
Derecho	1033798,830	1072721,715	Izquierdo	1033700,126	1072615,080
Derecho	1033802,588	1072730,981	Izquierdo	1033701,606	1072624,970
Derecho	1033806,347	1072740,248	Izquierdo	1033703,425	1072634,802
Derecho	1033810,106	1072749,515	Izquierdo	1033705,539	1072644,576
Derecho	1033813,865	1072758,781	Izquierdo	1033707,653	1072654,350
Derecho	1033817,624	1072768,048	Izquierdo	1033709,767	1072664,124
Derecho	1033821,383	1072777,315	Izquierdo	1033711,882	1072673,898
Derecho	1033825,233	1072786,543	Izquierdo	1033715,064	1072683,361
Derecho	1033829,467	1072795,587	Izquierdo	1033718,760	1072692,653
Derecho	1033834,597	1072804,171	Izquierdo	1033722,455	1072701,945
Derecho	1033839,726	1072812,755	Izquierdo	1033726,151	1072711,237
Derecho	1033844,856	1072821,339	Izquierdo	1033729,847	1072720,529
Derecho	1033849,985	1072829,923	Izquierdo	1033733,543	1072729,821
Derecho	1033855,115	1072838,508	Izquierdo	1033737,238	1072739,113
Derecho	1033860,244	1072847,092	Izquierdo	1033740,934	1072748,405
Derecho	1033865,374	1072855,676	Izquierdo	1033744,630	1072757,697
Derecho	1033870,503	1072864,260	Izquierdo	1033748,326	1072766,989
Derecho	1033875,633	1072872,844	Izquierdo	1033752,021	1072776,281
Derecho	1033880,762	1072881,428	Izquierdo	1033755,717	1072785,573
Derecho	1033885,892	1072890,013	Izquierdo	1033759,413	1072794,865
Derecho	1033891,021	1072898,597	Izquierdo	1033763,108	1072804,157
Derecho	1033896,151	1072907,181	Izquierdo	1033766,664	1072813,501
Derecho	1033901,280	1072915,765	Izquierdo	1033770,074	1072822,897
Derecho	1033906,410	1072924,349	Izquierdo	1033774,787	1072831,701
Derecho	1033911,539	1072932,934	Izquierdo	1033779,840	1072840,331

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1033916,669	1072941,518	Izquierdo	1033784,892	1072848,960
Derecho	1033921,798	1072950,102	Izquierdo	1033789,945	1072857,590
Derecho	1033926,928	1072958,686	Izquierdo	1033794,998	1072866,219
Derecho	1033932,057	1072967,270	Izquierdo	1033800,051	1072874,849
Derecho	1033937,187	1072975,854	Izquierdo	1033805,104	1072883,478
Derecho	1033942,316	1072984,439	Izquierdo	1033810,157	1072892,108
Derecho	1033947,446	1072993,023	Izquierdo	1033815,210	1072900,737
Derecho	1033952,575	1073001,607	Izquierdo	1033820,263	1072909,367
Derecho	1033957,446	1073010,332	Izquierdo	1033825,316	1072917,996
Derecho	1033959,903	1073019,973	Izquierdo	1033830,368	1072926,626
Derecho	1033959,041	1073029,891	Izquierdo	1033835,421	1072935,255
Derecho	1033954,996	1073038,995	Izquierdo	1033840,474	1072943,885
Derecho	1033949,684	1073047,468	Izquierdo	1033845,527	1072952,514
Derecho	1033944,373	1073055,940	Izquierdo	1033850,580	1072961,144
Derecho	1033939,061	1073064,413	Izquierdo	1033855,633	1072969,773
Derecho	1033933,749	1073072,886	Izquierdo	1033860,686	1072978,403
Derecho	1033928,437	1073081,358	Izquierdo	1033865,739	1072987,032
Derecho	1033923,126	1073089,831	Izquierdo	1033870,792	1072995,662
Derecho	1033917,814	1073098,304	Izquierdo	1033875,845	1073004,291
Derecho	1033912,502	1073106,776	Izquierdo	1033880,897	1073012,921
Derecho	1033907,274	1073115,300	Izquierdo	1033885,950	1073021,550
Derecho	1033902,089	1073123,851	Izquierdo	1033880,904	1073029,993
Derecho	1033896,905	1073132,402	Izquierdo	1033875,535	1073038,429
Derecho	1033891,721	1073140,954	Izquierdo	1033870,166	1073046,866
Derecho	1033886,536	1073149,505	Izquierdo	1033864,797	1073055,303
Derecho	1033881,352	1073158,056	Izquierdo	1033859,429	1073063,739
Derecho	1033876,167	1073166,607	Izquierdo	1033854,060	1073072,176
Derecho	1033870,983	1073175,158	Izquierdo	1033848,612	1073080,562
Derecho	1033865,799	1073183,709	Izquierdo	1033843,130	1073088,925
Derecho	1033860,614	1073192,261	Izquierdo	1033837,647	1073097,288
Derecho	1033855,739	1073200,979	Izquierdo	1033832,165	1073105,651
Derecho	1033851,429	1073210,002	Izquierdo	1033826,682	1073114,014
Derecho	1033847,119	1073219,026	Izquierdo	1033821,200	1073122,377
Derecho	1033842,810	1073228,050	Izquierdo	1033815,717	1073130,740
Derecho	1033838,500	1073237,073	Izquierdo	1033810,235	1073139,104
Derecho	1033834,190	1073246,097	Izquierdo	1033804,753	1073147,467
Derecho	1033829,880	1073255,120	Izquierdo	1033799,270	1073155,830
Derecho	1033825,571	1073264,144	Izquierdo	1033794,012	1073164,325
Derecho	1033821,261	1073273,168	Izquierdo	1033790,141	1073173,542
Derecho	1033816,951	1073282,191	Izquierdo	1033786,381	1073182,808
Derecho	1033812,641	1073291,215	Izquierdo	1033782,620	1073192,075
Derecho	1033807,972	1073300,046	Izquierdo	1033778,860	1073201,341
Derecho	1033802,650	1073308,512	Izquierdo	1033775,100	1073210,607
Derecho	1033797,329	1073316,978	Izquierdo	1033771,340	1073219,873
Derecho	1033792,007	1073325,445	Izquierdo	1033767,580	1073229,139
Derecho	1033786,686	1073333,911	Izquierdo	1033763,820	1073238,405
Derecho	1033781,364	1073342,378	Izquierdo	1033760,060	1073247,671
Derecho	1033776,042	1073350,844	Izquierdo	1033753,802	1073253,740
Derecho	1033770,721	1073359,311	Izquierdo	1033743,901	1073255,146
Derecho	1033765,399	1073367,777	Izquierdo	1033734,001	1073256,551
Derecho	1033760,078	1073376,243	Izquierdo	1033724,100	1073257,957
Derecho	1033754,756	1073384,710	Izquierdo	1033714,199	1073259,362
Derecho	1033749,434	1073393,176	Izquierdo	1033704,298	1073260,768
Derecho	1033744,537	1073401,890	Izquierdo	1033694,398	1073262,173
Derecho	1033739,790	1073410,692	Izquierdo	1033684,497	1073263,579
Derecho	1033735,044	1073419,494	Izquierdo	1033674,596	1073264,985
Derecho	1033730,298	1073428,296	Izquierdo	1033664,695	1073266,390
Derecho	1033725,552	1073437,098	Izquierdo	1033654,795	1073267,796
Derecho	1033720,806	1073445,900	Izquierdo	1033644,894	1073269,201
Derecho	1033716,089	1073454,717	Izquierdo	1033634,993	1073270,607
Derecho	1033711,381	1073463,540	Izquierdo	1033625,095	1073272,028
Derecho	1033706,674	1073472,362	Izquierdo	1033615,633	1073275,123
Derecho	1033701,966	1073481,185	Izquierdo	1033607,709	1073281,141
Derecho	1033697,258	1073490,008	Izquierdo	1033602,194	1073289,418
Derecho	1033692,551	1073498,830	Izquierdo	1033599,019	1073298,892
Derecho	1033687,843	1073507,653	Izquierdo	1033596,144	1073308,470
Derecho	1033683,136	1073516,475	Izquierdo	1033593,270	1073318,048
Derecho	1033678,428	1073525,298	Izquierdo	1033590,396	1073327,627
Derecho	1033674,792	1073534,609	Izquierdo	1033587,522	1073337,205
Derecho	1033671,222	1073543,950	Izquierdo	1033584,648	1073346,783
Derecho	1033667,653	1073553,291	Izquierdo	1033581,774	1073356,361
Derecho	1033664,083	1073562,632	Izquierdo	1033578,900	1073365,939
Derecho	1033660,514	1073571,974	Izquierdo	1033576,025	1073375,517
Derecho	1033656,944	1073581,315	Izquierdo	1033573,288	1073385,134
Derecho	1033653,375	1073590,656	Izquierdo	1033570,602	1073394,767
Derecho	1033649,655	1073599,934	Izquierdo	1033567,916	1073404,400
Derecho	1033644,564	1073608,530	Izquierdo	1033565,231	1073414,032

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1033639,256	1073617,005	Izquierdo	1033562,545	1073423,665
Derecho	1033633,948	1073625,480	Izquierdo	1033559,859	1073433,297
Derecho	1033628,641	1073633,955	Izquierdo	1033557,174	1073442,930
Derecho	1033623,333	1073642,430	Izquierdo	1033554,488	1073452,563
Derecho	1033618,026	1073650,906	Izquierdo	1033551,802	1073462,195
Derecho	1033612,718	1073659,381	Izquierdo	1033549,117	1073471,828
Derecho	1033607,411	1073667,856	Izquierdo	1033544,919	1073480,766
Derecho	1033602,103	1073676,331	Izquierdo	1033539,363	1073489,080
Derecho	1033596,795	1073684,807	Izquierdo	1033533,806	1073497,395
Derecho	1033591,488	1073693,282	Izquierdo	1033528,250	1073505,709
Derecho	1033592,275	1073703,086	Izquierdo	1033522,694	1073514,023
Derecho	1033593,573	1073713,001	Izquierdo	1033517,137	1073522,337
Derecho	1033594,872	1073722,916	Izquierdo	1033511,581	1073530,652
Derecho	1033596,170	1073732,832	Izquierdo	1033504,431	1073537,623
Derecho	1033597,469	1073742,747	Izquierdo	1033497,180	1073544,509
Derecho	1033598,767	1073752,662	Izquierdo	1033489,928	1073551,395
Derecho	1033600,066	1073762,578	Izquierdo	1033482,677	1073558,281
Derecho	1033601,364	1073772,493	Izquierdo	1033475,425	1073565,167
Derecho	1033602,663	1073782,408	Izquierdo	1033468,174	1073572,053
Derecho	1033603,961	1073792,324	Izquierdo	1033460,922	1073578,939
Derecho	1033605,260	1073802,239	Izquierdo	1033453,671	1073585,825
Derecho	1033606,558	1073812,154	Izquierdo	1033446,419	1073592,711
Derecho	1033607,857	1073822,070	Izquierdo	1033439,168	1073599,597
Derecho	1033609,155	1073831,985	Izquierdo	1033432,478	1073606,989
Derecho	1033610,454	1073841,900	Izquierdo	1033427,372	1073615,582
Derecho	1033611,752	1073851,816	Izquierdo	1033422,407	1073624,262
Derecho	1033613,051	1073861,731	Izquierdo	1033417,443	1073632,943
Derecho	1033613,403	1073871,687	Izquierdo	1033412,478	1073641,623
Derecho	1033610,706	1073881,251	Izquierdo	1033407,514	1073650,304
Derecho	1033605,034	1073889,418	Izquierdo	1033402,549	1073658,985
Derecho	1033597,890	1073896,413	Izquierdo	1033397,585	1073667,665
Derecho	1033590,704	1073903,367	Izquierdo	1033392,620	1073676,346
Derecho	1033583,518	1073910,321	Izquierdo	1033387,656	1073685,027
Derecho	1033576,332	1073917,275	Izquierdo	1033382,691	1073693,707
Derecho	1033569,146	1073924,229	Izquierdo	1033377,727	1073702,388
Derecho	1033561,959	1073931,183	Izquierdo	1033372,762	1073711,068
Derecho	1033554,773	1073938,137	Izquierdo	1033367,797	1073719,749
Derecho	1033547,587	1073945,091	Izquierdo	1033362,833	1073728,430
Derecho	1033540,401	1073952,045	Izquierdo	1033357,868	1073737,110
Derecho	1033533,215	1073958,999	Izquierdo	1033353,518	1073746,083
Derecho	1033526,028	1073965,953	Izquierdo	1033352,028	1073755,909
Derecho	1033518,659	1073972,704	Izquierdo	1033353,584	1073765,751
Derecho	1033509,800	1073977,262	Izquierdo	1033355,998	1073775,456
Derecho	1033500,420	1073980,729	Izquierdo	1033358,411	1073785,160
Derecho	1033491,040	1073984,196	Izquierdo	1033360,825	1073794,864
Derecho	1033481,660	1073987,663	Izquierdo	1033363,239	1073804,569
Derecho	1033472,281	1073991,130	Izquierdo	1033365,652	1073814,273
Derecho	1033462,901	1073994,597	Izquierdo	1033368,066	1073823,977
Derecho	1033453,521	1073998,063	Izquierdo	1033370,479	1073833,682
Derecho	1033444,141	1074001,530	Izquierdo	1033372,893	1073843,386
Derecho	1033434,761	1074004,997	Izquierdo	1033375,307	1073853,090
Derecho	1033425,381	1074008,464	Izquierdo	1033377,720	1073862,795
Derecho	1033416,002	1074011,931	Izquierdo	1033380,134	1073872,499
Derecho	1033406,622	1074015,397	Izquierdo	1033382,548	1073882,203
Derecho	1033397,242	1074018,864	Izquierdo	1033382,512	1073891,502
Derecho	1033387,862	1074022,331	Izquierdo	1033377,098	1073899,910
Derecho	1033378,482	1074025,798	Izquierdo	1033371,684	1073908,317
Derecho	1033370,746	1074031,344	Izquierdo	1033366,270	1073916,725
Derecho	1033365,208	1074039,671	Izquierdo	1033360,856	1073925,132
Derecho	1033359,670	1074047,997	Izquierdo	1033355,441	1073933,540
Derecho	1033354,133	1074056,324	Izquierdo	1033350,027	1073941,947
Derecho	1033348,595	1074064,650	Izquierdo	1033344,613	1073950,355
Derecho	1033343,057	1074072,977	Izquierdo	1033339,199	1073958,762
Derecho	1033337,519	1074081,303	Izquierdo	1033333,785	1073967,170
Derecho	1033331,981	1074089,630	Izquierdo	1033328,371	1073975,577
Derecho	1033326,443	1074097,956	Izquierdo	1033322,949	1073983,980
Derecho	1033320,905	1074106,283	Izquierdo	1033317,467	1073992,344
Derecho	1033315,367	1074114,610	Izquierdo	1033311,986	1074000,708
Derecho	1033309,829	1074122,936	Izquierdo	1033306,504	1074009,071
Derecho	1033304,291	1074131,263	Izquierdo	1033301,023	1074017,435
Derecho	1033298,753	1074139,589	Izquierdo	1033295,541	1074025,799
Derecho	1033293,216	1074147,916	Izquierdo	1033290,060	1074034,163
Derecho	1033287,678	1074156,242	Izquierdo	1033284,578	1074042,527
Derecho	1033282,140	1074164,569	Izquierdo	1033279,097	1074050,890
Derecho	1033276,602	1074172,895	Izquierdo	1033273,615	1074059,254
Derecho	1033271,064	1074181,222	Izquierdo	1033268,134	1074067,618
Derecho	1033265,526	1074189,548	Izquierdo	1033262,652	1074075,982

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1033259,816	1074197,758	Izquierdo	1033257,171	1074084,346
Derecho	1033254,101	1074205,964	Izquierdo	1033251,689	1074092,710
Derecho	1033248,387	1074214,171	Izquierdo	1033246,208	1074101,073
Derecho	1033242,672	1074222,377	Izquierdo	1033240,726	1074109,437
Derecho	1033236,957	1074230,583	Izquierdo	1033235,245	1074117,801
Derecho	1033231,242	1074238,789	Izquierdo	1033229,763	1074126,165
Derecho	1033225,527	1074246,995	Izquierdo	1033224,282	1074134,529
Derecho	1033219,813	1074255,201	Izquierdo	1033218,800	1074142,892
Derecho	1033214,098	1074263,407	Izquierdo	1033213,297	1074151,239
Derecho	1033208,383	1074271,614	Izquierdo	1033206,323	1074158,406
Derecho	1033202,668	1074279,820	Izquierdo	1033199,349	1074165,573
Derecho	1033196,953	1074288,026	Izquierdo	1033192,376	1074172,740
Derecho	1033191,238	1074296,232	Izquierdo	1033185,402	1074179,907
Derecho	1033185,524	1074304,438	Izquierdo	1033178,428	1074187,074
Derecho	1033179,809	1074312,644	Izquierdo	1033171,454	1074194,241
Derecho	1033174,094	1074320,850	Izquierdo	1033164,480	1074201,408
Derecho	1033168,379	1074329,057	Izquierdo	1033157,507	1074208,575
Derecho	1033162,453	1074337,110	Izquierdo	1033150,533	1074215,742
Derecho	1033156,444	1074345,103	Izquierdo	1033143,559	1074222,909
Derecho	1033150,434	1074353,096	Izquierdo	1033136,585	1074230,076
Derecho	1033144,424	1074361,088	Izquierdo	1033129,611	1074237,243
Derecho	1033138,414	1074369,081	Izquierdo	1033122,637	1074244,410
Derecho	1033132,404	1074377,073	Izquierdo	1033115,664	1074251,577
Derecho	1033126,394	1074385,066	Izquierdo	1033108,690	1074258,744
Derecho	1033120,385	1074393,059	Izquierdo	1033101,716	1074265,911
Derecho	1033114,375	1074401,051	Izquierdo	1033094,742	1074273,078
Derecho	1033108,365	1074409,044	Izquierdo	1033088,494	1074280,840
Derecho	1033102,355	1074417,037	Izquierdo	1033084,114	1074289,827
Derecho	1033096,345	1074425,029	Izquierdo	1033079,861	1074298,878
Derecho	1033090,336	1074433,022	Izquierdo	1033075,609	1074307,929
Derecho	1033084,414	1074441,080	Izquierdo	1033071,357	1074316,979
Derecho	1033078,506	1074449,148	Izquierdo	1033067,105	1074326,030
Derecho	1033072,597	1074457,216	Izquierdo	1033062,853	1074335,081
Derecho	1033066,689	1074465,283	Izquierdo	1033058,600	1074344,132
Derecho	1033060,780	1074473,351	Izquierdo	1033054,348	1074353,183
Derecho	1033054,872	1074481,419	Izquierdo	1033050,096	1074362,234
Derecho	1033048,963	1074489,487	Izquierdo	1033045,844	1074371,285
Derecho	1033043,055	1074497,555	Izquierdo	1033041,592	1074380,336
Derecho	1033037,146	1074505,623	Izquierdo	1033036,446	1074388,468
Derecho	1033031,238	1074513,690	Izquierdo	1033027,278	1074392,461
Derecho	1033025,329	1074521,758	Izquierdo	1033018,110	1074396,454
Derecho	1033019,421	1074529,826	Izquierdo	1033008,942	1074400,447
Derecho	1033013,512	1074537,894	Izquierdo	1032999,773	1074404,440
Derecho	1033007,604	1074545,962	Izquierdo	1032990,605	1074408,433
Derecho	1033001,695	1074554,029	Izquierdo	1032981,437	1074412,426
Derecho	1032995,787	1074562,097	Izquierdo	1032972,269	1074416,419
Derecho	1032989,224	1074569,597	Izquierdo	1032963,100	1074420,412
Derecho	1032980,725	1074574,758	Izquierdo	1032953,932	1074424,404
Derecho	1032970,997	1074576,838	Izquierdo	1032944,764	1074428,397
Derecho	1032961,028	1074576,168	Izquierdo	1032935,596	1074432,390
Derecho	1032951,078	1074575,171	Izquierdo	1032926,428	1074436,383
Derecho	1032941,127	1074574,175	Izquierdo	1032917,259	1074440,376
Derecho	1032931,177	1074573,178	Izquierdo	1032908,039	1074444,246
Derecho	1032921,227	1074572,181	Izquierdo	1032898,773	1074448,006
Derecho	1032911,277	1074571,184	Izquierdo	1032889,507	1074451,766
Derecho	1032901,327	1074570,188	Izquierdo	1032880,241	1074455,525
Derecho	1032891,376	1074569,191	Izquierdo	1032870,974	1074459,285
Derecho	1032881,426	1074568,194	Izquierdo	1032861,708	1074463,045
Derecho	1032871,476	1074567,198	Izquierdo	1032852,442	1074466,805
Derecho	1032861,526	1074566,201	Izquierdo	1032843,175	1074470,565
Derecho	1032851,575	1074565,204	Izquierdo	1032833,909	1074474,324
Derecho	1032841,625	1074564,208	Izquierdo	1032824,643	1074478,084
Derecho	1032831,675	1074563,211	Izquierdo	1032815,376	1074481,844
Derecho	1032821,725	1074562,214	Izquierdo	1032806,110	1074485,604
Derecho	1032811,775	1074561,218	Izquierdo	1032796,844	1074489,363
Derecho	1032802,232	1074561,982	Izquierdo	1032787,578	1074493,123
Derecho	1032793,733	1074567,251	Izquierdo	1032778,506	1074497,298
Derecho	1032785,234	1074572,520	Izquierdo	1032770,097	1074502,704
Derecho	1032776,735	1074577,789	Izquierdo	1032761,728	1074508,177
Derecho	1032768,235	1074583,058	Izquierdo	1032753,358	1074513,649
Derecho	1032759,736	1074588,327	Izquierdo	1032744,988	1074519,122
Derecho	1032751,237	1074593,596	Izquierdo	1032736,619	1074524,594
Derecho	1032742,737	1074598,865	Izquierdo	1032728,249	1074530,067
Derecho	1032734,238	1074604,134	Izquierdo	1032719,879	1074535,539
Derecho	1032725,739	1074609,403	Izquierdo	1032711,509	1074541,012
Derecho	1032717,240	1074614,672	Izquierdo	1032703,140	1074546,484
Derecho	1032708,740	1074619,941	Izquierdo	1032694,770	1074551,956

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1032700,241	1074625,210	Izquierdo	1032686,400	1074557,429
Derecho	1032693,139	1074631,934	Izquierdo	1032678,031	1074562,901
Derecho	1032687,537	1074640,217	Izquierdo	1032669,661	1074568,374
Derecho	1032681,936	1074648,501	Izquierdo	1032661,291	1074573,846
Derecho	1032676,334	1074656,784	Izquierdo	1032652,994	1074579,422
Derecho	1032670,732	1074665,068	Izquierdo	1032646,093	1074586,590
Derecho	1032665,130	1074673,352	Izquierdo	1032640,426	1074594,830
Derecho	1032659,528	1074681,635	Izquierdo	1032634,759	1074603,069
Derecho	1032653,926	1074689,919	Izquierdo	1032629,093	1074611,309
Derecho	1032648,324	1074698,203	Izquierdo	1032623,426	1074619,549
Derecho	1032642,722	1074706,486	Izquierdo	1032617,760	1074627,788
Derecho	1032637,121	1074714,770	Izquierdo	1032612,093	1074636,028
Derecho	1032631,519	1074723,054	Izquierdo	1032606,427	1074644,267
Derecho	1032625,917	1074731,337	Izquierdo	1032600,760	1074652,507
Derecho	1032620,315	1074739,621	Izquierdo	1032595,094	1074660,746
Derecho	1032614,713	1074747,905	Izquierdo	1032589,427	1074668,986
Derecho	1032609,111	1074756,188	Izquierdo	1032583,761	1074677,226
Derecho	1032603,445	1074764,428	Izquierdo	1032578,094	1074685,465
Derecho	1032597,749	1074772,648	Izquierdo	1032572,428	1074693,705
Derecho	1032592,054	1074780,867	Izquierdo	1032566,761	1074701,944
Derecho	1032586,358	1074789,086	Izquierdo	1032561,095	1074710,184
Derecho	1032580,662	1074797,305	Izquierdo	1032555,428	1074718,423
Derecho	1032574,966	1074805,525	Izquierdo	1032549,768	1074726,668
Derecho	1032569,270	1074813,744	Izquierdo	1032544,115	1074734,916
Derecho	1032563,574	1074821,963	Izquierdo	1032538,461	1074743,165
Derecho	1032557,878	1074830,183	Izquierdo	1032532,808	1074751,413
Derecho	1032552,182	1074838,402	Izquierdo	1032527,154	1074759,661
Derecho	1032546,486	1074846,621	Izquierdo	1032521,500	1074767,910
Derecho	1032545,033	1074856,192	Izquierdo	1032515,847	1074776,158
Derecho	1032544,923	1074866,192	Izquierdo	1032510,193	1074784,407
Derecho	1032544,814	1074876,191	Izquierdo	1032504,540	1074792,655
Derecho	1032544,704	1074886,190	Izquierdo	1032498,886	1074800,904
Derecho	1032544,594	1074896,190	Izquierdo	1032493,232	1074809,152
Derecho	1032544,485	1074906,189	Izquierdo	1032487,579	1074817,401
Derecho	1032544,375	1074916,189	Izquierdo	1032481,836	1074825,587
Derecho	1032544,265	1074926,188	Izquierdo	1032476,059	1074833,749
Derecho	1032544,156	1074936,187	Izquierdo	1032470,282	1074841,912
Derecho	1032544,046	1074946,187	Izquierdo	1032464,505	1074850,074
Derecho	1032543,937	1074956,186	Izquierdo	1032458,728	1074858,237
Derecho	1032543,827	1074966,186	Izquierdo	1032452,951	1074866,399
Derecho	1032543,385	1074976,170	Izquierdo	1032447,174	1074874,562
Derecho	1032540,152	1074985,585	Izquierdo	1032441,397	1074882,724
Derecho	1032534,001	1074993,402	Izquierdo	1032435,620	1074890,887
Derecho	1032525,697	1074998,908	Izquierdo	1032429,843	1074899,049
Derecho	1032516,745	1075003,364	Izquierdo	1032424,066	1074907,212
Derecho	1032507,793	1075007,821	Izquierdo	1032418,289	1074915,374
Derecho	1032498,841	1075012,277	Izquierdo	1032412,594	1074923,593
Derecho	1032489,889	1075016,734	Izquierdo	1032407,145	1074931,978
Derecho	1032480,937	1075021,190	Izquierdo	1032401,696	1074940,363
Derecho	1032471,985	1075025,646	Izquierdo	1032396,247	1074948,748
Derecho	1032463,033	1075030,103	Izquierdo	1032390,798	1074957,133
Derecho	1032454,081	1075034,559	Izquierdo	1032385,350	1074965,518
Derecho	1032445,128	1075039,016	Izquierdo	1032379,901	1074973,903
Derecho	1032436,176	1075043,472	Izquierdo	1032374,452	1074982,288
Derecho	1032427,224	1075047,929	Izquierdo	1032369,003	1074990,673
Derecho	1032418,272	1075052,385	Izquierdo	1032363,554	1074999,058
Derecho	1032409,320	1075056,842	Izquierdo	1032358,105	1075007,443
Derecho	1032401,201	1075060,883	Izquierdo	1032352,656	1075015,829
			Izquierdo	1032351,797	1075017,151

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico (anexo número 1) y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes coordenadas (anexo número 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de protección de la quebrada Chuncesia que aquí se anuncia, se delimita en el anexo número 2, que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. *Objeto*. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Artículo 4°. *Régimen de usos de la zona de ronda de protección*. El régimen de usos de la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.

Parágrafo 1°. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2°. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3°. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. *Parámetros para los usos condicionados*. La implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros:

- a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar;
- b) Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR);
- c) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural;
- d) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo;
- e) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. *Zonas de alto riesgo no mitigable*. Bajo ninguna circunstancia se permitirá la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control por la administración municipal de Cucunubá, perteneciente a la cuenca con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. *Aumento de cobertura boscosa*. Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados en la ronda de protección de la quebrada Chuncesia, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. *Determinante ambiental*. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. *Limitación*. La presente resolución conlleva una afectación del derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la quebrada Chuncesia, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el artículo 3°.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la quebrada Chuncesia no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. *Sanciones*. Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. *Inscripción*. Solicitar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda de protección de la quebrada Chuncesia.

Artículo 12. *Comunicaciones*. Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía del municipio en el cual se localiza el área objeto de la presente resolución, para el caso el municipio de Cucunubá.

Artículo 13. *Publicación*. Publicar el presente acto administrativo en el *Diario Oficial* y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. *Vigencia*. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Néstor Guillermo Franco González.
(C. F.).

RESOLUCIÓN NÚMERO 1881 DE 2016

(septiembre 6)

por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada La Laja.

El Director General de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las establecidas en el artículo 29 (numeral 12) de la Ley 99 de 1993, y el artículo 42 (numerales 1 y 27) de la Resolución número 703 de 2003, expedida por el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por medio de la cual se aprobaron los Estatutos de la CAR,

CONSIDERANDO:

Que los artículos 8° y 79 de la Constitución Política establecen que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación;

Que el artículo 80 del mismo ordenamiento, determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental;

Que el artículo 95 (numeral 8) de la Constitución Política, consagra el deber de toda persona de proteger los recursos culturales y naturales del país, y velar por la conservación de un ambiente sano;

Que según lo establecido en el artículo 31 (numerales 2 y 11) de la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, en virtud de lo cual deben desarrollar labores orientadas a la evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables;

Que el artículo 2.2.3.3.2 del Decreto número 1077 de 2015, “*por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio*” (antes artículo 17 del Decreto número 1504 de 1998), dispone que las Corporaciones Autónomas Regionales y las autoridades ambientales de las entidades territoriales, tendrán a su cargo el manejo de los recursos naturales, y la definición de las normas técnicas para la conservación, preservación y recuperación de los elementos naturales del espacio público;

Que el artículo 2.2.3.1.5 ibídem, ordinal I (elementos constitutivos), numeral 1.1 (elementos constitutivos naturales), incluye en su numeral 1.1.2, dentro de las áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, a los elementos naturales relacionados con corrientes de agua, tales como las rondas hídricas;

Que el artículo 1° del Decreto número 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales, establece que el ambiente es patrimonio común, y que el Estado y los particulares deben participar en su preservación y manejo; así mismo, dispone que los recursos naturales renovables son de utilidad pública e interés social;

Que el artículo 83 del mismo ordenamiento, establece que: “*salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado: (a) el álveo o cauce natural de las corrientes; (b) el lecho de los depósitos naturales de agua, (c) las playas marítimas, fluviales y lacustres; y (d) una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos hasta de 30 metros de ancho...*”;

Que así mismo, el artículo 47 del Código de Recursos Naturales Renovables, señala que sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros o de las normas especiales de dicho ordenamiento, podrá declararse reservada una porción determinada o la totalidad de los recursos naturales renovables de una región o zona, entre otros fines, para adelantar programas de restauración, conservación o preservación de esos recursos, o cuando el Estado resuelva explotarlos;

Que el artículo 2.2.3.2.3.4 del Decreto número 1076 de 2015 (antes artículo 14 del Decreto número 1541 de 1978) dispone que para efectos de la aplicación del artículo 83 (literal d) del Decreto número 2811 de 1974, y tratándose de terrenos de propiedad privada situados en las riberas de los ríos, arroyos o lagos, en los cuales no se ha delimitado la línea de mareas máximas, cuando por mermas, desviación o desecamiento de las aguas ocurridos por causas naturales, queden permanentemente al descubierto todo o parte de sus cauces o lechos, los suelos que los forman no accederán a los predios ribereños, sino que se tendrán como parte de la zona o franja a que alude el artículo 83 mencionado;

Que el artículo 2.2.3.2.13.18. del citado decreto, establece que, para proteger determinadas fuentes o depósitos de aguas, las autoridades ambientales podrán alindar zonas aledañas a ellos, en las cuales se prohíba o restrinja el ejercicio de actividades, tales como: vertimiento de aguas negras, uso de fertilizantes o pesticidas, cría de especies de ganado depredador y otras similares;

Que según el artículo 2.2.3.2.1.1. de dicho decreto, para cumplir los fines del artículo 2° del Decreto-ley 2811 de 1974, las Corporaciones Autónomas Regionales deben adoptar las decisiones de su competencia en lo correspondiente al manejo de las aguas, cauces, riberas, ocupación de cauces, declaración de reserva y agotamiento del recurso, en orden a asegurar la preservación cualitativa del recurso y proteger los demás recursos que dependen del mismo;

Que el Plan de Acción 2016-2019 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), estableció como Meta 4.1, realizar anualmente veinte (20) campañas de monitoreo a las cuencas de segundo orden con cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) y definir o delimitar las zonas de ronda de 96 corrientes priorizadas, dentro del Programa 3, Incidencia de modelos territoriales, la Actividad 4.1.2, número de corrientes con zona de ronda definida o delimitada;

Que dada la gran importancia de evaluar los eventos extremos de crecidas de ríos y quebradas, y tomando en cuenta las experiencias vividas en las emergencias invernales de los años 1979, 2006 y 2010 en la Sabana de Bogotá y la cuenca del río Suárez, la CAR consideró necesario contar con una Guía metodológica para definir y delimitar las zonas de ronda de cuerpos hídricos, que involucrara la evaluación de dichos eventos, y que se constituyera en una herramienta para aislar estas áreas y darles un uso de protección y recuperación, además de contar con sistemas que generaran alertas antes del desencadenamiento de tales eventos;

Que según los artículos 2.2.3.1.5.2 y 2.2.3.1.8.4 del Decreto número 1076 de 2015 (antes correspondientes a los artículos 19 y 46 del Decreto número 1640 del dos de agosto de 2012, “*por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y acuíferos*”), la delimitación y acotamiento de las rondas hídricas, obtenidas de la labor anteriormente enunciada, constituirá un insumo fundamental para el proceso de elaboración y ajuste de los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas;

Que conforme al artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, “*por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres*”, las Corporaciones Autónomas Regionales son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, y además de las funciones establecidas por la Ley 99 de 1993 y la Ley 388 de 1997 o las leyes que las modifiquen, “*apoyarán a las entidades territoriales de su jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción del riesgo y los integrarán a los planes de ordenamiento de cuencas, de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo*”;

Que en concordancia con lo anterior, el artículo 189 del Decreto-ley 19 de 2012 dispuso que la elaboración y revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial, solo procederá: “*cuando se garantice la delimitación y zonificación de las áreas de amenaza y la delimitación y zonificación de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación de las medidas específicas para su mitigación, la cual deberá incluirse en la cartografía correspondiente*”;

Que en tal sentido, y en virtud de lo prescrito en el artículo 40 de la Ley 1523 de 2012, la delimitación de las rondas hídricas es un aspecto fundamental dentro de la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial respectivos, ya que permite evitar la generación de asentamientos humanos en zonas que son literalmente de los ríos y quebradas, las cuales son invadidas en veranos prolongados por actividades diferentes a las de protección y mantenimiento de la conectividad ecosistémica propia de estas zonas;

Que el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 dispone que son determinantes para el ordenamiento del territorio, las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, expedidas por las Corporaciones Autónomas Regionales; así como aquellas emanadas de las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica, dentro de las cuales se incluyen la definición de las zonas de ronda y sus correspondientes regímenes de usos. Tales disposiciones, en virtud de su carácter de determinante para el ordenamiento territorial, constituyen normas de superior jerarquía, que deben ser acogidas por los municipios y distritos al momento de formular y adoptar los correspondientes planes de ordenamiento territorial;

Que en este sentido, según el numeral 3.2 del artículo 1° del Acuerdo número 16 de 1998, expedido por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), “*por el cual se expiden determinantes ambientales para la elaboración de los planes de ordenamiento territorial municipales*”, las “*áreas periféricas a nacimientos, cauces de ríos, quebradas, arroyos, lagos, lagunas, ciénagas, pantanos, embalses y humedales en general*” se deben sujetar al siguiente régimen de usos en la formulación de dichos instrumentos:

“*Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.*

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando, no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Usos agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación”;

Que en similar sentido, el artículo 2.2.1.1.1.8.2 del Decreto número 1076 de 2015 (antes artículo 3° del Decreto número 1449 de 1977, “*por el cual se reglamentan parcialmente el inciso 1 del numeral 5 del artículo 56 de la Ley 135 de 1961 y el Decreto-ley 2811 de 1974*”), establece que los propietarios de predios están obligados a mantener en cobertura boscosa dentro del inmueble respectivo, las áreas forestales protectoras, entendiéndose por estas, entre otras, “*una faja no inferior a 30 metros de ancha, paralela a las líneas de mareas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos, sean permanentes o no, y alrededor de los lagos o depósitos de agua*”;

Que igualmente, en cuanto a la determinación de las rondas de protección y sus regímenes de usos, el entonces Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, mediante Radicación 1200-E2-101521 del veinticuatro (24) de noviembre de 2005, manifestó: “*... estas deben estar dirigidas a la conservación y protección del cuerpo de agua y de los demás recursos naturales asociados, entre ellos el componente forestal, la fauna, los recursos hidrobiológicos, el suelo, etc. En este orden de ideas, se debe prohibir y restringir actividades que no tengan esa finalidad*”;

Que en virtud de lo expuesto, la Dirección General de la CAR expidió la Resolución número 0608 del 18 marzo de 2014, por medio de la cual se adoptó la guía metodológica para la delimitación de zonas de ronda en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), la cual soporta técnicamente la delimitación del cauce natural o cauce permanente del río, con la siguiente definición: la faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente al alcanzar sus niveles máximos, por efecto de las crecientes ordinarias, correspondiendo estos niveles máximos por efecto de las crecientes ordinarias a las cotas naturales promedio (líneas o niveles ordinarios) más altas de los últimos quince (15) años;

Que dando alcance a lo consignado como Meta 4.1, realizar anualmente veinte (20) campañas de monitoreo a las cuencas de segundo orden con cálculo del Índice de Calidad del Agua (ICA) y definir o delimitar las zonas de ronda de noventa y seis (96) corrientes priorizadas, dentro del Programa 3, Incidencia de modelos territoriales, la Actividad 4.1.2, número de corrientes con zona de ronda definida o delimitada, la entonces Dirección de Monitoreo, Modelamiento, Laboratorio ambiental, conformó un equipo técnico de profesionales

especializados en las áreas de topografía, hidrología, hidráulica, ingeniería catastral, geología y biología, con el fin de determinar y delimitar las zonas de ronda consignadas en dicha meta, con base en lo establecido en la Resolución número 0608 del 18 de marzo de 2014;

Que dicho grupo elaboró el estudio (Anexo número 1) denominado: *Estudio hidrológico e hidráulico para la determinación de la ronda de la quebrada La Laja*, donde se determinaron los niveles máximos anuales presentados en los últimos quince (15) años; se promediaron; se detallaron la morfología del lecho, las orillas y las franjas inundables del cuerpo hídrico, en las Veredas Apartadero, Centro y Sucunchoque del municipio de Ubaté, determinando secciones transversales espaciadas según los cambios de sinuosidad del cauce principal. Esta información fue procesada y analizada para generar modelos digitales de elevación de terreno, que constituyeron un insumo fundamental, además de los caudales generados, para el siguiente paso en el proceso, que fue el modelamiento hidráulico y la respectiva generación de las cotas de inundación de la quebrada La Laja, a partir de los cuales se generó la ronda hídrica de protección de 30 metros, según lo establecido en la normatividad ambiental vigente;

Que la quebrada La Laja, por ser de cuarto orden, y dada su importancia geográfica, económica y social en el área de jurisdicción de la CAR, requiere para su adecuada protección y mantenimiento, la mayor área legalmente posible para el establecimiento de su ronda, tanto en el río como en su valle de inundación y sus afluentes;

Que en consideración a todo lo anterior, y una vez conocidos y analizados los estudios mencionados, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) procederá a determinar la zona de ronda de protección de la quebrada La Laja, buscando su articulación con los planes de ordenamiento territorial del municipio de Ubaté, y con el proceso de ordenación de la cuenca;

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo establecido en el artículo 58 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 4°, 47 y 83 del Código Nacional de Recursos Naturales, la delimitación de la ronda de protección de la quebrada La Laja, realizada mediante el presente acto, no desconoce los derechos adquiridos con justa causa al interior de la misma, ni las situaciones particulares y concretas consolidadas, las cuales se deben respetar según los preceptos mencionados;

Que, sin perjuicio de la protección constitucional y legal anteriormente señalada, se deberá dar aplicación a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, conforme al cual: *“todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”*. Así las cosas, los usos y actividades existentes en la ronda de protección de la quebrada La Laja, que cumplan las condiciones establecidas en el precepto mencionado, deberán orientarse hacia los propósitos de conservación consagrados en el presente acto;

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Determinar como zona de ronda de protección de la quebrada La Laja, la franja comprendida entre la línea de niveles promedios máximos de los últimos 15 años y una línea paralela a esta última, localizada a 30 metros, a lado y lado del cauce, con un área total de ciento cuarenta mil quinientos diez ocho punto cuarenta (140518,40) metros cuadrados, aproximadamente. Dicha franja está limitada por las siguientes coordenadas:

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1026528,867	1076813,402	Izquierdo	1026577,479	1076853,084
Derecho	1026535,218	1076805,678	Izquierdo	1026584,025	1076845,525
Derecho	1026541,569	1076797,953	Izquierdo	1026590,572	1076837,965
Derecho	1026548,022	1076790,319	Izquierdo	1026598,840	1076832,846
Derecho	1026555,933	1076784,283	Izquierdo	1026607,414	1076837,993
Derecho	1026564,730	1076779,527	Izquierdo	1026615,988	1076843,139
Derecho	1026573,527	1076774,771	Izquierdo	1026624,562	1076848,285
Derecho	1026582,323	1076770,015	Izquierdo	1026633,136	1076853,432
Derecho	1026591,563	1076766,288	Izquierdo	1026641,710	1076858,578
Derecho	1026601,491	1076765,650	Izquierdo	1026650,284	1076863,725
Derecho	1026611,058	1076768,374	Izquierdo	1026658,813	1076868,928
Derecho	1026619,750	1076773,307	Izquierdo	1026665,901	1076875,983
Derecho	1026628,336	1076778,432	Izquierdo	1026672,989	1076883,038
Derecho	1026636,923	1076783,557	Izquierdo	1026680,076	1076890,092
Derecho	1026645,510	1076788,682	Izquierdo	1026687,164	1076897,147
Derecho	1026654,097	1076793,808	Izquierdo	1026694,251	1076904,201
Derecho	1026662,683	1076798,933	Izquierdo	1026701,339	1076911,256
Derecho	1026671,270	1076804,058	Izquierdo	1026708,654	1076918,065
Derecho	1026679,857	1076809,183	Izquierdo	1026716,268	1076924,548
Derecho	1026688,443	1076814,309	Izquierdo	1026723,881	1076931,031
Derecho	1026696,927	1076819,596	Izquierdo	1026728,657	1076939,463
Derecho	1026704,218	1076826,421	Izquierdo	1026731,973	1076948,897
Derecho	1026711,264	1076833,516	Izquierdo	1026735,616	1076958,202
Derecho	1026718,311	1076840,612	Izquierdo	1026740,349	1076967,010
Derecho	1026725,357	1076847,708	Izquierdo	1026745,097	1076975,812
Derecho	1026732,403	1076854,804	Izquierdo	1026749,844	1076984,613
Derecho	1026739,449	1076861,899	Izquierdo	1026754,592	1076993,414
Derecho	1026746,496	1076868,995	Izquierdo	1026759,340	1077002,215
Derecho	1026754,136	1076875,438	Izquierdo	1026764,088	1077011,016
Derecho	1026761,864	1076881,784	Izquierdo	1026765,295	1077020,917
Derecho	1026769,593	1076888,130	Izquierdo	1026766,374	1077030,859
Derecho	1026776,767	1076895,052	Izquierdo	1026767,452	1077040,801
Derecho	1026781,559	1076903,772	Izquierdo	1026768,530	1077050,742

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1026784,770	1076913,242	Izquierdo	1026769,608	1077060,684
Derecho	1026787,982	1076922,712	Izquierdo	1026770,792	1077070,611
Derecho	1026791,541	1076932,026	Izquierdo	1026773,993	1077080,036
Derecho	1026796,507	1076940,706	Izquierdo	1026778,482	1077088,971
Derecho	1026801,473	1076949,386	Izquierdo	1026782,971	1077097,907
Derecho	1026806,439	1076958,065	Izquierdo	1026787,460	1077106,843
Derecho	1026811,405	1076966,745	Izquierdo	1026791,949	1077115,779
Derecho	1026816,371	1076975,425	Izquierdo	1026796,438	1077124,715
Derecho	1026821,314	1076984,118	Izquierdo	1026800,927	1077133,650
Derecho	1026825,062	1076993,347	Izquierdo	1026805,506	1077142,540
Derecho	1026826,292	1077003,266	Izquierdo	1026810,166	1077151,388
Derecho	1026827,270	1077013,218	Izquierdo	1026814,825	1077160,236
Derecho	1026828,248	1077023,170	Izquierdo	1026819,485	1077169,084
Derecho	1026829,226	1077033,122	Izquierdo	1026824,168	1077177,919
Derecho	1026830,204	1077043,074	Izquierdo	1026828,852	1077186,755
Derecho	1026831,182	1077053,026	Izquierdo	1026833,536	1077195,590
Derecho	1026834,249	1077062,387	Izquierdo	1026835,729	1077205,261
Derecho	1026838,631	1077071,376	Izquierdo	1026837,322	1077215,133
Derecho	1026843,013	1077080,364	Izquierdo	1026838,914	1077225,005
Derecho	1026847,395	1077089,353	Izquierdo	1026840,507	1077234,878
Derecho	1026851,777	1077098,342	Izquierdo	1026842,099	1077244,750
Derecho	1026856,159	1077107,331	Izquierdo	1026843,691	1077254,623
Derecho	1026860,834	1077116,169	Izquierdo	1026845,548	1077264,441
Derecho	1026865,621	1077124,949	Izquierdo	1026849,200	1077273,727
Derecho	1026870,407	1077133,728	Izquierdo	1026853,273	1077282,860
Derecho	1026875,154	1077142,530	Izquierdo	1026857,347	1077291,993
Derecho	1026879,784	1077151,394	Izquierdo	1026861,421	1077301,125
Derecho	1026884,414	1077160,257	Izquierdo	1026865,261	1077310,327
Derecho	1026889,044	1077169,121	Izquierdo	1026866,786	1077320,210
Derecho	1026893,206	1077178,192	Izquierdo	1026868,312	1077330,093
Derecho	1026895,175	1077187,987	Izquierdo	1026869,837	1077339,976
Derecho	1026896,789	1077197,856	Izquierdo	1026872,409	1077349,603
Derecho	1026898,403	1077207,725	Izquierdo	1026877,919	1077357,881
Derecho	1026900,017	1077217,593	Izquierdo	1026885,285	1077364,638
Derecho	1026901,631	1077227,462	Izquierdo	1026892,789	1077371,248
Derecho	1026903,245	1077237,331	Izquierdo	1026900,292	1077377,858
Derecho	1026904,860	1077247,200	Izquierdo	1026908,229	1077383,892
Derecho	1026908,695	1077256,422	Izquierdo	1026917,516	1077387,505
Derecho	1026912,632	1077265,615	Izquierdo	1026927,122	1077390,287
Derecho	1026916,568	1077274,807	Izquierdo	1026936,727	1077393,069
Derecho	1026920,505	1077284,000	Izquierdo	1026946,332	1077395,851
Derecho	1026923,999	1077293,349	Izquierdo	1026956,097	1077397,958
Derecho	1026925,932	1077303,156	Izquierdo	1026965,954	1077399,638
Derecho	1026927,722	1077312,994	Izquierdo	1026975,812	1077401,318
Derecho	1026930,789	1077322,110	Izquierdo	1026985,670	1077402,998
Derecho	1026938,303	1077328,709	Izquierdo	1026995,528	1077404,678
Derecho	1026947,918	1077331,381	Izquierdo	1027004,069	1077409,804
Derecho	1026957,576	1077333,973	Izquierdo	1027012,535	1077415,127
Derecho	1026967,310	1077336,216	Izquierdo	1027020,947	1077420,533
Derecho	1026977,176	1077337,843	Izquierdo	1027029,325	1077425,993
Derecho	1026987,043	1077339,470	Izquierdo	1027037,702	1077431,453
Derecho	1026996,910	1077341,097	Izquierdo	1027046,224	1077436,676
Derecho	1027006,777	1077342,723	Izquierdo	1027055,807	1077439,343
Derecho	1027016,579	1077344,651	Izquierdo	1027065,770	1077439,021
Derecho	1027025,569	1077348,968	Izquierdo	1027075,704	1077437,871
Derecho	1027034,213	1077353,997	Izquierdo	1027085,637	1077436,722
Derecho	1027042,856	1077359,025	Izquierdo	1027095,571	1077435,572
Derecho	1027051,422	1077364,180	Izquierdo	1027105,505	1077434,422
Derecho	1027059,697	1077369,794	Izquierdo	1027115,433	1077433,226
Derecho	1027068,002	1077375,294	Izquierdo	1027125,351	1077431,949
Derecho	1027077,949	1077374,269	Izquierdo	1027135,269	1077430,673
Derecho	1027087,896	1077373,244	Izquierdo	1027145,187	1077429,396
Derecho	1027097,844	1077372,219	Izquierdo	1027155,048	1077429,366
Derecho	1027107,786	1077371,148	Izquierdo	1027164,807	1077431,548
Derecho	1027117,714	1077369,954	Izquierdo	1027174,566	1077433,729
Derecho	1027127,643	1077368,760	Izquierdo	1027184,326	1077435,911
Derecho	1027137,571	1077367,565	Izquierdo	1027194,085	1077438,092
Derecho	1027147,500	1077366,371	Izquierdo	1027203,844	1077440,274
Derecho	1027157,460	1077366,186	Izquierdo	1027213,603	1077442,455
Derecho	1027167,242	1077368,250	Izquierdo	1027223,362	1077444,637
Derecho	1027176,994	1077370,462	Izquierdo	1027232,741	1077447,972
Derecho	1027186,746	1077372,674	Izquierdo	1027241,881	1077452,028
Derecho	1027196,499	1077374,886	Izquierdo	1027251,021	1077456,084
Derecho	1027206,251	1077377,098	Izquierdo	1027260,162	1077460,141
Derecho	1027216,003	1077379,310	Izquierdo	1027269,302	1077464,197
Derecho	1027225,756	1077381,522	Izquierdo	1027278,443	1077468,253
Derecho	1027235,508	1077383,734	Izquierdo	1027287,583	1077472,309

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1027245,256	1077385,961	Izquierdo	1027296,723	1077476,366
Derecho	1027254,552	1077389,623	Izquierdo	1027305,374	1077481,200
Derecho	1027263,691	1077393,682	Izquierdo	1027312,994	1077487,677
Derecho	1027272,830	1077397,742	Izquierdo	1027320,613	1077494,153
Derecho	1027281,968	1077401,802	Izquierdo	1027328,233	1077500,629
Derecho	1027291,107	1077405,862	Izquierdo	1027335,734	1077507,237
Derecho	1027300,246	1077409,921	Izquierdo	1027342,930	1077514,181
Derecho	1027309,385	1077413,981	Izquierdo	1027350,126	1077521,124
Derecho	1027318,524	1077418,041	Izquierdo	1027357,322	1077528,068
Derecho	1027327,663	1077422,101	Izquierdo	1027364,519	1077535,012
Derecho	1027336,654	1077426,459	Izquierdo	1027371,715	1077541,955
Derecho	1027344,397	1077432,756	Izquierdo	1027378,453	1077549,146
Derecho	1027351,810	1077439,468	Izquierdo	1027380,308	1077558,973
Derecho	1027359,223	1077446,180	Izquierdo	1027382,162	1077568,799
Derecho	1027366,636	1077452,891	Izquierdo	1027384,910	1077578,410
Derecho	1027374,049	1077459,603	Izquierdo	1027387,847	1077587,969
Derecho	1027381,249	1077466,542	Izquierdo	1027387,060	1077597,429
Derecho	1027388,416	1077473,516	Izquierdo	1027383,619	1077606,818
Derecho	1027395,583	1077480,490	Izquierdo	1027380,177	1077616,207
Derecho	1027402,749	1077487,465	Izquierdo	1027376,736	1077625,597
Derecho	1027409,916	1077494,439	Izquierdo	1027373,294	1077634,986
Derecho	1027417,082	1077501,413	Izquierdo	1027369,853	1077644,375
Derecho	1027424,249	1077508,387	Izquierdo	1027368,091	1077654,168
Derecho	1027430,993	1077515,740	Izquierdo	1027369,558	1077664,001
Derecho	1027435,359	1077524,682	Izquierdo	1027373,829	1077673,018
Derecho	1027438,231	1077534,261	Izquierdo	1027378,723	1077681,737
Derecho	1027441,103	1077543,840	Izquierdo	1027383,224	1077690,657
Derecho	1027443,972	1077553,419	Izquierdo	1027387,473	1077699,710
Derecho	1027446,634	1077563,058	Izquierdo	1027391,722	1077708,762
Derecho	1027449,291	1077572,699	Izquierdo	1027395,970	1077717,815
Derecho	1027451,538	1077582,427	Izquierdo	1027400,378	1077726,785
Derecho	1027451,416	1077592,408	Izquierdo	1027405,829	1077735,167
Derecho	1027450,070	1077602,285	Izquierdo	1027411,327	1077743,520
Derecho	1027446,914	1077611,767	Izquierdo	1027416,825	1077751,873
Derecho	1027443,588	1077621,198	Izquierdo	1027422,323	1077760,226
Derecho	1027440,262	1077630,629	Izquierdo	1027427,821	1077768,579
Derecho	1027436,936	1077640,060	Izquierdo	1027433,319	1077776,932
Derecho	1027434,872	1077649,362	Izquierdo	1027437,198	1077785,902
Derecho	1027439,571	1077658,175	Izquierdo	1027438,655	1077795,795
Derecho	1027443,691	1077667,287	Izquierdo	1027440,111	1077805,689
Derecho	1027447,811	1077676,399	Izquierdo	1027441,568	1077815,582
Derecho	1027451,931	1077685,511	Izquierdo	1027443,025	1077825,475
Derecho	1027456,050	1077694,623	Izquierdo	1027444,481	1077835,369
Derecho	1027461,312	1077703,123	Izquierdo	1027446,614	1077845,110
Derecho	1027466,616	1077711,601	Izquierdo	1027451,495	1077853,782
Derecho	1027471,920	1077720,078	Izquierdo	1027457,671	1077861,647
Derecho	1027477,224	1077728,556	Izquierdo	1027463,847	1077869,511
Derecho	1027482,528	1077737,033	Izquierdo	1027470,024	1077877,376
Derecho	1027487,832	1077745,511	Izquierdo	1027476,200	1077885,241
Derecho	1027493,130	1077753,992	Izquierdo	1027482,376	1077893,106
Derecho	1027496,868	1077763,216	Izquierdo	1027488,552	1077900,970
Derecho	1027498,811	1077773,023	Izquierdo	1027494,368	1077909,094
Derecho	1027500,695	1077782,844	Izquierdo	1027499,835	1077917,467
Derecho	1027502,579	1077792,665	Izquierdo	1027505,301	1077925,841
Derecho	1027504,464	1077802,486	Izquierdo	1027510,768	1077934,214
Derecho	1027506,348	1077812,307	Izquierdo	1027516,235	1077942,588
Derecho	1027508,961	1077821,812	Izquierdo	1027520,880	1077951,395
Derecho	1027514,838	1077829,903	Izquierdo	1027524,716	1077960,630
Derecho	1027520,714	1077837,994	Izquierdo	1027528,553	1077969,865
Derecho	1027526,591	1077846,085	Izquierdo	1027532,389	1077979,100
Derecho	1027532,468	1077854,176	Izquierdo	1027536,226	1077988,334
Derecho	1027538,345	1077862,267	Izquierdo	1027540,063	1077997,569
Derecho	1027544,143	1077870,412	Izquierdo	1027543,899	1078006,804
Derecho	1027549,358	1077878,945	Izquierdo	1027540,297	1078016,123
Derecho	1027554,573	1077887,477	Izquierdo	1027536,671	1078025,443
Derecho	1027559,788	1077896,010	Izquierdo	1027533,046	1078034,762
Derecho	1027565,003	1077904,542	Izquierdo	1027529,420	1078044,082
Derecho	1027570,218	1077913,075	Izquierdo	1027526,751	1078053,684
Derecho	1027574,963	1077921,859	Izquierdo	1027527,289	1078063,612
Derecho	1027578,796	1077931,095	Izquierdo	1027524,939	1078072,831
Derecho	1027582,629	1077940,331	Izquierdo	1027520,632	1078081,856
Derecho	1027586,462	1077949,568	Izquierdo	1027516,326	1078090,881
Derecho	1027590,295	1077958,804	Izquierdo	1027512,019	1078099,906
Derecho	1027594,128	1077968,040	Izquierdo	1027507,713	1078108,931
Derecho	1027597,962	1077977,276	Izquierdo	1027503,406	1078117,957
Derecho	1027601,795	1077986,512	Izquierdo	1027499,928	1078127,295
Derecho	1027605,553	1077995,776	Izquierdo	1027498,193	1078137,139

Borde	X	Y	Borde	X	Y
Derecho	1027607,421	1078005,539	Izquierdo	1027496,587	1078147,009
Derecho	1027606,231	1078015,432	Izquierdo	1027494,981	1078156,879
Derecho	1027604,133	1078025,210	Izquierdo	1027493,375	1078166,749
Derecho	1027602,034	1078034,987	Izquierdo	1027491,769	1078176,619
Derecho	1027599,936	1078044,764	Izquierdo	1027490,163	1078186,490
Derecho	1027599,575	1078054,473	Izquierdo	1027488,557	1078196,360
Derecho	1027600,305	1078064,389	Izquierdo	1027487,125	1078206,254
Derecho	1027597,704	1078073,985	Izquierdo	1027486,076	1078216,199
Derecho	1027593,155	1078082,887	Izquierdo	1027485,027	1078226,144
Derecho	1027588,507	1078091,741	Izquierdo	1027483,978	1078236,089
Derecho	1027583,859	1078100,595	Izquierdo	1027482,929	1078246,033
Derecho	1027579,211	1078109,449	Izquierdo	1027482,029	1078255,989
Derecho	1027574,562	1078118,303	Izquierdo	1027483,324	1078265,852
Derecho	1027569,914	1078127,157	Izquierdo	1027487,260	1078275,039
Derecho	1027565,266	1078136,011	Izquierdo	1027491,431	1078284,127
Derecho	1027561,067	1078145,006	Izquierdo	1027495,602	1078293,216
Derecho	1027559,807	1078154,927	Izquierdo	1027499,594	1078302,360
Derecho	1027558,547	1078164,847	Izquierdo	1027502,507	1078311,859
Derecho	1027557,287	1078174,767	Izquierdo	1027507,725	1078320,384
Derecho	1027556,028	1078184,688	Izquierdo	1027513,136	1078328,793
Derecho	1027554,768	1078194,608	Izquierdo	1027518,680	1078337,114
Derecho	1027553,508	1078204,528	Izquierdo	1027524,335	1078345,362
Derecho	1027552,210	1078214,444	Izquierdo	1027530,817	1078352,950
Derecho	1027550,834	1078224,348	Izquierdo	1027537,794	1078360,114
Derecho	1027549,458	1078234,253	Izquierdo	1027544,761	1078367,288
Derecho	1027548,081	1078244,158	Izquierdo	1027550,680	1078375,070
Derecho	1027546,900	1078254,042	Izquierdo	1027553,426	1078384,685
Derecho	1027550,359	1078263,425	Izquierdo	1027554,830	1078388,556
Derecho	1027553,818	1078272,807			
Derecho	1027557,277	1078282,190			
Derecho	1027561,453	1078291,130			
Derecho	1027567,015	1078299,441			
Derecho	1027572,546	1078307,772			
Derecho	1027579,087	1078315,294			
Borde	1027586,015	1078322,505			
Derecho	1027592,974	1078329,686			
Derecho	1027599,868	1078336,928			
Derecho	1027605,237	1078345,300			
Derecho	1027608,073	1078354,885			
Derecho	1027610,749	1078364,520			
Derecho	1027612,770	1078373,177			

Parágrafo. La determinación de la zona de ronda de protección, a que hace referencia el presente artículo, se encuentra soportada en el documento técnico (Anexo número 1) y en los planos anexos de determinación con sus correspondientes coordenadas (Anexo número 2), los cuales forman parte integral de la presente resolución.

Artículo 2°. Ámbito de aplicación espacial. La zona determinada como ronda de protección de la quebrada La Laja que aquí se anuncia, se delimita en el Anexo número 2, que forma parte integral de la presente resolución, y tiene efecto sobre todos los predios ubicados dentro de la zona de afectación.

Artículo 3°. *Objeto*. El objetivo fundamental de la zona de ronda de protección, cuya determinación se hace mediante la presente resolución, es la conservación, restauración y uso sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo, así como la protección del paisaje forestal y las coberturas naturales presentes en la zona.

De conformidad con lo anterior, y en armonía con las situaciones particulares y concretas consolidadas, la zona determinada como ronda de protección en la presente resolución queda sujeta a mantener el efecto protector, para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales.

Artículo 4°. *Régimen de usos de la zona de ronda de protección*. El régimen de usos de la zona de ronda de protección determinada por el presente acto es el siguiente:

Uso principal: Conservación de suelos y restauración de la vegetación adecuada para la protección de los mismos.

Usos compatibles: Recreación pasiva o contemplativa.

Usos condicionados: Captación de aguas o incorporación de vertimientos, siempre y cuando no afecten el cuerpo de agua ni se realice sobre nacimientos y/o construcción de infraestructura de apoyo para actividades de recreación, embarcaderos, puentes y obras de adecuación, desagüe de instalaciones de acuicultura y extracción del material de arrastre.

Usos prohibidos: Agropecuarios, industriales, urbanos y suburbanos, loteo y construcción de viviendas, minería, disposición de residuos sólidos, tala y rocería de la vegetación.

Parágrafo 1°. Dentro de los usos principales de conservación y restauración contemplados en el régimen enunciado, se enmarcan aquellos orientados a mejorar las condiciones y conocimiento de la zona, siempre y cuando tales actividades se asocien a la conservación y recuperación del medio ambiente, tales como la investigación científica y la instalación y operación de equipos de monitoreo ambiental.

Parágrafo 2°. La instalación de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos domiciliarios solo se permitirá previa autorización de la CAR, e imposición de las medidas de compensación correspondientes.

Parágrafo 3°. La tala a la cual se refiere el presente artículo dentro de los usos prohibidos, hace referencia a la vegetación nativa, pues esta actividad se permitirá tratándose de vegetación exótica (pino, eucalipto, acacia, ciprés, retamo, entre otras); aprovechamiento de árboles aislados, cuando se encuentren caídos o muertos por causas naturales, o para el

control de emergencias fitosanitarias y la prevención de riesgos, y en general, en aquellos casos en los cuales se ponga en peligro la vida y bienes de las personas, previa autorización impartida por parte de la CAR.

Artículo 5°. *Parámetros para los usos condicionados.* La implementación de los usos condicionados enunciados en el artículo anterior, se sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos y parámetros:

- a) Otorgamiento previo de los permisos ambientales y urbanísticos a que haya lugar;
- b) Autorización previa por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR);
- c) No generar fragmentación de vegetación nativa o de los hábitats de la fauna y su integración paisajística al entorno natural;
- d) La incorporación de vertimientos implica la conducción y descarga de los mismos, previo otorgamiento del permiso respectivo;
- e) El desarrollo de los usos previstos en el artículo anterior puede conllevar, en algunos casos, la intervención dentro del cauce del cuerpo hídrico.

Artículo 6°. *Zonas de alto riesgo no mitigable.* Bajo ninguna circunstancia se permitirá la continuidad de las actividades económicas, asentamientos y ocupaciones de predios localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, aspecto que será objeto de control por la Administración Municipal de Ubaté, con la colaboración de las autoridades e instancias establecidas en el ordenamiento jurídico vigente sobre la materia.

Artículo 7°. *Aumento de cobertura boscosa.* Los propietarios y poseedores de los inmuebles localizados en la ronda de protección de la quebrada La Laja, deberán desarrollar proyectos de restauración y/o paisajismo, orientados a la recuperación ambiental. Para tal fin, además, se deberán facilitar las labores de seguimiento, control y vigilancia por parte de las autoridades competentes, so pena de las sanciones a que haya lugar.

La sustitución de los usos no forestales contará con el apoyo de la CAR, principalmente en lo concerniente a la asesoría técnica, dirigidas a la reconversión de actividades compatibles con el régimen de usos previsto en el presente acto.

Artículo 8°. *Determinante ambiental.* De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, este acto constituye una determinante ambiental de obligatoria inclusión en los respectivos procesos de elaboración y revisión de los planes de ordenamiento territorial de los municipios localizados en el ámbito espacial del mismo.

Artículo 9°. *Limitación.* La presente resolución conlleva una afectación del derecho de propiedad sobre los predios localizados en el ámbito de la ronda de protección de la quebrada La Laja, pero únicamente respecto del atributo del uso, en el sentido de que estos inmuebles deben orientarse a garantizar el cumplimiento de los propósitos de conservación definidos en el artículo 3°.

De conformidad con lo anterior, la definición de la ronda de protección de la quebrada La Laja no acarrea una prohibición para que tales predios puedan ser vendidos, hipotecados, arrendados, cedidos, donados, rematados y, en general, para que puedan ser objeto de cualquier otro acto o negocio permitido en el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. *Sanciones.* Sin perjuicio de los demás procedimientos y sanciones a que haya lugar, la violación de las disposiciones establecidas en la presente resolución dará lugar a la imposición de las sanciones y medidas preventivas de carácter ambiental previstas en la Ley 1333 de 2009 y demás normas concordantes sobre la materia.

Artículo 11. *Inscripción.* Solicitar a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos correspondientes, realizar la inscripción de la decisión adoptada mediante el presente acto, en los folios de matrícula inmobiliaria de los predios localizados en la ronda de protección de la quebrada La Laja.

Artículo 12. *Comunicaciones.* Comunicar el contenido del presente acto administrativo a la Gobernación de Cundinamarca y a la alcaldía del municipio en el cual se localiza el área objeto de la presente resolución, para el caso el municipio de Ubaté.

Artículo 13. *Publicación.* Publicar el presente acto administrativo en el *Diario Oficial* y en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Artículo 14. *Vigencia.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el *Diario Oficial*.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

El Director General,

Néstor Guillermo Franco González.
(C. F.).

EMPRESAS INDUSTRIALES
Y COMERCIALES DEL ESTADO

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 05 DE 2016

(agosto 30)

por el cual se adopta el estatuto interno de la caja promotora de vivienda militar y de policía.

La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en ejercicio de las facultades legales, estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas en el numeral 3 del artículo 8 del Decreto-ley 353 de 1994, modificado por el artículo 5° de la Ley 973 de 2005, y

ACUERDA:

Artículo 1°. Adóptese el Estatuto Interno que rige la organización y funcionamiento de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, así:

CAPÍTULO I

Naturaleza Jurídica, Domicilio, Objeto y Funciones

Artículo 2°. *Naturaleza Jurídica.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía creada por la Ley 87 de 1947, y reorganizada por los Decretos números 3073 de 1968, 2351 de 1971, 2182 de 1984, 2162 de 1992, 353 de 1994, la Ley 973 de 2005 y la Ley 1305 de 2009, es una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, de naturaleza especial, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 1°. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, no podrá destinar, ni utilizar sus recursos, utilidades y rendimientos o excedentes, para fines distintos a los previstos en la ley, su objeto y funciones. La Caja no estará sometida al régimen de encaje, ni inversiones forzosas establecidas para el sistema financiero.

Parágrafo 2°. En ejercicio de la tutela administrativa, corresponde al Ministerio de Defensa Nacional la orientación, coordinación y control de la Caja en los aspectos de organización, personal y actividades que debe desarrollar este, de acuerdo con la política general del Gobierno nacional.

Artículo 3° *Domicilio.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tendrá como domicilio principal la ciudad de Bogotá D. C., pero, previa autorización de la Junta Directiva, siempre y cuando se requiera, creará y establecerá dependencias operativas y administrativas en cualquier lugar del territorio nacional, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 4°. *Objeto.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, tendrá como objeto facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia, mediante la realización o promoción de todas las operaciones del mercado inmobiliario, incluidas las de intermediación, la captación y administración del ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto.

Parágrafo. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, podrá administrar las cesantías del personal de la Fuerza Pública, que haya obtenido vivienda de conformidad con lo dispuesto por el Gobierno nacional. Para quienes gozan del efecto retroactivo en esta prestación, esta se sujetará al plan de pagos establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 5° *Funciones.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, cumplirá las siguientes funciones:

1. Colaborar con el Ministerio de Defensa Nacional en la formulación de la política y planes generales en materia de vivienda propia para sus afiliados.
2. Administrar directa o indirectamente los bienes muebles o inmuebles y los recursos de capital que constituyen el patrimonio de la Entidad.
3. Fomentar el ahorro voluntario de sus afiliados.
4. Organizar sistemas especiales de administración de los recursos de los afiliados, a través de entidades fiduciarias, bancos u otras entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
5. Celebrar contratos de mandato, encargos de gestión, administración fiduciaria y fiducia pública en las diferentes modalidades, conforme a las normas de la Ley 80 de 1993, o las que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
6. Recibir y administrar los aportes de sus afiliados.
7. Llevar el registro de los aportes de sus afiliados a través de cuentas individuales.
8. Pagar a los afiliados el ahorro que por concepto de cesantías sea trasladado a la Caja por el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional.
9. Conceder crédito hipotecario para sus afiliados, con destino a la consecución de vivienda y organizar para el efecto sistemas y procedimientos especiales, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo primero de la Ley 546 de 1999, cuando cumplan el tiempo requerido para acceder a la solución de vivienda.
10. Identificar las necesidades de vivienda de sus afiliados, por categoría relativamente homogénea, con el fin de que puedan participar colectivamente en proyectos específicos.
11. Identificar en el mercado proyectos habitacionales de vivienda nueva o usada, para facilitar a los afiliados la adquisición de vivienda a través de los sistemas disponibles.
12. Propiciar a solicitud de los afiliados, la ejecución de programas de vivienda, asesorar su vinculación a estos y velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras pactadas.
13. Ejercer a nombre de los afiliados, la asesoría técnica del desarrollo de los programas de vivienda a los que se vinculen los afiliados.
14. Gestionar la consecución de subsidios y apoyos de carácter técnico y financiero que contribuyan a mejorar el acceso a la vivienda de los afiliados.
15. Las demás que correspondiendo a su objeto, sea necesario adelantar para el cumplimiento adecuado de los mismos.

Parágrafo. Para el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 9, del presente artículo la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía podrá utilizar hasta un monto equivalente al 18% del total de activos de la Caja. Cupo que se podrá ampliar paulatinamente previo concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todos los casos la revisión que se haga sobre el saldo de cartera no podrá superar el porcentaje aquí establecido o ampliado de conformidad con lo estipulado en este artículo, para su aplicación se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 973 de 2005, respecto del acceso a la solución de vivienda, en cuanto al procedimiento para su adjudicación.

CAPÍTULO II
Órganos de Dirección y Administración

Artículo 6° *Dirección y Administración.* La Dirección y Administración de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, estará a cargo de la Junta Directiva y el Gerente General quien es su representante legal.

Artículo 7°. *Junta Directiva.* Conforme al artículo 4° de la Ley 973 de 2005, La Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía estará integrada por los siguientes miembros:

1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado quien la presidirá.
2. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
3. El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio o su delegado.
4. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
5. El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado.
6. El Director General de la Policía Nacional o su delegado.
7. Un representante de los afiliados uniformados de las Fuerzas Militares.
8. Un representante de los afiliados uniformados de la Policía Nacional.
9. Un representante de los afiliados civiles o no uniformados, vinculados al Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Parágrafo 1°. El Ministerio de Defensa Nacional establecerá el perfil profesional, sin considerar los grados de jerarquía castrense, de los representantes de los afiliados descritos en los numerales 7, 8 y 9 del presente artículo y determinará el procedimiento para su elección por parte del personal que representan, para un período de dos (2) años, contados a partir de la fecha de posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Parágrafo 2°. El representante del personal civil del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Militares o personal no uniformado de la Policía Nacional, de que trata el numeral 9 del presente artículo, será elegido por parte del personal que representan de manera rotativa de acuerdo con los períodos de elección de sus integrantes de tal forma que alternativamente por cada período corresponda uno del Ministerio de Defensa Nacional y las Fuerzas Militares y en el siguiente uno de la Policía Nacional.

Parágrafo 3°. En ausencia del Ministro de Defensa Nacional o de su delegado, presidirá las reuniones ordinarias o extraordinarias, el Ministro que asista o su delegado en el orden establecido en el presente artículo, o en su defecto el Oficial en actividad más antiguo, que haga parte de la Junta.

Parágrafo 4°. El Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, asistirá a las reuniones con derecho a voz, pero sin voto y designará un funcionario de la Entidad para que actúe como Secretario de la Junta Directiva.

Parágrafo 5°. La Junta Directiva sesionará válidamente con la asistencia de cinco (5) de sus miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría simple de los asistentes.

Parágrafo 6°. Para ejercer válidamente las funciones como miembro de la Junta Directiva se requiere la designación junto con la posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Los servidores públicos que por disposición legal hacen parte de la Junta Directiva y que ejerzan personalmente dicha función, no requieren adelantar el trámite de posesión, conforme a lo regulado sobre la materia.

Artículo 10. *Funciones de la junta directiva.* Son funciones de la Junta Directiva las siguientes:

1. Formular la política general de la Entidad.
2. Aprobar los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, sometidos a su consideración por el Gerente General de la Entidad.
3. Establecer los planes, programas, proyectos y procedimientos que faciliten a los afiliados la adquisición de vivienda.
4. Verificar el funcionamiento general de la organización y su conformidad con la política adoptada.
5. Proponer al Gobierno nacional las modificaciones a la estructura y planta de personal que consideren pertinentes y adoptar los estatutos internos de la Entidad y cualquier reforma que a ellos se introduzca.
6. Aprobar el anteproyecto de presupuesto anual de ingresos y gastos.
7. Aprobar los estados financieros consolidados de cada vigencia fiscal.
8. Autorizar los proyectos del presupuesto de inversión que presente la Gerencia.
9. Autorizar la gestión y contratación de empréstitos internos o externos, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
10. Reglamentar sistemas especiales para recibir y administrar los recursos de los afiliados.
11. Autorizar la participación de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en sociedades que se organicen para cumplir adecuadamente su objetivo social de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
12. Delegar cuando lo considere conveniente alguna o algunas de sus funciones en el Gerente General, conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
13. Controlar la gestión del Gerente General, de acuerdo con la metodología que apruebe la Junta Directiva.
14. Crear Comités de Apoyo de conformidad con las disposiciones legales y las emanadas de la Superintendencia Financiera Colombia.
15. Velar porque los servidores públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía sean escogidos de acuerdo con los criterios objetivos, que incluyan el perfil de cargo, la competencia y la idoneidad profesional, según el Manual Específico de Funciones y Requisitos de la entidad y, demás normas concordantes.

16. Hacer seguimiento periódico de la ejecución presupuestal de la Entidad y verificar el cumplimiento de lo proyectado.

17. Velar por que la empresa garantice la continuidad de su objeto o negocio.

18. Evaluar los informes del Área de Control Interno, con el apoyo del Comité de Auditoría.

19. Examinar los informes del revisor fiscal, en orden a tomar las decisiones.

20. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones consignadas en las leyes, en los estatutos y las demás que dicte para el funcionamiento de la Entidad.

21. Aprobar el Reglamento de Crédito, de Cesantías, de Ahorro Voluntario y de Inversiones de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

22. Adoptar el Código de Conducta y aprobar el Manual de Procedimientos que deberá observarse para prevenir el lavado de activos, así como designar el Oficial de Cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás disposiciones pertinentes.

23. Adelantar la autoevaluación de su gestión con base en los indicadores establecidos para tal efecto, con el fin de emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas.

24. Dictar su propio reglamento.

25. Cumplir y hacer cumplir las políticas que adopte el Gobierno nacional.

26. Las demás que le señale la ley, las disposiciones relativas a las Juntas Directivas de los establecimientos de crédito y las que fije la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 11. *Reuniones.* La Junta Directiva de la Caja Promotora Vivienda Militar y de Policía sesionará ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente cuando las necesidades de la Entidad así lo exijan, por convocatoria que haga su Presidente, el Revisor Fiscal, el Gerente General o por acuerdo de la mayoría de sus miembros. Así mismo, la Junta Directiva podrá realizar reuniones no presenciales de conformidad con las disposiciones previstas en el Decreto número 19 de 2012 y en las demás normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten.

Parágrafo 1°. La convocatoria a reuniones ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva se hará mediante comunicación escrita, verbal o electrónica a sus miembros efectuada con no menos de cinco (5) días calendario de antelación, en la cual se informará el orden del día, así como el lugar, la fecha y hora previstos para la respectiva reunión.

Cuando se trate de reuniones extraordinarias no será necesario que la convocatoria se efectúe con la antelación mencionada, no obstante, deberá efectuarse por comunicación escrita, verbal o electrónica, indicación del Orden del Día, así como la fecha y hora fijada para la correspondiente reunión.

Parágrafo 2°. La Junta Directiva podrá invitar a sus deliberaciones a funcionarios u otras personas que consideren necesarias, quienes participaran con voz pero sin voto.

Artículo 12. *Denominación de los actos.* Los actos de la Junta Directiva se denominarán Acuerdos y llevarán la firma del Presidente y Secretario de la Junta.

De las reuniones de la Junta se levantarán Actas, las cuales podrán contener decisiones de Junta y una vez aprobadas deberán ser firmadas por el Presidente y Secretario de la misma.

Las decisiones de la Junta Directiva adoptadas mediante Acuerdos, así como las Actas, se deberán numerar consecutivamente con indicación del día, mes y año en que se expidan o suscriban y estarán bajo la custodia y responsabilidad del Secretario de la Junta.

Artículo 13. *Honorarios de los Miembros de la Junta Directiva.* Los miembros de la Junta Directiva tienen derecho al reconocimiento y pago de honorarios por la asistencia a cada sesión, los cuales serán fijados en los términos y condiciones señalados en la ley y las demás disposiciones que rijan la materia.

Artículo 14. *Participación.* Para garantizar y fomentar la adecuada y efectiva participación en la Junta Directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía de las personas que sean elegidas como representantes de los afiliados ante la misma, la Entidad podrá capacitarlos en temas de la administración de instituciones de carácter financiero, previa adopción de un reglamento sobre la materia por parte de la Gerencia General.

Artículo 15. *Régimen de Incompatibilidades e Inhabilidades.* A los miembros de la Junta Directiva, Gerente General y demás funcionarios que de acuerdo con las normas vigentes cumplan funciones propias de los administradores de entidades financieras se les aplicará el régimen general de inhabilidades, incompatibilidades y posesiones previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás disposiciones emanadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Además estarán sujetos a las inhabilidades e incompatibilidades que de manera general establezca la Constitución Política y la ley.

Parágrafo. Los miembros de la Junta Directiva, aunque ejercen funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos, su responsabilidad se registrará por las leyes de la materia y los estatutos internos.

Artículo 16. *Gerente General.* Conforme al artículo 9° de la Ley 973 de 2005, la representación legal de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía estará a cargo del Gerente General, Agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción. La selección deberá ser considerada entre los miembros en retiro de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

El Presidente de la República o su delegado, designará por ausencia temporal del Gerente General, al funcionario que lo reemplazará. El encargo deberá realizarse mediante acto administrativo emitido por el Presidente de la República o su delegado, y tomará posesión en los mismo términos que lo hace el titular del cargo.

Artículo 17. *Funciones del Gerente General.* El Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tendrá, además de las funciones que le señalen las leyes, decretos y demás disposiciones vigentes, las siguientes:

1. Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo de las actividades de la entidad, en cumplimiento de las políticas adoptadas por la Junta Directiva.
2. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación los planes que se requieran para desarrollar los programas de la Entidad en cumplimiento de las políticas adoptadas.

3. Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos de cada Vigencia Fiscal, así como los estados financieros periódicos de la Entidad, en las fechas señaladas en los reglamentos.

4. Presentar a la Junta Directiva para su aprobación, los planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo.

5. Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos del presupuesto de inversión y las operaciones comprendidas dentro de su objeto social, que así lo requieran.

6. Preparar y presentar para aprobación de la Junta Directiva el Estatuto Interno de la Entidad y sus modificaciones.

7. Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto social de la Entidad.

8. Constituir mandatos para representar a la Entidad en negocios judiciales y extrajudiciales y ejercer las acciones a que haya lugar, en defensa de los intereses institucionales.

9. Nombrar, dar posesión y remover a los empleados públicos de la Entidad. Celebrar los contratos con los trabajadores oficiales.

10. Representar a la Entidad como persona jurídica y autorizar con su firma los actos y contratos en que ella tenga que intervenir.

11. Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la Entidad y de los afiliados.

12. Representar las acciones o derechos que la Entidad posea en otros organismos.

13. Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y de competencias laborales y dictar normas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la Entidad.

14. Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la Entidad.

15. Aprobar de conformidad con el reglamento establecido el ingreso a la Entidad de los afiliados voluntarios.

16. Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

17. Distribuir la planta global de personal, crear los comités permanentes o transitorios y grupos internos de trabajo que considere necesarios, para el cumplimiento de las funciones propias de la Entidad.

18. Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias para la protección de los bienes e intereses patrimoniales de la Entidad y otros riesgos cuyo amparo se estime social y económicamente provechosos para los afiliados y la Caja.

19. Presentar a la Junta Directiva informes de gestión anual.

20. Presentar bimestralmente a la Junta Directiva o cuando esta lo requiera, un informe sobre el manejo del portafolio de inversiones.

21. Cumplir todas aquellas funciones que se relacionen con la organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a otra autoridad.

22. Ejercer las demás funciones que le señale o delegue la Junta Directiva, las normas legales y aquellas que por su naturaleza le correspondan como funcionario directivo.

Artículo 18. *Denominación de los actos del gerente general.* Los actos o decisiones que adopte el Gerente General en ejercicio de las funciones administrativas a él designadas por la ley, los presentes Estatutos y los Acuerdos de la Junta Directiva, se denominarán resoluciones, las que enumerarán sucesivamente con la indicación del día, mes y año en que se expidan.

CAPÍTULO III

Estructura

Artículo 19. *Estructura.* La estructura de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía será determinada de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los principios y reglas generales contenidas en el artículo 54 y 115 de la Ley 489 de 1998, y atendiendo las necesidades de la Entidad, la cual será flexible de tal manera que permita el cumplimiento eficaz y eficiente de sus funciones.

CAPÍTULO IV

Régimen de Personal

Artículo 20. *Clasificación de los servidores.* Para todos los efectos legales las personas que presten sus servicios en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, tendrán el carácter de Trabajadores Oficiales. No obstante lo anterior, tienen la calidad de Empleados Públicos, de libre nombramiento y remoción, el Gerente, los Subgerentes, los Jefes de Oficina, los Responsables del Registro y Control de Tesorería o Back Office, de la Administración de la Mesa de Dinero o Front Office, del Área de Contratación, del Almacén y de la Tesorería, quienes ejercen actividades de manejo y confianza.

Artículo 21. *Régimen salarial.* Los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios, se registrarán por las normas generales vigentes para esta clase de servidores.

De conformidad con las normas legales vigentes, se determinará el régimen de remuneraciones, primas y bonificaciones, viáticos, horas extras y subsidios, para los trabajadores oficiales.

Parágrafo. Los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para efectos de remuneraciones, primas, bonificaciones, viáticos y subsidios, no se registrarán por las normas establecidas para el personal civil del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 22. *Régimen prestacional.* Los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, quedarán sometidos a los sistemas generales de pensiones y salud establecidos en la Ley 100 de 1993. En lo relativo a las demás prestaciones sociales, se les aplicará el Decreto-Ley 2701 de 1988 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 23. *Régimen Disciplinario.* Los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía están sujetos al Régimen Disciplinario Único previsto en la Ley 734 de 2002 y demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 24. *Posesión.* Los empleados públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía se posesionarán ante el Gerente General o el funcionario en quien este delegue tal función.

CAPÍTULO V

Patrimonio y Recursos

Artículo 25. *Patrimonio.* Conforme al artículo 12 del Decreto-ley 353 de 1994, el patrimonio de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía estará constituido por:

1. Los bienes muebles e inmuebles que haya adquirido o llegare a adquirir, la cartera, así como todas aquellas inversiones temporales y depósitos en dinero o especie que siendo de su propiedad, posea a cualquier título.

2. Las acciones, participaciones o aportes en sociedades o empresas organizadas o que se organicen, de conformidad con el objeto social o con las autorizaciones legales.

3. Las donaciones que se hagan a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por parte de entidades públicas o personas naturales o jurídicas de derecho privado, con autorización de la Junta Directiva.

4. La utilidad que en cada ejercicio fiscal sea reasignada al interior de la empresa, de conformidad con las normas legales vigentes.

Artículo 26 *Recursos.* Conforme al artículo 8° de la Ley 973 de 2005, los recursos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía estarán constituidos por:

1. Los aportes que se incluyan en el Presupuesto Nacional.

2. Los rendimientos financieros, producto de operaciones con los activos de la Caja.

3. Los recursos que alimentan las cuentas individuales de los afiliados. El conjunto de cuentas individuales constituirá patrimonio autónomo de propiedad de los afiliados, independiente del patrimonio de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

4. Las cesantías y el ahorro que los afiliados comprometan con cargo a la obligación hipotecaria con la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, así como las cuotas de amortización mensuales o abonos que realicen para pago de dichos créditos.

5. Las cesantías de los miembros de la Fuerza Pública en los términos de la Ley 973 de 2005.

6. Los demás ingresos que le sean reconocidos legalmente.

CAPÍTULO VI

Régimen Jurídico de los Actos y Contratos

Artículo 27. *Régimen Jurídico de los Actos.* Los actos que expida la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía para el desarrollo de su actividad propia o gestión económica se sujetarán a las disposiciones del derecho privado y a la Jurisdicción Ordinaria, conforme a las normas que rijan la materia.

Los actos que realice para el cumplimiento de las funciones administrativas que le haya confiado la ley son actos administrativos, sujetos al procedimiento gubernativo consagrado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Artículo 28. *Régimen de contratación.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, no se regirá por las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y en consecuencia, estará sometida contractualmente a las disposiciones aplicables a los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás Entidades financieras de carácter estatal, de conformidad con el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007 sus decretos reglamentarios y modificaciones.

Parágrafo. La Entidad adoptará en desarrollo de su Régimen Contractual su propio Manual de Contratación, en el cual se determinarán los procedimientos, actividades y responsabilidades dentro del Proceso Contractual, garantizando en todo caso, el cumplimiento de los principios de la Función Administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política.

CAPÍTULO VII

Control Fiscal, Interno y Administrativo

Artículo 29. *Control Fiscal.* Corresponde a la Contraloría General de la República ejercer la vigilancia de la gestión fiscal, la cual se hará en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios establecidos en el artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 42 de 1993 y demás disposiciones que le complementen, adicionen o modifiquen.

Artículo 30. *Control Interno.* El Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en su calidad de Representante Legal, será el responsable del establecimiento y desarrollo en la Entidad del Modelo Estándar de Control Interno, contemplado en el Decreto número 1083 de 2015 (Libro 2, Parte 2, Título 21, Capítulo 6), con el fin de garantizar que las actividades y operaciones de la Entidad cumplan con la misión institucional, mediante la evaluación independiente del Sistema de Control Interno (SIC) verificando que el ejercicio de las funciones de los Servidores Públicos se ajusten a lo dispuesto en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 87 de 1993 y demás normas complementarias, reglamentarias o sustitutivas que se expidan sobre el particular, atendiendo los principios de moralidad, eficiencia, economía, calidad y oportunidad de los servicios, celeridad e imparcialidad, que rigen la Administración Pública, sin perjuicio de la responsabilidad que por tal motivo corresponde a los Jefes de cada una de las dependencias de la Entidad, y de todos sus servidores en general, de conformidad con las normas vigentes.

Artículo 31. *Control administrativo.* La tutela administrativa de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, como entidad vinculada, corresponde al Ministerio de Defensa Nacional.

El control administrativo de la Entidad conforme a lo establecido mediante el artículo 106 de la Ley 489 de 1998, se cumplirá en los términos de los correspondientes convenios, planes o programas que podrán celebrarse periódicamente con la Nación, a través del Ministerio de Defensa Nacional, acorde a la ley.

El Gerente General tomará las medidas necesarias, para suministrar a las diferentes autoridades la información y documentos que se requieren para la eficacia de las visitas de inspección técnica, administrativa, fiscal o judicial y de otra naturaleza que se ordenen en las mismas.

Parágrafo. El control administrativo no compromete la autorización o aprobación de los actos específicos que conforme a la ley compete expedir a los organismos internos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

CAPÍTULO VIII

Revisoría Fiscal

Artículo 32. *Revisoría fiscal.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tendrá un Revisor Fiscal con su respectivo suplente, conforme a su naturaleza jurídica. La facultad de designar el Revisor Fiscal será del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según lo dispuesto por el Decreto número 2043 de 2007 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, en razón a que las funciones de la asamblea general de accionistas las cumple la Junta Directiva de la Entidad.

El Revisor Fiscal, principal y suplente, deberán tomar posesión de su cargo ante la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1.5 del Capítulo II del Título IV Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia financiera de Colombia, para el ejercicio válido de sus cargos.

La Junta Directiva estudiará las propuestas para la selección de la Revisoría Fiscal presentadas por las firmas contadoras especializadas en revisoría fiscal, con experiencia comprobada en otras entidades del sector financiero y que no hayan sido sujetos de ninguna sanción por parte de los organismos de control y vigilancia, con el fin de proponer su designación. Dichas propuestas deberán contener el alcance de la gestión de revisoría, sus costos y metodología.

Artículo 33. *Funciones del Revisor Fiscal.* El Revisor Fiscal cumplirá además de lo dispuesto en el Libro Segundo, Título I, Capítulo VIII del Código de Comercio, lo señalado en el numeral 1 Capítulo III, Título I de la Parte I, Gobierno Corporativo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, y lo prescrito en las demás disposiciones legales sobre la materia.

Artículo 34. *Impedimentos.* La persona que ejerza la revisoría fiscal o el suplente deberá tener las cualidades y requisitos que exija la Ley, no podrá tener parentesco con los directivos o demás empleados de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Estarán sujetos a las demás incompatibilidades y prohibiciones establecidas en las disposiciones legales.

Parágrafo. Las personas que desempeñen las funciones de Revisoría Fiscal, no serán funcionarios de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía.

Artículo 35. *Dependencia y remuneración.* El Revisor Fiscal estará bajo la dependencia de la Junta Directiva y recibirá por los servicios la remuneración que se le fije de conformidad con lo establecido por el Gobierno nacional y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la cual no podrá ser superior al ochenta por ciento (80%) de la que corresponde al Gerente General de la Entidad.

CAPÍTULO IX

Sistema de Atención al Consumidor Financiero

Artículo 36. *Sistema de atención al consumidor financiero.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía de acuerdo a lo contemplado en la Ley 1328 de 2009 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, mantendrá el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), el cual debe propender porque se consolide al interior de la Entidad una cultura de atención, respeto y servicio a los consumidores financieros; se adopten los sistemas para suministrarles información adecuada; se fortalezcan los procedimientos para la atención de sus quejas, peticiones y reclamos; y se propicie la protección de los derechos del consumidor financiero, así como la educación financiera de éstos.

Parágrafo: La Junta Directiva establecerá las políticas relativas al Sistema de Atención al Consumidor Financiero, aprobará el manual del SAC y sus actualizaciones.

Artículo 37° *Defensor del Consumidor Financiero.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en desarrollo de la Ley 1328 de 2009 y las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan, tendrá un Defensor del Consumidor Financiero con su respectivo suplente, quienes podrán ser personas naturales o jurídicas, cuya selección, elección y designación estará a cargo de la Junta Directiva, para un periodo de dos (2) años prorrogable por el mismo periodo previa aprobación de la Junta.

Artículo 38. *Designación del defensor del consumidor financiero.* La Junta Directiva designará al Defensor del Consumidor Financiero, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por las personas naturales o las firmas especializadas en defensoría del cliente, con experiencia comprobada en otras entidades del sector financiero y que no hayan sido sujetos de ninguna sanción por parte de los organismos de control y vigilancia. Dichas propuestas deberán contener el alcance de la gestión de defensoría del cliente, sus costos y metodología.

Parágrafo. El Defensor del Consumidor Financiero, principal y suplente, deberá tomar posesión de su cargo ante la Superintendencia Financiera de Colombia, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1.8 del Capítulo II del Título IV Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, para el ejercicio válido de su cargo.

Artículo 39. *Funciones del defensor del consumidor financiero.* El Defensor del Consumidor Financiero velará por el respeto de los derechos de los afiliados o usuarios de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, resolverá sus inquietudes y dará respuesta de manera oportuna y gratuita a las quejas presentadas por el posible incumplimiento de las normas legales o internas en el desarrollo de las diferentes operaciones o servicios de la Entidad. Igualmente, serán funciones del Defensor del Consumidor Financiero las previstas

en las normas legales vigentes, en particular el Decreto Único Reglamentario número 2555 de 2010 y las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPÍTULO X

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft)

Artículo 40. Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (Sarlaft). La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía deberá mantener un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (Sarlaft), atendiendo los parámetros contenidos en los artículos 102 al 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en concordancia con el Capítulo IV del Título IV Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de prevenir que la Entidad sea utilizada para dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas.

Parágrafo. Igualmente atendiendo las disposiciones establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera contenida en la Circular Externa número 100 de 1995 proferida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía deberá mantener el Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC), el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL), el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM), y el Sistema de Administración del Riesgo Operativo (SARO), y demás sistemas de administración del riesgo que se diseñen para el efecto.

Artículo 41. *Designación del oficial de cumplimiento.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía tendrá un Oficial de Cumplimiento con su respectivo suplente, cuya selección, elección y designación estará a cargo de la Junta Directiva.

La Junta Directiva designará al Oficial de Cumplimiento y a su suplente, teniendo en cuenta las propuestas presentadas por el Gerente General de los funcionarios de la Entidad, para ejercer como Oficial de Cumplimiento, que demuestren experiencia comprobada en otras entidades del sector financiero y que no hayan sido sujetos de ninguna sanción por parte de los organismos de control y vigilancia.

El Oficial de Cumplimiento será como mínimo de segundo nivel jerárquico dentro de la Entidad, tendrá capacidad decisoria y estará apoyado por un equipo de trabajo humano y técnico que le permita cubrir las diferentes áreas de gestión y contar con el efectivo apoyo de las directivas de la Entidad.

El Oficial de Cumplimiento, principal y suplente, deberán tomar posesión de su cargo ante la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos establecidos en el numeral 1.1.6 del Capítulo II del Título IV Parte I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia para el ejercicio válido de sus cargos.

Artículo 42. *Funciones del oficial de cumplimiento.* Serán funciones del Oficial de Cumplimiento las previstas en el numeral 4.2.4.3.2 del Capítulo IV Título de la Parte I de la Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como las demás que disponga la Ley o expida el Gobierno nacional y las propias del cargo.

CAPÍTULO XI

Información Financiera

Artículo 43. *Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, en cumplimiento a la normatividad expedida en materia del aseguramiento de la información con estándares internacionales, a partir del año 2016 aplicará Normas Internacionales de Información Financiera para los reportes de los Estados Financieros a los grupos de interés de la Entidad, labor que será desarrollada por la Subgerencia Financiera a través del Grupo de Contabilidad.

CAPÍTULO XII

Inspección, Vigilancia y Control

Artículo 44. *Inspección, Vigilancia y Control.* La Superintendencia Financiera de Colombia ejercerá la inspección, vigilancia y control sobre las operaciones financieras que realice la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, de acuerdo con su condición de Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional de naturaleza especial, su objeto, funciones y operaciones, sin perjuicio de lo previsto en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en las demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen y en las demás que señalen las normas vigentes.

Artículo 45. *Sujeción a las Reglas Especiales.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía estará sujeta a las reglas especiales que adopte la Superintendencia Financiera de Colombia sobre las operaciones que realice de acuerdo con su naturaleza especial de entidad financiera, su objeto, funciones y servicios regulados por la Leyes 973 de 2005, 1305 de 2009 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.

CAPÍTULO XIII

Códigos de Buen Gobierno y de Ética y Conducta

Artículo 46. *Códigos de Buen Gobierno y de Ética y Conducta.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cuenta con los Códigos de Buen Gobierno y de Ética y Conducta de la Entidad, los cuales contienen las políticas, valores y principios éticos que serán de obligatorio cumplimiento para el desarrollo de su misión.

La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, será la encargada de implementar mecanismos correspondientes para auditar anualmente o cuando lo considere necesario el cumplimiento de los Códigos de Buen Gobierno y de Ética y Conducta, para esta labor contará con el acompañamiento del Área de Talento Humano y la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo.

CAPÍTULO XIV

Disposiciones Finales

Artículo 47. *Sistema integrado de gestión.* La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía cuenta con un Sistema Integrado de Gestión implementado, que comprende el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el

Modelo Estándar de Control Interno, con un enfoque de operación basado en procesos y mejoramiento continuo, de acuerdo con las Normas Técnicas de Calidad que se encuentra articulado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Artículo 48. *Manejo de información privilegiada.* De conformidad con lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia los miembros de la Junta Directiva, empleados, colaboradores, terceras personas, clientes y/o proveedores y demás intervinientes en los procesos de la Entidad, deberán mantener la debida reserva sobre os documentos de trabajo y la información privilegiada de los afiliados que esté bajo su custodia.

El Gerente General de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía como alto directivo de administración y dirección, creará Acuerdos de confidencialidad para el manejo y reserva de la información privilegiada.

Artículo 49. *Adopción y Reformas de los Estatutos Internos.* La adopción y cualquier reforma que se introduzca a los Estatutos Internos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, requerirán concepto técnico previo y favorable emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 95 del Decreto número 1227 de 2005, y serán aprobados por la Junta Directiva, al tenor del artículo 90 de la Ley 489 de 1998. Una vez surtido este trámite se deberá informar a la Superintendencia Financiera de Colombia dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su aprobación, mediante el envío del Acuerdo de Junta correspondiente en la cual conste la adopción y/o reforma de los estatutos, según lo dispuesto en el numeral 7.2 Capítulo I Título IV Parte I la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 50. *Vigencia y Derogatorias.* El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial el Acuerdo número 08 de 2008.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 30 de agosto de 2016.

El Presidente Junta Directiva,

General (Ra) José Javier Pérez Mejía.

La Secretaria Junta Directiva,

Laura Alejandra Samacá Caro.

Constancia: La suscrita Secretaria de la Junta Directiva hace constar que el presente acto administrativo fue aprobado mediante Acta de Junta Directiva número (09) del 3 de agosto de 2016 publicado en el *Diario Oficial* número(...) del...

La Secretaria Junta Directiva,

Laura Alejandra Samacá Caro.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601949. 15-IX-2016. Valor \$616.700.

VARIOS

Consejo Nacional Electoral

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1843 DE 2016

(septiembre 8)

por medio de la cual se complementa la Resolución 1733 de 2016, por la cual se regulan y reglamentan algunos temas concernientes al “plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en los términos de la Ley 1806 del 24 de agosto de 2016 y la sentencia C-379 de 2016, en materia de utilización de espacios en radio y televisión.

El Consejo Nacional Electoral, en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales, en especial de las conferidas en los numerales 6, 10 y 13 del artículo 265 de la Constitución Política, las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015 y el numeral 4 del artículo 2° de la Ley Estatutaria número 1806 de 2016, y

CONSIDERANDO:

1. Que el artículo 2° de la Ley Estatutaria 1806 de 2016 dispone:

“Artículo 2°. Reglas especiales del plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Los procedimientos de convocatoria y votación se regirán por las siguientes reglas:

(...)

4. La organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública y la participación en condiciones de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad, de la campaña por el sí o por el no, **para lo cual regulará el acceso a los medios de comunicación y demás disposiciones necesarias.**

(...)

Parágrafo 1°. Las campañas lideradas por movimientos cívicos, ciudadanos, grupos significativos de ciudadanos, partidos políticos y otras colectividades que decidan participar promoviendo el voto por el “SÍ” y “NO” tendrán idénticos deberes y garantías, espacios y participación en los medios y mecanismos señalados en el presente artículo”.

2. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-379 del 18 de julio de 2016¹ en lo que concierne al alcance de lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2° referido, específicamente frente a la competencia reguladora del Consejo Nacional Electoral, señaló:

¹ Revisión de constitucionalidad del Proyecto de ley Estatutaria número 94 de 2015 Senado – 156 de 2015 Cámara “por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

“80. Con todo, también debe resaltarse que conforme a la norma de remisión contenida en el artículo 4° del PLE, las funciones adscritas a la organización electoral no se restringen a las previstas en la norma objeto de examen, sino que se extiendan a aquellas que para el caso de los plebiscitos se confieren tanto en la Ley 134 de 1994 como en la Ley 1757 de 2015. Estas normas operan como legislación general y aplicable al caso del plebiscito especial, en tanto no entren en contradicción con los contenidos específicos del PLE. Por ende, también se entienden incorporadas a las reglas sobre la campaña del plebiscito especial tales disposiciones generales, particularmente en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° del PLE, a través del cual el legislador estatutario hizo remisión expresa a las leyes antes mencionadas.

80.1. De este modo, debe resaltarse que conforme al artículo 79 de la Ley 134 de 1994, el acceso de los partidos y movimientos políticos a los espacios de televisión financiados por el Estado, para la campaña a favor o en contra del plebiscito, se hará de conformidad con lo establecido para el referendo constitucional. Asimismo, esta disposición indica que el Gobierno dispondrá del mismo tiempo en televisión para expresar su opinión sobre el plebiscito. Al respecto, el artículo 91 ejusdem determina que (i) en el referendo de carácter constitucional o legal, **los promotores a favor o en contra de la iniciativa, así como los partidos y movimientos con personería jurídica, tendrán derecho dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de la votación, a por lo menos dos espacios institucionales en cada canal nacional de televisión.** El Gobierno nacional si lo desea, dispondrá de tres espacios en cada canal para que presente su posición sobre la materia; y (ii) el tiempo asignado a los promotores de la iniciativa no podrá ser inferior al promedio del asignado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Por lo tanto, serán estas reglas las que llenen de contenido lo previsto en el numeral cuarto del artículo 2° del PLE cuando establece que la organización electoral tiene la competencia para la regulación de acceso a los medios de comunicación y demás disposiciones necesarias.

3. Que de otra parte el artículo 5° de la Ley Estatutaria 1806 de 2016, establece:

“Artículo 5°. Divulgación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Gobierno nacional publicará y divulgará el contenido íntegro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.

El Gobierno nacional garantizará la publicidad y divulgación del acuerdo final mediante una estrategia de comunicación que asegure la transparencia y el conocimiento a fondo de los acuerdos, con el objetivo de generar un debate amplio y suficiente, utilizando para ello los siguientes medios de comunicación masivos y canales digitales de divulgación:

a) Sitio web de las entidades públicas de la rama ejecutiva, del sector central y el sector descentralizado por servicios, incluyendo las Fuerzas Militares;

b) Redes sociales de las entidades públicas de la rama ejecutiva, del sector central y el sector descentralizado por servicios, incluyendo las Fuerzas Militares;

c) Periódicos de amplio tiraje nacional;

d) Servicios de Radiodifusión Sonora Comercial de alcance nacional, que cederán a título gratuito en horario prime time un espacio de cinco minutos diarios;

e) Servicios de Radiodifusión Sonora Comunitaria, que cederán a título gratuito en horario prime time un espacio de cinco minutos diarios;

f) Canales de televisión pública y privada, estos últimos cederán a título gratuito en horario prime time un espacio de cinco minutos diarios;

g) Urna de cristal como principal plataforma del gobierno para la participación ciudadana y la transparencia gubernamental.

En el caso de los literales c), d), e) y f) el Gobierno nacional presentará una síntesis de los aspectos más relevantes del acuerdo final invitando a los ciudadanos a conocer el texto íntegro en sus sitios web y redes sociales.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación verificará y certificará el cumplimiento de la orden impartida en el presente artículo, respecto de los literales a), b), c), y g) La Agencia Nacional del Espectro verificará y certificará el cumplimiento de la orden impartida en el presente artículo respecto de los literales d) y e) La autoridad Nacional de Televisión verificará y certificará el cumplimiento de la orden impartida en el presente artículo respecto del literal f).

Las entidades comprometidas en la verificación y certificación del cumplimiento de estas órdenes rendirán cuentas públicas con posterioridad a la votación del plebiscito sobre la gestión realizada.

Parágrafo 1°. En las zonas rurales del país el Gobierno nacional garantizará, a través de las entidades comprometidas, una mayor publicación y divulgación del contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en las zonas rurales del país.

Parágrafo 2°. La estrategia de socialización dispuesta en este artículo, también deberá estar dirigida a los colombianos que se encuentran en el exterior, especialmente para las víctimas del conflicto armado. Su ejecución estará a cargo del Gobierno nacional a través de las embajadas y consulados.

4. Que la Corte Constitucional mediante Sentencia C-379 del 18 de julio de 2016² en lo que refiere a la divulgación de que trata el artículo 5° en mención, precisó:

“La concesión tampoco desconoce el pluralismo informativo, pues si bien se establece que durante cinco minutos el Gobierno nacional puede informar a los ciudadanos sobre el contenido del Acuerdo Final, ello no conlleva a una monopolización de la información ni a la anulación del pluralismo informativo, dado que tanto en la televisión como en los servicios de radiodifusión se pueden transmitir campañas en contra del plebiscito, garantizando así

² Revisión de constitucionalidad del Proyecto de ley Estatutaria número 94 de 2015 Senado – 156 de 2015 Cámara “por la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”

que los ciudadanos tengan oportunidad de informarse desde diferentes puntos de vista sobre este asunto particular.

(...)[L]a Corte concluye que existe una necesidad imperiosa que justifica que se establezcan concesiones gratuitas en los medios de comunicación, como la radiodifusión y la televisión. Además, se evidencia un respeto por los límites establecidos en la Sentencia C-1172 de 2001 y es evidente que la norma analizada contribuye de forma directa a la consecución de una finalidad legítima en tanto tiene un objetivo constitucional esencial, como es asegurar el derecho a la información y la libertad del elector.

(...) Sobre lo relacionado con la afectación a la propiedad de los concesionarios de servicios radiodifusores y de televisión, que se traduce en una expropiación sin indemnización, la Corte considera que no hay lugar a tal consideración pues como lo ha establecido reiterada jurisprudencia, no hay una afectación al derecho de propiedad en tanto los operadores de estos medios de comunicación no tienen el derecho de dominio, dado que el espectro electromagnético tiene la naturaleza de bien público.

(...) Bajo esta misma línea argumentativa, la Corte ha reconocido que el interés particular debe ceder al interés general, regla que también es aplicable a los contratos de concesión, que deben ceder al interés público, representado en este caso en la imperiosa necesidad que el Acuerdo Final sea debidamente conocido por todas las ciudadanas y ciudadanos, como elemento inescindible de la libertad del elector".

5. Que conforme los parámetros preceptuados por la Ley 1806 de 2016 y la Sentencia C-379 del mismo año, es claro que en el desarrollo del acto plebiscitario existen 2 actividades plenamente diferenciables, de un lado, está la divulgación y publicación del contenido del acuerdo final a cargo única y exclusivamente de Gobierno nacional y, de otro lado, está la promoción o publicidad a favor de la opción del SÍ o a favor de la opción de NO, la cual pueden hacer en igualdad de condiciones las respectivas campañas.

6. Que la divulgación fue definida por el Consejo Nacional Electoral en el artículo 10 de la Resolución número 1733 del 30 de agosto de 2016³ como *“la información objetiva e imparcial que el Gobierno nacional debe transmitir a los ciudadanos sobre el contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con el fin de permitir que la ciudadanía se ilustre sobre la materia, y de manera libre y autónoma decida qué postura asumirá en la votación del plebiscito. La divulgación no puede incluir ningún tipo de elementos o notas sugestivas que induzcan a apoyar las opciones de campaña del Plebiscito, que confundan a la ciudadanía, o que incluyan cargas valorativas o estratégicas que incidan en la intención de voto del ciudadano”*.

7. Que para la divulgación el Gobierno dispondrá de los medios masivos de comunicación de que trata el artículo 5° de la Ley 1806 de 2016.

8. Que de otro lado, para la promoción o publicidad a favor de la opción del SÍ o a favor de la opción de NO, conforme los parámetros legales y jurisprudenciales expuestos previamente, en primer lugar, existe la obligación de garantizar en igualdad de condiciones mínimo 2 espacios gratuitos institucionales en cada canal nacional de televisión y mínimo 3 en canales regionales. En segundo lugar, debe asegurarse la posibilidad de que las campañas puedan contratar propaganda en televisión, radio, prensa y otros medios de comunicación social.

9. Que de esta manera se concluye que para la realización de campaña a favor de la opción del SÍ o a favor de la opción de NO, existen espacios gratuitos en medios de comunicación, así como la posibilidad de contratar propaganda para la promoción de tales opciones.

10. Que frente a los espacios gratuitos en medios de comunicación, la Resolución 1733 de 2016 citada dispuso:

Artículo 19. Espacios gratuitos en radio y televisión pública. Los espacios gratuitos en radio y televisión, se asignarán en igual proporción a la opción por el SÍ y a la opción por el NO. Lo asignado a cada opción de sorteará de acuerdo a la disponibilidad, entre los distintos comités de campaña registrados para cada opción ante la Organización Electoral.

Artículo 20. Espacios institucionales permanentes en televisión. Los partidos políticos con personería jurídica vigente podrán disponer de los espacios gratuitos otorgados, para promover la opción por el SÍ o por el NO.

11. Que frente a la propaganda que pueden contratar los comités de campaña a favor de la opción del SÍ y los comités de campaña a favor de la opción del NO además de fijarse los números máximos de cuñas, avisos y vallas publicitarias la Resolución 1733 de 2016, dispuso:

“Artículo 11. Acceso a los medios de comunicación. Los medios de comunicación social del Estado o los que usen el espectro electromagnético garantizarán la libertad de acceso de las campañas y Comités en igualdad de condiciones.

Los Comités que deseen hacer campaña en el plebiscito por la opción del SÍ o por la opción del No, podrán contratar propaganda en televisión, radio, prensa y otros medios de comunicación social, respetando en todo caso el monto máximo de gastos de campaña y demás topes fijados por el Consejo Nacional Electoral en la presente resolución.

12. Que no obstante lo anterior, la resolución en mención no fijó condiciones relacionadas con la tarifa de dicha propaganda contratada.

13. Que en los términos de la Sentencia C-379 de 2016 y el artículo 4° de la Ley 1806 de 2016, en lo no previsto en dicha ley se aplicará lo dispuesto en las Leyes 134 de 1994, 1757 de 2015 y demás normas concordantes.

14. Que la Ley 1757 de 2015, no contempla una disposición especial relacionada con la tarifa de la propaganda contratada, pero sí consagra igualmente una cláusula de remisión a las disposiciones que regulan las elecciones ordinarias, en los siguientes términos:

³ “Por la cual se regulan y reglamentan algunos temas concernientes al “plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en los términos de la Ley 1806 del 24 de agosto de 2016 y la sentencia C-379 de 2016”.

“Artículo 39. Remisión. Las reglas sobre publicidad, encuestas, escrutinios y reclamaciones vigentes en la normatividad electoral aplicarán a los mecanismos de participación ciudadana que requieren de votación popular”⁴.

15. Que en virtud de lo anterior, por remisión normativa, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 130 de 1994⁵ sobre la materia, así:

“Artículo 28. Uso de servicio de la radio privada y los periódicos. Los concesionarios para la prestación de servicio de radiodifusión sonora y los periódicos que acepten publicidad política pagada, la harán en condiciones de igualdad a todos los partidos, movimientos y candidatos que lo soliciten.

Los concesionarios de las frecuencias de radio durante los sesenta (60) días anteriores al correspondiente debate electoral, **están en la obligación de pasar propaganda política a una tarifa inferior a la mitad de la comercial que rija en los seis (6) meses anteriores a la fecha del mismo debate.**

De la publicidad gratuita, total o parcialmente, debe quedar constancia escrita y se tendrá como donación al respectivo partido, movimiento o candidato, para lo cual se estimará su valor con base en las tarifas cobradas a otros partidos o personas.

Estas disposiciones regirán igualmente para los concesionarios privados de espacios de televisión y, en general, para todas las modalidades de televisión legalmente autorizadas en el país”.

Que en mérito de lo expuesto, el Consejo Nacional Electoral,
RESUELVE:

Artículo 1°. *Espacios institucionales en televisión.* En el plebiscito especial para la refrendación del *acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera*, los Comités de Campaña del orden nacional a favor de la opción del SÍ o a favor de la opción del NO, tendrán derecho a por lo menos dos espacios institucionales en cada canal nacional de televisión.

Los Comités de Campaña del orden departamental y municipal a favor de la opción del SÍ o a favor de la opción del NO, tendrán derecho a por lo menos tres espacios institucionales en el canal de televisión de la respectiva región.

El Consejo Nacional Electoral, en los términos señalados en el artículo 19 de la Resolución 1733 de 2016 expedida por la Corporación, distribuirá los espacios, señalará la duración de cada presentación y establecerá las reglas que deban observarse en los mismos.

El tiempo asignado a los Comités de Campaña a favor de la opción del SÍ o a favor de la opción del NO, no podrá ser inferior al promedio del asignado a los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Artículo 2°. *Uso del servicio de radio y televisión privada.* Los concesionarios de las frecuencias de radio, los concesionarios privados de espacios de televisión y, en general, todas las modalidades de televisión legalmente autorizadas en el país, durante el desarrollo del plebiscito especial para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, están en la obligación de transmitir propaganda política en los términos dispuestos en el artículo 11 de la Resolución 1733 de 2016 del Consejo Nacional Electoral y con una tarifa inferior a la mitad de la comercial que rija en los seis (6) meses anteriores a la fecha de la votación plebiscitaria.

De la publicidad gratuita, total o parcialmente, debe quedar constancia escrita y se tendrá como donación a la respectiva campaña, para lo cual se estimará su valor con base en las tarifas cobradas a otras campañas.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 8 de septiembre de 2016.

El Presidente,

Alexánder Vega Rocha.

El Vicepresidente,

Carlos Camargo Assís.

Salvamento de voto de la magistrada Ángela Hernández

Ausentes los magistrados Armando Novoa y Emiliano Rivera.

(C. F.).

Secretaría de Educación Distrital

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1511 DE 2016

(agosto 22)

por la cual se aprueba una reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Gimnasio Moderno.

La Secretaria de Educación Distrital, en uso de sus facultades legales en especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, Decretos 2150 de 1995 y 1075 de 2015, los Decretos Distritales 525 de 1990, 059 de 1991, 330 de 2008, 530 del 2015 y 001 de 2016,

⁴ Mediante Sentencia C-150-15 de 8 de abril de 2015, Magistrado Ponente Doctor Mauricio González Cuervo, se declaró CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE la expresión “normatividad electoral” del artículo 39 de la Ley 1757 de 2015, “bajo el entendimiento de que la remisión procede hacia aquellas disposiciones en materia electoral que tengan carácter estatutario”.

⁵ ...

ASUNTO:

Corresponde al Despacho resolver la solicitud de reforma estatutaria de la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Gimnasio Moderno, representada legalmente por Javier Antonio Mojica Sánchez identificado con cédula de ciudadanía número 19264701 de Bogotá, registrada con el ID número 551610 del Sistema de Información de Personas Jurídicas, (Sipej), con domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C., en la carrera 9 N°. 74-99 Barrio Porciúncula,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 30 del Decreto 530 de 2015, el cual modifica el artículo 23 del Decreto 854 de 2001, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, asigna a la Secretaría de Educación Distrital la expedición de resoluciones relativas a la reforma de estatutos solicitadas por las entidades sin ánimo de lucro con fines educativos debidamente reconocidas.

Que el Alcalde Mayor de Bogotá expidió el Decreto 059 de 1991, el cual reguló, entre otros aspectos, la inspección y vigilancia de las instituciones de utilidad común domiciliadas en Bogotá, D.C., así como también determinó las actividades que pueden desarrollarse en cumplimiento de esta función y los requisitos para solicitar la reforma de estatutos de las Fundaciones con domicilio en Bogotá.

Que mediante Resolución Ejecutiva del 1° de mayo de 1919, se le reconoció personería jurídica al Gimnasio Moderno (f. 43 Tomo 1).

Que mediante Resolución número 3524 de 24 de octubre de 1995, expedida por la Secretaría de Educación Distrital, se le aprobó una reforma de estatutos a la Fundación Gimnasio Moderno (ff. 81 y 82 Tomo 2).

Que mediante Resolución número 820 del 19 de marzo de 2004, expedida por la Secretaría de Educación Distrital, se le aprobó una reforma de estatutos a la Fundación Gimnasio Moderno (ff.47 a 49 Tomo 4).

Que la entidad sin ánimo de lucro con fines educativos, denominada Fundación Gimnasio Moderno, mediante radicado E- 2015-80904 del 20 de mayo de 2015 (F. 110 Carpeta NU91-

3) solicitó la aprobación de la reforma estatutaria anexando el Acta de reunión extraordinaria virtual del 3 de febrero de 2015 (F. 113 a 120 Carpeta NU91-3) y el Acta de la Segunda Reunión Extraordinaria Virtual del 10 de abril de 2015 (F. 131 a 157 Carpeta NU91-3); respecto de lo cual se realizaron observaciones por parte de la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Distrital, mediante oficio S-2015-91485 del 3 de julio de 2015 (F. 168 Carpeta NU91-3).

Que la entidad sin ánimo de lucro con fines educativos Fundación Gimnasio Moderno, no subsanó las inconsistencias dentro del término concedido por la Secretaría de Educación para el efecto de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755.

Que la entidad sin ánimo de lucro con fines educativos, denominada Fundación Gimnasio Moderno, mediante radicado E-2016-23347 del 4 de febrero de 2016 (f. 326 Carpeta NU113-

2), solicitó nuevamente la aprobación de la reforma estatutaria, para lo cual anexó Acta de reunión extraordinaria del 23 de noviembre de 2015 (ff. 327 a 338 Carpeta NU113-2) y Acta de reunión extraordinaria del 3 de diciembre de 2015 (ff.339 al 365 NU 113-2), de la Sala Plena de Elegidos.

Que los tres (3) documentos antes descritos, contienen en su orden los requisitos establecidos en el artículo 9° del Decreto Distrital 530 de 2015, a saber: Solicitud suscrita por el representante legal, actas, según estatutos, en las que conste la aprobación de las respectivas reformas, con firmas del presidente y del secretario de la respectiva reunión y estatutos que incluyan todas las modificaciones introducidas, con firmas del presidente y del secretario de la reunión en que se aprobaron las reformas.

Que la reforma estatutaria solicitada se refiere a dos temas, el primero de ellos la creación de la figura del representante legal suplente de la fundación, y el segundo, relativo a agregar en todas las partes donde se menciona Secretario o Secretaria, la palabra “General” (Secretario General o Secretaria General). Específicamente se pretende la modificación de los artículos 10, 15, 23, 25, 27, 28, 50, 57, 60 y 61 de los Estatutos vigentes.

Que la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Distrital, formuló observaciones mediante oficio S-2016-31410 del 25 de febrero de 2016 (f. 385 Carpeta NU113-2), las cuales fueron respondidas en forma satisfactoria según radicado No. E-2016-79877 del 27 de abril de 2016 (f.389 Carpeta NU 113-2).

Que la Dirección de Inspección y Vigilancia, verificó la información remitida por la Fundación Gimnasio Moderno, referida a la reforma de estatutos solicitada, evidenciando que la misma se ajusta a las observaciones realizadas por esta entidad y a los requisitos establecidos por ley, por lo que se procede a aprobar la reforma de estatutos.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo 1°. Aprobar la reforma estatutaria adoptada mediante Acta de reunión extraordinaria de 23 de noviembre de 2015 (ff. 327 a 338 Carpeta NU113-2) y mediante Acta de reunión extraordinaria de 3 de diciembre de 2015 (ff.339 al 365 NU 113-2), ambas de Sala Plena de la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Gimnasio Moderno, de conformidad con lo estipulado en la parte motiva de este acto.

Advertir a la entidad, so pena de las sanciones legales pertinentes, que debe desarrollar su objeto en los términos de los estatutos aquí aprobados, observando los preceptos que le impone la ley y el orden público, sin desvirtuar su naturaleza jurídica sin ánimo de lucro y que la presente resolución no constituye permiso o licencia de funcionamiento.

Artículo 2°. Notificar el contenido de este acto administrativo al representante legal de la Fundación Gimnasio Moderno, Ana María Uribe Reyes identificada con cédula de ciudadanía número 39690797 de Bogotá, o quien haga sus veces de conformidad con lo previsto en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición, ante la Secretaria de Educación, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, de conformidad con el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

Artículo 3°. Ordenar la publicación de la presente resolución en el *Diario Oficial* o en un diario de amplia circulación nacional a costa de los interesados y que allegue un ejemplar a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Distrital para su respectivo archivo.

Artículo 4°. Remitir a la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Educación Distrital la presente resolución, una vez en firme, a fin de que dé trámite a la solicitud de inscripción de dignatarios en el Sistema de Información de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro (Sipej), realizada por la Fundación Gimnasio Moderno.

Artículo 5°. Registrar la presente resolución, una vez en firme, en el Sistema de Información de Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro (Sipej).

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2016.

La Secretaria de Educación Distrital,

María Victoria Angulo González.

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo Banco Davivienda. 5245641. 08-IX-2016. Valor \$217.800.

Comisión Rectora del Sistema General Regalías

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 0040 DE 2016

(septiembre 15)

por el cual se adoptan lineamientos relacionados con el proceso de los proyectos de inversión con enfoque diferencial en el marco del Sistema General de Regalías (SGR) y se dictan otras disposiciones.

La Comisión Rectora del Sistema General de Regalías, en ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por los artículos 4 y 5 de la Ley 1530 de 2012.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 7° de la Constitución Política estableció como principio fundamental del Estado Social de Derecho colombiano, el reconocimiento y la protección a la diversidad étnica y cultural de la Nación, entendida, de acuerdo con lo señalado por la Corte Constitucional en Sentencia T - 605 del 14 de diciembre de 1992, como: “(...) *Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo (CP artículo 1) y protección de las minorías (CP artículos 13, 176 y 265) (...)*”.

Que el artículo 2° de la Ley 1530 de 2012 establece entre los objetivos y fines del Sistema General de Regalías (SGR) el de “(...) *Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes de vida respectivos (...)*”.

Que el artículo 25 de la Ley 1530 de 2012 señala que tratándose de proyectos que tengan enfoque diferencial en las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras y las comunidades Indígenas, la presentación de los mismos se realizará por parte de sus representantes, debidamente acreditados ante el Ministerio del Interior.

Que el párrafo 1° del artículo 34 de la Ley 1530 de 2012 establece que del total de los recursos para financiar proyectos de impacto local se destinará hasta un 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y hasta otro 8% para iniciativas con enfoque diferencial para las comunidades Indígenas.

Que el artículo 40 de la Ley 1530 de 2012 señala que los municipios con ingresos de asignaciones directas superiores a 2000 smlmv recibidos el año inmediatamente anterior, donde se encuentren asentadas comunidades indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras debidamente acreditadas por la autoridad competente, destinarán al menos el 3% de estos recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial en esa población. Así mismo, los departamentos con ingresos de asignaciones directas superiores a 2000 smlmv recibidos el año inmediatamente anterior, destinarán al menos el 1% de estos recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial en las comunidades Indígenas y comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, debidamente acreditadas por la autoridad competente, que se encuentren asentadas en aquellos municipios no beneficiarios de asignaciones directas o con ingresos menores a los que se refiere ese artículo.

Que mediante Circular 13 del 27 de julio de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Rectora del SGR, reiteró a los gobernadores, alcaldes y secretarías técnicas de los OCAD la obligación de la destinación de recursos para proyectos de inversión con enfoque diferencial, formulación y presentación de proyectos por parte de comunidades étnicas reconocidas por el Ministerio del Interior.

Que en el marco del ejercicio de consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “*Todos por un Nuevo País*” con los Grupos Étnicos, el Gobierno nacional se comprometió a crear la “*ventanilla única para la gestión integral de los proyectos del SGR provenientes de los pueblos y comunidades indígenas*”.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 1753 de 2015, los acuerdos de la “Protocolización de la Consulta Previa al Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 con Grupos Étnicos” son parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Que en el marco de los acuerdos de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, realizada el 11 de junio de 2016, el Gobierno nacional se comprometió a presentar ante la Comisión Rectora del SGR “(...) *un proyecto de acuerdo para facilitar los procedimientos y articular los mecanismos especiales para la aprobación de los proyectos y ejecución de los recursos que se asignan a las comunidades indígenas incluyendo la formulación de los proyectos tipo y el uso de recursos de funcionamiento para estructuración de proyectos y para asistencia técnica* (...)”.

Que en los acuerdos de la Mesa de Diálogo y Negociación de la Minga Pacífica por el Respeto y la Garantía de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Chocó, realizada el 13 de junio de 2016, se asumió el compromiso de capacitar a estas comunidades y pueblos en el SGR.

Que la Comisión Rectora del SGR, en sesión XXXVIII del 11 de agosto de 2016 aprobó el presente acuerdo.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1°. *Objeto.* El presente acuerdo adopta lineamientos relacionados con el proceso de los proyectos de inversión con enfoque diferencial en el marco del Sistema General de Regalías (SGR).

Artículo 2°. *Responsabilidad de las secretarías técnicas de los OCAD.* Con el objeto de precisar la obligación de inversión en proyectos con enfoque diferencial de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1530 de 2012, corresponde a las secretarías técnicas de los órganos colegiados de administración y decisión (OCAD) municipales y departamentales en la primera sesión anual:

1. Informar las comunidades étnicas asentadas en la entidad territorial de competencia del OCAD, de conformidad con lo certificado por el Ministerio del Interior.
2. En caso de existir comunidades étnicas, establecer, de conformidad con la apropiación vigente en el presupuesto del bienio en curso, el valor a invertir durante el bienio en proyectos con enfoque diferencial financiados con recursos del Fondo de Compensación Regional (40%).
3. En caso de existir comunidades étnicas, establecer, del total de ingresos corrientes anuales contenidos en la suma de las Instrucciones de Abono a Cuenta realizada el año inmediatamente anterior, el valor a invertir durante el año en proyectos con enfoque diferencial financiados con recursos de las asignaciones directas.

Esta información será comunicada a los representantes legales de las comunidades étnicas asentadas en la entidad territorial por la secretaría técnica del OCAD, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de la sesión.

En las demás sesiones del OCAD la secretaria técnica comunicará a los miembros los saldos a invertir en proyectos con enfoque diferencial, su estado en las diferentes etapas del ciclo de proyectos y el resultado de la verificación de requisitos de los mismos, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo número 36 de 2016.

Parágrafo transitorio. Para el año 2016 el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se realizará en la sesión de OCAD siguiente a la publicación del presente acuerdo.

Artículo 3°. *Responsabilidad de los OCAD.* Corresponde a los OCAD evaluar, viabilizar, priorizar y aprobar al menos en una sesión del año proyectos de inversión con enfoque diferencial financiados con recursos de las asignaciones directas; y por lo menos en una sesión del bienio, proyectos con enfoque diferencial financiados con recursos del Fondo de Compensación Regional (40%), siempre que existan comunidades étnicas asentadas en la entidad territorial de competencia del OCAD, de conformidad con lo certificado por el Ministerio del Interior.

Artículo 4°. *Ventanilla para la presentación de proyectos de inversión con enfoque diferencial.* El Departamento Nacional de Planeación (DNP) dispondrá de una ventanilla para la presentación de proyectos de inversión por parte de los representantes de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y de las comunidades Indígenas registrados en el Ministerio del Interior.

Artículo 5°. *Apoyo a las comunidades étnicas.* El DNP, con cargo a los recursos de funcionamiento asignados por la Comisión Rectora, diseñará e implementará una estrategia para el apoyo en la estructuración de proyectos, asistencia técnica y capacitación a las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, y a las comunidades Indígenas registradas ante el Ministerio del Interior.

Parágrafo. El DNP presentará un informe semestral a la Comisión Rectora sobre la implementación de esta estrategia, contados a partir de la publicación del presente acuerdo.

Artículo 5°. *Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación.* El DNP, en calidad de administrador del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) del SGR, monitoreará lo señalado en el presente acuerdo de conformidad con las funciones señaladas en la Ley 1530 de 2012 y normas reglamentarias.

Artículo 6°. *Vigencia.* El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación. Dado en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

Publíquese y cúmplase,
El Director General,

Simón Gaviria Muñoz,

Departamento Nacional de Planeación

Presidente Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

El Subdirector General Territorial y de Inversión Pública,

Manuel Fernando Castro,

Departamento Nacional de Planeación

Secretario Técnico Comisión Rectora del Sistema General de Regalías.

(C. F.).

Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.

EDICTOS

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.,
AVISA:

Que Betty Zoraida Ardila de Hurtado, identificada con cédula de ciudadanía número 41470440 de Bogotá, D. C., respectivamente, en calidad de cónyuge, ha solicitado mediante Radicado número E-2016-150399 del 26 de agosto de 2016, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder al señor Darío Hurtado Márquez (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 17123457 de Bogotá, D. C., fallecido el día 5 de julio de 2016. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializada,

Janine Parada Nuván,

Secretaría de Educación del Distrito Bogotá, D. C.

Radicación S-2016-130083

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601825. 1°-IX-2016. Valor \$51.500.

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.,
AVISA:

Que María Ruby Fajardo Roa, identificada con cédula de ciudadanía número 51591330 de Bogotá, D. C., respectivamente, en calidad de esposa, ha solicitado mediante Radicado número E-2016-121834 del 11 de julio de 2016, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder al señor Darío Alberto Parra Romero (q. e. p. d.), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 19271060 de Bogotá, D. C., fallecido el día 17 de abril de 2016. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional Especializada,

Janine Parada Nuván,

Secretaría de Educación del Distrito Bogotá, D. C.

Radicación S-2016-105484

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601812. 31-VIII-2016. Valor \$51.500.

La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D.C.
AVISA:

Que, Joaquín Moreno Gómez, identificado con cédula de ciudadanía número 6747446 de Tunja, respectivamente, en calidad de cónyuge, ha solicitado mediante radicado E-2016-149359 del 25 de agosto de 2016, el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a la señora Flor María Pacheco de Moreno (**q. e. p. d.**), quien en vida se identificó con cédula de ciudadanía número 41484648 de Bogotá, D. C., fallecida el día 10 de agosto de 2016. Toda persona que se crea con igual o mejor derecho deberá hacerlo valer ante la Dirección de Talento Humano, dentro de los treinta (30) y quince (15) días siguientes a la publicación del primer y segundo aviso respectivamente.

La Profesional especializada,

Janine Parada Nuván,

Secretaria de Educación del Distrito Bogotá, D.C.

Radicación S-2016-128484

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601936. 15-IX-2016. Valor \$51.500.

Dirección de Personal de Instituciones Educativas
de la Secretaría de Educación del Departamento
de Cundinamarca

EDICTOS

El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca,

CITA Y EMPLAZA:

A todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y económicas de la docente Genoveva de los Ángeles Martínez de Bolaños, quien se identificaba con la cédula de ciudadanía número 41313791 de Bogotá, que prestaba sus servicios al departamento de Cundinamarca y que dejó de existir el día nueve (9) de junio de 2016.

Se ha presentado a reclamar el señor Jorge Clímaco Bolaños Matiz, que se identifica con la cédula de ciudadanía número 237913 de Fómeque, en calidad de cónyuge de la educadora fallecida.

Dada en Bogotá, D. C., a 15 de septiembre de 2016.

El Profesional Especializado,

Jorge Miranda González.

(Primer aviso)

Imprenta Nacional de Colombia. Recibo 21601939. 15-IX-2016. Valor \$51.500.

CONTENIDO

	Págs.
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Directiva presidencial número 06 de 2016	1
Decreto número 1481 de 2016, por el cual se delegan unas funciones constitucionales.....	1
MINISTERIO DEL INTERIOR	
Decreto número 1473 de 2016, por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria impuesta al señor Hugo Alberto Galarza Florián, en su condición de Gobernador encargado del departamento del Vaupés.....	2
Decreto número 1474 de 2016, por el cual se da cumplimiento a una sanción disciplinaria Impuesta al señor Samuel Moreno Rojas, en su condición de Alcalde Mayor de Bogotá, D.C.....	2
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	
Decreto número 1482 de 2016, por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Jamaica como Embajador No Residente ante el Gobierno de San Cristóbal y Nieves.	2
Decreto número 1483 de 2016, por el cual se designa al Embajador de Colombia ante el Gobierno de Jamaica como Embajador No Residente ante el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica.	3
Decreto número 1485 de 2016, por el cual se declara una insubsistencia y se efectúa un nombramiento.	3
Decreto número 1488 de 2016, por el cual se autoriza a los Jefes de Oficina Consular y Cónsules Honorarios de Colombia debidamente acreditados ante otros Estados para llevar a cabo el proceso electoral del plebiscito para la refrendación del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.....	3
Decreto número 1489 de 2016, por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.	4
Decreto número 1490 de 2016, por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.	4
Decreto número 1491 de 2016, por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.	4
Decreto número 1492 de 2016, por el cual se hace un traslado a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.	4
Decreto número 1493 de 2016, por el cual se hace un traslado de Misión en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores.	4
Decreto número 1501 de 2016, por el cual se hace un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.	5
Decreto número 1502 de 2016, por el cual se realiza un nombramiento provisional en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores.	5
Resolución ejecutiva número 262 de 2016, por medio de la cual se dispone el reconocimiento de un Cónsul General.....	5
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	
Decreto número 1471 de 2016, por el cual se designa un representante del Presidente de la República en la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).....	5
Decreto número 1472 de 2016, por el cual se designa un representante del Presidente de la República en la Junta Directiva de la Fiduciaria La Previsora S. A.....	5
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	
Decreto número 1476 de 2016, por el cual se acepta la renuncia al Registrador Principal de Instrumentos Públicos del Círculo Registral de Santa Marta (Magdalena).	5
Decreto número 1477 de 2016, por el cual se designa un Superintendente de Notariado y Registro ad hoc.	6
Decreto número 1478 de 2016, por el cual se hace un nombramiento en propiedad en virtud del numeral 3 del artículo 178 del Decreto-ley 960 de 1970, en el Círculo Notarial de Pereira (Risaralda).....	6
Decreto número 1479 de 2016, por el cual se modifican las circunscripciones territoriales de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de Agua de Dios, Girardot, La Mesa en el departamento de Cundinamarca; Mompós en el departamento de Bolívar; Ocaña y Cúcuta en el departamento de Norte de Santander; Andes, Bolívar, Marinilla y Rionegro en el departamento de Antioquia; Bolívar y Popayán en el departamento del Cauca; El Banco y Plato en el departamento del Magdalena; Aguachica en el departamento del Cesar y San Martín y Villavicencio en el departamento del Meta.....	7
Resolución ejecutiva número 254 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	9
Resolución ejecutiva número 255 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	10
Resolución ejecutiva número 256 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	11
Resolución ejecutiva número 257 de 2016, por la cual se da por terminado un trámite de extradición.....	12
Resolución ejecutiva número 258 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	13
Resolución ejecutiva número 259 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	14
Resolución ejecutiva número 260 de 2016, por la cual se decide sobre una solicitud de extradición.....	15
Resolución ejecutiva número 261 de 2016, por la cual se decide el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Ejecutiva número 131 del 26 de mayo de 2016.	16
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	
Decreto número 1470 de 2016, por el cual se crea y confiere la Citación Presidencial de la Victoria Militar y Policial.....	20
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	
Decreto número 1462 de 2016, por el cual se designa un delegado del Presidente de la República ante el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, (ANT).....	21
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
Decreto número 1495 de 2016, por el cual se modifican los artículos 2.9.2.5.2, 2.9.2.5.3 y 2.9.2.5.8 del Capítulo 5, Título 2, Parte 9 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.....	21

	Págs.
Decreto número 1500 de 2016, por el cual se modifica el artículo 2.6.1.4.3.10 de la sección 3 del Capítulo 4 del título 1 de la parte 6 del libro 2 del Decreto 780 de 2016 Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con la verificación de requisitos para el reconocimiento de los gastos e indemnizaciones cubiertos por la Subcuenta ECAT del Fosyga.	22
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	
Decreto número 1480 de 2016, por el cual se efectúa un nombramiento.....	22
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	
Decreto número 1463 de 2016, por el cual se hace un nombramiento.....	22
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	
Resolución número 1462 de 2016, por la cual se hace una adición al cupo global de aprovechamiento forestal otorgado a la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) mediante Resolución número 0490 del 18 de marzo de 2016, y se dictan otras disposiciones.....	23
Resolución número 1478 de 2016, por medio de la cual se aprueba y actualiza la zonificación de los manglares de la unidad Ciénaga de Mallorquín, ubicada en jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y se adoptan otras determinaciones.	24
MINISTERIO DE CULTURA	
Decreto número 1464 de 2016, por el cual modifica parcialmente el Decreto 1257 del 14 de junio de 2012.....	29
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA	
Resolución número 0679 de 2016, por la cual se hacen unos nombramientos ordinarios. ...	30
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	
Decreto número 1497 de 2016, por el cual se da cumplimiento a una providencia del Consejo de Estado y se adoptan otras decisiones.	30
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	
Decreto número 1499 de 2016, por el cual se designa un Director General ad hoc del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras.	30
SUPERINTENDENCIAS	
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada	
Circular externa número 20167000000215 de 2016.....	31
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES	
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil	
Resolución número 02694 de 2016, por la cual se establecen las tarifas por Concepto de Canon Variable por Venta de Combustible, a las empresas que no tiene infraestructura dentro del Aeropuerto de San Andrés.....	31
Comisión de Regulación de Energía y Gas	
Resolución número 125 de 2016, por la cual se ordena hacer público un proyecto de resolución “por la cual se modifica el Anexo 2 de la Resolución CREG 089 de 2013”.	31
Resolución número 128 de 2016, por la cual se establecen reglas en el Código de Medida para proyectos en etapa de construcción y se establecen otras disposiciones.	34
CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES	
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca	
Resolución número 1784 de 2016, por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada Pantano Hondo.	35
Resolución número 1880 de 2016, por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada Chuncesia.....	38
Resolución número 1881 de 2016, por medio de la cual se determina la zona de protección de la quebrada La Laja.	45
EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO	
Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía	
Acuerdo número 05 de 2016, por el cual se adopta el estatuto interno de la caja promotora de vivienda militar y de policía.....	48
V A R I O S	
Consejo Nacional Electoral	
Resolución número 1843 de 2016, por medio de la cual se complementa la Resolución 1733 de 2016, por la cual se regulan y reglamentan algunos temas concernientes al “plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” en los términos de la Ley 1806 del 24 de agosto de 2016 y la sentencia C-379 de 2016, en materia de utilización de espacios en radio y televisión.	52
Secretaría de Educación Distrital	
Resolución número 1511 de 2016, por la cual se aprueba una reforma estatutaria a la entidad sin ánimo de lucro denominada Fundación Gimnasio Moderno.	53
Comisión Rectora del Sistema General Regalías	
Acuerdo número 0040 de 2016, por el cual se adoptan lineamientos relacionados con el proceso de los proyectos de inversión con enfoque diferencial en el marco del Sistema General de Regalías (SGR) y se dictan otras disposiciones.	54
Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C.	
La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C., avisa que Betty Zoraida Ardila de Hurtado, ha solicitado el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a Darío Hurtado Márquez (q. e. p. d.).....	55
La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D. C., avisa que María Ruby Fajardo Roa, ha solicitado el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a Darío Alberto Parra Romero (q. e. p. d.).....	55
La Dirección de Talento Humano de la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá, D.C. avisa que, Joaquín Moreno Gómez, ha solicitado el reconocimiento, sustitución y pago de las prestaciones socioeconómicas que puedan corresponder a Flor María Pacheco de Moreno (q. e. p. d.).....	55
Dirección de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación del Departamento de Cundinamarca	
El suscrito Profesional Especializado de la Dirección de Personal de Instituciones Educativas de la Secretaría de Educación del departamento de Cundinamarca, cita y emplaza a a todas las personas que se crean con derecho a reclamar prestaciones sociales y económicas de la docente Genoveva de los Ángeles Martínez de Bolaños	55